CARLOS ANDRES TORRES SALAS (FIRMA)
Firmado digitalmente por CARLOS ANDRES TORRES SALAS (FIRMA)
Fecha: 2018.12.20 15:17:33 -06'00'

COSTA RICA GOBIERNO DEL BICENTENARIO 2018 - 2022

LA GACETA Diario Oficial

Imprenta Nacional Costa Rica

Año CXL | San José, Costa Rica, jueves 20 de diciembre del 2018 | 249 páginas

ALCANCE Nº 220

PODER LEGISLATIVO

LEYES
PROYECTOS

DOCUMENTOS VARIOS

HACIENDA

INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

Imprenta Nacional
La Uruca, San José, C. R.

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

PLENARIO

DESAFECTACIÓN DE UN TERRENO PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE TURRIALBA Y AUTORIZACIÓN PARA QUE LO SEGREGUE Y DONE A LA ASOCIACIÓN ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE EL MORA, PARA QUE SEA DESTINADO A PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

DECRETO LEGISLATIVO N.° 9586

EXPEDIENTE N.º 20.489

SAN JOSÉ – COSTA RICA

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
DECRETA:

DESAFECTACIÓN DE UN TERRENO PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE TURRIALBA Y AUTORIZACIÓN PARA QUE LO SEGREGUE Y DONE A LA ASOCIACIÓN ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE EL MORA, PARA QUE SEA DESTINADO A PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

ARTÍCULO 1- Segregación

Se autoriza a la Municipalidad de Turrialba, cédula jurídica número tres-cero uno cuatro-cuatro dos cero ocho ocho (N.° 3-014-42088), para que segregue un lote de su propiedad, inscrita en el Registro Público bajo el sistema de folio real partido de Cartago, matrícula número uno uno uno cuatro cero cuatro-cero cero cero (N.° 111404-000), situado en el distrito primero Turrialba, cantón quinto Turrialba, provincia de Cartago, que tiene los siguientes linderos: al norte con el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU); al sur con el río Aquiares; al este con Sergio Castro Jiménez, y al oeste con la calle Yacuré; mide once mil veintisiete con noventa y seis decímetros cuadrados (11.027,96 m²), de conformidad con el plano catastrado número C-cinco tres siete nueve cinco ocho-uno nueve ocho cuatro (N.° C-537958-1984). Dicha propiedad soporta los siguientes gravámenes: a) servidumbre traslada citas 349-08685-01-09002-001, b) servidumbre de acueducto citas 572-25180-01-0001-001 y c) servidumbre de paso cita 572-572-25180-01-001-001. El lote a segregar se describe así: terreno destinado a la plaza de deportes, situado en el distrito primero Turrialba, cantón quinto de Turrialba, provincia de Cartago, cuyos linderos actuales son los siguientes: al norte con la plaza de deportes; al oeste con el río Aquiares, y al este con servidumbre de paso y tuberías. El terreno mide cuatro mil setecientos veintiún metros cuadrados (4.721 m²), registrado en el plano número C-un millón doscientos cuarenta y nueve mil veinticinco-dos mil siete (N.° C-1249025-2007), propiedad que se encuentra libre de anotaciones y gravámenes hipotecarios. Asimismo, este terreno se desafecta de su uso público actual.

ARTÍCULO 2- Donación

Se autoriza a la Municipalidad de Turrialba para que done el lote segregado a la Asociación Administradora del Acueducto y Alcantarillado de El Mora, cédula jurídica número tres-cero cero dos-dos nueve seis seis cinco (N.° 3-002-29665), para que sea destinado a planta de tratamiento de aguas residuales. La donación del lote, descrito en el artículo 1 de esta ley, no modifica el uso de la plaza pública de deportes de El Mora.

ARTÍCULO 3- Cláusula de reversión

Procederá de pleno derecho la inmediata reversión de la propiedad donada a favor de la Asociación Administradora del Acueducto y Alcantarillado de El Mora, en caso de que el terreno objeto de donación se destine a otra finalidad o uso no autorizado por la presente ley, o bien, si se extingue la asociación beneficiaria.

ARTÍCULO 4- Autorización a la Notaría del Estado

Se autoriza a la Notaría del Estado para que confeccione la respectiva escritura pública de segregación y donación a que se refiere la presente ley. Asimismo, se autoriza a la Procuraduría General de la República para que corrija los defectos que señale el Registro Nacional.

ARTÍCULO 5- Correcciones

La Municipalidad de Turrialba, de previo a otorgar la donación del lote descrito en el artículo 1 a la Asociación Administradora del Acueducto y Alcantarillado de El Mora, deberá realizar la corrección del error material o inconsistencia registral que por error aparece en los planos.

Rige a partir de su publicación.

ASAMBLEA LEGISLATIVA- Aprobado a los catorce días del mes de junio del año dos mil dieciocho.

COMUNÍCASE AL PODER EJECUTIVO

Carolina Hidalgo Herrera
Presidenta

Luis Fernando Chacón Monge
Primer secretario

Ivonne Acuña Cabrera
Segunda secretaria

Dado en la Presidencia de la República, San José, a los veintiséis días del mes de junio del año dos mil dieciocho

Ejecútese y publíquese.

CARLOS ALVARADO QUESADA

MICHAEL SOTO ROJAS
Ministro de Gobernación y Policía

1 vez.—(L9586 - IN2018300642).

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

PLENARIO

AUTORIZACIÓN A LA MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DE TURRIALBA PARA QUE DONE UN TERRENO DE SU PROPIEDAD A LA ASOCIACIÓN PRO ADULTO MAYOR DE PAVONES

DECRETO LEGISLATIVO N.° 9603

EXPEDIENTE N.º 20.690

SAN JOSÉ – COSTA RICA

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
DECRETA:

AUTORIZACIÓN A LA MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DE TURRIALBA PARA QUE DONE UN TERRENO DE SU PROPIEDAD A LA ASOCIACIÓN PRO ADULTO MAYOR DE PAVONES

ARTÍCULO 1- Se autoriza a la Municipalidad del cantón de Turrialba, cédula jurídica número tres-cero uno cuatro-cero cuatro dos cero-ocho ocho (N.° 3-014-0420-88), para que done a la Asociación Pro Adulto Mayor de Pavones, cédula de persona jurídica número tres-cero cero dos-siete cero dos tres seis tres (N.° 3-002-702363), el inmueble matrícula de folio real número dos cinco nueve cero cero ocho-cero cero cero (N.° 259008-000), plano catastrado número C-uno nueve cinco nueve cuatro ocho dos-dos cero uno siete (N.° C-1959482-2017), propiedad de la Municipalidad del cantón de Turrialba, cuyo terreno inscrito en el Registro Nacional tiene naturaleza de solar con dos casas; mide cuatro mil cuatro metros cuadrados (4004m²), ubicado en Javillos, distrito seis, Pavones, cantón de Turrialba, provincia de Cartago. Este terreno limita al norte con calle pública y el Instituto de Desarrollo Rural (Inder); al sur, con Oscar Umaña Chávez y María Chavarría Trejos; al este, con calle pública e Inder y, al oeste, con Oscar Umaña Chávez y María Chavarría Trejos.

ARTÍCULO 2- El terreno será utilizado por la Asociación Pro Adulta Mayor de Pavones para la construcción del Centro Diurno para el Adulto Mayor de Pavones, que beneficie a la población adulta mayor de las comunidades de Javillos, Pavones, San Rafael, Chitaría, Tres Equis, Linda Vista de Siquirres, Santa Marta de Siquirres y Turrialba centro. En caso de que la Asociación donataria llegue a disolverse o el inmueble se destine a otro uso no autorizado en la presente ley, el bien donado volverá de pleno derecho a ser propiedad de la Municipalidad de Turrialba.

ARTÍCULO 3- Se autoriza a la Notaría del Estado para que confeccione la escritura de traspaso y proceda en el Registro Nacional a la inscripción del terreno, supracitado en la presente ley, a nombre de la Asociación Pro Adulto Mayor de Pavones, la cual estará exenta del pago de todo tipo de impuestos, tasas o contribuciones. Asimismo, se autoriza a la Procuraduría General de la República para que corrija los defectos que señale el Registro Nacional.

Rige a partir de su publicación.

ASAMBLEA LEGISLATIVA- dieciocho. Aprobado el veintitrés de julio del año dos mil

COMUNÍCASE AL PODER EJECUTIVO

Carolina Hidalgo Herrera
Presidenta

Luis Fernando Chacón Monge
Primer secretario

Ivonne Acuña Cabrera
Segunda secretaria

Dado en la Presidencia de la República, San José, a los trece días del mes de agosto del año dos mil dieciocho.

Ejecútese y publíquese.

CARLOS ALVARADO QUESADA

MICHAEL SOTO ROJAS
MINISTRO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA

1 vez.—(L9603 - IN2018300641).

PROYECTOS

DEROGATORIA DE LEYES CADUCAS O HISTÓRICAMENTE OBSOLETAS PARA LA DEPURACIÓN DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO (CUARTA PARTE IMPUESTOS)

Expediente N.º 21.122

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

El 23 de abril del 2014, la diputada Gloria Bejarano Almada presentó en la corriente legislativa el expediente 19083 denominado "**DEROGATORIA DE LEYES CADUCAS O HISTÓRICAMENTE OBSOLETAS PARA LA DEPURACIÓN DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO (CUARTA PARTE IMPUESTOS).**

Dicho proyecto fue el resultado de un arduo trabajo multidisciplinario de diferentes departamentos de varias instituciones del país como: el Centro de Investigación Legislativa (Cedil) y el Departamento de Servicios Bibliotecarios, Documentación e Información del Congreso, Sistema Nacional de Legislación Vigente (Sinalevi) de la Procuraduría General de la República, Universidad de Costa Rica y el Colegio de Abogados.

A pesar de todo el esfuerzo realizado por las citadas instituciones, este fue archivado el 17 de febrero del 2018 por vencimiento del plazo cuatrienal de acuerdo con lo establecido en el artículo 119 del Reglamento de la Asamblea Legislativa. Por ese motivo consideré necesario volver a presentar el proyecto de ley, para de esta manera dar continuidad a un proceso de depuración de nuestra legislación, el cual nos permita eliminar normativa obsoleta o en desuso, con el fin de mejorar la calidad del ordenamiento jurídico como un todo, para que se convierta en un instrumento adecuado al servicio de la sociedad y no en un obstáculo.

Motivado por la necesidad de continuar con la promoción de los cambios necesarios que fomenten la depuración del ordenamiento jurídico nacional, garanticen la seguridad jurídica de las normas y le permitan a las personas contar con normas claramente identificadas, el equipo de expertos de la Procuraduría General de la República presentó ante la comisión especial una segunda propuesta para derogar 178 leyes caducas o históricamente obsoletas en materia de impuesto y que conforman el presente proyecto que ponemos a conocimiento de las señoras diputadas y los señores diputados.

En esta iniciativa reiteran los siguientes elementos de fondo:

i) Se identifica la existencia de normas jurídicas de dudosa vigencia, emitidas desde los albores de la independencia y hasta inicios de los años 1900, las cuales constituyen un elemento distorsionador de la seguridad jurídica.

ii) Las normas jurídicas que se proponen derogar en este proyecto de ley están diseñadas para dar respuesta a situaciones temporales determinadas, hoy superadas, como lo son los casos de impuestos otorgadas de 1825 a 1912; por lo que su derogatoria apoyaría el objetivo de que tanto el ciudadano como el Estado tengan la certeza y la confianza de conocer y aplicar normas efectivamente vigentes, sin dudas ni cuestionamientos.

iii) Se identifican leyes vigentes que por su contenido hoy son obsoletas, están en desuso, o bien, han sido afectadas mediante modificaciones, elementos que dificultan el acceso, la interpretación y la aplicación de nuestro ordenamiento.

Es importante mencionar que en el periodo de 1826 a 1900 las leyes, una vez aprobadas, no eran remitidas a publicación como se estila hoy día; por lo anterior, en la presente iniciativa se utiliza como fuente la Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República en la que se identifica: la colección de referencia, el semestre, el tomo y la página a la que corresponde cada ley por derogar. Asimismo, se aclara que el título de la ley, en ese momento, correspondía a una temática, por lo que no coincide con la actual técnica legislativa.

Por estas razones, me permito someter a la consideración de las señoras diputadas y los señores diputados, el siguiente proyecto de ley.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
DECRETA:

DEROGATORIA DE LEYES CADUCAS O HISTÓRICAMENTE OBSOLETAS PARA LA DEPURACIÓN DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO (CUARTA PARTE IMPUESTOS)

ARTÍCULO 1- Se deroga expresamente la siguiente normativa, correspondiente al período entre 1825 y 1912, por razones de caducidad, en objetivo y temporalidad:

1- Ley N.° 49 de 28 de setiembre de 1825. Restablece cobro alcabala ventas fincas rústicas y urbanas (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1825, semestre 2, tomo 1, pág. 142).

2- Ley N.° 69 de 30 de noviembre de 1825. Crea tributos a importaciones para fondo de propios de San José (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1825, semestre 2, tomo 1, pág. 176).

3- Ley N.° 128 de 06 de junio de 1827. Impuestos para Nicoya, Santa Cruz, Guanacaste, Heredia (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1827, semestre 1, tomo 2, pág. 20).

4- Ley N.° 178 de 05 de mayo de 1829. Impone pago de alcabala consulado municipal a comerciantes extranjeros (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1829, semestre 1, tomo 1, pág. 125).

5- Ley N.° 195 de 30 de junio de 1829. Impuesto a tierras sitas en La Carpintera a favor de Ciudad de Cartago (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1829, semestre 1, tomo 1, pág. 165).

6- Ley N.° 226 de 23 de junio de 1830. Establece impuestos a favor de la Municipalidad de Cartago (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1830, semestre 1, tomo 1, pág. 260).

7- Ley N.° 45 de 18 de octubre de 1831. Establece derecho de alcabala sobre venta de fincas rústicas y urbanas (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1831, semestre 2, tomo 1, pág. 122).

8- Ley N.° 61 de 27 de octubre de 1832. Impuestos para fondo de propios Bagaces y Cañas (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1832, semestre 1, tomo 3, pág. 192).

9- Ley N.° 62 de 01 de mayo de 1832. Arancel general tribunales y juzgados Corte Justicia (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1832, semestre 1, tomo 3, pág. 194).

10- Ley N.° 17 de 13 de mayo de 1833. Obligación hacendaria del cobro del impuesto de lazareto y peaje (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1833, semestre 1, tomo 1, pág. 38).

11- Ley N.° 71 de 01 de mayo de 1838. Impuestos a terrenos Legua de Alajuela (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1838, semestre 1, tomo 5, pág. 215).

12- Ley N.° 1 de 03 de junio de 1839. Reduce impuesto de importación (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1839, semestre 1, tomo 6, pág.1).

13- Ley N.° 7 de 22 de mayo de 1839. Arancel, bases y tarifas para el comercio marítimo y terrestre (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1839, semestre 1, tomo 6, pág.47).

14- Ley N.° 21 de 24 de agosto de 1840. Adiciona arancel general (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1840, semestre 2, tomo 6, pág.357).

15- Ley N.° 25 de 17 de setiembre de 1840. Declara que es redimible el censo impuesto sobre los terrenos de Pavas (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1840, semestre 2, tomo 6, pág.375).

16- Ley N.° 27 de 06 de diciembre de 1841. Establece impuesto a quintal de café exportado (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1841, semestre 2, tomo 7, pág.128).

17- Ley N.° 34 de 22 de setiembre de 1845. Exonera importación felpa seda para fábrica sombreros (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1845, semestre 2, tomo 9, pág.60).

18- Ley N.° 35 de 22 de setiembre de 1845. Exonera importación hilo fábrica rebozos cortes enaguas (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1845, semestre 2, tomo 9, pág.63).

19- Ley N.° 56 de 31 de diciembre de 1845. Crea lotería con impuesto favor Hospital San Juan Dios (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1845, semestre 2, tomo 9, pág.195).

20- Ley N.° 56 de 31 de diciembre de 1845. Crea lotería con impuesto favor Hospital San Juan Dios (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1845, semestre 2, tomo 9, pág.195).

21- Ley N.° 56 de 31 de diciembre de 1845. Crea lotería con impuesto favor Hospital San Juan Dios (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1845, semestre 2, tomo 9, pág.195).

22- Ley N.° 75 de 09 de junio de 1846. Arancel de aduanas (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1846, semestre 1, tomo 9, pág.232).

23- Ley N.° 73 de 17 de noviembre de 1847. Aduana de Puntarenas recauda impuestos de esa población (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1847, semestre 2, tomo 10, pág.191).

24- Ley N.° 78 de 29 de noviembre de 1847. Reglamenta rentas alcabala interior, papel sellado y tierras baldías (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1847, semestre 2, tomo 1, pág.124).

25- Ley N.° 88 de 27 de diciembre de 1847. Aduana de Puntarenas cobra derechos itinerarios (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1847, semestre 2, tomo 10, pág. 213).

26- Ley N.° 132 de 28 de agosto de 1848. Ref. impuesto exportación al café (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1848, semestre 2, tomo 10, pág. 331).

27- Ley N.° 5 de 19 de mayo de 1851. Ref. impuestos por peso mercancías en Sarapiquí y Matina (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1851, semestre 1, tomo 12, pág. 21).

28- Ley N.° 31 de 21 de agosto de 1851. Impuestos importación de países con tratados de comercio (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1851, semestre 2, tomo 12, pág. 54).

29- Ley N.° 82 de 27 de setiembre de 1852. Razón de boletas el alcabala (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1852, semestre 2, tomo 12, pág. 180).

30- Ley N.° 100 de 15 de abril de 1853. Pago de derecho de alcabala sobre fincas (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1853, semestre 1, tomo 12, pág. 233).

31- Ley N.° 11 de 15 de mayo de 1854. Exonera impuestos importación la harina trigo maíz (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1854.

32- Ley N.° 43 de 02 de agosto de 1854. Grava quintal de café que pase por La Garita (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1854, semestre 2, tomo 13, pág. 66).

33- Ley N.° 49 de 22 de setiembre de 1854. Arancel para exacción de derechos en ministerios (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1854, semestre 2, tomo 13, pág. 78).
34- Ley N.° 85 de 24 de julio de 1855. Arancel para exacción de derechos en ministerios (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1855, semestre 2, tomo 13, pág. 142).

35- Ley N.° 8 de 08 de junio de 1857. Exonera llantas fierro cinco pulgadas (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1857, semestre 1, tomo 14, pág. 103).

36- Ley N.° 14 de 02 de setiembre de 1857. Deroga impuesto destace ganado como subvención guerra (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1857, semestre 2, tomo 14, pág. 120).

37- Ley N.° 15 de 04 de setiembre de 1857. Crea impuesto destace ganado para educación primaria (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1857, semestre 2, tomo 14, pág. 121).

38- Ley N.° 53 de 27 de diciembre de 1859. Impuesto importación de bultos por Puntarenas (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1859, semestre 2, tomo 16, pág. 148).

39- Ley N.° 75 de 04 de agosto de 1864. Pago de servicios a receptor de alcabalas en Heredia (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1864, semestre 2, tomo 18, pág. 167).

40- Ley N.° 38 de 02 de noviembre de 1866. Deducción de alcabala en venta de fincas (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1866, semestre 2, tomo 1, pág. 213).

41- Ley N.° 9 de 25 de junio de 1868. Deroga impuestos exportación café y establece a licores (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1868, semestre 1, tomo 1, pág. 157).

42- Ley N.° 16 de 13 de julio de 1868. Deroga impuesto al paso reses por Garita Río Grande (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1868, semestre 2, tomo 1, pág. 165).

43- Ley N.° 23 de 30 de julio de 1868. Impuesto a licores fuertes extranjeros (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1868, semestre 2, tomo 1, pág. 176).

44- Ley N.° 6 de 25 de febrero de 1869. Abole monopolio fiscal del tabaco (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1869, semestre 1, tomo 1, pág. 15).

45- Ley N.° 25 de 02 de junio de 1870. Deroga impuesto de timbre ley 27 setiembre 1869 (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1870, semestre 1, tomo 19, pág. 62).

46- Ley N.° 57 de 29 de octubre de 1870. Impuesto transacciones públicas y privadas (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1870, semestre 2, tomo 19, pág. 142).

47- Ley N.° 22 de 25 de julio de 1871. Arancel derechos oficina registro (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1871, semestre 2, tomo 20, pág. 94).

48- Ley N.° 38 de 29 de setiembre de 1871. Impuesto mercaderías muelle Puerto Puntarenas (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1871, semestre 2, tomo 20, pág. 152).

49- Ley N.° 39 de 30 de setiembre de 1871. Impuesto exportación café (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1871, semestre 2, tomo 20, pág. 155).

50- Ley N.° 40 de 07 de octubre de 1871. Impuesto exportación frutos y prohíbe exportar hule (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1871, semestre 2, tomo 20, pág. 157).

51- Ley N.° 3 de 03 de enero de 1872. Tarifa de aduanas para armas de fuego (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1872, semestre 1, tomo 21, pág. 6).

52- Ley N.° 46 de 11de setiembre de 1873. Franquicias postales (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1873, semestre 2, tomo 22, pág. 172).

53- Ley N.° 11 de 20 de mayo de 1875. Exonera importación de maíz frijoles y arroz (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1875, semestre 1, tomo 23, pág. 77).

54- Ley N.° 43 de 11 de agosto de 1875. Concede a provincias impuesto sobre mortuales (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1875, semestre 2, tomo 23, pág. 164).

55- Ley N.° 1 de 11 de febrero de 1880. Aforo de armas de fuego (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1880, semestre 1, tomo 1, pág. 10).

56- Ley N.° 14 de 03 de setiembre de 1880- Exime impuestos importación de fosfatos para abono (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1880, semestre 2, tomo 1, pág. 62).

57- Ley N.° 16 de 03 de setiembre de 1880. Exime impuesto de muellaje a maderas exportadas (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1880, semestre 2, tomo 1, pág. 63).
58- Ley N.° 24 de 21 de julio de 1881- Aforo de municiones de armas de fuego (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1881, semestre 2, tomo 1, pág. 133).

59- Ley N.° 3 de 31 de agosto de 1882. Porte correspondencia y telegramas centroamérica (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1882, semestre 2, tomo 1, pág. 208).

60- Ley N.° 27 de 13 de octubre de 1882. Exonera exportación productos nacionales (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1882, semestre 2, tomo 1, pág. 299).

61- Ley N.° 28 de 13 de octubre de 1882. Crea impuesto de timbre (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1882, semestre 2, tomo 1, pág. 300).

62- Ley N.° 28 de 13 de octubre de 1882. Crea impuesto de timbre (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1882, semestre 2, tomo 1, pág. 300).

63- Ley N.° 9 de 18 de octubre de 1882. Establece forma pago derechos importación (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1882, semestre 2, tomo 1, pág. 378).

64- Ley N.° 4 de 26 de febrero de 1883. Rebaja derechos de patente para expendio de licores (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1883, semestre 1, tomo 1, pág. 91).

65- Ley N.° 20 de 08 de junio de 1883. Mercaderías con franquicia en aduana de Limón (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1883, semestre 1, tomo 1, pág. 182).

66- Ley N.° 41 de 20 de julio de 1883. Elimina impuesto por fabricación de cerveza (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1883, semestre 2, tomo 1, pág. 341).

67- Ley N.° 47 de 23 de julio de 1883. Exonera importación artículos de forraje (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1883, semestre 2, tomo 1, pág. 345).

68- Ley N.° 2 de 18 de enero de 1884. Tarifa postal (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1884.

69- Ley N.° 11 de 23 de febrero de 1884. Ref. Tarifa postal (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1884, semestre 1, tomo 1, pág. 43).

70- Ley N.° 11 de 23 de febrero de 1884. Ref. Tarifa postal (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1884, semestre 1, tomo 1, pág. 43).

71- Ley N.° 14 de 06 de junio de 1884. Exonera importación pastos secos (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1884, semestre 1, tomo 1, pág. 234).

72- Ley N.° 32 de 27 de setiembre de 1884. Reglamento de cobro de derechos en el registro de la propiedad (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1884, semestre 2, tomo 1, pág. 380).

73- Ley N.° 14 de 19 de noviembre de 1884. Ordenanza sobre impuestos municipales (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1884, semestre 2, tomo 1, pág. 430).

74- Ley N.° 36 de 01 de diciembre de 1884. Ref. arancel de aduanas (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1884, semestre 2, tomo 1, pág. 442).

75- Ley N.° 40 de 07 de mayo de 1885. Eleva impuesto destace ganado (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1885 semestre 1, tomo 1, pág. 156).

76- Ley N.° 28 de 23 de julio de 1885. Impuesto importación de maderas (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1885 semestre 2, tomo 1, pág. 296).

77- Ley N.° 33 de 29 de julio de 1885. Regula cobro y condonación de créditos del tesoro nacional (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1885 semestre 2, tomo 1, pág. 304).

78- Ley N.° 48 de 11 de agosto de 1885. Exonera importación máquinas fabricación telas y rebozos (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1885 semestre 2, tomo 1, pág. 341).

79- Ley N.° 51 de 12 de agosto de 1885. Exonera importación máquinas fabricación telas y rebozos exonera insumos fábrica tejidos de algodón (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1885 semestre 2, tomo 1, pág. 345).

80- Ley N.° 61 de 10 de setiembre de 1885. Arancel de aduanas (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1885 semestre 2, tomo 1, pág. 486).

81- Ley N.° 69 de 17 de octubre de 1885. Exime impuesto exportación maderas (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1885, semestre 2, tomo 1, pág. 583).

82- Ley N.° 12 de 27 de octubre de 1885. Exonera importación madera para edificar en Limón (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1885, semestre 2, tomo 1, pág. 608).

83- Ley N.° 4 de 13 de enero de 1886. Reforma arancel de aduanas (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1886, semestre 1, tomo 1, pág. 22).

84- Ley N.° 10 de 29 de marzo de 1886. Exonera letrinas y objetos limpieza excusados (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1886).

85- Ley N.° 15 de 10 de junio de 1886. Concesión importar ganado, aves, caballos para cruzarse (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1886, semestre 1, tomo 1, pág. 261).

86- Ley N.° 16 de 10 de junio de 1886. Exonera materiales para fábrica de rebozos y tejidos (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1886, semestre 1, tomo 1, pág. 262).

87- Ley N.° 23 de 18 de junio de 1886. Exonera materiales para establecer empresas de gas (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1886, semestre 1, tomo 1, pág. 276).

88- Ley N.° 26 de 29 de junio de 1886. Exonera materiales construcción hipódromo Mata Redonda (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1886, semestre 1, tomo 1, pág. 288).

89- Ley N.° 27 de 29 de junio de 1886. Exonera materiales empresa tranvías de Cartago (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1886, semestre 1, tomo 1, pág. 289).

90- Ley N.° 6 de 07 de febrero de 1887. Deroga derechos importar mercaderías por Limón y Puntarenas (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1887).

91- Ley N.°19 de 27 de junio de 1887. Exonera materiales y equipo para obras municipales (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1887, semestre 1, tomo 1, pág. 409).

92- Ley N.° 31 de 07 de julio de 1887. Deroga impuesto sobre embarcaciones menores (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1887, semestre 2, tomo 2, pág. 37).

93- Ley N.° 46 de 22 de julio de 1887. Prórroga exoneración artículos de consumo en Limón (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1887, semestre 2, tomo 2, pág. 88).

94- Ley N.° 2 de 31 de agosto de 1887. Ley sobre contribución para caminos (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1887, semestre 2, tomo 2, pág. 293).

95- Ley N.° 3 de 31 de agosto de 1887. Ley recaudación impuestos municipales (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1887, semestre 2, tomo 2, pág. 296).

96- Ley N.° 4 de 06 de octubre de 1887. Exonera maíz arroz y frijoles (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1887, semestre 2, tomo 2, pág. 359).

97- Ley N.° 11 de 25 de noviembre de 1887. Exonera importación de hierro galvanizado (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1887, semestre 2, tomo 2, pág. 464).

98- Ley N.° 1 de 13 de febrero de 1888. Exime derechos aduana cereales y carnes conservadas (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1888, semestre 1, tomo 1, pág. 61).

99- Ley N.° 46 de 16 de julio de 1888. Exime derechos aduana cereales y carnes conservadas (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1888, semestre 2, tomo 1, pág. 271).

100- Ley N.° 2 de 15 de enero de 1889. Ref. aforo arancel aduanas (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1889, semestre 1, tomo 1, pág. 11).

101- Ley N.° 85 de 13 de diciembre de 1889. Exonera artículos consumo y rebaja impuesto arancelario (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1889, semestre 2, tomo 1, pág. 702).

102- Ley N.° 63 de 29 de julio de 1890. Exonera temporalmente importación de madera (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1889, semestre 1, tomo 1, pág. 558).

103- Ley N.° 40 de 01 de agosto de 1891. Impuestos expendio licores y destace ganado a municipios (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1891, semestre 2, tomo 2, pág. 91).

104- Ley N.° 33 de 06 de julio de 1892. Ref. Ley sobre impuesto de capitación (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1892, semestre 2, tomo 2, pág. 10).

105- Ley N.° 84 de 21 de octubre de 1892. Exonera material para construir ferrocarriles (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1892, semestre 2, tomo 1, pág. 252).

106- Ley N.° 18 de 19 de mayo de 1893. Rebaja impuesto importación arroz (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1893, semestre 1, tomo 1, pág. 277).

107- Ley N.° 19 de 20 de mayo de 1893. Suprime impuesto exportación café (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1893, semestre 1, tomo 1, pág. 279).

108- Ley N.° 20 de 03 de junio de 1893. Exonera importación maquinaria fabricación azúcar (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1893, semestre 1, tomo 1, pág. 303).

109- Ley N.° 24 de 18 de julio de 1893. Impuesto exportación madera favor hospitales (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1893, semestre 2, tomo 2, pág. 20).

110- Ley N.° 42 de 03 de octubre de 1893. Impuesto Exportación Café (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1893, semestre 2, tomo 2, pág. 276).

111- Ley N.° 32 de 28 de julio de 1894. Destina impuesto de teatro a municipalidades (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1894, semestre 2, tomo 2, pág. 67).

112- Ley N.° 5 de 28 de mayo de 1895. Arancel de aduanas (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1895, semestre 1, tomo 1, pág. 273).

113- Ley N.° 30 de 03 de julio de 1895. Ref. Impuesto exportación de madera (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1895, semestre 2, tomo 2, pág. 2).

114- Ley N.° 49 de 13 de julio de 1895. Exonera carbón de piedra (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1895, semestre 2, tomo 2, pág. 26).

115- Ley N.° 51 de 16 de julio de 1895. Destina impuesto construcción penitenciaría (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1895, semestre 2, tomo 2, pág. 28).

116- Ley N.° 57 de 19 de julio de 1895. Exonera maquinaria para siembra y siega de trigo (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1895, semestre 2, tomo 2, pág. 38).

117- Ley N.° 64 de 23 de julio de 1895. Exonera material fijo y rodante para tranvía (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1895, semestre 2, tomo 2, pág. 68).

118- Ley N.° 67 de 26 de julio de 1895. Exonera maquinaria para fabricación de azúcar (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1895, semestre 2, tomo 2, pág. 51).

119- Ley N.° 37 de 25 de julio de 1896. Exonera derechos importación filtros pasteur (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1896, semestre 1, tomo 1, pág. 198).

120- Ley N.°13 de 28 de mayo de 1897. Ref. exoneración importación filtros pasteur (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1897, semestre 1, tomo 1, pág. 90).

121- Ley N.°40 de 29 de julio de 1897. Exonera maquinaria fabricación azúcar (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1897, semestre 2, tomo 1, pág. 145).

122- Ley N.° 3 de 30 de setiembre de 1897. Derechos importación maderas para Limón y Puntarenas (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1897, semestre 2, tomo 1, pág. 206).

123- Ley N.° 19 de 16 de junio de 1898. Exonera impuesto exportación café terceras (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1898, semestre 1, tomo 1, pág. 193).

124- Ley N.° 33 de 21 de julio de 1898. Organizar comisión redactora nuevo arancel aduanas (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1898, semestre 1, tomo 1, pág. 257).

125- Ley N.° 34 de 22 de julio de 1898. Ref. arancel aduanas (partidas 85, 87 y 88) (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1898, semestre 2, tomo 1, pág. 238).

126- Ley N.° 45 de 02 de agosto de 1898. Ref. arancel aduanas (partidas 27 y 85) (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1898, semestre 2, tomo 1, pág. 263).

127- Ley N.° 46 de 02 de agosto de 1898. Declara monopolio fiscal importación tabaco manufacturado (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1898, semestre 2, tomo 1, pág. 264).

128- Ley N.° 3 de 12 de noviembre de 1898. Exceptúa derechos aduana material para ferrocarril (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1898, semestre 2, tomo 1, pág. 488).

129- Ley N.° 12 de 23 de marzo de 1899. Ref. arancel aduanas (Aforo Revólveres y Cartuchos) (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1899, semestre 1, tomo 1, pág. 87).

130- Ley N.° 11 de 25 de mayo de 1899. Pago derechos aduana y muellaje (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1899, semestre 1, tomo 1, pág.160).

131- Ley N.° 13 de 26 de mayo de 1899. Ref. Impuesto Exportación Madera Costa Pacífico (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1899, semestre 1, tomo 1, pág.164).

132- Ley N.° 16 de 02 de junio de 1899. Ref. arancel aduanas (Aforo Revólveres Cartuchos) (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1899, semestre 1, tomo 1, pág.170).

133- Ley N.° 23 de 20 de junio de 1899. Impuesto exportación ganado vacuno (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1899, semestre 1, tomo 1, pág.197).

134- Ley N.° 4 de 09 de setiembre de 1899. Impuesto beneficencia sobre sucesiones (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1899, semestre 2, tomo 1, pág.135).

135- Ley N.° 3 de 14 de setiembre de 1899. Derechos aduaneros sobre paquetes postales (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1899, semestre 2, tomo 1, pág.133).

136- Ley N.° 7 de 26 de setiembre de 1899. impuesto pasajes ferrocarril para Hospital San Juan Dios (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1899, semestre 2, tomo 1, pág.265).

137- Ley N.° 10 de 20 de enero de 1900. Faculta Municipalidad Santa Bárbara cobro impuesto (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1900).

138- Ley N.° 4 de 17 de mayo de 1900. Autoriza Municipalidad de Santa Bárbara cobrar impuesto (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1900, semestre 1, tomo 1, pág.140).

139- Ley N.° 23 de 28 de junio de 1900. Fija derechos registro de la propiedad (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1900, semestre 1, tomo 1, pág.206).

140- Ley N.° 26 de 19 de julio de 1900. Impuesto pasajes de ferrocarril (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1900, semestre 2, tomo 2, pág.23).

141- Ley N.° 39 de 01 de agosto de 1900. Impuesto al cacao (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1900, semestre 2, tomo 2, pág.27).

142- Ley N.° 5 de 14 de agosto de 1900. Exonera importación y exportación de moneda (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1900, semestre 2, tomo 2, pág.79).

143- Ley N.° 6 de 14 de abril de 1901. Aumenta impuesto importaciones (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1901, semestre 1, tomo 1, pág.87).

144- Ley N.° 17 de 19 de julio de 1901. Libera gravamen exportación café (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1901, semestre 2, tomo 2, pág.19).

145- Ley N.° 8 de 09 de setiembre de 1901. Exonera derechos aduana Compañía Luz Eléctrica San José (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1901, semestre 2, tomo 2, pág.65).

146- Ley N.° 5 de 07 de febrero de 1902. Franquicia importación cajas madera (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1902, semestre 1, tomo 1, pág.32).

147- Ley N.° 10 de 23 de mayo de 1902. Aprueba decreto exoneración importación cajas madera (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1902, semestre 1, tomo 1, pág.101).

148- Ley N.° 15 de 06 de junio de 1902. Reforma partidas arancel aduanas (83, 84 y 85) (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1902, semestre 1, tomo 1, pág.121).

149- Ley N.° 25 de 30 de junio de 1902. Libre importación maquinaria elaboración mármol (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1902, semestre 1, tomo 1, pág.146).

150- Ley N.° 28 de 03 de julio de 1902. Ref. aforos sobre muebles de madera (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1902, semestre 2, tomo 1, pág.22).

151- Ley N.° 83 de 20 de agosto de 1902. Deroga ley construcciones en Limón y crea arancel a madera importada (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1902, semestre 2, tomo 1, pág.187).

152- Ley N.° 5 de 05 de setiembre de 1902. Aclara aranceles importación de madera introducida por Puerto Limón (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1902, semestre 2, tomo 1, pág.240).

153- Ley N.° 12 de 17 de noviembre de 1902. Distribución impuesto exportación concha perla (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1902, semestre 2, tomo 1, pág.338).

154- Ley N.° 21 de 19 de marzo de 1903. Reduce derechos aduana insumos industria confites (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1902, semestre 1, tomo 1, pág.168).

155- Ley N.° 49 de 20 de julio de 1903. Aforo de varias especies (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1903, semestre 2, tomo 2, pág.106).

156- Ley N.° 53 de 25 de julio de 1903. Subvención Compra Máquina Extractora de Fibras Textiles (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1903, semestre 2, tomo 2, pág.117).

157- Ley N.° 14 de 20 de enero de 1904. Exonera derechos aduana materiales Puerto Limón (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1904, semestre 1, tomo 1, pág.9).

158- Ley N.° 16 de 18 de abril de 1905. Exonera derechos importación maíz frijoles (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1905, semestre 1, tomo 1, pág.178).

159- Ley N.° 1 de 25 de abril de 1905. Exonera temporalmente derechos importación frijoles (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1905, semestre 1, tomo 1, pág.183).

160- Ley N.° 3 de 20 de mayo de 1905. Grava importación impresos comerciales (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1905, semestre 1, tomo 1, pág.230).

161- Ley N.° 32 de 11 de julio de 1905. Exonera importación residuos de trigo (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1905, semestre 2, tomo 2, pág.17).

162- Ley N.° 51 de 27 de julio de 1905. Exonera importación sarnol carbolina creolina (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1905, semestre 2, tomo 2, pág.98).

163- Ley N.° 33 de 11 de julio de 1907. Derecho por certificaciones archivos nacionales (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1907, semestre 2, tomo 1, pág.12).

164- Ley N.° 26 de 07 de julio de 1908. Exonera exportación madera puertos Pacífico (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1908, semestre 2, tomo 1, pág.22).

165- Ley N.° 27 de 09 de julio de 1908. Franquicia material a The Costa Rica Electric Light (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República Año 1908, semestre 2, tomo 1, pág.31).

166- Ley N.° 36 de 29 de julio de 1908. Suspende impuesto exportación concha perla (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1908, semestre 2, tomo 1, pág.95).

167- Ley N.° 14 de 22 de octubre de 1908. Exonera Importación Ganado Vacuno (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1908, semestre 2, tomo 1, pág.557).

168- Ley N.° 16 de 28 de octubre de 1908. Impuesto exportación bananos (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1908, semestre 2, tomo 1, pág.585).

169- Ley N.° 5 de 19 de octubre de 1909. Exonera importación maíz y frijoles negros (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1909, semestre 1, tomo 1, pág.122).

170- Ley N.° 100 de 13 de julio de 1909. Exonera fibrocemento y materiales hierro (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1909, semestre 2, tomo 2, pág.41).

171- Ley N.° 102 de 13 de julio de 1909. Exonera materiales instalaciones eléctricas Puntarenas (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1909, semestre 2, tomo 2, pág.42).

172- Ley N.° 105 de 13 de julio de 1909. Exonera importación maíz y frijoles (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1909, semestre 2, tomo 2, pág.46).

173- Ley N.° 15 de 07 de junio de 1910. Franquicia exportación dulce y azúcar (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1910, semestre 1, tomo 1, pág.290).

174- Ley N.° 21 de 20 de junio de 1910. Exonera maquinaria explotación minas (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1910, semestre 1, tomo 1, pág.312).

175- Ley N.° 58 de 23 de agosto de 1910. Ref. arancel aduanas (Aforo Leche Condensada) (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1910, semestre 2, tomo 2, pág.364).

176- Ley N.° 58 de 29 de agosto de 1910. Impuesto salida del país (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1910, semestre 2, tomo 2, pág.727).

177- Ley N.° 13 de 20 de setiembre de 1911. Arancel aduanas (Aforo Suela) (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1911, semestre 2, tomo 1, pág.170).

178- Ley N.° 26 de 25 de junio de 1912. Exonera temporalmente petróleo y gasolina (Colección de leyes y decretos de la Procuraduría General de la República. Año 1912, semestre 1, tomo 1, pág.361).

ARTÍCULO 2- La derogación de las normas señaladas en los artículos de esta ley no afectará los intereses individuales, derechos subjetivos, derechos patrimoniales, intereses colectivos o situaciones jurídicas consolidadas a las cuales estas hayan dado lugar. Tampoco, se entenderá que tales derogaciones puedan ser aplicadas con efecto retroactivo de forma tal que puedan afectar los derechos de los ciudadanos, ni tampoco se entenderá que eximen al Estado o a los entes públicos de obligaciones adquiridas que se hayan establecido en dichas normas. Igualmente, su derogación no afectará las reformas, abrogaciones o derogaciones

que hayan efectuado sobre la legislación posterior que esté vigente, pues se entiende que dichas modificaciones han quedado incorporadas y forman parte del contenido de las normas afectadas, todo ello de acuerdo con los artículos 34 y 129 de la Constitución Política de 1949, y los artículos del 8 al 16, ambos inclusive, del Código Civil de 1887.

Rige a partir de su publicación.

Dragos Dolanescu Valenciano
Diputado

NOTA: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos.

1 vez.—(IN2018300219).

AUTORIZACIÓN A LA MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN PARA QUE DONE UN TERRENO DE SU PROPIEDAD A LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA MARÍA AMELIA MONTEALEGRE

Expediente N.º 21.123

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

Este es un proyecto por el cual se solicita la atención especial para alcanzar la implementación para encontrar la inversión en obra pública que logre otorgar una infraestructura adecuada a la escuela María Amelia Montealegre de forma tal que su status de educación cuente con los mejores medios de desarrollo.

En razón de lo anterior, se considera de gran importancia promover la promulgación de la ley que permita la desafectación del inmueble inscrito en el Registro Nacional bajo el número 137597, distrito de San Juan, cantón de La Unión, provincia de Cartago, con el plano de catastro C-0102259-1993, que es terreno destinado a parque, de acuerdo con su destino así escriturado, con un área de catorce mil quinientos sesenta y dos metros y seis decímetros cuadrados (14.562,06 m/2.) y autorizar a la municipalidad de La Unión a la donación del mismo al amparo de lo que indica el artículo 71 de la Ley N.° 7794 y sus reformas (Código Municipal), para que de esa manera pueda el Concejo Municipal acordar la donación del mismo a la Junta de Educación de la Escuela María Amelia Montealegre para los efectos que la pertenencia del inmueble permite, en cuanto a la inversión en favor de las mejoras de infraestructura de ese centro educativo.

Actualmente, y desde hace más de 20 años la Escuela María Amelia Montealegre se encuentra afincada en dicha propiedad, más para poder obtener inversión en ella por medio del D.I.E del Ministerio de Educación, se hace necesario oficializar legalmente el asunto de pertenencia registral.

Bajo este concepto, la donación del terreno en mención, se convierte en una alternativa para que la Junta de Educación sea un aliado más para el Estado costarricense y Gobierno Local, para que por medio de su trabajo, se pueda dar una mejor calidad a la educación que en dicho centro de enseñanza se desarrolla y que se encuentre acorde a las necesidades del mismo.

Por las razones expuestas someto a consideración de las señoras diputadas y los señores diputados el presente proyecto de ley.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
DECRETA:

AUTORIZACIÓN A LA MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN PARA QUE DONE UN TERRENO DE SU PROPIEDAD A LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA MARÍA AMELIA MONTEALEGRE

ARTÍCULO 1- Autorización

Se desafecta el uso teórico legal inscrito actual y se autoriza a la Municipalidad de La Unión, cédula jurídica número tres – cero uno cuatro – cero cuatro dos cero ocho tres (N.° 3-014-042083), para que done, al amparo de lo que indica el artículo 71 de la Ley N.° 7794 y sus reformas (Código Municipal), a la Junta de Educación de la Escuela María Amelia Montealegre, cédula jurídica 3-008-051705, un bien inmueble de su propiedad, terreno inscrito en el Registro Público de la Propiedad en la provincia de Cartago, bajo el número 137597, distrito de San Juan, segundo del cantón de La Unión, provincia de Cartago, con el plano de catastro C-0102259-1993, que es terreno destinado a parque, de acuerdo con su destino así escriturado, con un área de catorce mil quinientos sesenta y dos metros y seis decímetros cuadrados (14.562,06 m/2.)

El inmueble por desafectar y donar se describe así: su naturaleza escriturada es terreno destinado a parque, donde se afinca por más de veinte años, el edificio de la Escuela y Jardín de Niños María Amelia Montealegre, (terreno apto para la edificación); que está situado en el distrito 3°, San Juan; cantón 3º La Unión, provincia de Cartago; con un área de catorce mil quinientos sesenta y dos metros y seis decímetros cuadrados (14.562,06 m/2.) y colinda al norte con la avenida Montes de Pinares, al sur con Zona de Protección en medio y Urb. La Unión, al este con Hacienda Omega y al oeste, con Construcciones del Oeste S.A.

ARTÍCULO 2- Restricciones

Bajo ningún plazo, que se establece a partir de la publicación de esta ley, el beneficiario de esta donación podrá traspasar, vender, arrendar o gravar, de ninguna forma, el terreno donado, dado los fines públicos que esta donación persigue en bien de la educación.

ARTÍCULO 3- Limitaciones

El terreno mencionado será utilizado únicamente para, reconstruir, remodelar, mejorar y adicionar nuevas edificaciones de la Escuela y Jardín de Niños María Amelia Montealegre, la que en la actualidad se encuentra afincada en dicho inmueble y que la presente ley busca legalizar la pertenencia de dicha propiedad a cargo de la Junta de Educación de ese Centro Educativo.

ARTÍCULO 4- Autorización a la Notaría del Estado

Se autoriza a la Notaría del Estado para que confeccione la respectiva escritura pública de donación a que se refiere la presente ley. Asimismo, se autoriza a la Procuraduría General de la República para que corrija los defectos que señale el Registro Nacional.

Rige a partir de su publicación.

Pablo Heriberto Abarca Mora

Laura Guido Pérez

Sylvia Patricia Villegas Álvarez

Paola Alexandra Valladares Rosado

Luis Fernando Chacón Monge

Diputados y diputadas

NOTA: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Ordinaria de Gobierno y Administración.

1 vez.—(IN2018300246).

AUTORIZACIÓN AL ESTADO PARA DESAFECTAR UN TERRENO DE SU PROPIEDAD, SEGREGAR Y DONAR A LOS POBLADORES DEL CASERIO DE PUEBLO NUEVO DE PARRITA, EN EL CANTON DE PARRITA

Expediente N.° 21.124

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

La Constitución Política de Costa Rica consagra el derecho de acceso a la vivienda digna en su artículo 65, al indicar que *"el Estado promoverá la construcción de viviendas populares y creará el patrimonio familiar del trabajador."*

En este mismo sentido, la Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos, N° 7527, de 17 de agosto de 1995, establece en su artículo 1 lo siguiente:

> "Artículo 1.- Objetivo.
>
> El derecho a vivienda digna y adecuada es inherente a todo ser humano. El Estado tiene el deber de posibilitar la realización de este derecho.
>
> Inspirada en los principios de libertad, justicia y equidad y reconociendo la necesidad de armonizar el ejercicio del derecho de propiedad con el desarrollo económico y el interés social, esta ley se propone dictar las normas para regular las relaciones jurídicas originadas en el arrendamiento de locales para vivienda y otros destinos."

Bajo estas premisas, se presenta el siguiente proyecto de ley cuyo propósito es el de autorizar al Estado para desafectar un terreno de su propiedad, segregar y donar a los habitantes de Pueblo Nuevo de Parrita.

El terreno de marras se ubica en la provincia de Puntarenas, en el Distrito: 1° Parrita, en el Cantón: IX Parrita, el cual mide 65.793 metros cuadrados.

Originalmente había sido dispuesto para la creación del aeródromo de Parrita. No obstante, desde larga data, el referido inmueble ha sido ocupado permanentemente por decenas de familias, las cuales consolidaron el asentamiento de Pueblo Nuevo de Parrita, es decir, establecieron en él su residencia. Actualmente los habitantes cuentan con acceso a los servicios básicos como agua, luz y recolección de basura,

entre otros, para lo cual pagan los impuestos municipales respectivos; asimismo cuentan con aceras, calles y alumbrado público.

Tomando en consideración el derecho de todo ciudadano de aspirar a una vivienda digna, como un derecho inherente a todo ser humano, tomando en consideración que estas familias han pasado décadas habitando en estos terrenos, y tomando en consideración que estos terrenos cuentan con todas las condiciones y servicios para consolidar el asentamiento como un lugar a derecho, se hace indispensable que el Estado posibilite la realización de este ordenamiento.

Por los motivos expuestos, someto a la consideración de las señoras y señores diputados este proyecto de ley, cuyo objetivo es autorizar al Estado para que el terreno de su propiedad indicado, sea segregado y done los lotes a familias que han ocupado los mismos por más de diez años.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
DECRETA:

AUTORIZACIÓN AL ESTADO PARA DESAFECTAR UN TERRENO DE SU PROPIEDAD, SEGREGAR Y DONAR A LOS POBLADORES DEL CASERIO DE PUEBLO NUEVO DE PARRITA, EN EL CANTON DE PARRITA

ARTÍCULO 1- Se autoriza al Estado, cédula de jurídica número 2-000-045522, para que desafecte, segregue y done los lotes que corresponda conforme a lo indicado por la presente ley, de la finca de su propiedad inscrita en el Registro Público de la Propiedad, Partido de Puntarenas, bajo el número 11.486-000, Tomo 1574, Folio 125, Asiento 1, situada en: Distrito: 1º Parrita, Cantón: IX Parrita, de la Provincia de Puntarenas, mide: 65.793 metros cuadrados. Su naturaleza se transforma en un bien de dominio privado.

El resto de la finca madre se lo reserva el Estado.

ARTÍCULO 2- Los lotes por segregar serán traspasados a título gratuito en beneficio de las familias poseedoras u ocupantes de buena fe de los terrenos correspondientes, ubicados en el caserío de Pueblo Nuevo de Parrita, del Distrito Primero Parrita, Cantón: IX Parrita, de la provincia de Puntarenas.

Los inmuebles donados se destinarán, exclusivamente, a la solución de vivienda de los pobladores.

El Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), en coordinación con la Municipalidad de Parrita, determinarán los beneficiarios finales de esta ley, quienes destinarán al régimen de patrimonio familiar el inmueble donado, el cual no podrá ser vendido,

gravado, arrendado, cedido ni traspasado a terceros, hasta tanto no hayan transcurrido diez años desde la inscripción registral correspondiente.

Se exceptúan de esta regulación las operaciones de las personas beneficiarias de esta ley, con los entes autorizados del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, así como los gravámenes que las mutuales de vivienda impongan sobre los inmuebles traspasados y únicamente para financiar el mejoramiento y la reparación de las viviendas construidas en los lotes donados.

ARTÍCULO 3- Procederá de pleno derecho a favor del Estado la inmediata reversión de la propiedad de cualquier bien inmueble donado, en caso de que el terreno correspondiente se destine a otra finalidad o uso no autorizado por la presente ley.

ARTÍCULO 4- Se autoriza a la Notaría del Estado para que confeccione las escrituras de traspaso el cual estará exento de todo tipo de impuestos, tasas o contribuciones, tanto registrales como de cualquier otra índole. Asimismo, se autoriza a la Procuraduría General de la República para que corrija los errores que señale el Registro Nacional.

Rige a partir de su publicación.

Oscar Cascante Cascante
Diputado

NOTA: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Ordinaria de Gobierno y Administración.

1 vez.—(IN2018300251).

DEROGATORIA DE LEYES CADUCAS O HISTÓRICAMENTE OBSOLETAS PARA LA DEPURACIÓN DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO (QUINTA PARTE)

Expediente N.° 21.125

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

El 23 de abril del 2014, la diputada Gloria Bejarano Almada presentó en la corriente legislativa el expediente 19085 denominado "DEROGATORIA DE LEYES CADUCAS O HISTÓRICAMENTE OBSOLETAS PARA LA DEPURACIÓN DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO (QUINTA PARTE)".

Dicho proyecto fue el resultado de un arduo trabajo multidisciplinario de diferentes departamentos de varias instituciones del país como: el Centro de Investigación Legislativa (Cedil) y el Departamento de Servicios Bibliotecarios, Documentación e Información del Congreso, Sistema Nacional de Legislación Vigente (Sinalevi) de la Procuraduría General de la República, Universidad de Costa Rica y el Colegio de Abogados.

A pesar de todo el esfuerzo realizado por las citadas instituciones, este fue archivado el 17 de febrero del 2018 por vencimiento del plazo cuatrienal de acuerdo con lo establecido en el artículo 119 del Reglamento de la Asamblea Legislativa. Por ese motivo consideré necesario presentar nuevamente el proyecto de ley, para de esta manera dar continuidad a un proceso de depuración de nuestra legislación, el cual nos permita eliminar normativa obsoleta o en desuso, con el fin de mejorar la calidad del ordenamiento jurídico como un todo, para que se convierta en un instrumento adecuado al servicio de la sociedad y no en un obstáculo.

Motivado por la necesidad de continuar con la promoción de los cambios necesarios que fomenten la depuración del ordenamiento jurídico nacional, garanticen la seguridad jurídica de las normas y le permitan a las personas contar con normas claramente identificadas, el equipo de expertos que realizó toda la investigación en relación con las normas en desuso, presentó un cuarto grupo de leyes para derogar 997 leyes caducas o históricamente obsoletas y que conforman el presente proyecto que ponemos a conocimiento de las señoras diputadas y los señores diputados.

En esta iniciativa se destacan los siguientes elementos de fondo:

i) Se identifica la existencia de normas jurídicas de dudosa vigencia, emitidas desde los albores de la Independencia y hasta inicios de los años 1900, las cuales constituyen un elemento perturbador que distorsiona la seguridad jurídica.

ii) Las normas jurídicas que se propone derogar en este proyecto de ley están diseñadas para dar respuesta a situaciones temporales determinadas, como lo son los casos de pensiones otorgadas de 1824 a 1913; por lo que su derogatoria apoyaría el objetivo de que tanto el ciudadano como el Estado tengan la certeza y la confianza de conocer y aplicar normas efectivamente vigentes, sin dudas ni cuestionamientos.

iii) Se identifican leyes vigentes que por su contenido hoy son obsoletas, están en desuso, o bien, han sido afectadas mediante modificaciones, elementos que dificultan el acceso, la interpretación y la aplicación de nuestro ordenamiento.

La Sala Constitucional, refiriéndose al principio de seguridad jurídica como principio constitucional, en sentencia N.° 8790-97, de 24 de diciembre de 1997, expresa una posición interesante en que se vislumbra la seguridad jurídica como dual, en un sentido objetivo (como existencia de orden social) y subjetivo (como confianza del ciudadano en la invariabilidad de situaciones jurídicas consolidadas):

> "…La seguridad jurídica es un principio constitucional que en su sentido genérico consiste en la garantía dada al individuo de que su persona, sus bienes y sus derechos no serán objeto de ataques violentos o que, si éstos llegan a producirse, le serán aseguradas por la sociedad, protección y reparación: es la situación del individuo como sujeto activo y pasivo de relaciones sociales, que sabiendo o pudiendo saber cuáles son las normas jurídicas vigentes, tiene fundamentales expectativas de que ellas se cumplan. Ese valor jurídico pretende dar certeza contra las modificaciones del Derecho, procura evitar la incertidumbre del Derecho vigente, es decir, las modificaciones jurídicas arbitrarias, realizadas sin previo estudio y consulta. Puede ser considerada tanto en sentido subjetivo y objetivo, pero ambos están indisolublemente vinculados; en su sentido subjetivo es la convicción que tiene una persona de que la situación de que goza no será modificada por una acción contraria a los principios que rigen la vida social y en sentido objetivo se confunde con la existencia de un estado de organización social, de un orden social. En la mayoría de los ordenamientos jurídicos positivos existen normas que pretenden dar cumplimiento al valor de la seguridad jurídica; en el nuestro tenemos varias expresiones de ese principio tales como la presunción del conocimiento de la ley, el principio de la reserva o legalidad penal, el principio de irretroactividad de la ley, la cosa juzgada y la prescripción, entre otros…". (Los subrayados no son del original).

En conclusión, un país donde el principio de seguridad jurídica no se vislumbre con claridad sufrirá un menoscabo fundamental en su sistema democrático. Por esta razón, la emisión, existencia y aplicación de las leyes debe responder a un funcionamiento dinámico de la sociedad.

Es importante mencionar que en el periodo de 1826 y 1910 las leyes, una vez aprobadas, no eran remitidas a publicación como se estila hoy día; por lo anterior, en la presente iniciativa se utiliza como fuente la Colección de Leyes y Decretos en la que se identifica: la colección de referencia, el semestre, el tomo y la página a la que corresponde cada ley por derogar. Asimismo, se aclara que el título de la ley, en ese momento, correspondía a una temática, por lo que no coincide con la actual técnica legislativa.

En razón de lo expuesto, someto a la consideración de los señores y señoras diputadas el presente proyecto de ley.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
DECRETA:

DEROGATORIA DE LEYES CADUCAS O HISTÓRICAMENTE OBSOLETAS PARA LA DEPURACIÓN DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO (QUINTA PARTE)

ARTÍCULO 1- Se deroga expresamente la siguiente normativa, correspondiente al período entre 1824 y 1910, por razones de caducidad, en objetivo y temporalidad.

1- Ley N.° 2 de 9 de setiembre de 1824, Designa a la ciudad de San José como sede del Congreso Constituyente. (Colección de leyes y decretos. Año 1824, semestre 2, tomo L y D-1, pág. 6).

2- Ley N.° 7 de 24 de setiembre de 1824, Insta a corporaciones y autoridades colaborar con redacción de Constitución. (Colección de leyes y decretos. Año 1824, semestre 2, tomo L y D-1, pág. 11).

3- Ley N.° 4 de 24 de setiembre de 1824, Regula salario de diputados del Congreso Constituyente. (Colección de leyes y decretos. Año 1824, semestre 2, tomo L y D-1, pág. 8).

4- Ley N.° 6 de 24 de setiembre de 1824, Dispone celebración solemne por instalación del Congreso Constituyente. (Colección de leyes y decretos. Año 1824, semestre 2, tomo L y D-1, pág. 11).

5- Ley N.° 8 de 25 de setiembre de 1824, Exige a municipalidades presentar estado de cuentas al jefe supremo. (Colección de leyes y decretos. Año 1824, semestre 2, tomo L y D-1, pág. 12).

6- Ley N.° 10 de 30 de setiembre de 1824, Regula el juramento ante el Congreso Constituyente. (Colección de leyes y decretos. Año 1824, semestre 2, tomo L y D-1, pág. 19).

7- Ley N.° 11 de 30 de setiembre de 1824, Prohíbe limosnas para santos y regula alcancías en iglesias. (Colección de leyes y decretos. Año 1824, semestre 2, tomo L y D-1, pág. 21).

8- Ley N.° 9 de 30 de setiembre de 1824, Reglamento del jefe supremo del Estado. (Colección de leyes y decretos. Año 1824, semestre 2, tomo L y D-1, pág. 13).

9- Ley N.° 13 de 1 de octubre de 1824, Regula indulto a delincuentes, paisanos, militares y eclesiásticos. (Colección de leyes y decretos. Año 1824, semestre 2, tomo L y D-1, pág. 23).

10- Ley N.° 12 de 1 de octubre de 1824, Obliga a comisarios o administradores de limosnas a rendir cuentas. (Colección de leyes y decretos. Año 1824, semestre 2, tomo L y D-1, pág. 22).

11- Ley N.° 14 de 19 de octubre de 1824, Exige licencia previa de Congreso para construcción de templos. (Colección de leyes y decretos. Año 1824, semestre 2, tomo L y D-1, pág. 29).

12- Ley N.° 17 de 27 de octubre de 1824, Dispone amonedar en cuño provisional moneda fraccionaria en cobre. (Colección de leyes y decretos. Año 1824, semestre 2, tomo L y D-1, pág. 35).

13- Ley N.° 15 de 2 de noviembre de 1824, Designa escudo de armas del Estado libre de Costa-Rica. (Colección de leyes y decretos. Año 1824, semestre 2, tomo L y D-1, pág. 33).

14- Ley N.° 18 de 3 de noviembre de 1824, Regula establecimiento de fondos de propios en pueblos que no los tengan. (Colección de leyes y decretos. Año 1824, semestre 2, tomo L y D-1, pág. 36).

15- Ley N.° 16 de 4 de noviembre de 1824, Establece cuño provisional para amonedar en oro y plata. (Colección de leyes y decretos. Año 1824, semestre 2, tomo L y D-1, pág. 34).

16- Ley N.° 21 de 18 de noviembre de 1824, Solicita a obispo de Nicaragua nombrar vicario general. (Colección de leyes y decretos. Año 1824, semestre 2, tomo L y D-1, pág. 42).

17- Ley N.° 23 de 27 de noviembre de 1824, Promueve la edición de periódicos murales en pueblos del Estado. (Colección de leyes y decretos. Año 1824, semestre 2, tomo L y D-1, pág. 44).

18- Ley N.° 25 de 14 de diciembre de 1824, Regula dimisiones de miembros de Supremos Poderes y de sus suplencias. (Colección de leyes y decretos. Año 1824, semestre 2, tomo L y D-1, pág. 48).

19- Ley N.° 27 de 14 de diciembre de 1824, Funda casa de enseñanza pública de Santo Tomás. (Colección de leyes y decretos. Año 1824, semestre 2, tomo L y D-1, pág. 50).

20- Ley N.° 26 de 15 de diciembre de 1824, Promueve establecimiento de casas de enseñanza pública en pueblos. (Colección de leyes y decretos. Año 1824, semestre 2, tomo L y D-1, pág. 50).

21- Ley N.° 19 de 21 de diciembre de 1824, Crea tribunal de Congreso para conocer causas contra sus diputados. (Colección de leyes y decretos. Año 1824, semestre 2, tomo L y D-1, pág. 38).

22- Ley N.° 28 de 23 de diciembre de 1824, Regula ausencias de diputados a sesiones del Congreso Constituyente. (Colección de leyes y decretos. Año 1824, semestre 2, tomo L y D-1, pág. 53).

23- Ley N.° 29 de 28 de diciembre de 1824, Establece y regula municipalidades en todos los pueblos del Estado. (Colección de leyes y decretos. Año 1824, semestre 2, tomo L y D-1, pág. 54).

24- Ley N.° 30 de 22 de enero de 1825, Sobre presentación y juramento a ley fundamental sancionada. (Colección de leyes y decretos. Año 1825, semestre 1, tomo L y D-1, pág. 78).

25- Ley N.° 31 de 8 de febrero de 1825, Regula elección de miembros de los Supremos Poderes del Estado. (Colección de leyes y decretos. Año 1825, semestre 1, tomo L y D-1, pág. 79).

26- Ley N.° 22 de 16 de febrero de 1825, Establece y regula fondo de propios de Villa de las Cañas. (Colección de leyes y decretos. Año 1824, semestre 2, tomo L y D-1, pág. 43).

27- Ley N.° 33 de 8 de abril de 1825, Ciudadanos electos Supremos Poderes no están obligados a aceptar otro. (Colección de leyes y decretos. Año 1825, semestre 1, tomo L y D-1, pág. 96).

28- Ley N.° 32 de 26 de abril de 1825, Reglamento para la casa de enseñanza pública de San José (Santo Tomás). (Colección de leyes y decretos. Año 1825, semestre 1, tomo L y D-1, pág. 84).

29- Ley N.° 35 de 19 de mayo de 1825, Regula elección de suplente para el Cuerpo Conservador. (Colección de leyes y decretos. Año 1825, semestre 1, tomo L y D-1, pág. 107).

30- Ley N.° 36 de 26 de mayo de 1825, Regula dotaciones y sueldos miembros y personal del Poder Conservador. (Colección de leyes y decretos. Año 1825, semestre 1, tomo L y D-1, pág. 108).

31- Ley N.° 37 de 15 de junio de 1825, Regula indulto a heredianos que se resistieron a juramento de Constitución. (Colección de leyes y decretos. Año 1825, semestre 1, tomo L y D-1, pág. 111).

32- Ley N.° 40 de 5 de julio de 1825, Reduce excepción de recién casados para cargo de concejiles. (Colección de leyes y decretos. Año 1825, semestre 1, tomo L y D-1, pág. 122).

33- Ley N.° 43 de 15 de julio de 1825, Cobro de fondos a comunidades indígenas de este Estado que existen en León. (Colección de leyes y decretos. Año 1825, semestre 2, tomo L y D-1, pág. 129).

34- Ley N.° 44 de 26 de julio de 1825, Caja pública del Estado pagará dietas de diputados. (Colección de leyes y decretos. Año 1825, semestre 2, tomo L y D-1, pág. 130).

35- Ley N.° 46 de 29 de julio de 1825, Suprime Tribunal Minería y da facultades a intendente general de Hacienda. (Colección de leyes y decretos. Año 1825, semestre 2, tomo L y D-1, pág. 132).

36- Ley N.° 45 de 12 de setiembre de 1825, Exonera del pago del diezmo a café, algodón y cría de ganado lanar. (Colección de leyes y decretos. Año 1825, semestre 2, tomo L y D-1, pág. 131).

37- Ley N.° 51 de 28 de setiembre de 1825, Fianzas por cargos de intendentes y empleados de Hacienda. (Colección de leyes y decretos. Año 1825, semestre 2, tomo L y D-1, pág. 144).

38- Ley N.° 50 de 28 de setiembre de 1825, Alistan hombres para contribuir al ejército de la República. (Colección de leyes y decretos. Año 1825, semestre 2, tomo L y D-1, pág. 143).

39- Ley N.° 52 de 5 de octubre de 1825, Otorga premios a descubridores de caminos y puertos. (Colección de leyes y decretos. Año 1825, semestre 2, tomo L y D-1, pág. 146).

40- Ley N.° 48 de 5 de octubre de 1825, Designa sueldos de jefes políticos militar y de Hacienda. (Colección de leyes y decretos. Año 1825, semestre 2, tomo L y D-1, pág. 141).

41- Ley N.° 54 de 5 de octubre de 1825, Nombra junta de indemnización de esclavos. (Colección de leyes y decretos. Año 1825, semestre 2, tomo L y D-1, pág. 148).

42- Ley N.° 53 de 5 de octubre de 1825, Exonera de cargas públicas a concejiles señor Joaquín Mora. (Colección de leyes y decretos. Año 1825, semestre 2, tomo L y D-1, pág. 147).

43- Ley N.° 56 de 10 de octubre de1825, Respeto público a misterios y ceremonias sagradas de religión del país. (Colección de leyes y decretos. Año1825, semestre 2, tomo L y D-1, pág. 151).

44- Ley N.° 58 de 10 de octubre de 1825, Señala sueldos a magistrados de Corte Superior Justicia. (Colección de leyes y decretos. Año 1825, semestre 2, tomo L y D-1, pág. 154).

45- Ley N.° 57 de 10 de octubre de 1825, Faculta a eclesiásticos trabajar en actividades mineras. (Colección de leyes y decretos. Año 1825, semestre 2, tomo L y D-1, pág. 153).

46- Ley N.° 55 de 14 de octubre de 1825, Crea Tesorería General de Hacienda del Estado y su caja principal. (Colección de leyes y decretos. Año 1825, semestre 2, tomo L y D-1, pág. 149).

47- Ley N.° 62 de 4 de noviembre de 1825, Aprueba proyecto colonia de Mr. Juan Halle. (Colección de leyes y decretos. Año 1825, semestre 2, tomo L y D-1, pág. 162).

48- Ley N.° 63 de 4 noviembre de 1825, Divide el territorio del Estado en departamentos, distritos y pueblos. (Colección de leyes y decretos. Año 1825, semestre 2, tomo L y D-1, pág. 163).

49- Ley N.° 66 de 19 de noviembre de 1825, Aprueba proposición de nuevas colonias hechas por Mr. Pedro Ruahaud. (Colección de leyes y decretos. Año 1825, semestre 2, tomo L y D-1, pág. 170).

50- Ley N.° 61 de 28 de noviembre de 1825, Regula el pago de dietas y sueldos a miembros de los Supremos Poderes. (Colección de leyes y decretos. Año 1825, semestre 2, tomo L y D-1, pág. 160).

51- Ley N.° 72 de 28 de noviembre de 1825, Crea tributos para fondos de propios de la ciudad de Cartago. (Colección de leyes y decretos. Año 1825, semestre 2, tomo L y D-1, pág. 179).

52- Ley N.° 73 de 29 de noviembre de 1825, Reglamento colectación, administración e inversión de fondos de pueblos. (Colección de leyes y decretos. Año 1825, semestre 2, tomo L y D-1, pág. 181).

53- Ley N.° 68 de 30 de noviembre de 1825, Establece fondo en Villa de Ujarrás en terrenos de ejidos y pagos. (Colección de leyes y decretos. Año 1825, semestre 2, tomo L y D-1, pág. 174).

54- Ley N.° 70 de 30 de noviembre de 1825, Prevé exigencia por el gobierno de convocatoria de consejo disuelto. (Colección de leyes y decretos. Año 1825, semestre 2, tomo L y D-1, pág. 177).

55- Ley N.° 76 de 6 de enero de 1826, Reglas para el nombramiento de miembros de los Supremos Poderes. (Colección de leyes y decretos. Año 1826, semestre 2, tomo L y D-1, pág. 192).

56- Ley N.° 77 de 16 de enero de 1826, Amplía número de prestamistas forzados para empréstito forzoso del cuño. (Colección de leyes y decretos. Año1826, semestre 1, tomo L y D-1, pág. 195).

57- Ley N.° 81 de 26 de enero de 1826, Crea y organiza la milicia activa del Estado. (Colección de leyes y decretos. Año 1826, semestre 1, tomo L y D-1, pág. 209).

58- Ley N.° 79 de 26 de enero de 1826, Fija sueldo del oficial amanuense de la Secretaría del Consejo. (Colección de leyes y decretos. Año 1826, semestre 1, tomo L y D-1, pág. 197).

59- Ley N.° 80 de 26 de enero de 1826, Reglamento para la administración de justicia en cualquier instancia. (Colección de leyes y decretos. Año 1826, semestre 1, tomo L y D-1, pág. 197).

60- Ley N.° 78 de 27 de enero de 1826, Gobierno cubre deuda contra Hacienda Pública con fondos de empréstito. (Colección de leyes y decretos. Año 1826, semestre 1, tomo L y D-1, pág. 196).

61- Ley N.° 84 de 27 de enero de 1826, Obliga a extranjeros a contribuir con empréstito forzoso del cuño. (Colección de leyes y decretos. Año 1826, semestre1, tomo L y D-1, pág. 214).

62- Ley N.° 82 de 27 de enero de 1826, Deroga decreto de autorización de empréstito con Mr. Luis Bire. (Colección de leyes y decretos. Año 1826, semestre 1, tomo L y D-1, pág. 211).

63- Ley N.° 83 de 6 de febrero de 1826, Participación del Estado libre de Costa Rica en el empréstito federal. (Colección de leyes y decretos. Año 1826, semestre 1, tomo L y D-1, pág. 212).

64- Ley N.° 85 de 15 de marzo de 1826, Desestima la formación de causa contra el jefe supremo del Estado. (Colección de leyes y decretos. Año 1826, semestre 1, tomo L y D-1, pág. 218).

65- Ley N.° 86 de 4 de abril de 1826, Medidas e incentivos para fomentar el poblamiento del valle de Matina. (Colección de leyes y decretos. Año 1826, semestre 1, tomo L y D-1, pág. 219).

66- Ley N.° 87 de 10 de abril de 1826, Prohíbe quema del tabaco inútil sin previa indemnización al cosechero. (Colección de leyes y decretos. Año 1826, semestre 1, tomo L y D-1, pág. 223).

67- Ley N.° 88 de 15 de abril de 1826, Contribución obligatoria de mano de obra para composición de caminos. (Colección de leyes y decretos. Año 1826, semestre 1, tomo L y D-1, pág. 224).

68- Ley N.° 90 de 26 de abril de 1826, Impone multa y declara indigno a diputado suplente José Joaquín Prieto. (Colección de leyes y decretos. Año 1826, semestre 1, tomo L y D-1, pág. 228).

69- Ley N.° 91 de 13 de mayo de 1826, Extiende beneficios a ladinos radicados en pueblos indígenas. (Colección de leyes y decretos. Año 1826, semestre 1, tomo L y D-1, pág. 230).

70- Ley N.° 92 de 20 de mayo de 1826, Exime por tres años de cargas concejiles al coronel Antonio Pinto. (Colección de leyes y decretos. Año 1826, semestre 1, tomo L y D-1, pág. 231).

71- Ley N.° 94 de 29 de mayo de 1826, Indulta a ciudadano de pena de multa. (Colección de leyes y decretos. Año 1826, semestre 1, tomo L y D-1, pág. 235).

72- Ley N.° 93 de 29 de mayo de 1826, Ferias en días de fiesta cívica en ciudades principales y Térraba. (Colección de leyes y decretos. Año 1826, semestre 1, tomo L y D-1, pág. 233).

73- Ley N.° 96 de 3 de junio de 1826, Corte Superior del Estado le compete la segunda instancia de Hacienda. (Colección de leyes y decretos. Año 1826, semestre 1, tomo L y D-1, pág. 238).

74- Ley N.° 95 de 3 de junio de 1826, Creación de casas de mendigos a cargo de las municipalidades. (Colección de leyes y decretos. Año 1826, semestre 1, tomo L y D-1, pág. 236).

75- Ley N.° 97 de 15 de junio de 1826, Faculta al Gobierno para contratar importación del tabaco ixtepeque. (Colección de leyes y decretos. Año 1826, semestre 1, tomo L y D-1, pág. 240).

76- Ley N.° 99 de 25 de setiembre de 1826, Conmuta penas de los reos destinados al servicio de las armas de la República. (Colección de leyes y decretos. Año 1826, semestre 2, tomo L y D-1, pág. 242).

77- Ley N.° 102 de 29 de setiembre de 1826, Amplía sesiones del Tribunal de Cuentas y le fija comisión del 2%. (Colección de leyes y decretos. Año 1826, semestre 2, tomo L y D-1, pág. 245).

78- Ley N.° 100 de 29 de setiembre de 1826, Franquicia correspondencia oficial. (Colección de leyes y decretos. Año 1826, semestre 2, tomo L y D-1, pág. 243).

79- Ley N.° 101 de 30 de setiembre de 1826, Beca a aprendiz de arte de gravar en Corte de Guatemala. (Colección de leyes y decretos. Año 1826, semestre 2, tomo L y D-1, pág. 244).

80- Ley N.° 105 de 2 de octubre de 1826, Pide el traslado fuera de Guatemala de poderes y autoridades federales. (Colección de leyes y decretos. Año 1826, semestre 2, tomo L y D-1, pág. 251).

81- Ley N.° 106 de 10 de octubre de 1826, Ordenanza reglamento de la contribución para la composición de caminos. (Colección de leyes y decretos. Año 1826, semestre 2, tomo L y D-1, pág. 254).

82- Ley N.° 103 de 10 de octubre de 1826, Aplica ley fundamental del Estado de Costa Rica al Partido de Nicoya. (Colección de leyes y decretos. Año 1826, semestre 2, tomo L y D-1, pág. 246).

83- Ley N.° 104 de 10 de octubre de 1826, Representantes del Partido Nicoya ante Asamblea Constitucional. (Colección de leyes y decretos. Año 1826, semestre 2, tomo L y D-1, pág. 249).

84- Ley N.° 109 de 5 de diciembre de 1826, Actuaciones del Gobierno previo dictamen del Consejo. (Colección de leyes y decretos. Año 1826, semestre 2, tomo L y D-1, pág. 273).

85- Ley N.° 108 de 5 de diciembre de 1826, Excluye a mujeres de la contribución para composición de caminos. (Colección de leyes y decretos. Año 1826, semestre 2, tomo L y D-1, pág. 272).

86- Ley N.° 112 de 29 de diciembre de 1826, Regula apelaciones y sustitución temporal de jueces letrados por cese. (Colección de leyes y decretos. Año 1826, semestre 2, tomo L y D-1, pág. 276).

87- Ley N.° 110 de 2 de enero de 1827, Elige senador de la República al padre León Taboada. (Colección de leyes y decretos. Año 1826, semestre 2, tomo L y D-1, pág. 274).

88- Ley N.° 113 de 2 de enero de 1827, Nombramiento de nuevos diputados legislatura 1827. (Colección de leyes y decretos. Año 1826, semestre 2, tomo L y D-1, pág. 277).

89- Ley N.° 111 de 3 de enero de 1827, Prioridad salarial a magistrados que deben residir en San José. (Colección de leyes y decretos. Año 1826, semestre 2, tomo L y D-1, pág. 275).

90- Ley N.° 114 de 20 de marzo de 1827, Premio por descubrir camino al norte por el río San Juan. (Colección de leyes y decretos. Año 1827, semestre 1, tomo L y D-2, pág. 3).

91- Ley N.° 115 de 21 de marzo de 1827, Obliga al uso de papel sellado donde lo exija la ley. (Colección de leyes y decretos. Año 1827, semestre 1, tomo L y D- 2, pág. 4).

92- Ley N.° 116 de 29 de marzo de 1827, Indulta destierro a ciudadano. (Colección de leyes y decretos. Año 1827, semestre 1, tomo L y D-2, pág. 5).

93- Ley N.° 117 de 29 de marzo de 1827, Establece guardas para evitar ingreso a extracción de objetos de contrabando. (Colección de leyes y decretos. Año 1827, semestre 1, tomo L y D-2, pág. 6).

94- Ley N.° 120 de 29 de marzo de 1827, Prórroga a particular para establecer colonia. (Colección de leyes y decretos. Año 1827, semestre 1, tomo L y D- 2, pág. 11).

95- Ley N.° 121 de 31 de marzo de 1827, Licencia municipal para procesiones públicas. (Colección de leyes y decretos. Año 1827, semestre 1, tomo L y D-2, pág. 12).

96- Ley N.° 119 de 31 de marzo de 1827, Provisión de escribanías en el Estado. (Colección de leyes y decretos. Año 1827, semestre 1, tomo L y D-2, pág. 10).

97- Ley N.° 118 de 31 de marzo de 1827, Ceremonial de Supremos Poderes en funciones eclesiásticas. (Colección de leyes y decretos. Año 1827, semestre 1, tomo L y D-2, pág. 7).

98- Ley N.° 122 de 4 de abril de 827, Reglamenta fiestas cívicas en ciudades principales y pueblos. (Colección de leyes y decretos. Año 1827, semestre 1, tomo L y D-2, pág. 13).

99- Ley N.° 123 de 30 de abril de 1827, Reforma reglamento colectación administración inversión de fondos de pueblos. (Colección de leyes y decretos. Año 1827, semestre 1, tomo L y D-2, pág. 14).

100- Ley N.° 124 de 15 de mayo de 1827, Reforma art. 1º del Reglamento de administración de justicia. (Colección de leyes y decretos. Año 1827, semestre 1, tomo L y D-2, pág. 15).

101- Ley N.° 125 de 15 de mayo de 1827, Interpreta premio por descubrir camino al norte por el río San Juan. (Colección de leyes y decretos. Año 1827, semestre 1, tomo L y D-2, pág. 17).

102- Ley N.° 126 de 30 de mayo de 1827, Reforma constitucional. (Colección de leyes y decretos. Año 1827, semestre 1, tomo L y D-2, pág. 18).

103- Ley N.° 127 de 30 de mayo de 1827, Representante estatal ante Corte Suprema de Justicia. (Colección de leyes y decretos. Año 1827, semestre 1, tomo L y D-2, pág. 19).

104- Ley N.° 126 de 31 de mayo de 1827, Interpreta inciso 10 del artículo 55 de ley fundamental del Estado de Costa Rica. (Colección de leyes y decretos. Año 1827, semestre 1, tomo L y D-1, pág. 18).

105- Ley N.° 129 de 22 de junio de 1827, Papel gratis para título de oficiales militares. (Colección de leyes y decretos. Año 1827, semestre 1, tomo L y D-2, pág. 23).

106- Ley N.° 130 de 22 de junio de 1827, Reduce monto de empréstito forzoso del cuño fija reglas para su exacción. (Colección de leyes y decretos. Año 1827, semestre 1, tomo L y D-2, pág. 24).

107- Ley N.° 131 de 22 de junio de 1827, Reforma contribución para la composición de caminos y su reglamento. (Colección de leyes y decretos. Año 1827, semestre 1, tomo L y D-2, pág. 26).

108- Ley N.° 133 de 28 de julio de 1827, Instancia superior para juicios de interés común. (Colección de leyes y decretos. Año 1827, semestre 2, tomo L y D-2, pág. 30).

109- Ley N.° 132 de 28 de julio de 1827, Permiso para reedificación de templo de Nicoya. (Colección de leyes y decretos. Año 1827, semestre 2, tomo L y D-2, pág. 29).

110- Ley N.° 134 de 2 de agosto de 1827, Define competencia en minería del intendente general de Hacienda. (Colección de leyes y decretos. Año 1827, semestre 2, tomo L y D-2, pág. 31).

111- Ley N.° 135 de 11 de agosto de 1827, Exhorta comparecencia de testigos en juicios comunes. (Colección de leyes y decretos. Año 1827, semestre 2, tomo L y D-2, pág. 32).

112- Ley N.° 137 de 14 de agosto de 1827, Derecho sobre tercio y ganado para composición camino a Puntarenas. (Colección de leyes y decretos. Año 1827, semestre 2, tomo L y D-2, pág. 34).

113- Ley N.° 136 de 25 de agosto de 1827, Canoas de transporte y galeras ríos Pacuare, Reventazón y fija tarifas. (Colección de leyes y decretos. Año 1827, semestre 2, tomo L y D-2, pág. 33).

114- Ley N.° 140 de 7 de setiembre de 1827, Autoriza al gobierno disponer de rentas y tabacos federales. (Colección de leyes y decretos. Año 1827, semestre 2, tomo L y D-2, pág. 41).

115- Ley N.° 139 de 14 de setiembre de 1827, Reitera obligación de extranjeros para empréstito forzoso del cuño. (Colección de leyes y decretos. Año 1827, semestre 2, tomo L y D-2, pág. 40).

116- Ley N.° 142 de 26 de setiembre de 1827, Multas a jueces por faltas leves. (Colección de leyes y decretos. Año 1827, semestre 2, tomo L y D-2, pág. 43).
117- Ley N.° 143 de 3 de octubre de 1827, Ref. lugar de remates de la intendencia. (Colección de leyes y decretos. Año 1827, semestre 2, tomo L y D2-, pág. 44).

118- Ley N.° 145 de 8 de octubre de 1827, Interpreta art. 19 de ley fundamental del Estado de Costa Rica (1825). (Colección de leyes y decretos. Año 1827, semestre 2, tomo L y D-2, pág. 48).

119- Ley N.° 141 de 8 de octubre de 1827, Interpreta ley derecho sobre tercio y ganado para composición camino. (Colección de leyes y decretos. Año 1827, semestre 2, tomo L y D-2, pág. 43).

120- Ley N.° 144 de 10 de octubre de 1827, Penas para contrabandistas de tabaco y siembras. (Colección de leyes y decretos. Año 1827, semestre 2, tomo L y D-2, pág. 45).

121- Ley N.° 144 de 17 de octubre de 1827, Regula persecución del contrabando de tabaco. (Colección de leyes y decretos. Año 1827, semestre 2, tomo L y D-1, pág. 45).

122- Ley N.° 146 de 17 de octubre de 1827, Adscribe aduana marítima a Tesorería y Contaduría de Tabacos. (Colección de leyes y decretos. Año 1827, semestre 2, tomo L y D-2, pág. 49).

123- Ley N.° 148 de 5 de noviembre 1827, Renovación de diputados para 1828. (Colección de leyes y decretos. Año 1827, semestre 2, tomo L y D-2, pág. 54).

124- Ley N.° 147 de 17 de noviembre 1827, Ley de reorganización de bases municipales y elección de munícipes. (Colección de leyes y decretos. Año 1827, semestre 2, tomo L y D-2, pág. 51).

125- Ley N.° 149 de 3 de marzo de 1828, Instalación de Asamblea del Estado. (Colección de leyes y decretos. Año 1828, semestre 1, tomo L y D-2, pág. 56).

126- Ley N.° 150 de 26 de marzo de 1828, Declara elección de senador propietario. (Colección de leyes y decretos. Año 1828, semestre 1, tomo L y D-2, pág. 60).

127- Ley N.° 152 de 15 de abril de 1828, Composición de oficina de mando político. (Colección de leyes y decretos. Año 1828, semestre 1, tomo L y D-2, pág. 62).

128- Ley N.° 153 de 1 de mayo de 1828, Construye capillas de animas y prohíbe velorios en casas. (Colección de leyes y decretos. Año 1828, semestre 1, tomo L y D-2, pág. 64).

129- Ley N.° 155 de 20 de mayo de 1828, Ordena asistencia de alcaldes a casas de cabildo. (Colección de leyes y decretos. Año 1828, semestre 1, tomo L y D-2, pág. 67).

130- Ley N.° 157 de 27 de mayo de 1828, Uso de papel sellado en libros de cuentas de municipalidades. (Colección de leyes y decretos. Año 1828, semestre 1, tomo L y D-2, pág. 69).

131- Ley N.° 156 de 27 de mayo de 1828, Regula sorteo de escogencia de presidente del consejo ante empates. (Colección de leyes y decretos. Año 1828, semestre 1, tomo L y D-2, pág. 68).

132- Ley N.° 158 de 28 de mayo de 1828, Prohíbe separación de empleados de Hacienda Pública sin licencia. (Colección de leyes y decretos. Año 1828, semestre 1, tomo L y D-2, pág. 70).

133- Ley N.° 160 de 3 de junio de 1828, Establecimiento de agrimensor general, dieta, ayudantes y sanciones. (Colección de leyes y decretos. Año 1828, semestre 1, tomo L y D-2, pág. 73).

134- Ley N.° 164 de 28 de junio de 1828, Deroga frase final art. 51 reglamento para la administración de justicia. (Colección de leyes y decretos. Año 1828, semestre 1, tomo L y D-2, pág. 88).

135- Ley N.° 162 de 28 de junio de 1828, Reserva milla marítima para marina, pesquería y salinas. (Colección de leyes y decretos. Año 1828, semestre 1, tomo L y D-2, pág. 86).

136- Ley N.° 161 de 30 de junio de 1828, Reglamenta atribuciones del gobierno económico político de los pueblos. (Colección de leyes y decretos. Año 1828, semestre 1, tomo L y D-1, pág. 75).

137- Ley N.° 167 de 5 de julio de 1828, Renovación de miembros de Supremos Poderes. (Colección de leyes y decretos. Año 1828, semestre 2, tomo L y D-2, pág. 98).

138- Ley N.° 163 de 5 de julio de 1828, Erige provisionalmente Tribunal Superior de Agravios. (Colección de leyes y decretos. Año 1828, semestre 2, tomo L y D-1, pág. 87).

139- Ley N.° 165 de 8 de julio de 1828, Licencias varias para edificar y reedificar edificios religiosos. (Colección de leyes y decretos. Año 1828, semestre 2, tomo L y D-2, pág. 92).

140- Ley N.° 166 de 16 de julio de 1828, Reglamento de milicias del Estado. (Colección de leyes y decretos. Año 1828, semestre 2, tomo L y D-2, pág. 93).

141- Ley N.° 168 de 30 de setiembre de 1828, Establece provisionalmente casa de rescates para adquirir oro y plata. (Colección de leyes y decretos. Año 1828, semestre 2, tomo L y D-1, pág. 100).

142- Ley N.° 169 de 13 de octubre de 1828, Establece provisionalmente la planta de la Casa de Moneda. (Colección de leyes y decretos. Año 1828, semestre 2, tomo L y D-2, pág. 102).

143- Ley N.° 170 de 4 de noviembre de 1828, Ley de concesión de baldíos en las riberas norte, noreste, este y sur. (Colección de leyes y decretos. Año 1828, semestre 2, tomo L y D-2, pág. 104).

144- Ley N.° 171 de 15 de noviembre de 1828, Reglamento provisional para la Casa de Moneda del Estado. (Colección de leyes y decretos. Año 1828, semestre 2, tomo L y D-2, pág. 107).

145- Ley N.° 173 de 3 de marzo de 1829, Nombra jefe supremo, vice jefe del estado, consejeros y magistrados. (Colección de leyes y decretos. Año 1829, semestre 1, tomo L y D-1, pág. 116).

146- Ley N.° 174 de 26 de marzo de 1829, Residencia mínima previa en partido electoral para ser electo diputado. (Colección de leyes y decretos. Año 1829, semestre 1, tomo L y D-2, pág. 119).

147- Ley N.° 177 de 11 de abril de 1829, Aprueba el precio de ocho reales libra para el tabaco Ixtepeque. (Colección de leyes y decretos. Año 1829, semestre 1, tomo L y D-2, pág. 124).

148- Ley N.° 176 de 11 de abril de 1829, Fija porcentaje del interés legal y norma el interés contractual. (Colección de leyes y decretos. Año 1829, semestre 1, tomo L y D-1, pág. 123).

149- Ley N.° 179 de 28 de abril de 1829, Regula expendio, precio y exportación de tabaco según calidad. (Colección de leyes y decretos. Año 1829, semestre 1, tomo L y D-1, pág. 127).

150- Ley N.° 182 de 2 de mayo de 1829, Función de reparación de caminos a jefes políticos. (Colección de leyes y decretos. Año 1829, semestre 1, tomo L y D-2, pág. 131).

151- Ley N.° 180 de 6 de mayo de 1829, Porcentaje de pago a la masa decimal por los cosecheros de tabaco. (Colección de leyes y decretos. Año 1829, semestre 1, tomo L y D-1, pág. 129).

152- Ley N.° 182 de 11 de mayo de 1829, Refuerza medidas para el poblamiento del valle de Matina. (Colección de leyes y decretos. Año 1829, semestre 1, tomo L y D-1, pág. 131).

153- Ley N.° 183 de 13 de mayo de 1829, Reglamenta la provisión de curas y coadjutores y les fija tarifas. (Colección de leyes y decretos. Año 1829, semestre 1, tomo L y D-1, pág. 132).

154- Ley N.° 185 de 16 de mayo de 1829, Interpreta plazo art. 1 y 3 de ley de concesión de baldíos en las riberas. (Colección de leyes y decretos. Año 1829, semestre 1, tomo L y D-1, pág. 104).

155- Ley N.° 184 de 16 de mayo de 1829, Premio por apertura de sendero a Sarapiquí a Cía. Empresaria de Alajuela. (Colección de leyes y decretos. Año 1829, semestre 1, tomo L y D-1, pág. 134).

156- Ley N.° 186 de 20 de mayo de 1829, Fija sueldo del portero de la Corte Superior de Justicia. (Colección de leyes y decretos. Año 1829, semestre 1, tomo L y D-1, pág. 136).

157- Ley N.° 188 de 10 de junio de 1829, Dotación salarial de los escribientes de las oficinas públicas. (Colección de leyes y decretos. Año 1829, semestre 1, tomo L y D-1, pág. 138).

158- Ley N.° 190 de 15 de junio de 1829, Regula procedimientos del juicio criminal. (Colección de leyes y decretos. Año 1829, semestre 1, tomo L y D-1, pág. 141).

159- Ley N.° 191 de 22 de junio de 1829, Ley orgánica de Hacienda Pública en las rentas de la Federación y las del Estado. (Colección de leyes y decretos. Año 1829, semestre 1, tomo L y D-1, pág. 143).

160- Ley N.° 192 de 25 de junio de 1829, Reforma ley de reorganización de bases municipales. (Colección de leyes y decretos. Año 1829, semestre 1, tomo L y D-1, pág. 157).

161- Ley N.° 196 de 30 de junio de 1829, Nombra juntas electorales para elección de miembros de Supremos Poderes. (Colección de leyes y decretos. Año 1829, semestre 1, tomo L y D-1, pág. 167).

162- Ley N.° 193 de 1 de julio de 1829, Liquidación y amortización de la deuda pública estatal. (Colección de leyes y decretos. Año 1829, semestre 2, tomo L y D-1, pág. 161).

163- Ley N.° 197 de 13 de noviembre de 1829, Elige senadores propietarios y único suplente. (Colección de leyes y decretos. Año 1829, semestre 2, tomo L y D-1, pág. 170).

164- Ley N.° 198 de 7 de diciembre de 1829, Reafirma vigencia de ley de soberanía plena estatal por ausencia Federal. (Colección de leyes y decretos. Año 1829, semestre 2, tomo L y D-1, pág. 171).

165- Ley N.° 199 de 12 de diciembre de 1829, Fija precio de rescate a pastas de oro y plata por la Casa de Moneda. (Colección de leyes y decretos. Año 1829, semestre 2, tomo L y D-1, pág. 173).

166- Ley N.° 201 de 12 de marzo de 1830, Sujeta religiosos al ordinario del territorio. (Colección de leyes y decretos. Año 1830, semestre 1, tomo L y D-2, pág. 176).

167- Ley N.° 202 de 30 de marzo de 1830, Ordena subasta de terreno legado por padre Chapuí excepto Mata Redonda. (Colección de leyes y decretos. Año 1830, semestre 1, tomo L y D-1, pág. 178).

168- Ley N.° 203 de 3 de abril de 1830, Establece en la dirección de siembras y factoría de tabacos, la plaza de un fiel de almacenes. (Colección de leyes y decretos. Año 1830, semestre 1, tomo L y D-1, pág. 182).

169- Ley N.° 206 de 20 de abril de 1830, Nueva planta para Corte Superior de Justicia. (Colección de leyes y decretos. Año 1830, semestre 1, tomo L y D-2, pág. 187).

170- Ley N.° 204 de 21 de abril de 1830, Deroga ley de contribuciones forzosas para la Hacienda Pública. (Colección de leyes y decretos. Año 1830, semestre 1, tomo L y D-1, pág. 184).

171- Ley N.° 210 de 27 de abril de 1830, Competencia en hurtos a alcaldes constitucionales. (Colección de leyes y decretos. Año 1830, semestre 1, tomo L y D-2, pág. 194).

172- Ley N.° 207 de 29 de abril de 1830, Suprime oficialía de pluma en la Corte Superior de Justicia. (Colección de leyes y decretos. Año 1830, semestre 1, tomo L y D-1, pág. 189).

173- Ley N.° 208 de 3 de mayo de 1830, Reglamenta enjuiciamiento de jueces inferiores por faltas graves o leves. (Colección de leyes y decretos. Año 1830, semestre 1, tomo L y D-1, pág. 190).

174- Ley N.° 209 de 3 de mayo de 1830, Producto de "penas de corte" se destina a mejoras en Corte Superior. (Colección de leyes y decretos. Año 1830, semestre 1, tomo L y D-1, pág. 192).

175- Ley N.° 211 de 12 de mayo de 1830, Asistencia económica a fraile. (Colección de leyes y decretos. Año 1830, semestre 1, tomo L y D-2, pág. 196).

176- Ley N.° 215 de 24 de mayo de 1830, Facultad de dispensas matrimoniales al vicario foráneo del Estado. (Colección de leyes y decretos. Año 1830, semestre 1, tomo L y D-1, pág. 204).

177- Ley N.° 214 de 24 de mayo de 1830, Permite a diputados ascensos en milicias del Estado. (Colección de leyes y decretos. Año 1830, semestre 1, tomo L y D-1, pág. 203).

178- Ley N.° 213 de 24 de mayo de 1830, Funciones docentes son compatibles con el ejercicio de la diputación. (Colección de leyes y decretos. Año 1830, semestre 1, tomo L y D-1, pág. 201).

179- Ley N.° 217 de 28 de mayo de 1830, Interpreta artículo 106 de ley fundamental del Estado de Costa Rica. (Colección de leyes y decretos. Año 1830, semestre 1, tomo L y D-1, pág. 249).

180- Ley N.° 218 de 1 de junio de 1830, Autoriza venta de tabaco Virginia decomisado. (Colección de leyes y decretos. Año 1830, semestre 1, tomo L y D-1, pág. 250).

181- Ley N.° 220 de 9 de junio de 1830, Regula la custodia, trabajo y alimentación de los reos. (Colección de leyes y decretos. Año 1830, semestre 1, tomo L y D-1, pág. 253).

182- Ley N.° 222 de 16 de junio de 1830, Elección de ministros de la Corte Superior de Justicia. (Colección de leyes y decretos. Año 1830, semestre 1, tomo L y D-1, pág. 256).

183- Ley N.° 219 de 19 de junio de 1830, Liquidación de deuda pública por el Estado. (Colección de leyes y decretos. Año 1830, semestre 1, tomo L y D-1, pág. 251).

184- Ley N.° 216 de 26 de junio de 1830, Ordenanza de Minería (1830). (Colección de leyes y decretos. Año 1830, semestre 1, tomo L y D-2, pág. 207).

185- Ley N.° 230 de 3 de julio de 1830, Declara sin lugar formación de causa contra Corte Superior de Justicia. (Colección de leyes y decretos. Año 1830, semestre 2, tomo L y D-1, pág. 264).

186- Ley N.° 229 de 3 de julio de 1830, Declara con lugar formación de causa contra Corte Superior de Justicia. (Colección de leyes y decretos. Año 1830, semestre 2, tomo L y D-1, pág. 263).

187- Ley N.° 228 de 3 de julio de 1830, Declara sin lugar formación de causa contra diputado Juan Freses. (Colección de leyes y decretos. Año 1830, semestre 2, tomo L y D-1, pág. 262).

188- Ley N.° 225 de 3 de julio de 1830, Formación de Causa contra Licenciado Braulio Carrillo. (Colección de leyes y decretos. Año 1830, semestre 2, tomo L y D-1, pág. 259).

189- Ley N.° 232 de 5 de julio de 1830, Regla integración de juntas electorales de partido para elecciones 1831. (Colección de leyes y decretos. Año 1830, semestre 2, tomo L y D-1, pág. 268).

190- Ley N.° 227 de 7 de julio de 1830, Establece plaza de grabador en la Casa de Moneda del Estado. (Colección de leyes y decretos. Año 1830, semestre 2, tomo L y D-1, pág. 261).

191- Ley N.° 231 de 9 de julio de 1830, Regla ausencias de magistrados y licencia empleados lista civil y militar. (Colección de leyes y decretos. Año 1830, semestre 2, tomo L y D-1, pág. 265).

192- Ley N.° 233 de 12 de julio de 1830, Reforma ordenanza de minería y reglamento, administración aguardiente estatal. (Colección de leyes y decretos. Año 1830, semestre 2, tomo L y D-1, pág. 270).

193- Ley N.° 235 de 12 de julio de 1830, Reforma ley que establece provisionalmente planta de Casa de Moneda. (Colección de leyes y decretos. Año 1830, semestre 2, tomo L y D-1, pág. 273).

194- Ley N.° 234 de 15 de julio de 1830, Establece mayoría de votos para fallos de tercera instancia. (Colección de leyes y decretos. Año 1830, semestre 2, tomo L y D-1, pág. 272).

195- Ley N.° 236 de 15 de julio de 1830, Reforma ley que regula el control aduanero en el valle de Matina. (Colección de leyes y decretos. Año 1830, semestre 2, tomo L y D-1, pág. 275).

196- Ley N.° 2 de 25 de enero de 1831, Permiso para confeccionar mixtelas para uso particular. (Colección de leyes y decretos. Año 1831, semestre 1, tomo L y D-3, pág. 3).

197- Ley N.° 1 de 28 de enero de 1831, Ordena al ejecutivo hace cumplir la ordenanza de minería (1830). (Colección de leyes y decretos. Año 1831, semestre 1, tomo L y D-3, pág. 1).

198- Ley N.° 2 de 3 de febrero de 1831, Permite elaboración de mistelas para uso particular con patente. (Colección de leyes y decretos. Año 1831, semestre 1, tomo L y D-1, pág. 3).

199- Ley N.° 4 de 8 de febrero de 1831, Restablecimiento del orden constitucional y otras disposiciones. (Colección de leyes y decretos. Año 1831, semestre 1, tomo L y D-3, pág. 5).

200- Ley N.° 8 de 3 de marzo de 1831, Elección de consejeros Asamblea Legislativa. (Colección de leyes y decretos. Año 1831, semestre 1, tomo L y D-33, pág. 45).

201- Ley N.° 9 de 21 de marzo de 1831, Impide formar causa contra magistrados Corte Justicia. (Colección de leyes y decretos. Año 1831, semestre 1, tomo L y D-3, pág. 46).

202- Ley N.° 22 de 30 de marzo de 1831, Prohíbe circulación de libros contrarios al dogma católico y la moral. (Colección de leyes y decretos. Año 1831, semestre 1, tomo L y D-3, pág. 71).

203- Ley N.° 10 de 22 de abril de 1831, Dicta normas sobre el rescate de pastas y la Casa de Moneda. (Colección de leyes y decretos. Año 1831, semestre 1, tomo L y D-3, pág. 47).

204- Ley N.° 12 de 25 de abril de 1831, Manda cumplir ley federal orgánica sobre aduanas. (Colección de leyes y decretos. Año 1831, semestre 1, tomo L y D-3, pág. 52).

205- Ley N.° 13 de 25 de abril de 1831, Autoriza percepción de limosna para culto del Santísimo Sacramento. (Colección de leyes y decretos. Año 1831, semestre 1, tomo L y D-1, pág. 53).

206- Ley N.° 11 de 27 de abril de 1831, Suprime judicaturas de letras en Departamento Oriental y Occidental. (Colección de leyes y decretos. Año 1831, semestre 1, tomo L y D-1, pág. 50).

207- Ley N.° 14 de 5 de mayo de 1831, Dietas y honorarios representantes federación. (Colección de leyes y decretos. Año 1831, semestre 1, tomo L y D-3, pág. 54).

208- Ley N.° 16 de 9 de mayo de 1831, Crea fondos de propios en Esparza y señala divisoria con Las Minas. (Colección de leyes y decretos. Año 1831, semestre 1, tomo L y D-3, pág. 57).

209- Ley N.° 15 de 13 de mayo de 1831, Establece un estanquillo para la venta de licores en Puntarenas. (Colección de leyes y decretos. Año 1831, semestre 1, tomo L y D-3, pág. 55).

210- Ley N.° 17 de 19 de mayo de 1831, Rebaja derechos de cartulación abogacía y costas procesales. (Colección de leyes y decretos. Año 1831, semestre 1, tomo L y D-1, pág. 59).

211- Ley N.° 20 de 24 de mayo de 1831, Autoriza a extranjeros ejercer por si derechos ante oficinas públicas. (Colección de leyes y decretos. Año 1831, semestre 1, tomo L y D-3, pág. 65).

212- Ley N.° 23 de 27 de mayo de 1831, Crea fondos de propios para el pueblo de Aserrí. (Colección de leyes y decretos. Año 1831, semestre 1, tomo L y D-1, pág. 75).

213- Ley N.° 27 de 3 de junio de 1831, Renovación de curules de diputaciones de periodo concluido. (Colección de leyes y decretos. Año 1831, semestre 1, tomo L y D-3, pág. 82).

214- Ley N.° 25 de 3 de junio de 1831, Crea fondos de propios para el pueblo de La Unión. (Colección de leyes y decretos. Año 1831, semestre 1, tomo L y D-1, pág. 78).

215- Ley N.° 26 de 10 de junio de 1831, Organiza junta de indemnización de esclavos y reglamenta atribuciones. (Colección de leyes y decretos. Año 1831, semestre 1, tomo L y D-3, pág. 80).

216- Ley N.° 30 de 15 de julio de 1831, Declara elección presidente y fiscal de Corte Superior de Justicia. (Colección de leyes y decretos. Año 1831, semestre 2, tomo L y D-3, pág. 85).

217- Ley N.° 32 de 28 de julio de 1831, Licencia temporal al encargado del supremo Poder Ejecutivo. (Colección de leyes y decretos. Año 1831, semestre 2, tomo L y D-3, pág. 88).

218- Ley N.° 37 de 1 de setiembre de 1831, Regula suplencia de magistrado propietario por enfermedad o ausencia. (Colección de leyes y decretos. Año 1831, semestre 2, tomo L y D-3, pág. 93).

219- Ley N.° 35 de 1 de setiembre de 1831, Regula sustitución de alcaldes con impedimento. (Colección de leyes y decretos. Año 1831, semestre 2, tomo L y D-3, pág. 91).

220- Ley N.° 39 de 9 de setiembre de 1831, Atribuye al jefe político exigir responsabilidad a las municipalidades. (Colección de leyes y decretos. Año 1831, semestre 2, tomo L y D-1, pág. 96).

221- Ley N.° 41 de 21 de setiembre de 1831, Sin lugar formación de causa contra diputado Manuel Alvarado. (Colección de leyes y decretos. Año 1831, semestre 2, tomo L y D-1, pág. 99).

222- Ley N.° 43 de 1 de octubre de 1831, Reglamento del Supremo Poder Ejecutivo. (Colección de leyes y decretos. Año 1831, semestre 2, tomo L y D-1, pág. 103).

223- Ley N.° 42 de 3 de octubre de 1831, Rebaja sueldos a miembros de Supremos Poderes y otros. (Colección de leyes y decretos. Año 1831, semestre 2, tomo L y D-1, pág. 101).

224- Ley N.° 48 de 15 de marzo de 1832, Reforma constitucional. (Colección de leyes y decretos. Año 1832, semestre 1, tomo L y D-3, pág. 129).

225- Ley N.° 48 de 21 de marzo de 1832, Reforma de capítulo 7º ley fundamental del Estado y reglamenta Consejo Representativo. (Colección de leyes y decretos. Año 1832, semestre 1, tomo L y D-1, pág. 129).

226- Ley N.° 49 de 22 de marzo de 1832, Integra tribunal causa contra expresidente Corte Justicia. (Colección de leyes y decretos. Año 1832, semestre 1, tomo L y D-3, pág. 131).

227- Ley N.° 51 de 23 de marzo de 1832, Línea divisoria Alajuela y Mineral Aguacate. (Colección de leyes y decretos. Año 1832, semestre 1, tomo L y D-3, pág. 137).

228- Ley N.° 49 de 23 de marzo de 1832, Integra tribunal en causas contra licenciado Braulio Carrillo. (Colección de leyes y decretos. Año 1832, semestre 1, tomo L y D-1, pág. 131).

229- Ley N.° 52 de 24 de marzo de 1832, Reglas amortización deuda Estado. (Colección de leyes y decretos. Año 1832, semestre 1, tomo L y D-3, pág. 138).

230- Ley N.° 53 de 26 de marzo de 1832, Aclara salario jueces primera instancia. (Colección de leyes y decretos. Año 1832, semestre 1, tomo L y D-3, pág. 140).

231- Ley N.° 54 de 30 de marzo de 1832, Ayuda náufragos fragata chilena en isla Coco. (Colección de leyes y decretos. Año 1832, semestre 1, tomo L y D-3, pág. 141).

232- Ley N.° 55 de 5 de abril de 1832, Regula circulación normas jurídicas Estado. (Colección de leyes y decretos. Año 1832, semestre 1, tomo L y D-3, pág. 143).

233- Ley N.° 59 de 25 de abril de 1832, Fondo municipal villa Escazú. (Colección de leyes y decretos. Año 1832, semestre 1, tomo L y D-3, pág. 188).

234- Ley N.° 60 de 27 de abril de 1832, Amplía amortización deuda Estado. (Colección de leyes y decretos. Año 1832, semestre 1, tomo L y D-3, pág. 191).

235- Ley N.° 63 de 3 de mayo de 1832, Faculta presidente Corte tramitar causas. (Colección de leyes y decretos. Año 1832, semestre 1, tomo L y D-3, pág. 222).

236- Ley N.° 64 de 4 de mayo de 1832, Municipalidades velan por instrucción primaria niños. (Colección de leyes y decretos. Año 1832, semestre 1, tomo L y D-3, pág. 223).

237- Ley N.° 58 de 5 de mayo de 1832, Reglamento interior del Consejo Representativo. (Colección de leyes y decretos. Año 1832, semestre 1, tomo L y D-1, pág. 169).

238- Ley N.° 65 de 7 de mayo de 1832, Reglamento régimen interior municipalidades Estado. (Colección de leyes y decretos. Año 1832, semestre 1, tomo L y D-3, pág. 226).

239- Ley N.° 67 de 15 de mayo de 1832, Renovación de funcionarios Supremos Poderes. (Colección de leyes y decretos. Año 1832, semestre 1, tomo L y D-3, pág. 277).

240- Ley N.° 72 de 26 de julio de 1832, Amplía convocatoria extraordinaria Asamblea Legislativa. (Colección de leyes y decretos. Año 1832, semestre 2, tomo L y D-3, pág. 288).

241- Ley N.° 73 de 27 de julio de 1832, Reforma constitucional. (Colección de leyes y decretos. Año 1832, semestre 2, tomo L y D-3, pág. 289).

242- Ley N.° 71 de 27 de julio de 1832, Reforma arts. 90 y 92 ley fundamental del Estado de Costa Rica (1825). (Colección de leyes y decretos. Año 1832, semestre 2, tomo L y D-1, pág. 282).

243- Ley N.° 66 de 28 de julio de 1832, Reglamento para la Corte Superior de Justicia. (Colección de leyes y decretos. Año 1832, semestre 2, tomo L y D-1, pág. 240).

244- Ley N.° 74 de 14 de agosto de 1832, Amplía convocatoria extraordinaria Asamblea Legislativa. (Colección de leyes y decretos. Año 1832, semestre 2, tomo L y D-3, pág. 291).

245- Ley N.° 76 de 31 de agosto de 1832, Disposiciones control pasaportes. (Colección de leyes y decretos. Año 1832, semestre 2, tomo L y D-3, pág. 294).

246- Ley N.° 75 de 31 de agosto de 1832, Forma causa contra magistrado. (Colección de leyes y decretos. Año 1832, semestre 2, tomo L y D-3, pág. 292).

247- Ley N.° 77 de 4 de setiembre de 1832, Reforma del artículo 82 de la Constitución del Estado. (Colección de leyes y decretos. Año 1832, semestre 2, tomo L y D-3, pág. 297).

248- Ley N.° 78 de 6 de setiembre de 1832, Integra tribunal especial causa contra magistrado. (Colección de leyes y decretos. Año 1832, semestre 2, tomo L y D-3, pág. 298).

249- Ley N.° 79 de 12 de setiembre de 1832, Reforma ordenanza de minería. (Colección de leyes y decretos. Año 1832, semestre 2, tomo L y D-3, pág. 299).

250- Ley N.° 80 de 26 de setiembre de 1832, Impide formar causa contra presidente Corte Justicia. (Colección de leyes y decretos. Año 1832, semestre 2, tomo L y D-3, pág. 302).

251- Ley N.° 81 de 29 de setiembre de 1832, Declara elección magistrados Corte Superior Justicia. (Colección de leyes y decretos. Año 1832, semestre 2, tomo L y D-3, pág. 303).

252- Ley N.° 83 de 18 de diciembre de 1832, Declara elección de senadores Federación Centroamericana. (Colección de leyes y decretos. Año 1832, semestre 2, tomo L y D-3, pág. 305).

253- Ley N.° 3 de 4 de marzo de 1833, Declara elección de jefe y vicejefe del Estado y consejeros. (Colección de leyes y decretos. Año 1833, semestre 1, tomo L y D-1, pág. 4).

254- Ley N.° 5 de 15 de marzo de 1833, Declara sin lugar acusación contra expresidente de la Corte. (Colección de leyes y decretos. Año 1833, semestre 1, tomo L y D-1, pág. 7).

255- Ley N.° 7 de 20 de marzo de 1833, Rechaza causa contra expresidente de Corte Suprema. (Colección de leyes y decretos).

256- Ley N.° 10 de 23 de abril de 1833, Diputación de Minería asume administración de Estanquillos. (Colección de leyes y decretos. Año 1833, semestre 1, tomo L y D-1, pág. 19).

257- Ley N.° 9 de 25 de abril de 1833, Provisión de parque a almacenes de guerra. (Colección de leyes y decretos).

258- Ley N.° 12 de 26 de abril de 1833, Casos para convocatoria extraordinaria del Poder Legislativo. (Colección de leyes y decretos. Año 1833, semestre 1, tomo L y D-1, pág. 22).

259- Ley N.° 13 de 30 de abril de 1833, Amplía art. 90 ley fundamental del Estado y da nueva planta a la Corte. (Colección de leyes y decretos. Año 1833, semestre 1, tomo L y D-1, pág. 24).

260- Ley N.° 11 de 7 de mayo de 1833, Abolición de las leyes de la usura convencional. (Colección de leyes y decretos. Año 1833, semestre 1, tomo L y D-1, pág. 21).

261- Ley N.° 15 de 8 de mayo de 1833, Permiso de construcción de ermita en Sabana Larga de Alajuela. (Colección de leyes y decretos. Año 1833, semestre 1, tomo L y D-1, pág. 33).

262- Ley N.° 18 de 15 de mayo de 1833, Reglas para la enseñanza y educación de niños de ambos sexos. (Colección de leyes y decretos. Año 1833, semestre 1, tomo L y D-1, pág. 40).

263- Ley N.° 16 de 20 de mayo de 1833, Previene la venta en publica almoneda de todos los bienes de cofradías o de obras pías que hay en el Estado. (Colección de leyes y decretos. Año 1833, semestre 1, tomo L y D-4, pág. 35).

264- Ley N.° 20 de 20 de mayo de 1833, Composición de caminos por medio de contratas o economías. (Colección de leyes y decretos. Año 1833, semestre 1, tomo L y D-1, pág. 44).

265- Ley N.° 23 de 21 de mayo de 1833, Disposiciones sobre el establecimiento de Lazareto. (Colección de leyes y decretos. Año 1833, semestre 1, tomo L y D-1, pág. 48).

266- Ley N.° 19 de 22 de mayo de 1833, Venta obligatoria de pólvora al Estado por los actuales tenedores. (Colección de leyes y decretos. Año 1833, semestre 1, tomo L y D-1, pág. 42).

267- Ley N.° 26 de 3 de junio de 1833, Renovación de miembros de Supremos Poderes. (Colección de leyes y decretos. Año 1833, semestre 1, tomo L y D-4, pág. 55).

268- Ley N.° 9 de 4 de julio de 1833, Reunión extraordinaria de Asamblea Legislativa. (Colección de leyes y decretos. Año 1833, semestre 2, tomo L y D-4, pág. 59).

269- Ley N.° 31 de 26 de julio de 1833, Reconocimiento de enviados de Unión Centroamericana. (Colección de leyes y decretos. Año 1833, semestre 2, tomo L y D-4, pág. 61).

270- Ley N.° 33 de 30 de agosto de 1833, Elimina escollos en verificación elección magistrados. (Colección de leyes y decretos. Año 1833, semestre 2, tomo L y D-4, pág. 64).

271- Ley N.° 35 de 4 de setiembre de 1833, Asume el Estado renta de tabacos y medidas financieras y de control. (Colección de leyes y decretos. Año 1833, semestre 2, tomo L y D-1, pág. 70).

272- Ley N.° 36 de 9 de setiembre de 1833, Reglamenta Uso de Libertad de Prensa. (Colección de leyes y decretos. Año 1833, semestre 2, tomo L y D-4, pág. 73).

273- Ley N.° 34 de 19 de setiembre de 1833, Pena de muerte para leprosos fugados del Lazareto. (Colección de leyes y decretos. Año 1833, semestre 2, tomo L y D-1, pág. 66).

274- Ley N.° 37 de 1 de octubre de 1833, Reunión de representantes Centroamérica en El Salvador. (Colección de leyes y decretos. Año 1833, semestre 2, tomo L y D-4, pág. 76).

275- Ley N.° 40 de 4 de octubre de 1833, Amplía convocatoria legislativa extraordinaria. (Colección de leyes y decretos. Año 1833, semestre 2, tomo L y D-4, pág. 83).

276- Ley N.° 39 de 5 de octubre de 1833, Estado de Costa Rica reasume las rentas federales. (Colección de leyes y decretos. Año 1833, semestre 2, tomo L y D-1, pág. 80).

277- Ley N.° 41 de 8 de octubre de 1833, Declara elección de magistrados de Corte Superior. (Colección de leyes y decretos. Año 1833, semestre 2, tomo L y D-4, pág. 84).

278- Ley N.° 43 de 24 de octubre de 1833, Interpreta ley de venta de bienes de cofradías u obras pías. (Colección de leyes y decretos. Año 1833, semestre 2, tomo L y D-4, pág. 86).

279- Ley N.° 46 de 31 de octubre de 1833, Contratos de tabaco ixtepeque para proveer tercenas. (Colección de leyes y decretos. Año 1833, semestre 2, tomo L y D-4, pág. 92).

280- Ley N.° 48 de 30 de noviembre de 1833, Convocatoria extraordinaria de la Asamblea Legislativa. (Colección de leyes y decretos. Año 1833, semestre 2, tomo L y D-4, pág. 95).

281- Ley N.° 49 de 9 de diciembre de 1833, Declara senador propietario al licenciado Pedro Zeledón. (Colección de leyes y decretos. Año 1833, semestre 2, tomo L y D-1, pág. 97).

282- Ley N.° 51 de 28 de diciembre de 1833, Con lugar formación de causa contra jefe político José Ma. Peralta. (Colección de leyes y decretos. Año 1833, semestre 2, tomo L y D-4, pág. 99).

283- Ley N.° 56 de 18 de marzo de 1834, Conmuta pena a reo por obras públicas. (Colección de leyes y decretos. Año 1834, semestre 1, tomo L y D-4, pág. 107).

284- Ley N.° 57 de 22 de marzo de 1834, Autoriza reducción a dominio privado de terrenos en Mata Redonda. (Colección de leyes y decretos. Año 1834, semestre 1, tomo L y D-1, pág. 108).

285- Ley N.° 59 de 9 de abril de 1834, Traslada puerto del sur de Puntarenas a Caldera. (Colección de leyes y decretos. Año 1834, semestre 1, tomo L y D-4, pág. 112).

286- Ley N.° 61 de 23 de abril de 1834, Sin lugar acusación contra comandante general Antonio Pinto. (Colección de leyes y decretos. Año 1834, semestre 1, tomo L y D-4, pág. 116).

287- Ley N.° 65 de 6 de junio de 1834, Deberes de funcionarios públicos con instituciones de beneficencia. (Colección de leyes y decretos. Año 1834, semestre 1, tomo L y D-1, pág. 122).

288- Ley N.° 67 de 11 de junio de 1834, reforma artículo 61 de ley fundamental del Estado de Costa Rica (1825). (Colección de leyes y decretos. Año 1834, semestre 1, tomo L y D-1, pág. 124).

289- Ley N.° 68 de 11 de junio de 1834, Interpreta vigencia art. 26 reglamento para Corte Superior de Justicia. (Colección de leyes y decretos. Año 1834, semestre 1, tomo L y D-1, pág. 126).

290- Ley N.° 63 de 12 de junio de 1834, Restablece vigencia de artículo 49 de ley fundamental del Estado. (Colección de leyes y decretos. Año 1834, semestre 1, tomo L y D-1, pág. 119).

291- Ley N.° 70 de 18 de junio de 1834, Tarifa de sueldos. (Colección de leyes y decretos. Año 1834, semestre 1, tomo L y D-4, pág. 130).

292- Ley N.° 69 de 18 de junio de 1834, Reglas para el cumplimiento de los contratos. (Colección de leyes y decretos. Año 1834, semestre 1, tomo L y D-1, pág. 127).

293- Ley N.° 73 de 2 de julio de 1834, Declara elección de consejero. (Colección de leyes y decretos. Año 1834, semestre 2, tomo L y D-4, pág. 134).

294- Ley N.° 75 de 16 de agosto de 1834, Autoriza al Ejecutivo amortizar con tabaco la deuda del Estado. (Colección de leyes y decretos. Año 1834, semestre 2, tomo L y D-1, pág. 136).

295- Ley N.° 80 de 16 de agosto de 1834, Liquidación de adeudos al receptor de Cartago Tomás Brenes. (Colección de leyes y decretos. Año 1834, semestre 2, tomo L y D-1, pág. 142).

296- Ley N.° 79 de 16 de agosto de 1834, Indemniza costos de apertura de vereda a Sarapiquí. (Colección de leyes y decretos. Año 1834, semestre 2, tomo L y D-1, pág. 141).

297- Ley N.° 76 de 16 de agosto de 1834, Rebaja pensión para el Lazareto establecida a cuatro curatos. (Colección de leyes y decretos. Año 1834, semestre 2, tomo L y D-1, pág. 137).

298- Ley N.° 78 de 16 de agosto de 1834, Concede ayuda para erección del frontispicio de iglesia de San José. (Colección de leyes y decretos. Año 1834, semestre 2, tomo L y D-1, pág. 139).

299- Ley N.° 81 de 10 de setiembre de 1834, Elección de consejeros y magistrados propietarios y suplentes. (Colección de leyes y decretos. Año 1834, semestre 2, tomo L y D-1, pág. 143).

300- Ley N.° 62 de 10 de setiembre de 1834, Adiciona capítulo 8º a reglamento interior del Congreso. (Colección de leyes y decretos. Año 1834, semestre 1, tomo L y D-1, pág. 118).

301- Ley N.° 83 de 16 de setiembre de 1834, Designa diputados y consejeros para remoción. (Colección de leyes y decretos. Año 1834, semestre 2, tomo L y D-4, pág. 146).

302- Ley N.° 82 de 17 de setiembre de 1834, Autoriza al Ejecutivo para efectuar contratas de tabaco. (Colección de leyes y decretos. Año 1834, semestre 2, tomo L y D-1, pág. 145).

303- Ley N.° 88 de 11 de noviembre de 1834, Elección de magistrado fiscal de la Corte Superior de Justicia. (Colección de leyes y decretos. Año 1834, semestre 2, tomo L y D-1, pág. 154).

304- Ley N.° 86 de 25 de noviembre de 1834, Compra de armamento para seguridad del Estado. (Colección de leyes y decretos. Año 1834, semestre 2, tomo L y D-4, pág. 151).

305- Ley N.° 87 de 25 de noviembre de 1834, Exime a ministros tesoreros de donación voluntaria. (Colección de leyes y decretos. Año 1834, semestre 2, tomo L y D-4, pág. 153).

306- Ley N.° 90 de 17 de febrero de 1835, Declara elección de consejero propietario. (Colección de leyes y decretos. Año 1835, semestre 1, tomo L y D-4, pág. 157).

307- Ley N.° 93 de 4 de marzo de 1835, Renuncia de jefe de Estado Rafael Gallegos. (Colección de leyes y decretos. Año 1835, semestre 1, tomo L y D-4, pág. 159).

308- Ley N.° 94 de 9 de marzo de 1835, Permanencia de elegidos ante ausencia de sustitutos. (Colección de leyes y decretos. Año 1835, semestre 1, tomo L y D-4, pág. 161).

309- Ley N.° 98 de 11 de marzo de 1835, Elecciones para jefe supremo del Estado. (Colección de leyes y decretos. Año 1835, semestre 1, tomo L y D-4, pág. 166).

310- Ley N.° 96 de 11 de marzo de 1835, Habilita actos de administración Rafael Gallegos. (Colección de leyes y decretos. Año 1835, semestre 1, tomo L y D-4, pág. 163).

311- Ley N.° 97 de 11 de marzo de 1835, Reforma del artículo 49 de ley fundamental del Estado de Costa Rica (1825). (Colección de leyes y decretos. Año 1835, semestre 1, tomo L y D-1, pág. 164).

312- Ley N.° 99 de 17 de marzo de 1835, Amplía término para agricultores de octubre de 1828. (Colección de leyes y decretos. Año 1835, semestre 1, tomo L y D-4, pág. 167).

313- Ley N.° 102 de 20 de marzo de 1835, Autoriza multas municipales. (Colección de leyes y decretos. Año 1835, semestre 1, tomo L y D-4, pág. 171).

314- Ley N.° 100 de 20 de marzo de 1835, Reforma del artículo 63 de ley fundamental del Estado de Costa Rica (1825). (Colección de leyes y decretos. Año 1835, semestre 1, tomo L y D-4, pág. 168).

315- Ley N.° 101 de 24 de marzo de 1835, Restablece ley del 15 abril de 1829 sobre usura. (Colección de leyes y decretos. Año 1835, semestre 1, tomo L y D-4, pág. 170).

316- Ley N.° 105 de 24 de marzo de 1835, Establece jefes políticos departamentales. (Colección de leyes y decretos. Año 1835, semestre 1, tomo L y D-4, pág. 180).

317- Ley N.° 104 de 27 de marzo de 1835, Reforma integración de Corte Superior de Justicia. (Colección de leyes y decretos. Año 1835, semestre 1, tomo L y D-1, pág. 174).

318- Ley N.° 103 de 27 de marzo de 1835, Sueldo de pro- secretario de Corte Superior de Justicia. (Colección de leyes y decretos. Año 1835, semestre 1, tomo L y D-4, pág. 172).

319- Ley N.° 107 de 27 de marzo de 1835, Elección de consejeros. (Colección de leyes y decretos. Año 1835, semestre 1, tomo L y D-4, pág. 188).

320- Ley N.° 108 de 27 de marzo de 1835, Prohíbe pago municipal de dietas a diputados. (Colección de leyes y decretos. Año 1835, semestre 1, tomo L y D-4, pág. 190).

321- Ley N.° 110 de 28 de marzo de 1835, Privilegio a particular por máquina de su invención. (Colección de leyes y decretos. Año 1835, semestre 1, tomo L y D-4, pág. 193).

322- Ley N.° 115 de 31 de marzo de 1835, Responsabilidad de ministro por órdenes ilegales. (Colección de leyes y decretos. Año 1835, semestre 1, tomo L y D-4, pág. 204).

323- Ley N.° 113 de 31 de marzo de 1835, Sueldo de escribiente de secretaría legislativa. (Colección de leyes y decretos. Año 1835, semestre 1, tomo L y D-4, pág. 200).

324- Ley N.° 112 de 31 de marzo de 1835, Elimina la contribución obligatoria diezmo. (Colección de leyes y decretos. Año 1835, semestre 1, tomo L y D-4, pág. 196).

325- Ley N.° 109 de 3 de abril de 1835, Privilegios a compañías para abrir ruta al norte. (Colección de leyes y decretos. Año 1835, semestre 1, tomo L y D-4, pág. 191).

326- Ley N.° 106 de 3 de abril de 1835, Crea Tribunal Superior de Cuentas. (Colección de leyes y decretos. Año 1835, semestre 1, tomo L y D-4, pág. 183).

327- Ley N.° 116 de 29 de abril de 1835, Elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia. (Colección de leyes y decretos. Año 1835, semestre 1, tomo L y D-4, pág. 205).

328- Ley N.° 121 de 8 de mayo de 1835, Reforma de Constitución Federal de 13 de febrero 1835. (Colección de leyes y decretos. Año 1835, semestre 1, tomo L y D-4, pág. 217).

329- Ley N.° 120 de 9 de mayo de 1835, Reglamenta diezmo de Ley N.°112 de 31 de marzo 1835. (Colección de leyes y decretos. Año 1835, semestre 1, tomo L y D-4, pág. 210).

330- Ley N.° 122 de 15 de mayo de 1835, Reglamento ley sobre reducción de tierras municipales. (Colección de leyes y decretos. Año 1835, semestre 1, tomo L y D-4, pág. 218).

331- Ley N.° 124 de 4 de junio de 1835, Aumento en precio del tabaco en existencia. (Colección de leyes y decretos. Año 1835, semestre 1, tomo L y D-4, pág. 225).

332- Ley N.° 125 de 4 de junio de 1835, Ordena siembra de tabaco. (Colección de leyes y decretos. Año 1835, semestre 1, tomo L y D-4, pág. 226).

333- Ley N.° 127 de 11 de agosto de 1835, Penas a contrabandistas de tabacos. (Colección de leyes y decretos. Año 1835, semestre 2, tomo L y D-4, pág. 231).

334- Ley N.° 126 de 14 de agosto de 1835, Poder Ejecutivo fijará precio de tabacos. (Colección de leyes y decretos. Año 1835, semestre 2, tomo L y D-4, pág. 229).

335- Ley N.° 128 de 25 de agosto de 1835, Disminuye número de días festivos o feriados. (Colección de leyes y decretos. Año 1835, semestre 2, tomo L y D-4, pág. 235).

336- Ley N.° 129 de 25 de agosto de 1835, Reglamenta cobro de contribución para caminos. (Colección de leyes y decretos. Año 1835, semestre 2, tomo L y D-4, pág. 241).

337- Ley N.° 131 de 25 de agosto de 1835, Venta de terrenos por compañías del Atlántico y peaje. (Colección de leyes y decretos. Año 1835, semestre 2, tomo L y D-4, pág. 244).

338- Ley N.° 130 de 25 de agosto de 1835, Nueva liquidación a senadores de Cámaras Federales. (Colección de leyes y decretos. Año 1835, semestre 2, tomo L y D-4, pág. 243).

339- Ley N.° 133 de 27 de agosto de 1835, Interpreta ley de abolición del diezmo. (Colección de leyes y decretos. Año 1835, semestre 2, tomo L y D-4, pág. 247).

340- Ley N.° 135 de 28 de agosto de 1835, Construcción de puente del Virilla en el Paso Real. (Colección de leyes y decretos. Año 1835, semestre 2, tomo L y D-4, pág. 258).

341- Ley N.° 132 de 2 de setiembre de 1835, Poder Ejecutivo regla matrimonio o bienes de menores. (Colección de leyes y decretos. Año 1835, semestre 2, tomo L y D-4, pág. 246).

342- Ley N.° 134 de 2 de setiembre de 1835, Establece como punto donde deben residir las supremas autoridades la población del Murciélago y dispone que mientras se construyen los edificios necesarios, residan unas en Heredia y otras en San José y deroga Ley de ambulancia. (Colección de leyes y decretos. Año 1835, semestre 2, tomo L y D-1, pág. 249).

343- Ley N.° 137 de 5 de setiembre de 1835, Abono de sueldo para empleados despedidos. (Colección de leyes y decretos. Año 1835, semestre 2, tomo L y D-4, pág. 267).

344- Ley N.° 138 de 26 de setiembre de 1835, Comisión para escuchar problemas de los pueblos. (Colección de leyes y decretos. Año 1835, semestre 2, tomo L y D-4, pág. 270).

345- Ley N.° 139 de 6 de octubre de 1835, Sedición en Alajuela, Heredia y Cartago. (Colección de leyes y decretos. Año 1835, semestre 2, tomo L y D-4, pág. 273).

346- Ley N.° 140 de 29 de octubre de 1835, Penas para ayudantes de provincias sediciosas. (Colección de leyes y decretos. Año 1835, semestre 2, tomo L y D-4, pág. 275).

347- Ley N.° 141 de 31 de octubre de 1835, Juzgamiento para ayudantes de provincias rebeldes. (Colección de leyes y decretos. Año 1835, semestre 2, tomo L y D-4, pág. 276).

348- Ley N.° 142 de 2 de noviembre de 1835, Crea fuerza militar del Estado. (Colección de leyes y decretos. Año 1835, semestre 2, tomo L y D-4, pág. 280).

349- Ley N.° 144 de 29 de noviembre de 1835, Juzga a reos ayudantes de provincias rebeldes. (Colección de leyes y decretos. Año 1835, semestre 2, tomo L y D-4, pág. 285).

350- Ley N.° 145 de 2 de diciembre de 1835, Reglamenta composición de caminos. (Colección de leyes y decretos. Año 1835, semestre 2, tomo L y D-4, pág. 287).

351- Ley N.° 146 de 18 de diciembre de 1835, Interpreta juicio a reos de provincias rebeldes. (Colección de leyes y decretos. Año 1835, semestre 2, tomo L y D-4, pág. 293).

352- Ley N.° 148 de 8 de enero de 1836, Paz en provincias rebeldes. (Colección de leyes y decretos. Año 1836, semestre 1, tomo L y D-4, pág. 299).

353- Ley N.° 149 de 12 de enero de 1836, Renovación de miembros de supremos poderes. (Colección de leyes y decretos. Año 1836, semestre 1, tomo L y D-4, pág. 300).

354- Ley N.° 151 de 4 de marzo de 1836, Elección de consejeros propietario y suplente. (Colección de leyes y decretos. Año 1836, semestre 1, tomo L y D-4, pág. 306).

355- Ley N.° 152 de 11 de marzo de 1836, Suspende abolición del diezmo. (Colección de leyes y decretos. Año 1836, semestre 1, tomo L y D-4, pág. 308).

356- Ley N.° 153 de 14 de marzo de 1836, Requisitos para obtener jefatura política. (Colección de leyes y decretos. Año 1836, semestre 1, tomo L y D-4, pág. 311).

357- Ley N.° 154 de 22 de marzo de 1836, Comisión para asuntos de interés con Nicaragua. (Colección de leyes y decretos. Año 1836, semestre 1, tomo L y D-4, pág. 314).

358- Ley N.° 155 de 25 de marzo de 1836, Privilegios a Partido de Nicoya para mejoras. (Colección de leyes y decretos. Año 1836, semestre 1, tomo L y D-4, pág. 316).

359- Ley N.° 156 de 26 de marzo de 1836, Declara lo que deba hacerse para pagar a los empresarios que por el rumbo del norte descubrieren comunicación de trasporte al puerto de San Juan, los mil pesos en tierras con que los agracia la ley. (Colección de leyes y decretos. Año 1836, semestre 1, tomo L y D-4, pág. 318).

360- Ley N.° 157 de 26 de marzo de 1836, Deroga reducción tierras municipales de 31 marzo 1835. (Colección de leyes y decretos. Año 1836, semestre 1, tomo L y D-4, pág. 319).

361- Ley N.° 158 de 11 de abril de 1836, Elección de senador propietario y suplente. (Colección de leyes y decretos. Año 1836, semestre 1, tomo L y D-4, pág. 320).

362- Ley N.° 167 de 18 de agosto de 1836, Arreglo de insignias militares según Ejército Federal. (Colección de leyes y decretos. Año 1836, semestre 2, tomo L y D-4, pág. 341).

363- Ley N.° 166 de 18 de agosto de 1836, Regula actos de comerciantes extranjeros naturalizados. (Colección de leyes y decretos. Año 1836, semestre 2, tomo L y D-4, pág. 339).

364- Ley N.° 165 de 18 de agosto de 1836, Reglamenta expendio de licores extranjeros. (Colección de leyes y decretos. Año 1836, semestre 2, tomo L y D-4, pág. 337).

365- Ley N.° 168 de 19 de agosto de 1836, Indulta o disminuye penas para reos leales al Estado. (Colección de leyes y decretos. Año 1836, semestre 2, tomo L y D-4, pág. 342).

366- Ley N.° 169 de 22 de agosto de 1836, Venta forzosa del tabaco en tercenas. (Colección de leyes y decretos. Año 1836, semestre 2, tomo L y D-4, pág. 343).

367- Ley N.° 182 de 23 de agosto de 1836, Reglamenta orden y modo de juzgar a militares. (Colección de leyes y decretos. Año 1836, semestre 2, tomo L y D-4, pág. 388).

368- Ley N.° 171 de 25 de agosto de 1836, Acepta decretos federales sobre convocatoria a Congreso Constituyente. (Colección de leyes y decretos. Año 1836, semestre 2, tomo L y D-4, pág. 348).

369- Ley N.° 173 de 26 de agosto de 1836, Término a reos para presentarse a ser juzgados. (Colección de leyes y decretos. Año 1836, semestre 2, tomo L y D-4, pág. 349).

370- Ley N.° 174 de 30 de agosto de 1836, Crea asesor general para jueces. (Colección de leyes y decretos. Año 1836, semestre 2, tomo L y D-4, pág. 359).

371- Ley N.° 175 de 9 de setiembre de 1836, Adjudicación de tabaco a partidos (pueblos). (Colección de leyes y decretos. Año 1836, semestre 2, tomo L y D-4, pág. 368).

372- Ley N.° 176 de 28 de setiembre de 1836, Conmuta penas a reos leales al gobierno. (Colección de leyes y decretos. Año 1836, semestre 2, tomo L y D-4, pág. 373).

373- Ley N.° 177 de 21 de octubre de 1836, Rechaza causa contra ministro general del despacho. (Colección de leyes y decretos. Año 1836, semestre 2, tomo L y D-4, pág. 375).

374- Ley N.° 176 de 1 de diciembre de 1836, Sueldo para tesorero de Universidad Santo Tomás. (Colección de leyes y decretos. Año 1836, semestre 2, tomo L y D-4, pág. 378).

375- Ley N.° 177 de 9 de diciembre de 1836, Renovación de miembros de Supremos Poderes. (Colección de leyes y decretos. Año 1836, semestre 2, tomo L y D-4, pág. 379).

376- Ley N.° 179 de 13 de diciembre de 1836, Medidas estatales contra peste del cólera. (Colección de leyes y decretos. Año 1836, semestre 2, tomo L y D-4, pág. 384).

377- Ley N.° 183 de 14 de diciembre de 1836, Reglamento juicio a militares en causa civil y criminal. (Colección de leyes y decretos. Año 1836, semestre 2, tomo L y D-4, pág. 389).

378- Ley N.° 180 de 14 de diciembre de 1836, Posesión de ganado mayor en valle de Turrialba. (Colección de leyes y decretos. Año 1836, semestre 2, tomo L y D-4, pág. 385).

379- Ley N.° 178 de 22 de diciembre de 1836, Deroga artículo 90 de ley fundamental del Estado de Costa Rica (1825). (Colección de leyes y decretos. Año 1836, semestre 2, tomo L y D-1, pág. 382).

380- Ley N.° 2 de 7 de marzo de 1837, Declara elección de jefe provisorio. (Colección de leyes y decretos. Año 1837, semestre 1, tomo L y D-5, pág. 2).

381- Ley N.° 4 de 16 de marzo de 1837, Tarifa general sueldos y dotaciones de funcionarios públicos de Estado. (Colección de leyes y decretos. Año 1837, semestre 1, tomo L y D-5, pág. 5).

382- Ley N.° 6 de 30 de marzo de 1837, Traslado de autoridades de Puntarenas a Caldera. (Colección de leyes y decretos. Año 1837, semestre 1, tomo L y D-5, pág. 24).

383- Ley N.° 8 de 4 de abril de 1837, Reúne junta para elección jefe, consejeros y magistrados. (Colección de leyes y decretos. Año 1837, semestre 1, tomo L y D-5, pág. 29).

384- Ley N.° 7 de 4 de abril de 1837, Recoge facultades extras del Poder Ejecutivo. (Colección de leyes y decretos. Año 1837, semestre 1, tomo L y D-5, pág. 27).

385- Ley N.° 10 de 11 de abril de 1837, Concede dominio de minas del Tisingal. (Colección de leyes y decretos. Año 1837, semestre 1, tomo L y D-5, pág. 33).

386- Ley N.° 9 de 11 de abril de 1837, Declara elección de jefe, consejeros y magistrados. (Colección de leyes y decretos. Año 1837, semestre 1, tomo L y D-5, pág. 31).

387- Ley N.° 11 de 17 de abril de 1837, Elección de presidente de Corte Suprema de Justicia. (Colección de leyes y decretos. Año 1837, semestre 1, tomo L y D-5, pág. 35).

388- Ley N.° 16 de 16 de mayo de 1837, Cal a los pueblos para desinfectar aire por cólera. (Colección de leyes y decretos. Año 1837, semestre 1, tomo L y D-5, pág. 61).

389- Ley N.° 15 de 16 de mayo de 1837, Cordón sanitario en frontera Nicaragua por cólera. (Colección de leyes y decretos. Año 1837, semestre 1, tomo L y D-5, pág. 67).

390- Ley N.° 13 de 16 de mayo de 1837, Reglamento de Policía y Salubridad. (Colección de leyes y decretos. Año 1837, semestre 1, tomo L y D-5, pág. 37).

391-Ley N.° 12 de 16 de mayo de 1837, Dicta medidas contra el cólera. (Colección de leyes y decretos. Año 1837, semestre 1, tomo L y D-5, pág. 36).

392- Ley N.° 14 de 16 de mayo de 1837, Enseñanza para curar el cólera. (Colección de leyes y decretos. Año 1837, semestre 1, tomo L y D-5, pág. 55).

393- Ley N.° 17 de 27 de mayo de 1837, Pago a factoría de tabacos. (Colección de leyes y decretos. Año 1837, semestre 1, tomo L y D-5, pág. 62).

394- Ley N.° 18 de 16 de junio de 1837, Partidas a pueblos para salubridad y beneficencia. (Colección de leyes y decretos. Año 1837, semestre 1, tomo L y D-5, pág. 65).

395- Ley N.° 19 de 2 de agosto de 1837, Precauciones y penas contra el cólera. (Colección de leyes y decretos. Año 1837, semestre 2, tomo L y D-5, pág. 66).

396- Ley N.° 21 de 5 de agosto de 1837, Rechaza acusación contra presbítero Joaquín Flores. (Colección de leyes y decretos. Año 1837, semestre 2, tomo L y D-5, pág. 67).

397- Ley N.° 22 de 9 de agosto de 1837, Reglamento del jurado de imprenta. (Colección de leyes y decretos. Año 1837, semestre 2, tomo L y D-5, pág. 71).

398- Ley N.° 20 de 12 de agosto de 1837, interpreta vigencia de párrafo 7 de art. 68 ley fundamental del Estado. (Colección de leyes y decretos. Año 1837, semestre 2, tomo L y D-1, pág. 67).

399- Ley N.° 24 de 29 de agosto de 1837, Normas para reposición de consejeros. (Colección de leyes y decretos. Año 1837, semestre 2, tomo L y D-5, pág. 80).

400- Ley N.° 25 de 29 de agosto de 1837, Subrogación del secretario del Senado. (Colección de leyes y decretos. Año 1837, semestre 2, tomo L y D-5, pág. 82).

401- Ley N.° 28 de 31 de agosto de 1837, Dotación para vicario eclesiástico del Estado. (Colección de leyes y decretos. Año 1837, semestre 2, tomo L y D-5, pág. 91).

402- Ley N.° 23 de 2 de setiembre de 1837, Protección a labradores pobres y crea poblaciones. (Colección de leyes y decretos. Año 1837, semestre 2, tomo L y D-5, pág. 78).

403- Ley N.° 26 de 6 de setiembre de 1837, Reforma de artículo 38 de ley fundamental del Estado de Costa Rica (1825). (Colección de leyes y decretos. Año 1837, semestre 2, tomo L y D-1, pág. 84).

404- Ley N.° 31 de 28 de setiembre de 1837, Expulsa del país a ciudadanos opositores. (Colección de leyes y decretos. Año 1837, semestre 2, tomo L y D-5, pág. 96).

405- Ley N.° 32 de 16 de noviembre de 1837, Ref. administración de aguardiente. (Colección de leyes y decretos. Año 1837, semestre 2, tomo L y D-5, pág. 102).

406- Ley N.° 33 de 16 de noviembre de 1837, Término a tenedores para consumir o exportar tabaco. (Colección de leyes y decretos. Año 1837, semestre 2, tomo L y D-5, pág. 104).

407- Ley N.° 35 de 20 de noviembre de 1837, Deroga decreto sobre ejidos. (Colección de leyes y decretos. Año 1837, semestre 2, tomo L y D-5, pág. 110).

408- Ley N.° 34 de 23 de noviembre de 1837, Permiso para construir ermita en Santa Bárbara. (Colección de leyes y decretos. Año 1837, semestre 2, tomo L y D-5, pág. 106).

409- Ley N.° 36 de 28 de noviembre de 1837, Restablece derechos civiles y políticos en Costa Rica. (Colección de leyes y decretos. Año 1837, semestre 2, tomo L y D-5, pág. 111).

410- Ley N.° 37 de 29 de noviembre de 1837, aumenta dotación a portero del Lazareto. (Colección de leyes y decretos. Año 1837, semestre 2, tomo L y D-5, pág. 112).

411- Ley N.° 40 de 1 de diciembre de 1837, Ref. creación de casa reclusión o cárcel de mujeres. (Colección de leyes y decretos. Año 1837, semestre 2, tomo L y D-5, pág. 116).

412- Ley N.° 41 de 1 de diciembre de 1837, Permite entrada de desterrados por revolución de 1835. (Colección de leyes y decretos. Año 1837, semestre 2, tomo L y D-5, pág. 118).

413- Ley N.° 44 de 11 de diciembre de 1837, Renovación de diputados y magistrados. (Colección de leyes y decretos. Año 1837, semestre 2, tomo L y D-5, pág. 146).

414- Ley N.° 45 de 12 de diciembre de 1837, Concede terreno entre quebrada Naranjo y río Grande. (Colección de leyes y decretos. Año 1837, semestre 2, tomo L y D-5, pág. 150).

415- Ley N.° 46 de 18 de diciembre de 1837, Reglas para el expendio de pólvora. (Colección de leyes y decretos. Año 1837, semestre 2, tomo L y D-5, pág. 154).

416- Ley N.° 39 de 20 de diciembre de 1837, Amplía artículo 19 ley fundamental del Estado de Costa Rica (1825). (Colección de leyes y decretos. Año 1837, semestre 2, tomo L y D-1, pág. 114).

417- Ley N.° 47 de 22 de diciembre de 1837, Erección de diócesis distinta de la de Nicaragua. (Colección de leyes y decretos. Año 1837, semestre 2, tomo L y D-5, pág. 155).

418- Ley N.° 48 de 22 de diciembre de 1837, Amplía ley sobre composición de caminos. (Colección de leyes y decretos. Año 1837, semestre 2, tomo L y D-5, pág. 161).

419- Ley N.° 49 de 4 de enero de 1838, Composición del camino a Matina. (Colección de leyes y decretos. Año 1838, semestre 1, tomo L y D-5, pág. 165).

420- Ley N.° 50 de 4 de enero de 1838, Venta de solar de iglesia La Soledad de Cartago. (Colección de leyes y decretos. Año 1838, semestre 1, tomo L y D-5, pág. 167).

421- Ley N.° 51 de 9 de enero de 1838, Acepta acusación contra diputado y consejero. (Colección de leyes y decretos. Año 1838, semestre 1, tomo L y D-5, pág. 169).

422- Ley N.° 52 de 12 de enero de 1838, Otorga derechos civiles y políticos a ciudadano. (Colección de leyes y decretos. Año 1838, semestre 1, tomo L y D-5, pág. 172).

423- Ley N.° 53 de 13 de enero de 1838, Empréstito para reparar camino a Matina. (Colección de leyes y decretos. Año 1838, semestre 1, tomo L y D-5, pág. 176).

424- Ley N.° 54 de 13 de enero de 1838, Renuncia y sustitución de fiscal de Corte Superior. (Colección de leyes y decretos. Año 1838, semestre 1, tomo L y D-5, pág. 180).

425- Ley N.° 56 de 20 de enero de 1838, Abre suscripciones para reparación de camino a Matina. (Colección de leyes y decretos. Año 1838, semestre 1, tomo L y D-5, pág. 184).

426- Ley N.° 58 de 15 de marzo de 1838, Remata de ramos eventuales de Hacienda Pública. (Colección de leyes y decretos. Año 1838, semestre 1, tomo L y D-5, pág. 186).

427- Ley N.° 61 de 28 de marzo de 1838, Permite regreso al Estado de familiares de Quijano. (Colección de leyes y decretos. Año 1838, semestre 1, tomo L y D-5, pág. 193).

428- Ley N.° 62 de 29 de marzo de 1838, Ref. municipalidades. suprimidas de Quircot, Tobosi, Aserrí. (Colección de leyes y decretos. Año 1838, semestre 1, tomo L y D-5, pág. 194).

429- Ley N.° 59 de 31 de marzo de 1838, Faculta al Poder Ejecutivo para que, cuando lo crea conveniente, pueda trasladarse a cualquier punto del Estado. (Colección de leyes y decretos. Año 1838, semestre 1, tomo L y D-1, pág. 189).

430- Ley N.° 63 de 4 de abril de 1838, Convoca Congreso Federal para reforma instituciones. (Colección de leyes y decretos. Año 1838, semestre 1, tomo L y D-5, pág. 196).

431- Ley N.° 64 de 6 de abril de 1838, Obliga terminación arbitral en juicios civiles. (Colección de leyes y decretos. Año 1838, semestre 1, tomo L y D-5, pág. 199).

432- Ley N.° 68 de 26 de abril de 1838, Reforma constitucional. (Colección de leyes y decretos. Año 1838, semestre 1, tomo L y D-5, pág. 210).

433- Ley N.° 70 de 27 de abril de 1838, Permite a eclesiásticos servir en cargos concejiles. (Colección de leyes y decretos. Año 1838, semestre 1, tomo L y D-5, pág. 213).

434- Ley N.° 67 de 28 de abril de 1838, Crea fondos propios para Pacaca. (Colección de leyes y decretos. Año 1838, semestre 1, tomo L y D-5, pág. 1208).

435- Ley N.° 73 de 2 de mayo de 1838, Consejo representativo reasume como Tribunal de Cuentas. (Colección de leyes y decretos. Año 1838, semestre 1, tomo L y D-5, pág. 221).

436- Ley N.° 65 de 2 de mayo de 1838, Restablece vigencia de art. 97 de ley fundamental del Estado (1825). (Colección de leyes y decretos. Año 1838, semestre 1, tomo L y D-1, pág. 206).

437- Ley N.° 72 de 3 de mayo de 1838, Da nueva planta a la Corte Superior de Justicia. (Colección de leyes y decretos. Año 1838, semestre 1, tomo L y D-5, pág. 216).

438- Ley N.° 75 de 4 de mayo de 1838, Terreno en Tibás para educación juvenil de Heredia. (Colección de leyes y decretos. Año 1838, semestre 1, tomo L y D-5, pág. 227).

439- Ley N.° 74 de 4 de mayo de 1838, Sueldo a funcionario y empleados públicos. (Colección de leyes y decretos. Año 1838, semestre 1, tomo L y D-5, pág. 225).

440- Ley N.° 78 de 18 de mayo de 1838, Habilita a Matina como puerto mayor. (Colección de leyes y decretos. Año 1838, semestre 1, tomo L y D-5, pág. 232).

441- Ley N.° 82 de 28 de junio de 1838, Condiciona aceptación de Ley federal. (Colección de leyes y decretos. Año 1838, semestre 1, tomo L y D-5, pág. 243).

442- Ley N.° 83 de 30 de junio de 1838, Compra armas y comisiona para amistad con Nicaragua. (Colección de leyes y decretos. Año 1838, semestre 1, tomo L y D-5, pág. 244).

443- Ley N.° 85 de 4 de julio de 1838, Convoca para elegir Asamblea Constitucional. (Colección de leyes y decretos. Año 1838, semestre 2, tomo L y D-5, pág. 248).

444- Ley N.° 84 de 11 de julio de 1838, Comisión para promover tratado con Nicaragua. (Colección de leyes y decretos. Año 1838, semestre 2, tomo L y D-5, pág. 246).

445- Ley N.° 87 de 18 de julio de 1838, Refunde en aduana de San José las de Matina y Caldera. (Colección de leyes y decretos. Año 1838, semestre 2, tomo L y D-5, pág. 253).

446- Ley N.° 88 de 18 de julio de 1838, Crea juez militar para fuero de guerra. (Colección de leyes y decretos. Año 1838, semestre 2, tomo L y D-5, pág. 260).

447- Ley N.° 90 de 6 de agosto de 1838, Adiciona reglamento de aduanas marítimas de 1838. (Colección de leyes y decretos. Año 1838, semestre 2, tomo L y D-5, pág. 267).

448- Ley N.° 91 de 18 de setiembre de 1838, Acepta acusación contra jefe político. (Colección de leyes y decretos. Año 1838, semestre 2, tomo L y D-5, pág. 271).

449- Ley N.° 92 de 15 de octubre de 1838, Funciones y juramentos en Asamblea Constituyente. (Colección de leyes y decretos. Año 1838, semestre 2, tomo L y D-5, pág. 276).

450- Ley N.° 94 de 9 de noviembre de 1838, Acepta causa contra intendente general. (Colección de leyes y decretos. Año 1838, semestre 2, tomo L y D-5, pág. 280).

451- Ley N.° 96 de 20 de noviembre de 1838, Acepta causa contra intendente general. (Colección de leyes y decretos. Año 1838, semestre 2, tomo L y D-5, pág. 285).

452- Ley N.° 97 de 23 de noviembre de 1838, Convoca a presidente del Congreso Federal para asuntos. (Colección de leyes y decretos. Año 1838, semestre 2, tomo L y D-5, pág. 288).

453- Ley N.° 99 de 25 de diciembre de 1838, Rechaza causa contra contador mayor. (Colección de leyes y decretos. Año 1838, semestre 2, tomo L y D-5, pág. 295).

454- Ley N.° 2 de 24 de enero de 1839, Construcción casa de enseñanza en La Unión. (Colección de leyes y decretos. Año 1839, semestre 1, tomo L y D-6, pág. 8).

455- Ley N.° 5 de 23 de febrero de 1839, Segrega barrios de la Villa de Santa Cruz, y agrega al Guanacaste en lo civil y eclesiástico, los barrios de "Sietecueros" y "el Sardinal". (Colección de leyes y decretos. Año 1839, semestre 1, tomo L y D-6, pág. 26).

456- Ley N.° 8 de 22 de junio de 1839, Conmuta pena condenados por consejo de guerra. (Colección de leyes y decretos. Año 1839, semestre 1, tomo L y D-6, pág. 115).

457- Ley N.° 9 de 21 de agosto de 1839, Sin lugar causa contra jefe político de Guanacaste. (Colección de leyes y decretos. Año 1839, semestre 1, tomo L y D-6, pág. 123).

458- Ley N.° 10 de 25 de octubre de 1839, Manda abrir un camino con dirección al puerto de Moín, y dicta medidas análogas a este objeto. (Colección de leyes y decretos. Año 1839, semestre 1, tomo L y D-6, pág. 133).

459- Ley N.° 11 de 18 de noviembre de 1839, Traslada indígenas de Tucurrique a Cot. (Colección de leyes y decretos. Año 1839, semestre 1, tomo L y D-6, pág. 145).

460- Ley N.° 13 de 10 de febrero de 1840, Con lugar causa contra contador mayor. (Colección de leyes y decretos. Año 1840, semestre 1, tomo L y D-6, pág. 293).

461- Ley N.° 14 de 26 de febrero de 1840, Rehabilita comercio marítimo de Puntarenas. (Colección de leyes y decretos. Año 1840, semestre 1, tomo L y D-6, pág. 301).

462- Ley N.° 15 de 16 de marzo de 1840, Nombra juez para cada uno de los minerales. (Colección de leyes y decretos. Año 1840, semestre 1, tomo L y D-6, pág. 308).

463- Ley N.° 17 de 17 de julio de 1840, Destina al cultivo de café una parte del terreno de Pavas. (Colección de leyes y decretos. Año 1840, semestre 2, tomo L y D-6, pág. 344).

464- Ley N.° 18 de 4 de agosto de 1840, Reúne jefatura política y comandancia de Guanacaste. (Colección de leyes y decretos. Año 1840, semestre 2, tomo L y D-6, pág. 349).

465- Ley N.° 22 de 11 de setiembre de 1840, Fija cuota a curatos para obispo. (Colección de leyes y decretos. Año 1840, semestre 2, tomo L y D-6, pág. 370).

466- Ley N.° 23 de 14 de setiembre de 1840, Declara fuera de la ley a Joaquín Mora. (Colección de leyes y decretos. Año 1840, semestre 2, tomo L y D-6, pág. 370).

467- Ley N.° 24 de 16 de setiembre de 1840, Establece contribución apertura camino a Matina. (Colección de leyes y decretos. Año 1840, semestre 2, tomo L y D-6, pág. 372).

468- Ley N.° 26 de 6 de octubre de 1840, Concede gracias a agricultores que cultiven terrenos sobre los caminos de Matina, Térraba, Sarapiquí, etc. (Colección de leyes y decretos. Año 1840, semestre 2, tomo L y D-6, pág. 376).

469- Ley N.° 27 de 23 de noviembre de 1840, Ref. sistema de pasaportes. (Colección de leyes y decretos. Año 1840, semestre 2, tomo L y D-6, pág. 381).

470- Ley N.° 28 de 18 de diciembre de 1840, Manda observar el breve de su santidad de 31 de enero y el edicto del vicario metropolitano de 31 de octubre de 1840, sobre días festivos. (Colección de leyes y decretos. Año 1840, semestre 2, tomo L y D-6, pág. 383).

471- Ley N.° 1 de 8 de febrero de 1841, Dicta reglas para la conservación del fluido vacuno. (Colección de leyes y decretos. Año 1841, semestre 1, tomo L y D-7, pág. 12).

472- Ley N.° 3 de 1 de abril de 1841, Naturales de Aserrí toman frutos de Cocales de Pirrís. (Colección de leyes y decretos. Año 1841, semestre 1, tomo L y D-7, pág. 36).

473- Ley N.° 4 de 27 de abril de 1841, Declara electos representantes Cámara Consultiva. (Colección de leyes y decretos. Año 1841, semestre 1, tomo L y D-7, pág. 41).

474- Ley N.° 8 de 1 de junio de 1841, Tarifa general sueldos funcionarios públicos. (Colección de leyes y decretos. Año 1841, semestre 1, tomo L y D-7, pág. 44).

475- Ley N.° 13 de 15 de setiembre de 1841, Ordena encerrar ganado y proteger sementeras. (Colección de leyes y decretos. Año 1841, semestre 2, tomo L y D-7, pág. 94).

476- Ley N.° 14 de 24 de setiembre de 1841, Autoriza a médicos instalar boticas. (Colección de leyes y decretos. Año 1841, semestre 2, tomo L y D-7, pág. 98).

477- Ley N.° 16 de 8 de octubre de 1841, Reedificación de Cartago. (Colección de leyes y decretos. Año 1841, semestre 2, tomo L y D-7, pág. 101).

478- Ley N.° 17 de 23 de octubre de 1841, Restablece Cofradía Mercedes en esta capital. (Colección de leyes y decretos. Año 1841, semestre 2, tomo L y D-7, pág. 115).

479- Ley N.° 18 de 29 de octubre de 1841, Define lugares de confinamiento destierro y reclusión. (Colección de leyes y decretos. Año 1841, semestre 2, tomo L y D-7, pág. 116).

480- Ley N.° 19 de 16 de noviembre de 1841, Restablece la Cofradía del Carmen en la ciudad de Heredia. (Colección de leyes y decretos. Año 1841, semestre 2, tomo L y D-7, pág. 118).

481- Ley N.° 20 de 19 de noviembre de 1841, Circulación de monedas peruana y hondureña. (Colección de leyes y decretos. Año 1841, semestre 2, tomo L y D-7, pág. 119).

482- Ley N.° 22 de 1 de diciembre de 1841, Forma de elegir autoridades locales. (Colección de leyes y decretos. Año 1841, semestre 2, tomo L y D-7, pág. 123).

483- Ley N.° 24 de 2 de diciembre de 1841, Funciones juez de primera instancia. (Colección de leyes y decretos. Año 1841, semestre 2, tomo L y D-7, pág. 126).

484- Ley N.° 25 de 2 de diciembre de 1841, Declara electos consejeros. (Colección de leyes y decretos. Año 1841, semestre 2, tomo L y D-7, pág. 127).

485- Ley N.° 23 de 2 de diciembre de 1841, Reforma Código General de Carillo. (Colección de leyes y decretos. Año 1841, semestre 2, tomo L y D-7, pág. 125).

486- Ley N.° 26 de 3 de diciembre de 1841, Inventarios por defunción. (Colección de leyes y decretos. Año 1841, semestre 2, tomo L y D-7, pág. 127).

487- Ley N.° 28 de 10 de diciembre de 1841, Ausencia de postores en remates. (Colección de leyes y decretos. Año 1841, semestre 2, tomo L y D-7, pág. 129).

488- Ley N.° 30 de 13 de diciembre de 1841, Devuelve a interesados escrituras de seguridad. (Colección de leyes y decretos. Año 1841, semestre 2, tomo L y D-7, pág. 130).

489- Ley N.° 31 de 15 de diciembre de 1841, Responsabilidad de funcionarios públicos. (Colección de leyes y decretos. Año 1841, semestre 2, tomo L y D-7, pág. 132).

490- Ley N.° 32 de 15 de diciembre de 1841, Reduce dominio particular de tierras. (Colección de leyes y decretos. Año 1841, semestre 2, tomo L y D-7, pág. 133).

491- Ley N.° 34 de 17 de diciembre de 1841, Trámite de exhortos. (Colección de leyes y decretos. Año 1841, semestre 2, tomo L y D-7, pág. 135).

492- Ley N.° 37 de 28 de diciembre de 1841, Elimina moneda de oro de Centroamérica. (Colección de leyes y decretos. Año 1841, semestre 2, tomo L y D-7, pág. 128).

493- Ley N.° 42 de 8 de enero de 1842, Ref. Precio de transportes terrestres. (Colección de leyes y decretos. Año 1842, semestre 1, tomo L y D-7, pág. 239).

494- Ley N.° 38 de 11 de enero de 1842, Concede patente de invención. (Colección de leyes y decretos. Año 1842, semestre 1, tomo L y D-7, pág. 231).

495- Ley N.° 39 de 26 de enero de 1842, Interpreta decreto sobre precio de transporte terrestre. (Colección de leyes y decretos. Año 1842, semestre 1, tomo L y D-7, pág. 232).

496- Ley N.° 41 de 3 de marzo de 1842, Organiza milicias del Estado. (Colección de leyes y decretos. Año 1842, semestre 1, tomo L y D-7, pág. 236).

497- Ley N.° 43 de 8 de abril de 1842, Vice-jefe de Estado asume mando supremo. (Colección de leyes y decretos. Año 1842, semestre 1, tomo L y D-7, pág. 248).

498- Ley N.° 44 de 8 de abril de 1842, Reúne el ejército y manda levantar fuerzas. (Colección de leyes y decretos. Año 1842, semestre 1, tomo L y D-7, pág. 249).

499- Ley N.° 46 de 14 de abril de 1842, Amnistía sobre hechos políticos. (Colección de leyes y decretos. Año 1842, semestre 1, tomo L y D-7, pág. 250).

500- Ley N.° 49 de 18 de abril de 1842, Junta Revisora Administración Carrillo. (Colección de leyes y decretos. Año 1842, semestre 1, tomo L y D-7, pág. 254).

501- Ley N.° 50 de 20 de abril de 1842, Deroga designación de Pabellón y Escudo de Armas. (Colección de leyes y decretos. Año 1842, semestre 1, tomo L y D-7, pág. 256).

502- Ley N.° 51 de 13 de mayo de 1842, Deroga prohibición para exportar mulas. (Colección de leyes y decretos. Año 1842, semestre 1, tomo L y D-7, pág. 258).

503- Ley N.° 52 de 18 de mayo de 1842, Deroga celebración del 27 de mayo de 1838. (Colección de leyes y decretos. Año 1842, semestre 1, tomo L y D-7, pág. 259).

504- Ley N.° 53 de 19 de mayo de 1842, Deroga decreto que establece juzgado militar en San José. (Colección de leyes y decretos. Año 1842, semestre 1, tomo L y D-7, pág. 26).

505- Ley N.° 54 de 20 de mayo de 1842, Deroga prohibición de denuncios en minerales. (Colección de leyes y decretos. Año 1842, semestre 1, tomo L y D-7, pág. 261).

506- Ley N.° 55 de 21 de mayo de 1842, Ref. Reglamento sobre presidios. (Colección de leyes y decretos. Año 1842, semestre 1, tomo L y D-7, pág. 263).

507- Ley N.° 60 de 21 de mayo de 1842, Deroga orden sobre horario en los trapiches. (Colección de leyes y decretos. Año 1842, semestre 1, tomo L y D-7, pág. 270).

508- Ley N.° 58 de 21 de mayo de 1842, Ref. designación de anchura de caminos públicos. (Colección de leyes y decretos. Año 1842, semestre 1, tomo L y D-7, pág. 267).

509- Ley N.° 61 de 23 de mayo de 1842, Deroga declaratoria de armas como trofeo militar. (Colección de leyes y decretos. Año 1842, semestre 1, tomo L y D-7, pág. 272).

510- Ley N.° 62 de 24 de mayo de 1842, Licencias a magistrados Corte de Justicia. (Colección de leyes y decretos. Año 1842, semestre 1, tomo L y D-7, pág. 274).

511- Ley N.° 63 de 26 de mayo de 1842, Deroga prohibición de ventas en calles y plazas. (Colección de leyes y decretos. Año 1842, semestre 1, tomo L y D-7, pág. 276).

512- Ley N.° 65 de 30 de mayo de 1842, Preservación de sementeras. (Colección de leyes y decretos. Año 1842, semestre 1, tomo L y D-7, pág. 280).

513- Ley N.° 69 de 1 de junio de 1842, Reforma Código General de Carrillo. (Colección de leyes y decretos. Año 1842, semestre 1, tomo L y D-7, pág. 307).

514- Ley N.° 66 de 4 de junio de 1842, Reforma Código General de Carrillo. (Colección de leyes y decretos. Año 1842, semestre 1, tomo L y D-7, pág. 283).

515- Ley N.° 71 de 11 de junio de 1842, Restablece orden constitucional. (Colección de leyes y decretos. Año 1842, semestre 1, tomo L y D-7, pág. 332).

516- Ley N.° 70 de 11 de junio de 1842, Convoca a elecciones para Asamblea Constituyente. (Colección de leyes y decretos. Año 1842, semestre 1, tomo L y D-7, pág. 331).

517- Ley N.° 74 de 14 de julio de 1842, Manda nombrar por asamblea jefe provisorio. (Colección de leyes y decretos. Año 1842, semestre 2, tomo L y D-7, pág. 340).

518- Ley N.° 75 de 15 de julio de 1842, Nombra a Francisco Morazán jefe supremo provisorio. (Colección de leyes y decretos. Año 1842, semestre 2, tomo L y D-7, pág. 341).

519- Ley N.° 76 de 21 de julio de 1842, Integración República Federal de Centroamérica. (Colección de leyes y decretos. Año 1842, semestre 2, tomo L y D-7, pág. 342).

520- Ley N.° 79 de 5 de agosto de 1842, Organiza provisionalmente Tribunal Supremo de Justicia. (Colección de leyes y decretos. Año 1842, semestre 2, tomo L y D-7, pág. 351).

521- Ley N.° 45 de 9 de agosto de 1842, Convoca soldados para el 10 de abril de 1842. (Colección de leyes y decretos. Año 1842, semestre 2, tomo L y D-7, pág. 249).

522- Ley N.° 81 de 10 de agosto de 1842, Restablece provisionalmente las municipalidades. (Colección de leyes y decretos. Año 1842, semestre 2, tomo L y D-7, pág. 354).

523- Ley N.° 80 de 10 de agosto de 1842, Declara electos magistrados. (Colección de leyes y decretos. Año 1842, semestre 2, tomo L y D-7, pág. 353).

524- Ley N.° 82 de 12 de agosto de 1842, Declara sin efecto elección de magistrados. (Colección de leyes y decretos. Año 1842, semestre 2, tomo L y D-7, pág. 361).

525- Ley N.° 83 de 18 de agosto de 1842, Diputados no obligados a admitir cargo de magistrado. (Colección de leyes y decretos. Año 1842, semestre 2, tomo L y D-7, pág. 362).

526- Ley N.° 84 de 19 de agosto de 1842, Restablece tres jefes políticos departamentales. (Colección de leyes y decretos. Año 1842, semestre 2, tomo L y D-7, pág. 363).

527- Ley N.° 85 de 24 de agosto de 1842, Admite renuncia de varios magistrados. (Colección de leyes y decretos. Año 1842, semestre 2, tomo L y D-7, pág. 365).

528- Ley N.° 87 de 27 de agosto de 1842, Constituyente aprueba declaratoria de nulidad ley de bases y garantías. (Colección de leyes y decretos. Año 1842, semestre 2, tomo L y D-7, pág. 372).

529- Ley N.° 89 de 30 de agosto de 1842, Disposiciones vigentes de la Administración Carrillo. (Colección de leyes y decretos. Año 1842, semestre 2, tomo L y D-7, pág. 377).

530- Ley N.° 91 de 30 de agosto de 1842, Vigencia nombramientos jefe vicejefe de Estado provisionales. (Colección de leyes y decretos. Año 1842, semestre 2, tomo L y D-7, pág. 380).

531- Ley N.° 90 de 30 de agosto de 1842, Reforma constitucional. (Colección de leyes y decretos. Año 1842, semestre 2, tomo L y D-7, pág. 379).

532- Ley N.° 92 de 1 de setiembre de 1842, Tarifa de sueldos. (Colección de leyes y decretos. Año 1842, semestre 2, tomo L y D-7, pág. 382).

533- Ley N.° 93 de 1 de setiembre de 1842, Reforma Código General de Carrillo. (Colección de leyes y decretos. Año 1842, semestre 2, tomo L y D-7, pág. 388).

534- Ley N.° 94 de 2 de setiembre de 1842, Otorga atribuciones a la Cámara Judicial. (Colección de leyes y decretos. Año 1842, semestre 2, tomo L y D-7, pág. 390).

535- Ley N.° 96 de 5 de setiembre de 1842, Designa las leyes y disposiciones dictadas por la Administración del Lic. Carrillo que deben continuar rigiendo provisionalmente. (Colección de leyes y decretos. Año 1842, semestre 2, tomo L y D-7, pág. 394).

536- Ley N.° 97 de 5 de setiembre de 1842, Ordena tomar providencias para reconstrucción Cartago. (Colección de leyes y decretos. Año 1842, semestre 2, tomo L y D-7, pág. 398).

537- Ley N.° 100 de 5 de octubre de 1842, Prohíbe entrada al país de deportados. (Colección de leyes y decretos. Año 1842, semestre 2, tomo L y D-7, pág. 404).

538.- Ley N.° 101 de 6 de octubre de 1842, Presentación de exsoldados de Morazán ante gobierno local. (Colección de leyes y decretos. Año 1842, semestre 2, tomo L y D-7, pág. 405).

539- Ley N.° 102 de 1 de noviembre de 1842, Crea periódico el Mentor Costarricense. (Colección de leyes y decretos. Año 1842, semestre 2, tomo L y D-7, pág. 405).

540- Ley N.° 103 de 9 de noviembre de 1842, Devuelve bienes tomados expedición general Morazán. (Colección de leyes y decretos. Año 1842, semestre 2, tomo L y D-7, pág. 407).

541- Ley N.° 105 de 11 de noviembre de 1842, Dr. José María Castro embajador ante La Unión. (Colección de leyes y decretos. Año 1842, semestre 2, tomo L y D-7, pág. 410).

542- Ley N.° 104 de 11 de noviembre de 1842, Suspende efectos tarifa de sueldos. (Colección de leyes y decretos. Año 1842, semestre 2, tomo L y D-7, pág. 409).

543- Ley N.° 106 de 30 de noviembre de 1842, Ordena empréstito regula exacción y amortización. (Colección de leyes y decretos. Año 1842, semestre 2, tomo L y D-7, pág. 411).

544- Ley N.° 108 de 7 de diciembre de 1842, Ordena a propietarios prestar dinero al Estado. (Colección de leyes y decretos. Año 1842, semestre 2, tomo L y D-7, pág. 414).

545- Ley N.° 109 de 12 de diciembre de 1842, Ordena recoger armas en manos de particulares. (Colección de leyes y decretos. Año 1842, semestre 2, tomo L y D-7, pág. 416).

546- Ley N.° 109 de 24 de diciembre de 1842, Pone fuera de ley a quien se abrogue el mando supremo. (Colección de leyes y decretos. Año 1842, semestre 2, tomo L y D-7, pág. 419).

547- Ley N.° 1 de 3 de enero de 1843, Poder Ejecutivo dicta expulsiones del Estado. (Colección de leyes y decretos. Año 1843, semestre 1, tomo L y D-8, pág. 1).

548- Ley N.° 2 de 11 de enero de 1843, Reconoce representante Estado Nicaragua. (Colección de leyes y decretos. Año 1843, semestre 1, tomo L y D-8, pág. 3).

549- Ley N.° 3 de 27 de febrero de 1843, Paga derechos marítimos con certificaciones empréstito. (Colección de leyes y decretos. Año 1843, semestre 1, tomo L y D-8, pág. 5).

550- Ley N.° 4 de 17 de marzo de 1843, Reglamento organización ejército República. (Colección de leyes y decretos. Año 1843, semestre 1, tomo L y D-8, pág. 7).

551- Ley N.° 5 de 26 de marzo de 1843, Manda circular monedas oro legítimas. (Colección de leyes y decretos. Año 1843, semestre 1, tomo L y D-8, pág. 14).

552- Ley N.° 6 de 27 de marzo de 1843, Manda amortizar moneda oro de estrella. (Colección de leyes y decretos. Año 1843, semestre 1, tomo L y D-8, pág. 15).

553- Ley N.° 7 de 1 de abril de 1843, Interés penal a deudores morosos Hacienda Pública. (Colección de leyes y decretos. Año 1843, semestre 1, tomo L y D-8, pág. 16).

554- Ley N.° 8 de 5 de abril de 1843, Convoca elecciones Asamblea Constituyente. (Colección de leyes y decretos. Año 1843, semestre 1, tomo L y D-8, pág. 18).

555- Ley N.° 10 de 29 de abril de 1843, Establece juez policía en departamentos Estado. (Colección de leyes y decretos. Año 1843, semestre 1, tomo L y D-8, pág. 22).

556- Ley N.° 11 de 3 de mayo de 1843, Erige en universidad Casa Enseñanza Santo Tomás. (Colección de leyes y decretos. Año 1843, semestre 1, tomo L y D-8, pág. 25).

557- Ley N.° 12 de 15 de mayo de 1843, Traslada aduana del norte a Cartago. (Colección de leyes y decretos. Año 1843, semestre 1, tomo L y D-8, pág. 36).

558- Ley N.° 13 de 27 de mayo de 1843, Penas por contrabando de licor. (Colección de leyes y decretos. Año 1843, semestre 1, tomo L y D-8, pág. 42) -05-27.

559- Ley N.° 14 de 1 de junio de 1843, Declara en legítima instalación Asamblea Constituyente. (Colección de leyes y decretos. Año 1843, semestre 1, tomo L y D-8, pág. 44).

560- Ley N.° 15 de 6 de junio de 1843, Establece duración del mandato del jefe provisorio del Estado. (Colección de leyes y decretos. Año 1843, semestre 1, tomo L y D-8, pág. 45).

561- Ley N.° 16 de 7 de junio de 1843, Manda nombrar vicejefe Estado y magistrados de Corte. (Colección de leyes y decretos. Año 1843, semestre 1, tomo L y D-8, pág. 47).

562- Ley N.° 17 de 8 de junio de 1843, nombra vicejefe Estado y magistrados de Corte. (Colección de leyes y decretos. Año 1843, semestre 1, tomo L y D-8, pág. 49).

563- Ley N.° 18 de 22 de junio de 1843, Interpreta organización de Tribunal Superior Justicia (art. 3). (Colección de leyes y decretos. Año 1843, semestre 1, tomo L y D-8, pág. 50).

564- Ley N.° 19 de 31 de julio de 1843, Tierras valle Turrialba para población de Guadalupe. (Colección de leyes y decretos. Año 1843, semestre 2, tomo L y D-8, pág. 51).

565- Ley N.° 20 de 31 de julio de 1843, Reglas pago ganados tomado para mantener tropas. (Colección de leyes y decretos. Año 1843, semestre 2, tomo L y D-8, pág. 54).

566- Ley N.° 21 de 17 de agosto de 1843, Contaduría mayor liquida deuda empréstito Morazán. (Colección de leyes y decretos. Año 1843, semestre 2, tomo L y D-8, pág. 55).

567- Ley N.° 22 de 17 de agosto de 1843, Exonera importación sal común extranjera. (Colección de leyes y decretos. Año 1843, semestre 2, tomo L y D-8, pág. 56).

568- Ley N.° 23 de 31 de agosto de 1843, Asistencia a reorganización República Centroamericana. (Colección de leyes y decretos. Año 1843, semestre 2, tomo L y D-8, pág. 57).

569- Ley N.° 24 de 1 de setiembre de 1843, Reforma Código General de Carrillo. (Colección de leyes y decretos. Año 1843, semestre 2, tomo L y D-8, pág. 60).

570- Ley N.° 41 de 1 de setiembre de 1843, Fecha para fundación Universidad Santo Tomás. (Colección de leyes y decretos. Año 1844, semestre 2, tomo L y D-8, pág. 181).

571- Ley N.° 25 de 13 de setiembre de 1843, Aprueba actos gobierno en memoria ministro general. (Colección de leyes y decretos. Año 1843, semestre 2, tomo L y D-8, pág. 63).

572- Ley N.° 26 de 19 de setiembre de 1843, Prorroga liquidación recibos empréstito Morazán. (Colección de leyes y decretos. Año 1843, semestre 2, tomo L y D-8, pág. 65).

573- Ley N.° 28 de 25 de setiembre de 1843, Reforma Código General de Carrillo. (Colección de leyes y decretos. Año 1843, semestre 2, tomo L y D-8, pág. 70).

574- Ley N.° 30 de 25 de setiembre de 1843, Salario administradores licores. (Colección de leyes y decretos. Año 1843, semestre 2, tomo L y D-8, pág. 72).

575- Ley N.° 31 de 25 de octubre de 1843, Crea juez primera instancia Guanacaste. (Colección de leyes y decretos. Año 1843, semestre 2, tomo L y D-8, pág. 74).

576- Ley N.° 32 de 30 de octubre de 1843, Interpreta Código General de Carrillo (art. 474). (Colección de leyes y decretos. Año 1843, semestre 2, tomo L y D-8, pág. 76).

577- Ley N.° 33 de 16 de noviembre de 1843, Ministro despacho visita oficialmente Guanacaste. (Colección de leyes y decretos. Año 1843, semestre 2, tomo L y D-8, pág. 77).

578- Ley N.° 34 de 23 de noviembre de 1843, Indemniza expropiaciones tierra para calles y caminos. (Colección de leyes y decretos. Año 1843, semestre 2, tomo L y D-8, pág. 78).

579- Ley N.° 35 de 25 de noviembre de 1843, Encarga sociedad económica itineraria mejorar caminos. (Colección de leyes y decretos. Año 1843, semestre 2, tomo L y D-8, pág. 82).

580- Ley N.° 36 de 6 de diciembre de 1843, Pacto representantes Centroamérica Chinandega. (Colección de leyes y decretos. Año 1843, semestre 2, tomo L y D-8, pág. 92).

581- Ley N.° 38 de 5 de enero de 1844, Ordena expulsados no volver hasta resolución Congreso. (Colección de leyes y decretos. Año 1844, semestre 1, tomo L y D-8, pág. 101).

582- Ley N.° 37 de 8 de enero de 1844, Reglamento comisión directora sociedad económica itineraria. (Colección de leyes y decretos. Año 1844, semestre 1, tomo L y D-8, pág. 104).

583- Ley N.° 45 de 24 de enero de 1844, Reglamento general de cárceles. (Colección de leyes y decretos. Año 1844, semestre 1, tomo L y D-8, pág. 190).

584- Ley N.° 43 de 24 de enero de 1844, Establece sociedad económica itineraria. (Colección de leyes y decretos. Año 1844, semestre 1, tomo L y D-8, pág. 185).

585- Ley N.° 46 de 5 de febrero de 1844, Reglamento de Correos. (Colección de leyes y decretos. Año 1844, semestre 1, tomo L y D-8, pág. 198).

586- Ley N.° 47 de 9 de febrero de 1844, Conserva pastos junto camino para alimento animales. (Colección de leyes y decretos. Año 1844, semestre 1, tomo L y D-8, pág. 204).

587- Ley N.° 49 de 7 de marzo de 1844, Comisión especial redacta proyecto de ley fundamental. (Colección de leyes y decretos. Año 1844, semestre 1, tomo L y D-8, pág. 218).

588- Ley N.° 50 de 13 de marzo de 1844, Fecha fiesta cívica San José. (Colección de leyes y decretos. Año 1844, semestre 1, tomo L y D-8, pág. 219).

589- Ley N.° 44 de 8 de abril de 1844, Nombra delegados dieta confederativa en San Vicente. (Colección de leyes y decretos. Año 1844, semestre 1, tomo L y D-8, pág. 188).

590- Ley N.° 52 de 9 de abril de 1844, Dotación económica cura Villa Cañas. (Colección de leyes y decretos. Año 1844, semestre 1, tomo L y D-8, pág. 273).

591- Ley N.° 51 de 10 de abril de 1844, Juramento autoridades observar Constitución Política. (Colección de leyes y decretos. Año 1844, semestre 1, tomo L y D-8, pág. 269).

592- Ley N.° 53 de 12 de abril de 1844, Establece jefes políticos departamentales. (Colección de leyes y decretos. Año 1844, semestre 1, tomo L y D-8, pág. 274).

593- Ley N.° 54 de 4 de mayo de 1844, Reforma Código General de Carrillo. (Colección de leyes y decretos. Año 1844, semestre 1, tomo L y D-8, pág. 277).

594- Ley N.° 56 de 7 de mayo de 1844, Funda escuela y suprime latín y filosofía en Guanacaste. (Colección de leyes y decretos. Año 1844, semestre 1, tomo L y D-8, pág. 282).

595- Ley N.° 55 de 7 de mayo de 1844, Reglamento provisional resguardo puerto del sur. (Colección de leyes y decretos. Año 1844, semestre 1, tomo L y D-8, pág. 278).

596- Ley N.° 57 de 17 de mayo de 1844, Ley reglamentaria elecciones Supremos Poderes. (Colección de leyes y decretos. Año 1844, semestre 1, tomo L y D-8, pág. 285).

597- Ley N.° 58 de 12 de junio de 1844, Plazo pago derechos consulado y peaje aduanas marítimas. (Colección de leyes y decretos. Año 1844, semestre 1, tomo L y D-8, pág. 298).

598- Ley N.° 59 de 20 de junio de 1844, Derechos importación frutos y efectos Centroamérica. (Colección de leyes y decretos. Año 1844, semestre 1, tomo L y D-8, pág. 301).

599- Ley N.° 60 de 26 de junio de 1844, Reparación templo parroquial Cartago. (Colección de leyes y decretos. Año 1844, semestre 1, tomo L y D-8, pág. 303).

600- Ley N.° 63 de 27 de junio de 1844, Elección municipalidad y alcaldes Guadalupe Turrialba. (Colección de leyes y decretos. Año 1844, semestre 1, tomo L y D-8, pág. 312).

601- Ley N.° 62 de 28 de junio de 1844, Adiciona reglamento Poder Ejecutivo de 1831. (Colección de leyes y decretos. Año 1844, semestre 1, tomo L y D-8, pág. 310).

602- Ley N.° 64 de 1 de julio de 1844, Reglamento interior del Senado. (Colección de leyes y decretos. Año 1844, semestre 2, tomo L y D-8, pág. 313).

603- Ley N.° 66 de 1 de julio de 1844, Admite servidores Supremos Poderes continuar funciones. (Colección de leyes y decretos. Año 1844, semestre 2, tomo L y D-8, pág. 350).

604- Ley N.° 70 de 23 de julio de 1844, Medidas de policía por reuniones escandalosas. (Colección de leyes y decretos. Año 1844, semestre 2, tomo L y D-8, pág. 355).

605- Ley N.° 71 de 5 de agosto de 1844, Encarga hacendados Pavas cuidado fuente agua río Tiribí. (Colección de leyes y decretos. Año 1844, semestre 2, tomo L y D-8, pág. 357).

606- Ley N.° 72 de 6 de setiembre de 1844, Sociedad itineraria construye obras en Puntarenas. (Colección de leyes y decretos. Año 1844, semestre 2, tomo L y D-8, pág. 362).

607- Ley N.° 73 de 1 de octubre de 1844, Sociedad itineraria conserva carretera nacional. (Colección de leyes y decretos. Año 1844, semestre 2, tomo L y D-8, pág. 365).

608- Ley N.° 75 de 2 de octubre de 1844, Dispone elección representante Cartago. (Colección de leyes y decretos. Año 1844, semestre 2, tomo L y D-8, pág. 371).

609- Ley N.° 74 de 3 de octubre de 1844, Declara y convoca elecciones senadores propietarios. (Colección de leyes y decretos. Año 1844, semestre 2, tomo L y D-8, pág. 368).

610- Ley N.° 76 de 4 de octubre de 1844, Indica caminos generales al cuidado sociedad itineraria. (Colección de leyes y decretos. Año 1844, semestre 2, tomo L y D-8, pág. 372).

611- Ley N.° 79 de 8 de noviembre de 1844, Declara elección senadores propietarios y suplentes. (Colección de leyes y decretos. Año 1844, semestre 2, tomo L y D-8, pág. 381).

612- Ley N.° 80 de 12 de noviembre de 1844, Convoca sur Cartago elegir representante propietario. (Colección de leyes y decretos. Año 1844, semestre 2, tomo L y D-8, pág. 383).

613- Ley N.° 83 de 20 de noviembre de 1844, Declara y convoca elección magistrados Corte Justicia. (Colección de leyes y decretos. Año 1844, semestre 2, tomo L y D-8, pág. 387).

614- Ley N.° 85 de 26 de noviembre de 1844, Rechaza renuncia jefe Estado Francisco María Oreamuno. (Colección de leyes y decretos. Año 1844, semestre 2, tomo L y D-8, pág. 392).
615- Ley N.° 87 de 28 de noviembre de 1844, Pase ley a edicto vicario. (Colección de leyes y decretos. Año 1844, semestre 2, tomo L y D-8, pág. 399).

616- Ley N.° 86 de 28 de noviembre de 1844, Convoca elecciones representantes y senadores. (Colección de leyes y decretos. Año 1844, semestre 2, tomo L y D-8, pág. 393).

617- Ley N.° 84 de 4 de diciembre de 1844, Precio cosecheros tabaco. (Colección de leyes y decretos. Año 1844, semestre 2, tomo L y D-8, pág. 390).

618- Ley N.° 91 de 18 de diciembre de 1844, Suspensión estatutos Universidad Santo Tomás (art.70 y 71). (Colección de leyes y decretos. Año 1844, semestre 2, tomo L y D-8, pág. 403).

619- Ley N.° 1 de 11 de enero de 1845, Repite elección para senador suplente. (Colección de leyes y decretos. Año 1845, semestre 1, tomo L y D-9, pág. 1).

620- Ley N.° 3 de 11 de enero de 1845, Declara elección presidente y fiscal Corte Justicia. (Colección de leyes y decretos. Año 1845, semestre 1, tomo L y D-9, pág. 4).

621- Ley N.° 2 de 11 de enero de 1845, Declara elección magistrados propietarios. (Colección de leyes y decretos. Año 1845, semestre 1, tomo L y D-9, pág. 2).

622- Ley N.° 5 de 23 de enero de 1845, Declara elección presidente y fiscal Corte Justicia. (Colección de leyes y decretos. Año 1845, semestre 1, tomo L y D-9, pág. 6).

623- Ley N.° 4 de 23 de enero de 1845, Admite renuncias magistrados Corte Justicia. (Colección de leyes y decretos. Año 1845, semestre 1, tomo L y D-9, pág. 5).

624- Ley N.° 6 de 1 de febrero de 1845, Cámara Representantes cierra sesiones. (Colección de leyes y decretos. Año 1845, semestre 1, tomo L y D-9, pág. 7).

625- Ley N.° 8 de 27 de marzo de 1845, Admite renuncia y elige magistrados. (Colección de leyes y decretos. Año 1845, semestre 1, tomo L y D-9, pág. 9).

626- Ley N.° 9 de 28 de marzo de 1845, Designa magistrado para fiscal suprema Corte Justicia. (Colección de leyes y decretos. Año 1845, semestre 1, tomo L y D-9, pág. 11).

627- Ley N.° 11 de 2 de abril de 1845, Cámara Representantes prorroga sesiones. (Colección de leyes y decretos. Año 1845, semestre 1, tomo L y D-9, pág. 13).

628- Ley N.° 12 de 2 de abril de 1845, Admite renuncias magistrados suplentes. (Colección de leyes y decretos. Año 1845, semestre 1, tomo L y D-9, pág. 14).

629- Ley N.° 13 de 3 de abril de 1845, Cámara Representantes suspende sesiones. (Colección de leyes y decretos. Año 1845, semestre 1, tomo L y D-9, pág. 15).

630- Ley N.° 14 de 8 de abril de 1845, Comisionado negocia empréstito para Nicaragua. (Colección de leyes y decretos. Año 1845, semestre 1, tomo L y D-9, pág. 16).

631- Ley N.° 15 de 19 de abril de 1845, Convocatoria extraordinaria Cámara Representantes. (Colección de leyes y decretos. Año 1845, semestre 1, tomo L y D-9, pág. 19).

632- Ley N.° 16 de 23 de abril de 1845, Sesiones extraordinarias Cámara Representantes. (Colección de leyes y decretos. Año 1845, semestre 1, tomo L y D-9, pág. 21).

633- Ley N.° 17 de 26 de abril de 1845, Forma causa contra jefe Estado Francisco María Oreamuno. (Colección de leyes y decretos. Año 1845, semestre 1, tomo L y D-9, pág. 23).

634- Ley N.° 18 de 26 de abril de 1845, Cámara Representantes cierra sesiones extraordinarias. (Colección de leyes y decretos. Año 1845, semestre 1, tomo L y D-9, pág. 25).

635- Ley N.° 19 de 29 de abril de 1845, Pase de ley carta pastoral santificación días festivos. (Colección de leyes y decretos. Año 1845, semestre 1, tomo L y D-9, pág. 29).

636- Ley N.° 22 de 27 de junio de 1845, Cámara Representantes cierra sesiones. (Colección de leyes y decretos. Año 1845, semestre 1, tomo L y D-9, pág. 41).

637- Ley N.° 20 de 27 de junio de 1845, Declara elección senador suplente. (Colección de leyes y decretos. Año 1845, semestre 1, tomo L y D-9, pág. 39).

638- Ley N.° 21 de 27 de junio de 1845, Repite elección senadores propietarios. (Colección de leyes y decretos. Año 1845, semestre 1, tomo L y D-9, pág. 40).

639- Ley N.° 23 de 1 de julio de 1845, Cámara Representantes abre sesiones. (Colección de leyes y decretos. Año 1845, semestre 2, tomo L y D-9, pág. 42).

640- Ley N.° 24 de 2 de julio de 1845, Aplica artículo 127 Código General a Corte Justicia. (Colección de leyes y decretos. Año 1845, semestre 2, tomo L y D-9, pág. 43).

641- Ley N.° 31 de 14 de julio de 1845, Admite renuncia y nombra senador suplente. (Colección de leyes y decretos. Año 1845, semestre 2, tomo L y D-9, pág. 57).

642- Ley N.° 29 de 17 de julio de 1845, Cámara Representantes prorroga sesiones. (Colección de leyes y decretos. Año 1845, semestre 2, tomo L y D-9, pág. 53).

643- Ley N.° 10 de 21 de julio de 1845, Cobra censo terrenos Pavas al final año. (Colección de leyes y decretos).

644- Ley N.° 26 de 22 de julio de 1845, Exonera importación frutos cereales y menestras. (Colección de leyes y decretos. Año 1845, semestre 2, tomo L y D-9, pág. 47).

645- Ley N.° 36 de 1 de agosto de 1845, Cámara Representantes cierra sesiones ordinarias. (Colección de leyes y decretos. Año 1845, semestre 2, tomo L y D-9, pág. 65).

646- Ley N.° 28 de 5 de agosto de 1845, Comisionados para dieta en Sonsonate Centroamérica. (Colección de leyes y decretos. Año 1845, semestre 2, tomo L y D-9, pág. 51).

647- Ley N.° 32 de 9 de agosto de 1845, Representantes dieta de Sonsonate Centroamérica. (Colección de leyes y decretos. Año 1845, semestre 2, tomo L y D-9, pág. 58).

648- Ley N.° 30 de 19 de agosto de 1845, Construye en Puntarenas hermita (sic) a San Antonio Padua. (Colección de leyes y decretos. Año 1845, semestre 2, tomo L y D-9, pág. 54).

649- Ley N.° 37 de 20 de agosto de 1845, Convocatoria extraordinaria Cámara Representantes. (Colección de leyes y decretos. Año 1845, semestre 2, tomo L y D-9, pág. 66).

650- Ley N.° 33 de 20 de agosto de 1845, Ejecutivo auxilia junta directiva Sociedad Itineraria. (Colección de leyes y decretos. Año 1845, semestre 2, tomo L y D-9, pág. 59).

651- Ley N.° 38 de 2 de setiembre de 1845, Cámara Representantes declara sesiones extraordinarias. (Colección de leyes y decretos. Año 1845, semestre 2, tomo L y D-9, pág. 73).

652- Ley N.° 39 de 12 de setiembre de 1845, Reglamenta sistema pasaportes. (Colección de leyes y decretos. Año 1845, semestre 2, tomo L y D-9, pág. 75).

653- Ley N.° 40 de 17 de setiembre de 1845, Declara elección senadores y presidente Senado. (Colección de leyes y decretos. Año 1845, semestre 2, tomo L y D-9, pág. 79).

654- Ley N.° 43 de 24 de setiembre de 1845, Amplía convocatoria extraordinaria Cámara Representantes. (Colección de leyes y decretos. Año 1845, semestre 2, tomo L y D-9, pág. 84).

655- Ley N.° 44 de 29 de setiembre de 1845, Constituye Junta Caridad Hospital San Juan de Dios. (Colección de leyes y decretos. Año 1845, semestre 2, tomo L y D-9, pág. 85).

656- Ley N.° 45 de 30 de setiembre de 1845, Planta y reglamento oficinas ministerios. (Colección de leyes y decretos. Año 1845, semestre 2, tomo L y D-9, pág. 87).

657- Ley N.° 41 de 30 de setiembre de 1845, Prohíbe circulación medios reales macuquinos. (Colección de leyes y decretos. Año 1845, semestre 2, tomo L y D-9, pág. 80).

658- Ley N.° 48 de 27 de octubre de 1845, Autoriza gobierno vender medios reales cortados. (Colección de leyes y decretos. Año 1845, semestre 2, tomo L y D-9, pág. 98).

659- Ley N.° 51 de 31 de octubre de 1845, Cámara Representantes suspende sesiones. (Colección de leyes y decretos. Año 1845, semestre 2, tomo L y D-9, pág. 103).

660- Ley N.° 52 de 1 de noviembre de 1845, Sesiones extraordinarias Cámara Representantes. (Colección de leyes y decretos. Año 1845, semestre 2, tomo L y D-9, pág. 104).

661- Ley N.° 53 de 13 de noviembre de 1845, Arregla valor circulante monedas plata extranjeras. (Colección de leyes y decretos. Año 1845, semestre 2, tomo L y D-9, pág. 105).

662- Ley N.° 50 de 17 de noviembre de 1845, Estado vende pólvora en receptorías de alcabalas. (Colección de leyes y decretos. Año 1845, semestre 2, tomo L y D-9, pág. 101).

663- Ley N.° 57 de 17 de noviembre de 1845, Cámara Representantes prorroga sesiones. (Colección de leyes y decretos. Año 1845, semestre 2, tomo L y D-9, pág. 197).

664- Ley N.° 58 de 18 de noviembre de 1845, Forma causa contra diputado suplente. (Colección de leyes y decretos. Año 1845, semestre 2, tomo L y D-9, pág. 198).

665- Ley N.° 49 de 24 de noviembre de 1845, Nombra en parroquias mayordomos de fábrica. (Colección de leyes y decretos. Año 1845, semestre 2, tomo L y D-9, pág. 99).

666- Ley N.° 60 de 27 de noviembre de 1845, Cámara Representantes cierra sesiones ordinarias. (Colección de leyes y decretos. Año 1845, semestre 2, tomo L y D-9, pág. 202).

667- Ley N.° 59 de 27 de noviembre de 1845, Convoca elección renovar Supremos Poderes. (Colección de leyes y decretos. Año 1845, semestre 2, tomo L y D-9, pág. 199).

668- Ley N.° 42 de 27 de noviembre de 1845, Sueldo escribiente Cámara Senadores. (Colección de leyes y decretos. Año 1845, semestre 2, tomo L y D-9, pág. 82).

669- Ley N.° 61 de 4 de diciembre de 1845, Admite renuncia representante dieta Centroamérica. (Colección de leyes y decretos. Año 1845, semestre 2, tomo L y D-9, pág. 203).

670- Ley N.° 62 de 5 de diciembre de 1845, Forma causa contra jefe político Heredia. (Colección de leyes y decretos. Año 1845, semestre 2, tomo L y D-9, pág. 206).

671- Ley N.° 64 de 30 de diciembre de 1845, Amplía convocatoria Cámara Representantes. (Colección de leyes y decretos. Año 1845, semestre 2, tomo L y D-9, pág. 209).

672- Ley N.° 65 de 31 de diciembre de 1845, Cámara Representantes suspende sesiones extraordinarias. (Colección de leyes y decretos. Año 1845, semestre 2, tomo L y D-9, pág. 211).

673- Ley N.° 68 de 7 de febrero de 1846, Amplía convocatoria extraordinaria Cámara Representantes. (Colección de leyes y decretos. Año 1846, semestre 1, tomo L y D-9, pág. 214).

674- Ley N.° 67 de 18 de febrero de 1846, Nombra representante dieta en Sonsonate Centroamérica. (Colección de leyes y decretos. Año 1846, semestre 1, tomo L y D-9, pág. 213).

675- Ley N.° 66 de 18 de febrero de 1846, Admite dimisión representante dieta centroamericana. (Colección de leyes y decretos. Año 1846, semestre 1, tomo L y D-9, pág. 212).

676- Ley N.° 70 de 10 de marzo de 1846, Tarifa sueldos jefes políticos y dependientes. (Colección de leyes y decretos. Año 1846, semestre 1, tomo L y D-9, pág. 218).

677- Ley N.° 72 de 16 de marzo de 1846, Cámara representantes suspende sesiones. (Colección de leyes y decretos. Año 1846, semestre 1, tomo L y D-9, pág. 220).

678- Ley N.° 71 de 16 de marzo de 1846, Elige magistrado fiscal suprema Corte Justicia. (Colección de leyes y decretos. Año 1846, semestre 1, tomo L y D-9, pág. 219).

679- Ley N.° 73 de 2 de abril de 1846, Propagación y conservación fluido vacuno contra viruela. (Colección de leyes y decretos. Año 1846, semestre 1, tomo L y D-9, pág. 221).

680- Ley N.° 74 de 30 de abril de 1846, Declara elección senador y magistrado propietarios. (Colección de leyes y decretos. Año 1846, semestre 1, tomo L y D-9, pág. 224).

681- Ley N.° 76 de 10 de junio de 1846, Mantiene cargos funcionarios Administración Pública. (Colección de leyes y decretos. Año 1846, semestre 1, tomo L y D-9, pág. 242).

682- Ley N.° 78 de 1 de julio de 1846, Envía legación al gobierno Nicaragua. (Colección de leyes y decretos. Año 1846, semestre 2, tomo L y D-9, pág. 247).

683- Ley N.° 77 de 1 de julio de 1846, Elecciones representantes Asamblea Constituyente. (Colección de leyes y decretos. Año 1846, semestre 2, tomo L y D-9, pág. 244).

684- Ley N.° 79 de 4 de julio de 1846, Nombra comisionados enviar gobierno Nicaragua. (Colección de leyes y decretos. Año 1846, semestre 2, tomo L y D-9, pág. 248).

685- Ley N.° 81 de 17 de julio de 1846, Protege sementeras contra incursiones ganado. (Colección de leyes y decretos. Año 1846, semestre 2, tomo L y D-9, pág. 261).

686.- Ley N.° 82 de 21 de julio de 1846, Elige senadores y magistrados Corte Suprema Justicia. (Colección de leyes y decretos. Año 1846, semestre 2, tomo L y D-9, pág. 263).

687- Ley N.° 83 de 24 de julio de 1846, Tarifa sueldos clases militares. (Colección de leyes y decretos. Año 1846, semestre 2, tomo L y D-9, pág. 264).

688- Ley N.° 85 de 4 de agosto de 1846, Faculta Cámara Senadores elegir presidente y fiscal Corte. (Colección de leyes y decretos. Año 1846, semestre 2, tomo L y D-9, pág. 271).

689- Ley N.° 86 de 7 de agosto de 1846, Integra Junta Caridad Hospital San Juan de Dios. (Colección de leyes y decretos. Año 1846, semestre 2, tomo L y D-9, pág. 273).

690- Ley N.° 87 de 7 de agosto de 1846, Elige presidente y magistrados Corte Suprema Justicia. (Colección de leyes y decretos. Año 1846, semestre 2, tomo L y D-9, pág. 275).

691- Ley N.° 88 de 10 de agosto de 1846, Adiciona monopolio de venta licores extranjeros. (Colección de leyes y decretos. Año 1846, semestre 2, tomo L y D-9, pág. 279).

692- Ley N.° 89 de 20 de agosto de 1846, Declara elección vicejefe supremo Estado. (Colección de leyes y decretos. Año 1846, semestre 2, tomo L y D-9, pág. 282).

693- Ley N.° 90 de 21 de agosto de 1846, Juramento posesión diputados Asamblea Constituyente. (Colección de leyes y decretos. Año 1846, semestre 2, tomo L y D-9, pág. 284).

694- Ley N.° 91 de 28 de agosto de 1846, Reglamento gobierno puertos. (Colección de leyes y decretos. Año 1846, semestre 2, tomo L y D-9, pág. 290).

695- Ley N.° 92 de 28 de agosto de 1846, Suspende posesión vicejefe supremo Estado. (Colección de leyes y decretos. Año 1846, semestre 2, tomo L y D-9, pág. 337).

696- Ley N.° 99 de 4 de setiembre de 1846, Reglamento lotería favor Hospital San Juan de Dios. (Colección de leyes y decretos. Año 1846, semestre 2, tomo L y D-9, pág. 346).

697- Ley N.° 93 de 4 de setiembre de 1846, Declara inadmisible renuncia vicejefe supremo Estado. (Colección de leyes y decretos. Año 1846, semestre 2, tomo L y D-9, pág. 338).

698- Ley N.° 94 de 5 de setiembre de 1846, Restablece reglamento Hacienda de 1839. (Colección de leyes y decretos. Año 1846, semestre 2, tomo L y D-9, pág. 340).

699- Ley N.° 95 de 9 de setiembre de 1846, Ceremonial posesión vicejefe supremo Estado. (Colección de leyes y decretos. Año 1846, semestre 2, tomo L y D-9, pág. 341).

700- Ley N.° 97 de 16 de setiembre de 1846, Comisión especial redacta proyecto constitución. (Colección de leyes y decretos. Año 1846, semestre 2, tomo L y D-9, pág. 344).

701- Ley N.° 98 de 19 de setiembre de 1846, Nombra representante dieta Sonsonate Centroamérica. (Colección de leyes y decretos. Año 1846, semestre 2, tomo L y D-9, pág. 345).

702- Ley N.° 100 de 1 de octubre de 1846, Reemplazos comisión directora sociedad económica itineraria. (Colección de leyes y decretos. Año 1846, semestre 2, tomo L y D-9, pág. 350).

703- Ley N.° 101 de 3 de octubre de 1846, Reglamento de la imprenta del Estado. (Colección de leyes y decretos. Año 1846, semestre 2, tomo L y D-9, pág. 351).

704- Ley N.° 102 de 15 de octubre de 1846, Manda sellar monedas macuquinas. (Colección de leyes y decretos. Año 1846, semestre 2, tomo L y D-9, pág. 361).

705- Ley N.° 103 de 23 de octubre de 1846, Convoca elecciones Supremos Poderes. (Colección de leyes y decretos. Año 1846, semestre 2, tomo L y D-9, pág. 363).

706- Ley N.° 104 de 29 de octubre de 1846, Organiza Comandancia General Estado. (Colección de leyes y decretos. Año 1846, semestre 2, tomo L y D-9, pág. 365).

707- Ley N.° 105 de 13 de noviembre de 1846, Establece escuela central del Estado en San José. (Colección de leyes y decretos. Año 1846, semestre 2, tomo L y D-9, pág. 366).

708- Ley N.° 107 de 22 de diciembre de 1846, Requisitos de oficiales para cargo jueces militares. (Colección de leyes y decretos. Año 1846, semestre 2, tomo L y D-9, pág. 376).

709- Ley N.° 2 de 21 de enero de 1847, Asamblea Constituyente suspende sesiones. (Colección de leyes y decretos. Año 1847, semestre 1, tomo L y D-10, pág. 56).

710- Ley N.° 5 de 9 de febrero de 1847, Juramentación de observancia a nueva Constitución. (Colección de leyes y decretos. Año 1847, semestre 1, tomo L y D-10, pág. 63).

711- Ley N.° 4 de 9 de febrero de 1847, Declara electos magistrados propietarios y suplentes. (Colección de leyes y decretos. Año 1847, semestre 1, tomo L y D-10, pág. 61).

712- Ley N.° 6 de 11 de febrero de 1847, Asamblea Constituyente suspende sesiones. (Colección de leyes y decretos. Año 1847, semestre 1, tomo L y D-10, pág. 66).

713- Ley N.° 7 de 27 de febrero de 1847, Reglamenta elecciones individuos de Supremos Poderes. (Colección de leyes y decretos. Año 1847, semestre 1, tomo L y D-10, pág. 67).

714- Ley N.° 8 de 27 de febrero de 1847, Asamblea Constituyente suspende sesiones. (Colección de leyes y decretos. Año 1847, semestre 1, tomo L y D-10, pág. 77).

715- Ley N.° 9 de 5 de marzo de 1847, Declara Puntarenas puerto franco. (Colección de leyes y decretos. Año 1847, semestre 1, tomo L y D-10, pág. 78).

716- Ley N.° 10 de 17 de marzo de 1847, Calificación de ciudadanos con derecho a voto. (Colección de leyes y decretos).

717- Ley N.° 11 de 1 de mayo de 1847, Asamblea Constituyente clausura sesiones. (Colección de leyes y decretos. Año 1847, semestre 1, tomo L y D-10, pág. 83).

718- Ley N.° 15 de 7 de mayo de 1847, Declara electos magistrados propietarios y suplentes. (Colección de leyes y decretos. Año 1847, semestre 1, tomo L y D-10, pág. 88).

719- Ley N.° 17 de 10 de mayo de 1847, Establece resguardos militares en costa norte. (Colección de leyes y decretos. Año 1847, semestre 1, tomo L y D-10, pág. 90).

720- Ley N.° 16 de 11 de mayo de 1847, Declara electos magistrados propietarios y suplentes. (Colección de leyes y decretos. Año 1847, semestre 1, tomo L y D-10, pág. 89).

721- Ley N.° 24 de 2 de junio de 1847, Integración comisión permanente. (Colección de leyes y decretos. Año 1847, semestre 1, tomo L y D-10, pág. 104).

722- Ley N.° 19 de 4 de junio de 1847, Restablece recurso de súplica. (Colección de leyes y decretos. Año 1847, semestre 1, tomo L y D-10, pág. 94).

723- Ley N.° 21 de 22 de junio de 1847, P.E. podrá emitir disposiciones de Hacienda y Policía. (Colección de leyes y decretos. Año 1847, semestre 1, tomo L y D-10, pág. 98).

724- Ley N.° 22 de 30 de junio de 1847, Establece Academia de Dibujo y Pintura. (Colección de leyes y decretos. Año 1847, semestre 1, tomo L y D-10, pág. 101).

725- Ley N.° 23 de 2 de julio de 1847, Declara electos magistrados propietarios y suplentes. (Colección de leyes y decretos. Año 1847, semestre 2, tomo L y D-10, pág. 103).

726- Ley N.° 25 de 3 de julio de 1847, Deroga de Nº 10 del 21 de mayo de 1842. (Colección de leyes y decretos. Año 1847, semestre 2, tomo L y D-10, pág. 105).

727- Ley N.° 28 de 13 de julio de 1847, Destina multas a subsistencia de presos. (Colección de leyes y decretos. Año 1847, semestre 2, tomo L y D-10, pág. 110).

728- Ley N.° 29 de 16 de julio de 1847, Reconoce grado militar. (Colección de leyes y decretos. Año 1847, semestre 2, tomo L y D-10, pág. 111).

729- Ley N.° 31 de 28 de julio de 1847, Reforma constitucional. (Colección de leyes y decretos. Año 1847, semestre 2, tomo L y D-10, pág. 113).

730- Ley N.° 32 de 30 de julio de 1847, Renueva nombramiento de diputados. (Colección de leyes y decretos. Año 1847, semestre 2, tomo L y D-10, pág. 114).

731- Ley N.° 33 de 30 de julio de 1847, Regula representación en dieta instalada en Nacaome. (Colección de leyes y decretos. Año 1847, semestre 2, tomo L y D-10, pág. 117).

732- Ley N.° 34 de 30 de julio de 1847, Prorroga sesiones ordinarias. (Colección de leyes y decretos. Año 1847, semestre 2, tomo L y D-10, pág. 117).

733- Ley N.° 40 de 3 de agosto de 1847, Suspende sesiones ordinarias. (Colección de leyes y decretos. Año 1847, semestre 2, tomo L y D-10, pág. 125).

734- Ley N.° 38 de 3 de agosto de 1847, Designa representación en dieta nacional de Nacaome. (Colección de leyes y decretos. Año 1847, semestre 2, tomo L y D-10, pág. 123).

735- Ley N.° 36 de 3 de agosto de 1847, Comisión permanente otorgará licencia al presidente. (Colección de leyes y decretos. Año 1847, semestre 2, tomo L y D-10, pág. 120).

736- Ley N.° 41 de 12 de agosto de 1847, Refunde aduana norte en la receptoría de Cartago. (Colección de leyes y decretos. Año 1847, semestre 2, tomo L y D-10, pág. 126).

737- Ley N.° 42 de 18 de agosto de 1847, Sueldos para algunos empleados. (Colección de leyes y decretos. Año 1847, semestre 2, tomo L y D-10, pág. 128).

738- Ley N.° 45 de 30 de agosto de 1847, Abre sesiones extraordinarias. (Colección de leyes y decretos. Año 1847, semestre 2, tomo L y D-10, pág. 141).

739- Ley N.° 35 de 3 de setiembre de 1847, Reorganiza junta itineraria. (Colección de leyes y decretos. Año 1847, semestre 2, tomo L y D-10, pág. 118).

740- Ley N.° 46 de 4 de setiembre de 1847, Ratifica declaratoria de puerto franco a Puntarenas. (Colección de leyes y decretos. Año 1847, semestre 2, tomo L y D-10, pág. 142).

741- Ley N.° 47 de 6 de setiembre de 1847, Convoca a sesiones extraordinarias. (Colección de leyes y decretos. Año 1847, semestre 2, tomo L y D-10, pág. 145).

742- Ley N.° 50 de 24 de setiembre de 1847, Sueldos provisionales empleados puerto de Puntarenas. (Colección de leyes y decretos. Año 1847, semestre 2, tomo L y D-10, pág. 157).

743- Ley N.° 52 de 27 de setiembre de 1847, Abre sesiones extraordinarias. (Colección de leyes y decretos. Año 1847, semestre 2, tomo L y D-10, pág. 159).

744- Ley N.° 51 de 27 de setiembre de 1847, Concede amnistía completa para delitos políticos. (Colección de leyes y decretos. Año 1847, semestre 2, tomo L y D-10, pág. 159).

745- Ley N.° 54 de 1 de octubre de 1847, Declara electo magistrado propietario. (Colección de leyes y decretos. Año 1847, semestre 2, tomo L y D-10, pág. 161).

746- Ley N.° 53 de 1 de octubre de 1847, Admite renuncia vicejefe de Estado. (Colección de leyes y decretos. Año 1847, semestre 2, tomo L y D-10, pág. 160).

747.- Ley N.° 55 de 2 de octubre de 1847, Ratifica amnistía. (Colección de leyes y decretos. Año 1847, semestre 2, tomo L y D-10, pág. 162).

748- Ley N.° 57 de 5 de octubre de 1847, Convoca sesiones extraordinarias. (Colección de leyes y decretos. Año 1847, semestre 2, tomo L y D-10, pág. 164).

749- Ley N.° 59 de 8 de octubre de 1847, Revoca cesión de armas en Alajuela. (Colección de leyes y decretos. Año 1847, semestre 2, tomo L y D-10, pág. 167).

750- Ley N.° 63 de 15 de octubre de 1847, Indemniza tesoro público por sofocar rebelión Alajuela. (Colección de leyes y decretos. Año 1847, semestre 2, tomo L y D-10, pág. 173).

751- Ley N.° 62 de 15 de octubre de 1847, Confina varios reos políticos. (Colección de leyes y decretos. Año 1847, semestre 2, tomo L y D-10, pág. 171).

752- Ley N.° 60 de 15 de octubre de 1847, Ordena habitantes Alajuela presentar armas en su poder. (Colección de leyes y decretos. Año 1847, semestre 2, tomo L y D-10, pág. 168).

753- Ley N.° 64 de 15 de octubre de 1847, Restablece orden constitucional en todo el Estado. (Colección de leyes y decretos. Año 1847, semestre 2, tomo L y D-10, pág. 175).

754- Ley N.° 61 de 15 de octubre de 1847, Disuelve fuerzas milicianas en Alajuela. (Colección de leyes y decretos. Año 1847, semestre 2, tomo L y D-10, pág. 170).

755- Ley N.° 65 de 21 de octubre de 1847, Ordena circulación de leyes en todo el Estado. (Colección de leyes y decretos. Año 1847, semestre 2, tomo L y D-10, pág. 177).

756- Ley N.° 66 de 2 de noviembre de 1847, Indemniza dueños de bestias al servicio del ejército. (Colección de leyes y decretos. Año 1847, semestre 2, tomo L y D-10, pág. 179).

757- Ley N.° 67 de 2 de noviembre de 1847, Clausura sesiones extraordinarias. (Colección de leyes y decretos. Año 1847, semestre 2, tomo L y D-10, pág. 181).

758- Ley N.° 69 de 11 de noviembre de 1847, Crea cargo de médico de pueblo en todas las provincias. (Colección de leyes y decretos. Año 1847, semestre 2, tomo L y D-10, pág. 183).

759- Ley N.° 70 de 16 de noviembre de 1847, Aprueba actos del Ejecutivo en rebelión de Alajuela. (Colección de leyes y decretos. Año 1847, semestre 2, tomo L y D-10, pág. 186).

760- Ley N.° 72 de 17 de noviembre de 1847, Declara sin lugar renuncia de Juan Rafael Mora. (Colección de leyes y decretos. Año 1847, semestre 2, tomo L y D-10, pág. 190).

761- Ley N.° 74 de 18 de noviembre de 1847, Reglamento de elecciones municipales. (Colección de leyes y decretos. Año 1847, semestre 2, tomo L y D-10, pág. 192).

762- Ley N.° 75 de 24 de noviembre de 1847, Sueldo de jueces primera instancia. (Colección de leyes y decretos. Año 1847, semestre 2, tomo L y D-10, pág. 199).

763- Ley N.° 76 de 27 de noviembre de 1847, Venta de licores extranjeros en Puntarenas y Guanacaste. (Colección de leyes y decretos. Año 1847, semestre 2, tomo L y D-10, pág. 200).

764- Ley N.° 77 de 30 de noviembre de 1847, Reglamenta Decreto 63 de 15 de octubre de 1847. (Colección de leyes y decretos. Año 1847, semestre 2, tomo L y D-10, pág. 203).

765- Ley N.° 79 de 1 de diciembre de 1847, Reforma Código General de Carrillo. (Colección de leyes y decretos. Año 1847, semestre 2, tomo L y D-10, pág. 211).

766- Ley N.° 80 de 2 de diciembre de 1847, Clausura sesiones ordinarias. (Colección de leyes y decretos. Año 1847, semestre 2, tomo L y D-10, pág. 212).

767- Ley N.° 82 de 7 de diciembre de 1847, Abre sesiones extraordinarias. (Colección de leyes y decretos. Año 1847, semestre 2, tomo L y D-10, pág. 213).

768- Ley N.° 83 de 7 de diciembre de 1847, Interpreta fracción 3º art. 110 y 151 Constitución Política (1847). (Colección de leyes y decretos. Año 1847, semestre 2, tomo L y D-10, pág. 214).

769- Ley N.° 84 de 9 de diciembre de 1847, Clausura sesiones extraordinarias. (Colección de leyes y decretos. Año 1847, semestre 2, tomo L y D-10, pág. 215).

770- Ley N.° 85 de 22 de diciembre de 1847, Declara Moín punto de confinamiento para reos políticos. (Colección de leyes y decretos. Año 1847, semestre 2, tomo L y D-10, pág. 216).

771- Ley N.° 86 de 23 de diciembre de 1847, Declara medidas para captura de traidores. (Colección de leyes y decretos. Año 1847, semestre 2, tomo L y D-10, pág. 219).

772- Ley N.° 87 de 23 de diciembre de 1847, Derechos marítimos en Puntarenas. (Colección de leyes y decretos. Año 1847, semestre 2, tomo L y D-10, pág. 220).

773- Ley N.° 89 de 28 de diciembre de 1847, Reglamenta el ramo de Correos. (Colección de leyes y decretos. Año 1847, semestre 2, tomo L y D-10, pág. 233).

774- Ley N.° 90 de 29 de diciembre de 1847, Establece multa a deudores del fisco. (Colección de leyes y decretos. Año 1847, semestre 2, tomo L y D-10, pág. 249).

775- Ley N.° 91 de 26 de enero de 1848, Visa tasaciones de derechos juzgados primera instancia. (Colección de leyes y decretos. Año 1848, semestre 1, tomo L y D-10, pág. 251).

776- Ley N.° 92 de 25 de febrero de 1848, Crea cargo de gobernador comandante en Puntarenas. (Colección de leyes y decretos. Año 1848, semestre 1, tomo L y D-10, pág. 254).

777- Ley N.° 94 de 1 de marzo de 1848, Comunicado de su santidad Pío IX. (Colección de leyes y decretos. Año 1848, semestre 1, tomo L y D-10, pág. 258).

778- Ley N.° 97 de 26 de marzo de 1848, Estado de rebelión habitantes de Alajuela. (Colección de leyes y decretos. Año 1848, semestre 1, tomo L y D-10, pág. 272).

779- Ley N.° 95 de 29 de marzo de 1848, Suspende orden constitucional en Alajuela. (Colección de leyes y decretos. Año 1848, semestre 1, tomo L y D-10, pág. 269).

780- Ley N.° 96 de 29 de marzo de 1848, Ley marcial. (Colección de leyes y decretos. Año 1848, semestre 1, tomo L y D-10, pág. 271).

781- Ley N.° 101 de 30 de marzo de 1848, Dispone exequias del coronel Simón Orozco. (Colección de leyes y decretos. Año 1848, semestre 1, tomo L y D-10, pág. 278).

782- Ley N.° 99 de 30 de marzo de 1848, Previene recoger fusiles a alajuelenses. (Colección de leyes y decretos. Año 1848, semestre 1, tomo L y D-10, pág. 275).

783- Ley N.° 100 de 1 de abril de 1848, Concede pensión particular. (Colección de leyes y decretos. Año 1848, semestre 1, tomo L y D-10, pág. 277).

784- Ley N.° 103 de 13 de mayo de 1848, Suspende causa autores del levantamiento en Alajuela. (Colección de leyes y decretos. Año 1848, semestre 1, tomo L y D-10, pág. 285).

785- Ley N.° 106 de 16 de mayo de 1848, Señala fecha para instalar Congreso. (Colección de leyes y decretos. Año 1848, semestre 1, tomo L y D-10, pág. 290).

786- Ley N.° 105 de 16 de mayo de 1848, Restablece orden constitucional en todo el Estado. (Colección de leyes y decretos. Año 1848, semestre 1, tomo L y D-10, pág. 289).

787- Ley N.° 104 de 16 de mayo de 1848, Exime de contribución a propietarios de Alajuela. (Colección de leyes y decretos. Año 1848, semestre 1, tomo L y D-10, pág. 288).

788- Ley N.° 107 de 16 de mayo de 1848, Apertura de camino carretero al Atlántico. (Colección de leyes y decretos. Año 1848, semestre 1, tomo L y D-10, pág. 291).

789- Ley N.° 108 de 9 de junio de 1848, Subasta de licores en Guanacaste. (Colección de leyes y decretos. Año 1848, semestre 1, tomo L y D-10, pág. 293).

790- Ley N.° 111 de 21 de junio de 1848, Regula fábricas proveedoras de licores del país. (Colección de leyes y decretos. Año 1848, semestre 1, tomo L y D-10, pág. 302).

791- Ley N.° 112 de 23 de junio de 1848, Admite renuncia vicepresidente de la República. (Colección de leyes y decretos. Año 1848, semestre 1, tomo L y D-10, pág. 306).

792- Ley N.° 113 de 10 de julio de 1848, Establece juez en el Mineral del Aguacate. (Colección de leyes y decretos. Año 1848, semestre 2, tomo L y D-10, pág. 308).

793- Ley N.° 116 de 28 de julio de 1848, Ratifica convenio pago de daños. (Colección de leyes y decretos. Año 1848, semestre 2, tomo L y D-10, pág. 313).

794- Ley N.° 118 de 1 de agosto de 1848, Integración comisión permanente. (Colección de leyes y decretos. Año 1848, semestre 2, tomo L y D-10, pág. 315).

795- Ley N.° 119 de 1 de agosto de 1848, Suspende sesiones del Congreso. (Colección de leyes y decretos. Año 1848, semestre 2, tomo L y D-10, pág. 316).

796- Ley N.° 117 de 1 de agosto de 1848, Indemnización por animales al servicio del ejército. (Colección de leyes y decretos. Año 1848, semestre 2, tomo L y D-10, pág. 314).

797- Ley N.° 120 de 2 de agosto de 1848, Convoca al Congreso a sesión extraordinaria. (Colección de leyes y decretos. Año 1848, semestre 2, tomo L y D-10, pág. 317).

798- Ley N.° 121 de 4 de agosto de 1848, Comandante de Guanacaste asume funciones de auditor. (Colección de leyes y decretos. Año 1848, semestre 2, tomo L y D-10, pág. 317).

799- Ley N.° 122 de 7 de agosto de 1848, Horario de audiencias oficinas de Gobierno. (Colección de leyes y decretos. Año 1848, semestre 2, tomo L y D-10, pág. 318).

800- Ley N.° 124 de 8 de agosto de 1848, Abre sesiones extraordinarias. (Colección de leyes y decretos. Año 1848, semestre 2, tomo L y D-10, pág. 321).

801- Ley N.° 123 de 8 de agosto de 1848, Obligación de llevar copia de libros contables. (Colección de leyes y decretos. Año 1848, semestre 2, tomo L y D-10, pág. 320).

802.- Ley N.° 125 de 9 de agosto de 1848, Concede facultades al Poder Ejecutivo. (Colección de leyes y decretos. Año 1848, semestre 2, tomo L y D-10, pág. 322).

803- Ley N.° 126 de 9 de agosto de 1848, Clausura sesiones extraordinarias. (Colección de leyes y decretos. Año 1848, semestre 2, tomo L y D-10, pág. 323).

804- Ley N.° 128 de 11 de agosto de 1848, Faculta al resguardo ambulante capturar ebrios y vagos. (Colección de leyes y decretos. Año 1848, semestre 2, tomo L y D-10, pág. 324).

805- Ley N.° 114 de 20 de agosto de 1848, Declara electo magistrado. (Colección de leyes y decretos. Año 1848, semestre 2, tomo L y D-10, pág. 309).

806- Ley N.° 115 de 21 de agosto de 1848, Anula elección de vicepresidente. (Colección de leyes y decretos. Año 1848, semestre 2, tomo L y D-10, pág. 310).

807- Ley N.° 129 de 23 de agosto de 1848, Congreso declara vicepresidente a Manuel José Carazo. (Colección de leyes y decretos. Año 1848, semestre 2, tomo L y D-10, pág. 327).

808- Ley N.° 130 de 24 de agosto de 1848, Admite renuncia de vicepresidente Carazo. (Colección de leyes y decretos. Año 1848, semestre 2, tomo L y D-10, pág. 328).

809- Ley N.° 131 de 25 de agosto de 1848, Reforma Código General de Carrillo. (Colección de leyes y decretos. Año 1848, semestre 2, tomo L y D-10, pág. 329).

810- Ley N.° 134 de 31 de agosto de 1848, Reforma constitucional. (Colección de leyes y decretos. Año 1848, semestre 2, tomo L y D-10, pág. 336).

811- Ley N.° 135 de 1 de setiembre de 1848, Autoriza Municipalidad de San José disponer de fondos. (Colección de leyes y decretos. Año 1848, semestre 2, tomo L y D-10, pág. 338).

812- Ley N.° 141 de 12 de setiembre de 1848, Declara electo magistrado propietario. (Colección de leyes y decretos. Año 1848, semestre 2, tomo L y D-10, pág. 346).

813- Ley N.° 143 de 13 de setiembre de 1848, Deroga aumento al aguardiente. (Colección de leyes y decretos. Año 1848, semestre 2, tomo L y D-10, pág. 348).

814- Ley N.° 142 de 14 de setiembre de 1848, Competencia de vicaría eclesiástica. (Colección de leyes y decretos. Año 1848, semestre 2, tomo L y D-10, pág. 347).

815- Ley N.° 145 de 25 de setiembre de 1848, Concede gracia a deudores por dinero. (Colección de leyes y decretos. Año 1848, semestre 2, tomo L y D-10, pág. 352).

816- Ley N.° 146 de 28 de setiembre de 1848, Manda circular Libra Esterlina con valor de cinco Pesos. (Colección de leyes y decretos. Año 1848, semestre 2, tomo L y D-10, pág. 353).

817- Ley N.° 149 de 3 de octubre de 1848, Congreso suspende sesiones. (Colección de leyes y decretos. Año 1848, semestre 2, tomo L y D-10, pág. 362).

818- Ley N.° 148 de 3 de octubre de 1848, Suspende junta de caridad y nombra junta sustituta. (Colección de leyes y decretos. Año 1848, semestre 2, tomo L y D-10, pág. 357).

819- Ley N.° 154 de 6 de noviembre de 1848, Exhumación de restos del general Morazán. (Colección de leyes y decretos. Año 1848, semestre 2, tomo L y D-10, pág. 368).

820- Ley N.° 153 de 6 de noviembre de 1848, Dispone trasladar restos de Manuel Aguilar. (Colección de leyes y decretos. Año 1848, semestre 2, tomo L y D-10, pág. 367).

821- Ley N.° 152 de 6 de noviembre de 1848, Dispone trasladar restos de Braulio Carrillo. (Colección de leyes y decretos. Año 1848, semestre 2, tomo L y D-10, pág. 365).

822- Ley N.° 155 de 15 de noviembre de 1848, Concede pensión particular. (Colección de leyes y decretos. Año 1848, semestre 2, tomo L y D-10, pág. 373).

823- Ley N.° 157 de 15 de noviembre de 1848, Deroga prohibición salida sin pasaporte. (Colección de leyes y decretos. Año 1848, semestre 2, tomo L y D-10, pág. 376).

824- Ley N.° 156 de 15 de noviembre de 1848, Indulta reos políticos de Alajuela. (Colección de leyes y decretos. Año 1848, semestre 2, tomo L y D-10, pág. 374).

825- Ley N.° 158 de 17 de noviembre de 1848, Ratifica indultos del Poder Ejecutivo. (Colección de leyes y decretos. Año 1848, semestre 2, tomo L y D-10, pág. 377).

826- Ley N.° 160 de 22 de noviembre de 1848, Rebaja base del remate de licores en Guanacaste. (Colección de leyes y decretos. Año 1848, semestre 2, tomo L y D-10, pág. 409).

827- Ley N.° 161 de 27 de noviembre de 1848, Concede indulto. (Colección de leyes y decretos. Año 1848, semestre 2, tomo L y D-10, pág. 410).

828- Ley N.° 24 de 30 de noviembre de 1848, Obliga propietarios comprar tierras cría ganado. (Colección de leyes y decretos. Año 1824, semestre 2, tomo L y D-1, pág. 46).

829- Ley N.° 162 de 30 de noviembre de 1848, Traspasa administración marítima a gobernación Puntarenas. (Colección de leyes y decretos. Año 1848, semestre 2, tomo L y D-10, pág. 411).

830- Ley N.° 163 de 1 de diciembre de 1848, Declara electo magistrado suplente. (Colección de leyes y decretos. Año 1848, semestre 2, tomo L y D-10, pág. 412).
831- Ley N.° 164 de 1 de diciembre de 1848, Disposiciones sobre reforma a Constitución de 1847. (Colección de leyes y decretos. Año 1848, semestre 2, tomo L y D-10, pág. 413).

832- Ley N.° 165 de 5 de diciembre de 1848, Continuidad del Poder Ejecutivo y Tribunal de Justicia. (Colección de leyes y decretos. Año 1848, semestre 2, tomo L y D-10, pág. 414).

833- Ley N.° 166 de 7 de diciembre de 1848, Vigencia de leyes no opuestas a la Constitución 1848. (Colección de leyes y decretos. Año 1848, semestre 2, tomo L y D-10, pág. 416).

834- Ley N.° 170 de 19 de diciembre de 1848. Adquisición derecho de propiedad terrenos de pueblos. (Colección de leyes y decretos. Año 1848, semestre 2, tomo L y D-10, pág. 453).

835- Ley N.° 169 de 20 de diciembre de 1848, Ley reglamentaria de elecciones para las supremas autoridades de la República. (Colección de leyes y decretos. Año 1848, semestre 2, tomo L y D-10, pág. 422).

836- Ley N.° 172 de 26 de diciembre de 1848, Suprime plaza inspector general de vacuna. (Colección de leyes y decretos. Año 1848, semestre 2, tomo L y D-10, pág. 464).

837- Ley N.° 1 de 2 de enero de 1849, Faculta municipalidades Heredia y Barba vender ejidos. (Colección de leyes y decretos. Año 1849, semestre 1, tomo L y D-11, pág. 1).

838- Ley N.° 2 de 2 de enero de 1849, Cierre sesiones Congreso Nacional. (Colección de leyes y decretos. Año 1849, semestre 1, tomo L y D-11, pág. 7).

839- Ley N.° 178 de 4 de enero de 1849, Ley del régimen político de provincias. (Colección de leyes y decretos. Año 1848, semestre 2, tomo L y D-10, pág. 465).

840- Ley N.° 173 de 4 de enero de 1849, Régimen político provincias. (Colección de leyes y decretos. Año 1849, semestre 2, tomo L y D-10, pág. 465).

841- Ley N.° 3 de 17 de enero de 1849, Crea cátedra Farmacia Universidad de Santo Tomás. (Colección de leyes y decretos. Año 1849, semestre 1, tomo L y D-11, pág. 9).

842- Ley N.° 4 de 23 de enero de 1849, Suprime resguardo de la Angostura. (Colección de leyes y decretos. Año 1849, semestre 1, tomo L y D-11, pág. 12).

843- Ley N.° 5 de 7 de febrero de 1849, Suspende jubilaciones empleados públicos. (Colección de leyes y decretos. Año 1849, semestre 1, tomo L y D-11, pág. 13).

844- Ley N.° 7 de 14 de febrero de 1849, Riberas río Sarapiquí para ubicación casas y cementeras. (Colección de leyes y decretos. Año 1849, semestre 1, tomo L y D-11, pág. 16).

845- Ley N.° 9 de 8 de marzo de 1849, Entrega de bestias perdidas ante gobernación respectiva. (Colección de leyes y decretos).

846- Ley N.° 10 de 9 de abril de 1849, Suspende efectos decreto 2 de 9 febrero presente año. (Colección de leyes y decretos. Año 1849, semestre 1, tomo L y D-11, pág. 20).

847- Ley N.° 11 de 20 de abril de 1849, Suspende Ley 40 19 diciembre 1848 prohibición ventas ambulantes. (Colección de leyes y decretos. Año 1849, semestre 1, tomo L y D-11, pág. 20).

848- Ley N.° 13 de 1 de mayo de 1849, Congreso declara primer período constitucional. (Colección de leyes y decretos. Año 1849, semestre 1, tomo L y D-11, pág. 22).

849- Ley N.° 14 de 12 de mayo de 1849, Legal comercio tabaco chircagre y patentes para siembra. (Colección de leyes y decretos. Año 1849, semestre 1, tomo L y D-11, pág. 23).

850- Ley N.° 15 de 29 de mayo de 1849, Interpreta Art. 1101 del Código Civil. (Colección de leyes y decretos. Año 1849, semestre 1, tomo L y D-11, pág. 29).

851- Ley N.° 17 de 8 de junio de 1849, Aprueba actos cartera Relaciones y Gobernación. (Colección de leyes y decretos. Año 1849, semestre 1, tomo L y D-11, pág. 55).

852- Ley N.° 18 de 21 de junio de 1849, Aprueba actos Ministerio de Hacienda Guerra y Marina. (Colección de leyes y decretos. Año 1849, semestre 1, tomo L y D-11, pág. 57).

853- Ley N.° 19 de 28 de junio de 1849, Reglamenta cultivo y beneficio del tabaco. (Colección de leyes y decretos. Año 1849, semestre 1, tomo L y D-11, pág. 58).

854- Ley N.° 25 de 4 de julio de 1849, Dicta reglas introducción artículos estancados. (Colección de leyes y decretos. Año 1849, semestre 2, tomo L y D-11, pág. 70).

855- Ley N.° 22 de 5 de julio de 1849, Intendencia general asume Juzgado de Hacienda. (Colección de leyes y decretos. Año 1849, semestre 2, tomo L y D-11, pág. 65).

856- Ley N.° 20 de 5 de julio de 1849, Adiciona ley elecciones N.° 38 de 19 octubre 1848. (Colección de leyes y decretos. Año 1849, semestre 2, tomo L y D-11, pág. 59).

857- Ley N.° 23 de 5 de julio de 1849, Reglas importación ganado vacuno. (Colección de leyes y decretos. Año 1849, semestre 2, tomo L y D-11, pág. 66).

858- Ley N.° 26 de 11 de julio de 1849, Regula arrendamiento tierras ejidos provincia Heredia. (Colección de leyes y decretos. Año 1849, semestre 2, tomo L y D-11, pág. 76).

859- Ley N.° 30 de 17 de julio de 1849, Concesión apertura canal fluvial en río Barranca. (Colección de leyes y decretos. Año 1849, semestre 2, tomo L y D-11, pág. 81).

860- Ley N.° 32 de 19 de julio de 1849, Prohíbe circulación moneda macuquina. (Colección de leyes y decretos. Año 1849, semestre 2, tomo L y D-11, pág. 85).

861- Ley N.° 31 de 20 de julio de 1849, Integración comisión permanente. (Colección de leyes y decretos. Año 1849, semestre 2, tomo L y D-11, pág. 85).

862- Ley N.° 34 de 20 de julio de 1849, Designa ley y peso moneda oro y plata acuño nacional. (Colección de leyes y decretos. Año 1849, semestre 2, tomo L y D-11, pág. 88).

863- Ley N.° 33 de 20 de julio de 1849, Premio por apertura de vereda entre Puntarenas y Sarapiquí. (Colección de leyes y decretos. Año 1849, semestre 2, tomo L y D-11, pág. 87).

864- Ley N.° 36 de 23 de julio de 1849, Cierre sesiones ordinarias Congreso Nacional. (Colección de leyes y decretos. Año 1849, semestre 2, tomo L y D-11, pág. 138).

865- Ley N.° 40 de 13 de agosto de 1849, Amplía término cambio moneda macuquina. (Colección de leyes y decretos. Año 1849, semestre 2, tomo L y D-11, pág. 146).

866- Ley N.° 42 de 24 de agosto de 1849, Reglamenta venta mercaderías en plazas y calles. (Colección de leyes y decretos. Año 1849, semestre 2, tomo L y D-11, pág. 150).

867- Ley N.° 43 de 24 de agosto de 1849, Fija precio aguardiente. (Colección de leyes y decretos. Año 1849, semestre 2, tomo L y D-11, pág. 152).

868- Ley N.° 44 de 10 de setiembre de 1849, Suspende decreto sobre uso papel sellado. (Colección de leyes y decretos. Año 1849, semestre 2, tomo L y D-11, pág. 153).

869- Ley N.° 45 de 25 de setiembre de 1849, Convoca Congreso sesiones extraordinarias. (Colección de leyes y decretos. Año 1849, semestre 2, tomo L y D-11, pág. 157).

870- Ley N.° 46 de 2 de octubre de 1849, Abre sesiones extraordinarias el Congreso. (Colección de leyes y decretos. Año 1849, semestre 2, tomo L y D-11, pág. 157).

871- Ley N.° 47 de 4 de octubre de 1849, Reglamento orgánico de instrucción pública. (Colección de leyes y decretos. Año 1849, semestre 2, tomo L y D-11, pág. 158).

872- Ley N.° 50 de 16 de octubre de 1849, Aprueba contrato de colonización con ciudadano francés. (Colección de leyes y decretos. Año 1849, semestre 2, tomo L y D-11, pág. 218).

873- Ley N.° 49 de 26 de octubre de 1849, Aprueba providencias dictadas por el Poder Ejecutivo. (Colección de leyes y decretos. Año 1849, semestre 2, tomo L y D-11, pág. 217).

874- Ley N.° 48 de 26 de octubre de 1849, Admite renuncia vicepresidente Manuel José Carazo. (Colección de leyes y decretos. Año 1849, semestre 2, tomo L y D-11, pág. 216).

875- Ley N.° 52 de 30 de octubre de 1849, ordena devolver bestias tomadas para el ejército. (Colección de leyes y decretos. Año 1849, semestre 2, tomo L y D-11, pág. 219).

876- Ley N.° 53 de 7 de noviembre de 1849, Crea interinamente un juzgado especial de Hacienda. (Colección de leyes y decretos. Año 1849, semestre 2, tomo L y D-11, pág. 221).

877- Ley N.° 55 de 19 de noviembre de 1849, Nombra nuevo integrante comisión permanente. (Colección de leyes y decretos. Año 1849, semestre 2, tomo L y D-11, pág. 223).

878- Ley N.° 54 de 19 de noviembre de 1849, Aprueba capitulaciones sobre canal interoceánico. (Colección de leyes y decretos. Año 1849, semestre 2, tomo L y D-11, pág. 222).

879- Ley N.° 58 de 22 de noviembre de 1849, Habilita moneda de a real y de medio. (Colección de leyes y decretos. Año 1849, semestre 2, tomo L y D-11, pág. 226).

880- Ley N.° 61 de 11 de diciembre de 1849, Restablece derechos políticos a ciudadanos. (Colección de leyes y decretos. Año 1849, semestre 2, tomo L y D-11, pág. 232).

881- Ley N.° 64 de 28 de diciembre de 1849, Inspección escuelas a cargo de jefes políticos. (Colección de leyes y decretos. Año 1849, semestre 2, tomo L y D-11, pág. 236).

882- Ley N.° 65 de 4 de enero de 1850, Determina y regula número puestos ventas de licores. (Colección de leyes y decretos. Año 1850, semestre 1, tomo L y D-11, pág. 239).

883- Ley N.° 66 de 18 de enero de 1850, Restablece derechos políticos a ciudadanos. (Colección de leyes y decretos. Año 1850, semestre 1, tomo L y D-11, pág. 241).

884- Ley N.° 67 de 30 de enero de 1850, Restablece derechos políticos a ciudadanos. (Colección de leyes y decretos. Año 1850, semestre 1, tomo L y D-11, pág. 241).

885- Ley N.° 69 de 31 de enero de 1850, Crea y establece inspector fábricas de licores. (Colección de leyes y decretos. Año 1850, semestre 1, tomo L y D-11, pág. 244).

886- Ley N.° 70 de 4 de febrero de 1850, Clausura sesiones extraordinarias del Congreso. (Colección de leyes y decretos. Año 1850, semestre 1, tomo L y D-11, pág. 246).

887- Ley N.° 71 de 8 de febrero de 1850, Dicta reglas exportación café. (Colección de leyes y decretos. Año 1850, semestre 1, tomo L y D-11, pág. 246).

888- Ley N.° 73 de 11 de marzo de 1850, Determina medida para licor nacional. (Colección de leyes y decretos. Año 1850, semestre 1, tomo L y D-11, pág. 259).

889- Ley N.° 74 de 9 de abril de 1850, Modo valuar tierras baldías que se denuncian. (Colección de leyes y decretos. Año 1850, semestre 1, tomo L y D-11, pág. 262).

890- Ley N.° 75 de 10 de abril de 1850, Reglamenta funciones empleados Aduana de Puntarenas. (Colección de leyes y decretos. Año 1850, semestre 1, tomo L y D-11, pág. 264).

891- Ley N.° 76 de 10 de mayo de 1850, Declara cesación funcionarios Corte Suprema Justicia. (Colección de leyes y decretos. Año 1850, semestre 1, tomo L y D-11, pág. 265).

892- Ley N.° 77 de 12 de mayo de 1850, Reglamento para el alumbrado y serenos de la ciudad de San José. (Colección de leyes y decretos. Año 1850, semestre 1, tomo L y D-11, pág. 267).

893- Ley N.° 78 de 15 de mayo de 1850, Nombra magistrado Corte Suprema de Justicia. (Colección de leyes y decretos. Año 1850, semestre 1, tomo L y D-11, pág. 279).

894- Ley N.° 79 de 24 de mayo de 1850, Aprueba memoria Relaciones Exteriores. (Colección de leyes y decretos. Año 1850, semestre 1, tomo L y D-11, pág. 282).

895- Ley N.° 80 de 10 de junio de 1850, Concluye causa por conspiración y condena autores. (Colección de leyes y decretos. Año 1850, semestre 1, tomo L y D-11, pág. 282).

896- Ley N.° 81 de 13 de junio de 1850, Reforma Código General de Carrillo. (Colección de leyes y decretos. Año 1850, semestre 1, tomo L y D-11, pág. 285).

897- Ley N.° 82 de 15 de junio de 1850, Contrato camino y navegación río Sarapiquí. (Colección de leyes y decretos. Año 1850, semestre 1, tomo L y D-11, pág. 286).

898- Ley N.° 83 de 15 de junio de 1850, Contrato vía interoceánica Golfo Dulce y Bocas del Toro. (Colección de leyes y decretos. Año 1850, semestre 1, tomo L y D-11, pág. 287).

899- Ley N.° 85 de 21 de junio de 1850, Restablece derechos políticos a ciudadanos alajuelenses. (Colección de leyes y decretos. Año 1850, semestre 1, tomo L y D-11, pág. 294).

900- Ley N.° 87 de 28 de junio de 1850, Autoriza compañía camino carretera puerto de Moín. (Colección de leyes y decretos. Año 1850, semestre 1, tomo L y D-11, pág. 296).

901- Ley N.° 88 de 5 de julio de 1850, Concede incentivos al cultivo del cacao. (Colección de leyes y decretos. Año 1850, semestre 2, tomo L y D-11, pág. 299).

902- Ley N.° 89 de 9 de julio de 1850, Aprueba memoria Hacienda Guerra Marina. (Colección de leyes y decretos. Año 1850, semestre 2, tomo L y D-11, pág. 301).

903- Ley N.° 91 de 9 de julio de 1850, Restablece cargo de 2° contador de la Contaduría Mayor. (Colección de leyes y decretos. Año 1850, semestre 2, tomo L y D-11, pág. 303).

904- Ley N.° 90 de 10 de julio de 1850, Regula caso animales perdidos presentados a la policía. (Colección de leyes y decretos. Año 1850, semestre 2, tomo L y D-11, pág. 302).

905- Ley N.° 92 de 15 de julio de 1850, Deroga Ley 80 de 8 de julio 1846 estanco licores importados. (Colección de leyes y decretos. Año 1850, semestre 2, tomo L y D-11, pág. 304).

906- Ley N.° 94 de 15 de julio de 1850, Nombra miembros comisión permanente. (Colección de leyes y decretos. Año 1850, semestre 2, tomo L y D-11, pág. 307).

907- Ley N.° 95 de 15 de julio de 1850, Prorroga sesiones ordinarias Congreso. (Colección de leyes y decretos. Año 1850, semestre 2, tomo L y D-11, pág. 308).

908- Ley N.° 96 de 18 de julio de 1850, Organiza administración ramo aguardiente. (Colección de leyes y decretos. Año 1850, semestre 2, tomo L y D-11, pág. 309).

909- Ley N.° 98 de 29 de agosto de 1850, Previene falsificación vales o billetes nacionales. (Colección de leyes y decretos. Año 1850, semestre 2, tomo L y D-11, pág. 328).

910- Ley N.° 99 de 2 de setiembre de 1850, Libera siembra del tabaco y concentra destilación licor. (Colección de leyes y decretos. Año 1850, semestre 2, tomo L y D-11, pág. 331).

911- Ley N.° 101 de 25 de setiembre de 1850, Reglamento de licores del país. (Colección de leyes y decretos. Año 1850, semestre 2, tomo L y D-11, pág. 337).

912- Ley N.° 103 de 4 de octubre de 1850, Reforma Código General de Carrillo. (Colección de leyes y decretos. Año 1850, semestre 2, tomo L y D-11, pág. 347).

913- Ley N.° 104 de 10 de octubre de 1850, Dispone ceremonial iglesias cuando acudan altas autoridades. (Colección de leyes y decretos. Año 1850, semestre 2, tomo L y D-11, pág. 350).

914- Ley N.° 105 de 24 de octubre de 1850, Habilita menor para administrar bienes. (Colección de leyes y decretos. Año 1850, semestre 2, tomo L y D-11, pág. 353).

915- Ley N.° 107 de 18 de noviembre de 1850, Convoca al Congreso a sesiones extraordinarias. (Colección de leyes y decretos. Año 1850, semestre 2, tomo L y D-11, pág. 356).

916- Ley N.° 108 de 22 de noviembre de 1850, Medidas conclusión contrato apertura canal interoceánico. (Colección de leyes y decretos. Año 1850, semestre 2, tomo L y D-11, pág. 359).

917- Ley N.° 110 de 2 de diciembre de 1850, Reglamenta milicias de la República. (Colección de leyes y decretos. Año 1850, semestre 2, tomo L y D-11, pág. 363).

918- Ley N.° 111 de 4 de diciembre de 1850, Permite importación de cognac. (Colección de leyes y decretos. Año 1850, semestre 2, tomo L y D-11, pág. 375).

919- Ley N.° 1 de 3 de enero de 1851, Patentes para tiendas y truchas. (Colección de leyes y decretos).

920- Ley N.° 2 de 17 de enero de 1851, Constituye compañía abrir camino Puntarenas San Carlos. (Colección de leyes y decretos).

921- Ley N.° 4 de 19 de mayo de 1851, Aprueba memoria de Relaciones Exteriores y Gobernación. (Colección de leyes y decretos. Año 1851, semestre 1, tomo L y D-12, pág. 20).

922- Ley N.° 6 de 23 de mayo de 1851, Rechaza acusación contra ministro de Hacienda y Guerra. (Colección de leyes y decretos. Año 1851, semestre 1, tomo L y D-12, pág. 22).

923- Ley N.° 8 de 27 de mayo de 1851, Aprueba memoria de Hacienda. (Colección de leyes y decretos. Año 1851, semestre 1, tomo L y D-12, pág. 25).

924- Ley N.° 7 de 28 de mayo de 1851, Número de suplentes para Corte Suprema de Justicia. (Colección de leyes y decretos. Año 1851, semestre 1, tomo L y D-12, pág. 23).

925- Ley N.° 9 de 4 de junio de 1851, Nombra magistrados suplentes para Corte de Justicia. (Colección de leyes y decretos. Año 1851, semestre 1, tomo L y D-12, pág. 25).

926- Ley N.° 10 de 9 de junio de 1851, Interpretación auténtica del Reglamento de Policía (art. 213). (Colección de leyes y decretos. Año 1851, semestre 1, tomo L y D-12, pág. 26).

927- Ley N.° 11 de 18 de junio de 1851, Fondos píos para obras de iglesia matriz de obispado. (Colección de leyes y decretos. Año 1851, semestre 1, tomo L y D-12, pág. 27).

928- Ley N.° 12 de 18 de junio de 1851, Codificación de leyes en cuerpo de derecho patrio. (Colección de leyes y decretos. Año 1851, semestre 1, tomo L y D-12, pág. 28).

929- Ley N.° 13 de 18 de junio de 1851, Reforma Código General de Carrillo. (Colección de leyes y decretos. Año 1851, semestre 1, tomo L y D-12, pág. 30).

930- Ley N.° 14 de 23 de junio de 1851, Ref. sobre cultivo libre de tabaco. (Colección de leyes y decretos. Año 1851, semestre 1, tomo L y D-12, pág. 31).

931- Ley N.°15 de 1 de julio de 1851, Prórroga de sesiones legislativas ordinarias. (Colección de leyes y decretos. Año 1851, semestre 2, tomo L y D-12, pág. 33).

932- Ley N.° 17 de 1 de julio de 1851, Admite renuncias de magistrados propietarios y suplentes. (Colección de leyes y decretos. Año 1851, semestre 2, tomo L y D-12, pág. 36).

933- Ley N.° 16 de 3 de julio de 1851, Reintegro por confiscación de bienes a ensayador de moneda. (Colección de leyes y decretos. Año 1851, semestre 2, tomo L y D-12, pág. 34).

934- Ley N.° 18 de 4 de julio de 1851, Nombra magistrados propietarios y suplentes. (Colección de leyes y decretos. Año 1851, semestre 2, tomo L y D-12, pág. 36).

935- Ley N.° 19 de 4 de julio de 1851, Pago por proyecto de ley constitutiva de justicia. (Colección de leyes y decretos. Año 1851, semestre 2, tomo L y D-12, pág. 37).

936- Ley N.° 27 de 11 de julio de 1851, Reparación de camino a Nicaragua y Junta en Guanacaste. (Colección de leyes y decretos. Año 1851, semestre 2, tomo L y D-12, pág. 49).

937- Ley N.° 22 de 18 de julio de 1851, Reglas para quienes se reciban de abogados. (Colección de leyes y decretos. Año 1851, semestre 2, tomo L y D-12, pág. 41).

938- Ley N.° 30 de 21 de julio de 1851, Refunde administración de licores de San José. (Colección de leyes y decretos. Año 1851, semestre 2, tomo L y D-12, pág. 53).

939- Ley N.° 21 de 28 de julio de 1851, Indica el sueldo de miembros de Corte de Justicia. (Colección de leyes y decretos. Año 1851, semestre 2, tomo L y D-12, pág. 40).

940- Ley N.° 25 de 28 de julio de 1851, Nombra magistrado suplente. (Colección de leyes y decretos. Año 1851, semestre 2, tomo L y D-12, pág. 47).

941- Ley N.° 26 de 28 de julio de 1851, Reforma Código General de Carrillo. (Colección de leyes y decretos. Año 1851, semestre 2, tomo L y D-12, pág. 48).

942- Ley N.° 20 de 28 de julio de 1851, Fondos para Compañía Empresaria del Norte. (Colección de leyes y decretos. Año 1851, semestre 2, tomo L y D-12, pág. 39).

943- Ley N.° 23 de 28 de julio de 1851, Otorga terrenos en baldíos nacionales a labradores. (Colección de leyes y decretos. Año 1851, semestre 2, tomo L y D-12, pág. 43).

944- Ley N.° 24 de 28 de julio de 1851, Reforma Código General de Carrillo. (Colección de leyes y decretos. Año 1851, semestre 2, tomo L y D-12, pág. 46).

945- Ley N.° 29 de 28 de julio de 1851, Señala representantes que han concluido su mandato. (Colección de leyes y decretos. Año 1851, semestre 2, tomo L y D-12, pág. 52).

946- Ley N.° 28 de 28 de julio de 1851, Designa miembros de comisión permanente. (Colección de leyes y decretos. Año 1851, semestre 2, tomo L y D-12, pág. 51).

947- Ley N.° 32 de 4 de setiembre de 1851, Convocatoria extraordinaria Congreso Nacional. (Colección de leyes y decretos. Año 1851, semestre 2, tomo L y D-1, pág. 57).

948- Ley N.° 33 de 11 de setiembre de 1851, Suprime resguardos licor y crea uno militar en Fanal. (Colección de leyes y decretos. Año 1851, semestre 2, tomo L y D-12, pág. 59).

949- Ley N.° 34 de 25 de setiembre de 1851, Administración rescates debe acatar reglamento Hacienda. (Colección de leyes y decretos. Año 1851, semestre 2, tomo L y D-12, pág. 64).

950- Ley N.° 35 de 30 de setiembre de 1851, Refunde administración licores Esparza en la General. (Colección de leyes y decretos. Año 1851, semestre 2, tomo L y D-1, pág. 66).

951- Ley N.° 36 de 15 de octubre de 1851, Crea inspector de tesorerías y administración rentas. (Colección de leyes y decretos. Año 1851, semestre 2, tomo L y D-12, pág. 69).

952- Ley N.° 38 de 15 de octubre de 1851, Permite compañía de sarapiquí para camino al Atlántico. (Colección de leyes y decretos. Año 1851, semestre 2, tomo L y D-12, pág. 69).

953- Ley N.° 37 de 22 de octubre de 1851, Circulación por valor nominal monedas oro extranjeras. (Colección de leyes y decretos. Año 1851, semestre 2, tomo L y D-1, pág. 74).

954- Ley N.° 39 de 6 de noviembre de 1851, Agrega provisionalmente Esparza a Puntarenas. (Colección de leyes y decretos. Año 1851, semestre 2, tomo L y D-1, pág. 82).

955- Ley N.° 40 de 10 de noviembre de 1851, Deroga derecho de resguardo. Cobro derechos marítimos. (Colección de leyes y decretos. Año 1851, semestre 2, tomo L y D-12, pág. 84).

956- Ley N.° 42 de 10 de noviembre de 1851, Funciones de jefes políticos cantonales como síndicos. (Colección de leyes y decretos. Año 1851, semestre 2, tomo L y D-12, pág. 88).

957- Ley N.° 41 de 14 de noviembre de 1851, Ref. sobre compañía Sarapiquí para vía al Atlántico. (Colección de leyes y decretos. Año 1851, semestre 2, tomo L y D-12, pág. 85).

958- Ley N.° 43 de 10 de diciembre de 1851, Recoge y amortiza moneda circulante horadada. (Colección de leyes y decretos. Año 1851, semestre 2, tomo L y D-1, pág. 89).

959- Ley N.° 45 de 8 de enero de 1852, Ejecutivo convoca a sesiones extraordinarias Congreso. (Colección de leyes y decretos. Año 1852, semestre 1, tomo L y D-1, pág. 93).

960- Ley N.° 47 de 26 de enero de 1852, Concesiones sociedad construirá camino a San Carlos. (Colección de leyes y decretos. Año 1852, semestre 1, tomo L y D-1, pág. 95).

961- Ley N.° 48 de 30 de enero de 1852, Poder Ejecutivo disuelve Congreso Nacional. (Colección de leyes y decretos. Año 1852, semestre 1, tomo L y D-12, pág. 96).

962- Ley N.° 51 de 26 de febrero de 1852, Margen de tierra a empresa que abre vía a Limón. (Colección de leyes y decretos. Año 1852, semestre 1, tomo L y D-12, pág. 122).

963- Ley N.° 54 de 17 de marzo de 1852, Ref. Rango de escritos parroquiales en papel sellado. (Colección de leyes y decretos. Año 1852, semestre 1, tomo L y D-12, pág. 131).

964- Ley N.° 55 de 23 de marzo de 1852, Reforma reglamento de Policía (art. 172 sobre diversiones públicas). (Colección de leyes y decretos. Año 1852, semestre 1, tomo L y D-12, pág. 132).

965- Ley N.° 56 de 24 de marzo de 1852, Obligaciones de tesorero y contador de Junta Cartago. (Colección de leyes y decretos. Año 1852, semestre 1, tomo L y D-12, pág. 133).

966- Ley N.° 57 de 20 de abril de 1852, Elige funcionarios de Corte Suprema Justicia. (Colección de leyes y decretos. Año 1852, semestre 1, tomo L y D-12, pág. 134).

967- Ley N.° 58 de 17 de mayo de 1852, Nombra magistrado suplente. (Colección de leyes y decretos. Año 1852, semestre 1, tomo L y D-12, pág. 136).

968- Ley N.° 59 de 26 de mayo de 1852, Reforma Código General de Carrillo. (Colección de leyes y decretos. Año 1852, semestre 1, tomo L y D-12, pág. 137).

969- Ley N.° 60 de 4 de junio de 1852, Aprueba memoria de Relaciones Exteriores e Interior. (Colección de leyes y decretos. Año 1852, semestre 1, tomo L y D-12, pág. 138).

970- Ley N.° 61 de 8 de junio de 1852, Aprueba memoria de Hacienda, Guerra y Marina. (Colección de leyes y decretos. Año 1852, semestre 1, tomo L y D-12, pág. 139).

971- Ley N.° 62 de 11 de junio de 1852, Agradece y otorga pensión a particular. (Colección de leyes y decretos. Año 1852, semestre 1, tomo L y D-12, pág. 140).

972- Ley N.° 64 de 11 de junio de 1852, Organiza oficina de administración principal. (Colección de leyes y decretos. Año 1852, semestre 1, tomo L y D-12, pág. 143).

973- Ley N.° 63 de 11 de junio de 1852, Monto de costas en apelación verbal 1era. instancia. (Colección de leyes y decretos. Año 1852, semestre 1, tomo L y D-12, pág. 142).

974- Ley N.° 65 de 16 de junio de 1852, Contrato de colonización por compañía Bülow de Berlín. (Colección de leyes y decretos. Año 1852, semestre 1, tomo L y D-12, pág. 145).

975- Ley N.° 68 de 28 de junio de 1852, Designa miembros de comisión permanente. (Colección de leyes y decretos. Año 1852, semestre 1, tomo L y D-12, pág. 148).

976- Ley N.° 74 de 1 de julio de 1852, Auxilio anual a instrucción primaria. (Colección de leyes y decretos. Año 1852, semestre 2, tomo L y D-12, pág. 156).

977- Ley N.° 71 de 1 de julio de 1852, Monto de gastos extraordinarios del presidente. (Colección de leyes y decretos. Año 1852, semestre 2, tomo L y D-12, pág. 153).

978- Ley N.° 76 de 1 de julio de 1852, Poder Ejecutivo puede crear fondos en pueblos. (Colección de leyes y decretos. Año 1852, semestre 2, tomo L y D-12, pág. 158).

979- Ley N.° 75 de 1 de julio de 1852, Reparación de caminos nacionales interiores. (Colección de leyes y decretos. Año 1852, semestre 2, tomo L y D-12, pág. 157).

980- Ley N.° 73 de 1 de julio de 1852, Exención de servir en cargos concejiles o lucrativos. (Colección de leyes y decretos. Año 1852, semestre 2, tomo L y D-12, pág. 155).

981- Ley N.° 53 de 17 de marzo 1852, Construcción de faro o torre de luz en Puntarenas. (Colección de leyes y decretos. Año 1852, semestre 1, tomo L y D-12, pág. 129).

982- Ley N.° 117 de 6 de julio de 1853, Contrato de navegación por vapor en costas nacionales. (Colección de leyes y decretos. Año 1853, semestre 2, tomo L y D-12, pág. 256).

983- Ley N.° 70 de 1 de julio de 1853, Normas en anotación por notario de hipotecas. (Colección de leyes y decretos. Año 1852, semestre 2, tomo L y D-12, pág. 152).

984- Ley N.° 77 de 12 de julio de 1852, Término de expiración en contratos de maderas. (Colección de leyes y decretos. Año 1852, semestre 2, tomo L y D-12, pág. 159).

985- Ley N.° 78 de 27 de julio de 1852, Suspende normas sobre jefes políticos. (Colección de leyes y decretos. Año 1852, semestre 2, tomo L y D-12, pág. 162).

986- Ley N.° 56 de 20 de noviembre de 1857, Establecimiento de fábrica de fundición de hierro. (Colección de leyes y decretos. Año 1857, semestre 2, tomo L y D-14, pág. 197).

987- Ley N.° 124 de 11 de julio de 1853, División de carretera de Cartago a Puntarenas. (Colección de leyes y decretos. Año 1853, semestre 2, tomo L y D-12, pág. 264).

988- Ley N.° 1 de 1 de mayo de 1862, Levanta destierro a presos políticos. (Colección de leyes y decretos. Año 1862, semestre 1, tomo L y D-17, pág. 87).

989- Ley N.° 18 de 30 de julio de 1863, Establece casa de reclusión cárcel de mujeres. (Colección de leyes y decretos. Año 1863, semestre 2, tomo L y D-18, pág. 32).

990- Ley N.° 55 de 30 de julio de 1887, Prórroga contrato de navegación en el Pacífico. (Colección de leyes y decretos. Año 1887, semestre 2, tomo L y D-2, pág. 123).

991- Ley N.° 18 de 21 de diciembre de 1887, Autoriza gastos de arbitraje de límite con Nicaragua. (Colección de leyes y decretos. Año 1887, semestre 2, tomo L y D-2, pág. 589).

992- Ley N.° 22 de 28 de noviembre de 1900, Convenio construcción del ferrocarril al Pacífico. (Colección de leyes y decretos. Año 1900, semestre 2, tomo L y D-2, pág. 335).

993- Ley N.° 34 de 18 de julio de 1902, Permite juego de gallos en cabeceras cantón y los domingos y feriados. (Colección de leyes y decretos. Año 1902, semestre 2, tomo L y D-1, pág. 63).

994- Ley N.° 17 de 24 de noviembre de 1906, Remate de lotes, Municipalidad de Bagaces. (Colección de leyes y decretos. Año 1906, semestre 2, tomo L y D-2, pág. 745).

995- Ley N.° 43 de 5 de agosto de 1908, Construcción de cañerías de San Juan y San Vicente San José. (Colección de leyes y decretos. Año 1908, semestre 2, tomo L y D-1, pág. 120).

996- Ley N.° 59 de 16 de agosto de 1910, Empréstito a Municipalidad de Puntarenas para cañerías. (Colección de leyes y decretos. Año 1910, semestre 2, tomo L y D-2, pág. 335).

ARTÍCULO 2- La derogación de las normas señaladas en los artículos de esta ley no afectará los intereses individuales, derechos subjetivos, derechos patrimoniales, intereses colectivos o situaciones jurídicas consolidadas a las cuales estas hayan dado lugar.

Dichas derogaciones no pueden ser aplicadas con efecto retroactivo de forma tal que puedan afectar los derechos de las personas. Asimismo, no eximen al Estado o a los entes públicos de obligaciones adquiridas que se hayan establecido en dichas normas.

Igualmente, esas derogaciones no afectarán las reformas, abrogaciones o derogaciones que hayan efectuado sobre la legislación posterior que esté vigente, pues se entiende que dichas modificaciones han quedado incorporadas y forman parte del contenido de las normas afectadas, todo ello de acuerdo con los artículos 34 y 129 de la Constitución Política de 1949, y los artículos del 8 al 16, ambos inclusive, del Código Civil de 1887.

Rige a partir de su publicación.

Dragos Dolanescu Valenciano
Diputado

NOTA: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos.

1 vez.—(IN2018300252).

MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 6 Y 22 Y ADICIÓN DE LOS ARTÍCULOS 6 BIS, 6 TER, 6 QUATER, 22 BIS Y UN NUEVO INCISO AL ARTÍCULO 84 DE LA LEY ORGÁNICA DEL AMBIENTE, LEY Nº 7554 DE 4 DE OCTUBRE DE 1995. LEY PARA FORTALECER LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN MATERIA AMBIENTAL

Expediente N° 21.126

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

Costa Rica avanza cada vez con más fuerza hacia la constitución de una verdadera democracia participativa. Una democracia en la que las personas habitantes, las comunidades afectadas por las políticas de gobierno, tengan derecho a ser escuchadas e incidir directamente en la toma de decisiones sobre su futuro. En los últimos años se han venido produciendo lentas pero decisivas transformaciones en la forma en que el poder es ejercido en nuestro país.

Atrás ha ido quedando aquella sociedad en la que el papel de la ciudadanía se reducía a depositar su voto cada cuatro años y los espacios de participación activa eran considerados como hechos excepcionales, concesiones voluntarias de las autoridades de turno. Hoy en día, el acceso a tales espacios, en condiciones adecuadas, ha empezado a concebirse como un derecho fundamental de la población, que las personas funcionarias públicas, no pueden simplemente obviar y que, poco a poco, comienza también a ser ejercido e, incluso, exigido como tal por la ciudadanía.

Nuestro ordenamiento jurídico no ha permanecido inmune a estas transformaciones sociales. Son ya varias las leyes que contemplan mecanismos mediante los cuales las personas o colectividades intervienen de forma directa en la toma de decisiones públicas. La Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, Nº 7593, establece la obligación de esta institución de convocar a audiencias públicas en las que la población pueda manifestarse sobre las solicitudes para la fijación ordinaria de tarifas y precios de los servicios públicos (artículo 36). En el ámbito de los gobiernos locales, el Código Municipal de 1998 estableció en su artículo 5 que: “Las municipalidades fomentarán la participación activa, consciente y democrática del pueblo en las tomas de decisiones del gobierno local.” Además, incorporó la posibilidad de que los concejos municipales acuerden la realización de consultas populares (plebiscitos, referendos o cabildos) en su jurisdicción territorial para que la población decida sobre asuntos de competencia de la respectiva municipalidad. Inclusive, el resultado de tales consultas puede llegar a ser vinculante para las

autoridades locales, en el caso de los plebiscitos y los referendos (artículos 13 inciso j) y 19).
Otro paso fundamental en la dirección de crear las condiciones jurídicas para hacer efectiva la participación del pueblo en el ejercicio del poder público fue la aprobación, a mediados de 2002, de la reforma constitucional que introdujo en nuestra Carta Magna las figuras del referéndum y la iniciativa popular (Ley Nº 8281), en relación con la aprobación, modificación y derogación de las leyes, incluyendo la posibilidad de que el mismo referéndum sea convocado por iniciativa de la población. Posteriormente, se produjo la consolidación definitiva de estos instrumentos, con la entrada en vigencia de las leyes que regulan los procedimientos para su aplicación (N.º 8491 y N.º 8492).

Pero sin lugar a dudas, el hecho decisivo en el proceso de incorporación al ordenamiento jurídico costarricense de la participación ciudadana como un derecho de la población que no puede ser regateado por las autoridades de Gobierno, lo constituyó la enmienda que reformó el párrafo primero del artículo 9 de la Constitución Política, para dejar sentado que además de representativo, alternativo y responsable el Gobierno de la República es "participativo", y que también es ejercido directamente por "el pueblo", en adición a los tres poderes tradicionales (Legislativo, Ejecutivo y Judicial).

A partir de esta reforma, la participación del pueblo en la toma de decisiones deja de ser un asunto accesorio, una medida opcional o una simple declaración de buenas intenciones. Se conforma en un elemento estructural del Estado costarricense y de nuestro sistema democrático. Lo anterior implica que, de ahora en adelante, la Administración Pública (en sentido amplio) tiene el deber ineludible de crear mecanismos eficaces y generar las condiciones necesarias para que dicha participación pueda darse, así como de cumplir con la aplicación de los mecanismos ya existentes. Antes de su entrada en vigencia, el incumplimiento e incluso la omisión de las autoridades en la aplicación de los instrumentos de participación vigentes, por ejemplo, en lo relativo a las audiencias públicas previstas en algunas leyes, habían sido considerados, en el mejor de los casos, como problemas de mera legalidad no susceptibles de producir vicios sustanciales en los procedimientos administrativos. Esta situación cambió radicalmente con la citada enmienda al artículo 9 constitucional, tal y como lo ha reconocido la Sala Constitucional en su jurisprudencia:

> *"V.- Es distinto, sin embargo, el criterio del Tribunal Constitucional en cuanto se dirige el amparo contra la omisión de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos de celebrar audiencias públicas con ocasión del aumento de tarifas, vedándose a los usuarios del servicio la oportunidad de impugnar los incrementos. Al respecto, se debe indicar que la reforma del artículo 9º constitucional, por obra de la Ley N.º 8364 de 1º de julio de 2003, ha incorporado el principio de participación en el gobierno de la República, con lo cual, se ha operado una modificación sustancial en la forma del poder. La incorporación de ese principio en el artículo 9º implica mucho más que un asunto formal, puramente adjetivo, de añadir un Nuevo calificativo al*

Gobierno, entendido como conjunto de los poderes públicos (v. sentencia N.º919-99); se trata de un cambio sustancial en el diseño de la democracia y amplía radicalmente el contenido del principio democrático reconocido en el artículo 1º y desplegado en toda la Constitución Política, al sumar al principio y mecanismos de representación en los que ha descansado tradicionalmente nuestra democracia, el elemento de la participación ciudadana. (...) a partir de la citada reforma del artículo 9º constitucional, la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones públicas prevista en la Constitución y en las leyes adquiere el rango y la fuerza de un derecho constitucional de carácter fundamental, cuya violación es amparable." (Voto N.º 2005- 14659 de las 14:24 horas del 21 de octubre de 2005).

Además, recientemente, mediante el voto 2018-4117, el Tribunal Constitucional señaló, con respecto a la participación ciudadana en temas ambientales:

"De conformidad con lo expuesto, debe propiciarse la consulta de manera transparente y con la mayor información posible. Esto genera una mejor administración de los recursos naturales, contribuye a la transparencia y al adecuado manejo de fondos públicos. Recordemos que el asunto ambiental es un tema de todos los miembros de la sociedad, no solamente del gobierno, por lo que también corresponde a cada ciudadano velar por la conservación del ambiente y procurar un desarrollo sostenible. Es por ello que debe abarcar en forma integral los diferentes sectores de la población. Por otro lado, la audiencia que se dé a los ciudadanos no puede convertirse en una simple formalidad. Así, lo ha reiterado este Tribunal:

> *"(…) debe efectuarse con anterioridad a la toma de la decisión administrativa, constituyéndose así en una manifestación del principio democrático. Como consecuencia, este tipo de audiencias no se constituyen simplemente en parte de un procedimiento que por formalidad deba programarse, de manera que se pueda fijar de forma que haga nugatorio el ejercicio del derecho que pretende tutelar, al otorgarse en condiciones que se convierta en una mera formalidad, incapaz de alcanzar los objetivos que está llamada a obtener en protección del derecho a la información y participación ciudadana, aunque ciertamente tampoco debe llegar a constituirse en un obstáculo para que se emita una oportuna resolución de la gestión." (Sentencia número 2004-12242 de las 14:28 horas del 29 de octubre de 2004)*

No basta la mera convocatoria a una audiencia; lo trascendente es que esta se dé en términos en que las personas sepan realmente a qué atenerse, esto es, se le coloque en una posición tal que pueda evaluar la magnitud del impacto de una medida e identificar los elementos que la sustentan, a la vez que disponga de un tiempo razonable para analizar dicha medida y conozca las circunstancias de tiempo y espacio en que se va efectuar la audiencia, las que en todo caso deben ser razonables (v.gr., irrazonable

> *sería una audiencia en un lugar remoto). De lo contrario, la audiencia deviene en una formalidad sin sentido. Por lo demás, con estos espacios de debate público en cuestiones de interés de la colectividad, se busca también la deliberación de los asuntos públicos. Por ello es que resulta de trascendental importancia que la información que se pone a disposición del público para la realización de audiencias públicas, donde se discuten asuntos ambientales, comprende no solo del proyecto en sí, sino también todo aquello que lo haya sustentado."*

Si la participación del pueblo en la toma de decisiones públicas es un derecho de primacía constitucional, la responsabilidad de Estado de garantizar su efectivo cumplimiento se encuentra directamente relacionada con la naturaleza de las decisiones sobre las que verse el ejercicio de este derecho. En tanto más significativo sea el impacto sobre la población de una determinada decisión o medida gubernamental, mayor será el deber del Estado de respetar y promover su derecho a ser consultada y participar en su definición.

En este sentido, pocas decisiones públicas pueden tener un impacto más determinante y profundo sobre la vida, la salud y los demás derechos de las y los habitantes, que aquellas relacionadas con el uso y conservación de los recursos naturales y el ambiente en general. Pocos asuntos pueden afectar de forma tan directa y perdurable la vida cotidiana de la gente (al punto incluso de poner en riesgo su supervivencia), como los vinculados con el derecho de toda persona a gozar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, tutelado en el artículo 50 de la Constitución Política. De ahí que la necesidad de garantizar ampliamente el derecho de participación ciudadana en las cuestiones que afectan el ambiente haya adquirido particular trascendencia en los últimos años y sea un tema prioritario de atención en los foros internacionales donde se discuten asuntos ambientales. De lo anterior quedó clara constancia en la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, suscrita por Costa Rica en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Ambiente y Desarrollo de 1992, cuyo Principio 10 dispone categóricamente:

> *"El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes."*

A su vez, este compromiso se ha reflejado en una creciente preocupación por crear las herramientas jurídicas que hagan realmente efectiva la participación ciudadana

en esta materia, tanto en el ámbito del Derecho ambiental internacional, como a nivel de los ordenamientos jurídicos nacionales. En esta línea, destaca, por ejemplo, el Convenio de la Comisión Económica para Europa de Naciones Unidas sobre acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente de 1998, conocido como Convenio de Aarhus, el cual es parte del siguiente postulado: "para que los ciudadanos puedan disfrutar del derecho a un medio ambiente saludable y cumplir el deber de respetarlo y protegerlo, deben tener acceso a la información medioambiental relevante, deben estar legitimados para participar en los procesos de toma de decisiones de carácter ambiental y deben tener acceso a la justicia cuando tales derechos les sean negados". En cuanto a la participación del público en el proceso de toma de decisiones, el Convenio contempla al menos tres ámbitos de actuación pública: la autorización de determinadas actividades, la aprobación de planes y programas y la elaboración de disposiciones de carácter general de rango legal o reglamentario. Como resultado del citado Convenio, la Unión Europea, ha desarrollado un proceso de adecuación de su derecho comunitario a las obligaciones asumidas, por medio de varios instrumentos como las recientes directivas relativas a los derechos al acceso a la información y de participación en los asuntos ambientales (Directiva 2003/4/CE del Parlamento europeo y del Consejo de 28 de enero de 2003 y Directiva 2003/35/CE del Parlamento europeo y del Consejo de 26 de mayo de 2003).

En Costa Rica, mucho antes de la reforma al artículo 9 de la Constitución, la jurisprudencia constitucional ya había reconocido la relevancia del derecho de participación en relación con decisiones vinculadas con el ambiente, como un derecho derivado de los artículos 1 (principio democrático) y 50 de la Carta Magna, que establece una amplísima legitimación de todas las personas para participar en los procesos donde se discutan este tipo de asuntos, en virtud de que están en juego intereses de la colectividad en su conjunto, cuya afectación, a su vez, se traduce en una lesión individual para cada uno de los habitantes de la República (intereses difusos). Al respecto ha señalado la Sala Constitucional que: "No puede excluirse al ser humano que recibirá los efectos de las decisiones gubernamentales en materia ambiental-, de su participación en la decisión de asuntos vinculados con esta materia." (Voto No. 2000- 10466 de las 10:17 horas del 24 de noviembre de 2000) "La participación ciudadana en los asuntos ambientales abarca dos puntos esenciales: el derecho a la información relativa a los proyectos ambientales, o que puedan causar una lesión a los recursos naturales y al medio ambiente, y la garantía de una efectiva participación en la toma de decisiones en estos asuntos. Por ello, el Estado costarricense no sólo debe invitar a la participación ciudadana, sino que debe promoverla y respetarla cuando se produzca." (Voto N.º 2003-6322 de las 14:14 horas del 3 de julio de 2003) La legislación ambiental del país también contiene algunas disposiciones que desarrollan de forma parcial este deber del Estado de promover la participación ciudadana en relación con ciertas decisiones específicas vinculadas con el ambiente. La Ley de planificación urbana, N.º 4240, contempla la obligación de las municipalidades de convocar a una audiencia pública para conocer los proyectos de planes de reguladores y de las observaciones

verbales o escritas que tengan a bien formular los vecinos o interesados (artículo 17).

En relación con el trámite de evaluaciones de impacto ambiental, la Ley Orgánica del Ambiente, N.º 7554, dispone que todas las personas tienen derecho a ser escuchadas por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) en cualquier etapa del trámite de dichas evaluaciones y que la información contenida en los expedientes será de carácter público y deberá estar disponible para ser consultada (artículos 22 y 23). Adicionalmente, la Ley de Biodiversidad, N.º 7788 (artículo 95) y el Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (Decreto Ejecutivo N.º 31849-Minae-S-MOPT-MAG-MEIC) regulan la opción de que la población solicite a la Setena la convocatoria de una audiencia pública para conocer y discutir sobre las implicaciones ambientales de un determinado proyecto (artículos 55 a 61). Sin embargo, en algunos casos este derecho no se ha cumplido a cabalidad. También en algunos casos, las consultas populares contempladas en el Código Municipal, han sido utilizadas con éxito, para solicitar pronunciamiento a las comunidades sobre decisiones de trascendencia relativas a la explotación de importantes recursos naturales como las aguas de los ríos, cuando se ha contado con la anuencia de los respectivos concejos municipales para su convocatoria. Esto ocurrió en los plebiscitos recientemente organizados en los cantones de Sarapiquí, Guácimo y Pococí y Turrialba, para consultar sobre la posición municipal en relación con desarrollo de proyectos hidroeléctricos.

A pesar de lo anterior, no es posible obviar que en el país cada vez son más y de mayores proporciones los conflictos ambientales asociados a problemas de naturaleza ambiental, en particular, vinculados a decisiones tomadas por las autoridades sobre la explotación de recursos naturales vitales pero crecientemente amenazados. Asimismo, en buena parte de estos conflictos la población directamente afectada por los efectos de dichas decisiones ha carecido de oportunidades reales de participación, incluso llegando a enterarse cuando las mismas ya habían sido consumadas. Por el contrario, muchos enfrentamientos actuales y futuros podrían prevenirse si las comunidades contaran con mayores espacios para ser tomadas en cuenta al momento de definir las prioridades sobre el uso y conservación de recursos de los que dependen directamente para su subsistencia. Mediante la presente iniciativa, se pretende introducir varias reformas a la Ley orgánica del ambiente con la finalidad de fortalecer y consolidar los mecanismos jurídicos para hacer una realidad la participación del pueblo en la toma de decisiones que afectan el ambiente en sus comunidades, en cumplimiento del principio estipulado en el párrafo primero del artículo 9 de la Constitución Política.

Para estos efectos, se contemplan tres modalidades de consultas: plebiscito, referéndum y audiencia pública. En el caso de las dos primeras sus resultados serán de carácter vinculante, el plebiscito referido a decisiones o actos administrativos y el referéndum a disposiciones normativas. Las audiencias públicas serán de naturaleza consultiva con el fin de que las comunidades puedan conocer y discutir asuntos de carácter ambiental de su interés. Todas deberán versar sobre asuntos relacionados con el ambiente, de competencia del Minae, que

puedan dar lugar a un acto administrativo válido y eficaz. Se excluyen, en razón a su particular naturaleza, aquellos actos realizados en el ejercicio de potestades de fiscalización y vigilancia de las actividades que tienen un impacto sobre el ambiente, así como la imposición de sanciones y medidas de protección o de reparación de daños ambientales, entre otros aspectos. En cuanto a las vías para realizar la convocatoria de las consultas, esta podría ocurrir cuando el Minae, previa valoración del caso concreto y mediante resolución motivada, considere pertinente hacerlo, cuando exista normativa que obligue a dicha convocatoria (como ocurre en algunos casos con las audiencias públicas) o cuando el pueblo, de forma directa, decida convocar a una consulta por iniciativa ciudadana. En cuanto a esta última vía, la convocatoria de la consulta popular se realizaría mediante la recolección de un porcentaje razonable de firmas. Las personas interesadas en promover la consulta podrían organizarse por medio de un comité gestor encargado de dicha recolección.

Estas consultas pueden darse en el ámbito local, regional o nacional, según sea la naturaleza del asunto al que se refieran. La premisa fundamental de la que parte la creación de dicho instrumento es la de devolverle a las comunidades que eventualmente sufrirán las consecuencias del uso y explotación de los recursos naturales ubicados en su territorio, la oportunidad de decidir sobre su futuro, tomando parte en la definición de las formas en que estos serán aprovechados o conservados. A partir de la citada premisa, el proyecto busca regular los procedimientos aplicables para la convocatoria y realización de las consultas populares ambientales, delimitando las competencias de las distintas instancias involucradas, lo que incluye el papel del Tribunal Supremo de Elecciones como garante de la transparencia en los procesos de votación.

Es importante destacar que las consultas populares ambientales cuya creación se plantea no entran en contradicción con las consultas convocadas en el ámbito municipal, más bien buscan complementar y ampliar dicho instrumento. Aunque es cierto que en algunos casos estas últimas han sido organizadas para conocer el criterio de la población sobre asuntos ambientales, tampoco se puede perder de vista que presentan algunas limitaciones. La principal radica en la misma naturaleza de los asuntos vinculados con el ambiente. En muchas ocasiones, el área geográfica afectada por una determinada decisión de las autoridades en materia ambiental, no necesariamente coincide con la división administrativa territorial del país. Así las cosas, puede ocurrir que, aunque se obtenga la anuencia de un concejo municipal para la realización de determinada consulta, no ocurra igual en otros municipios también afectados por tal decisión. Por otra parte, es claro que, de acuerdo con la legislación vigente, las principales decisiones relacionadas con la explotación y conservación de los recursos naturales del país, son en la actualidad competencia del Minae.

Otro aspecto fundamental de la propuesta son las regulaciones que se plantean para garantizar la aplicación del principio de participación ciudadana durante la aprobación, modificación, revisión o derogatoria de todas aquellas disposiciones normativas de carácter general relacionadas con el ambiente, ya sean de competencia del Poder Ejecutivo, las municipalidades u otras instituciones públicas.

Disposiciones como planes de manejo, planes reguladores, decretos ejecutivos o reglamentos que, a pesar de que pueden tener un considerable impacto sobre la calidad de vida y los derechos de la población vinculados al ambiente, no se tramitan bajo las mismas garantías de publicidad, consulta y participación que existen, por ejemplo, en el trámite de las leyes en el Parlamento.

En este sentido, resulta de especial relevancia el planteamiento dirigido a establecer la obligación de las autoridades competentes de convocar a una audiencia pública, cuando se tramitan disposiciones normativas susceptibles de afectar asuntos tan sensibles para la población como la protección y aprovechamiento sustentable de las aguas, los bosques, la biodiversidad o los recursos marinos y costeros. También por esta vía se podrían prevenir muchos conflictos ocasionados por regulaciones ambientales tramitadas sin ningún tipo de consulta a la ciudadanía, cuya posterior aplicación ha derivado en largos litigios judiciales.

Cabe recordar que el artículo 361 de la Ley general de la Administración Pública, Nº 6227, contempla una disposición similar relativa al deber de la Administración de realizar una audiencia en los procedimientos de elaboración de normas de carácter general. No obstante, la participación en dicha audiencia se encuentra limitada únicamente a "entidades representativas de intereses de carácter general o corporativo" y no a cualquier persona, como se desprende del principio de amplia legitimación contenido en el artículo 50 de la Constitución Política.

Aunado a ello, es innegable que pocas decisiones públicas pueden tener un impacto más determinante y profundo sobre la vida, la salud y los demás derechos de las personas habitantes, que aquellas relacionadas con el uso y conservación de los recursos naturales y el ambiente en general. Pocos asuntos pueden afectar de forma tan directa y perdurable la vida cotidiana de la gente (al punto incluso de poner en riesgo su supervivencia), como los vinculados con el derecho de toda persona a gozar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, tutelado en el artículo 50 de la Constitución Política. De ahí que la necesidad de garantizar ampliamente el derecho de participación ciudadana en las cuestiones que afectan el ambiente haya adquirido particular trascendencia en los últimos años y sea un tema prioritario de atención en los foros internacionales donde se discuten asuntos ambientales.

De lo anterior quedó clara constancia en la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, suscrita por Costa Rica en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Ambiente y Desarrollo de 1992, cuyo Principio 10 dispone categóricamente: *"El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá*

proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes."

En razón de tales compromisos constitucionales, en virtud de los cuales, se ha de desarrollar la labor de las personas legisladoras; el fomento de la participación ciudadana en la toma de decisiones ambientales, es un compromiso ineludible.

Esta iniciativa de ley, tiene como antecedente el expediente N.° 16.322, MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 6 Y 22 Y ADICIÓN DE DOS ARTÍCULOS 6 BIS Y 6 TER Y UN NUEVO INCISO AL ARTÍCULO 84 DE LA LEY ORGÁNICA DEL AMBIENTE, LEY Nº 7554 DE 4 DE OCTUBRE DE 1995. LEY PARA FORTALECER LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN MATERIA AMBIENTAL, que fue aprobado en segundo debate el 30 de octubre de 2008,y sobre el cual, recayó el veto del Poder Ejecutivo N°8681, por lo que fue devuelto a la Asamblea Legislativa para lo correspondiente; no obstante, a la luz de las resoluciones 12250-2015, 11658-2018 y 13570-2018 de la Sala Constitucional, que versan sobre el plazo de vigencia de los expedientes legislativos y las prórrogas posibles, mediante una moción de plazo cuatrienal, se determina que éste proyecto de ley se debe archivar.

En virtud de las consideraciones expuestas, sometemos la presente iniciativa a conocimiento de la Asamblea Legislativa, para su estudio y pronta aprobación por parte de los señores diputados y las señoras diputadas.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
DECRETA:

MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 6 Y 22 Y ADICIÓN DE LOS ARTÍCULOS 6 BIS, 6 TER, 6 QUATER, 22 BIS Y UN NUEVO INCISO AL ARTÍCULO 84 DE LA LEY ORGÁNICA DEL AMBIENTE, LEY Nº 7554 DE 4 DE OCTUBRE DE 1995. LEY PARA FORTALECER LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN MATERIA AMBIENTAL

ARTÍCULO 1- Se modifican los artículos 6 y 22 y se agregan un artículo 22 bis y un artículo 22 ter a la Ley Orgánica del Ambiente, Ley N°7554 de 4 de octubre de 1995, que se leerá así:

Artículo 6- Participación de las personas habitantes

Todas las personas habitantes de la República tienen derecho a participar activa, consciente, informada y organizadamente en la toma de decisiones y acciones cuyo propósito sea proteger y mejorar el ambiente. El Estado, las municipalidades y las

demás instituciones públicas y privadas tienen el deber de garantizar este derecho y fomentar su efectivo cumplimiento.

La participación de las personas habitantes tendrá las siguientes implicaciones:

a) El derecho de acceder a la información ambiental en poder de las autoridades públicas o en el de otros sujetos que la posean en su nombre. Incluye el derecho a acceder a información comprensible; para ello, las autoridades competentes dispondrán de los mecanismos apropiados, a fin de hacer efectivo este derecho.

b) El derecho de participar en los procedimientos para la toma de decisiones sobre asuntos que incidan en el ambiente, y cuya elaboración o aprobación corresponda a la Administración Pública. Incluye el derecho de apersonarse a los expedientes administrativos y aportar todo tipo de pruebas.

c) El derecho de solicitar la revisión administrativa y judicial de los actos y las omisiones que supongan lesiones al ambiente o vulneraciones de la normativa ambiental, y el derecho de constituirse en coadyuvantes, en los procedimientos administrativos y judiciales donde se discutan estos actos y omisiones.

d) El derecho de participar en las consultas populares ambientales reguladas en esta Ley y el de promover su convocatoria por iniciativa popular.

e) El derecho de solicitar a las Municipalidades el establecimiento de moratorias a las actividades que se presuman o se hayan demostrado dañinas para el ambiente.

Artículo 22- Expediente de la Evaluación

Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, tendrán derecho a ser escuchadas por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), en cualquier etapa del proceso de evaluación y en la fase operativa de la obra o proyecto. Las observaciones de los interesados serán incluidas en el expediente y valoradas para el informe final.

Artículo 22 bis- Comunicación del expediente

La Setena, dentro de los cinco días hábiles siguientes al recibo de una evaluación de impacto ambiental, remitirá un resumen de dicha evaluación ambiental a las instituciones públicas con competencias en la materia, y a las municipalidades en cuya jurisdicción se realizará la obra, la actividad o el proyecto, así como a las organizaciones sociales y comunales inscritas en el registro que esa Secretaría llevará para tales efectos.

Artículo 22 ter- Publicidad del expediente

La Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) le dará profusa divulgación, a la lista de estudios sometidos a su consideración por los medios de comunicación colectiva y los demás mecanismos que considere adecuados para garantizar la publicidad de la información.

ARTÍCULO 2- Se adiciona un nuevo artículo 6 bis, un nuevo artículo 6 ter, un artículo 6 quater y un inciso l) al artículo 84 a la Ley Orgánica del Ambiente, Ley N°7554 del 4 de octubre de 1995, que se leerán de la siguiente manera:

Artículo 6 bis- Consultas populares ambientales

El Ministerio de Ambiente y Energía, a fin de garantizar la participación de todas las personas habitantes de la República, en la toma de acciones y decisiones tendientes a proteger y mejorar el ambiente en sus comunidades y a garantizar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales ubicados en los territorios que habitan, someterá a su consideración los asuntos de su competencia, mediante los mecanismos de consulta popular previstos en el presente artículo, en los siguientes casos:

a) Cuando lo soliciten ciudadanos que representen por lo menos un diez por ciento del patrón electoral de la respectiva circunscripción territorial.

b) Cuando realizar la consulta sea un requisito exigido en la legislación nacional. Las consultas populares ambientales se regirán por las siguientes disposiciones:

1- Ámbito territorial de las consultas: Las consultas se realizarán en las circunscripciones territoriales donde se ubiquen las comunidades afectadas por los asuntos consultados, ya sea en el ámbito nacional, cantonal o distrital, de varios cantones, distritales o de parte de ellos. Cuando los asuntos sometidos a consulta afecten los intereses de los ciudadanos de comunidades ubicadas en varios cantones o distritos, la consulta deberá realizarse simultáneamente en todas ellas. En estos procesos de consulta popular, podrán ejercer su derecho al voto todas las personas que aparezcan en el respectivo padrón electoral, según corte vigente del mes anterior a la entrada en vigencia del acto que acuerde la convocatoria.

2- Asuntos que puedan ser objeto de las consultas: La consulta popular, en cualquiera de sus modalidades, podrá versar sobre cualquier asunto, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

2.1. Que el asunto por resolver se relacione con la materia ambiental y sea de competencia del Minae.

2.2. Que el resultado de la consulta pueda dar origen a un acto administrativo válido y eficaz de la autoridad competente. Esta consulta deberá realizarse antes del dictado del acto que pone fin al procedimiento.

2.3. Que la consulta no se refiera a actos ni a resoluciones cuya realización sea de carácter obligatorio para el Minae, en los términos de la legislación aplicable. No procederán las consultas sobre actos realizados en el ejercicio de las potestades de fiscalización y vigilancia de las actividades que tienen un impacto sobre el ambiente, sobre la imposición de sanciones, ni sobre medidas de protección o reparación de daños ambientales. Asimismo, se excluyen de la aplicación de las modalidades de referéndum y plebiscito los actos relacionados con la fijación de cánones, tasas y otros derechos por la utilización o explotación de bienes de dominio público o tarifas por la prestación de servicios; los actos que resuelvan sobre la creación de áreas silvestres protegidas o la ampliación de sus límites o categorías, que se regirán por los artículos 36 y 37 de esta Ley; y los actos dictaminados por la Setena o el Tribunal Ambiental Administrativo (TAA), en el ejercicio de sus competencias. En el trámite de Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA), la Setena deberá convocar a una audiencia pública, antes d dictar la resolución final.

2.4. Que la consulta verse sobre un asunto actual y de interés general para las personas participantes. Las consultas sobre asuntos que afecten los derechos de las comunidades indígenas del país, se realizarán de conformidad con lo establecido en el Convenio N°169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los pueblos indígenas y tribales en países independientes, aprobado mediante Ley N° 7316; con todo lo anterior, sin prejuicio del derecho de estas comunidades a participar en las consultas previstas en esta Ley.
No podrán realizarse consultas populares de conformidad con este artículo, dentro de los ocho meses anteriores a la celebración de las elecciones nacionales o a la elección de las autoridades municipales.
Igualmente, cuando sea rechazado un asunto consultado en plebiscito o referendo, no podrá volver a ser sometido a consulta popular en el plazo de dos años. Esta regla también será aplicable a las consultas populares realizadas por las municipalidades, de conformidad con el Código Municipal, en caso de que estas versen sobre el mismo asunto.

3- Competencias del Ministerio de Ambiente y Energía: El Minae es el órgano competente para la convocatoria de plebiscitos, referendo y audiencias públicas, de conformidad con esta Ley. Para tales efectos, emitirá un acto de convocatoria que deberá ser comunicado al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y a las municipalidades con competencia en el territorio donde se realizará la consulta, y deberá ser publicado en el diario oficial La Gaceta. Dicha convocatoria, contendrá por lo menos:

3.1. La fecha en que se realizará la consulta, no podrá fijarse en un plazo inferior a tres meses, contados a partir de la publicación del acto de convocatoria, en los casos de plebiscito y referendo, ni podrá ser menos de un mes, si se trata de una audiencia pública. No obstante, cuando el TSE así lo solicite y en aras de un uso eficiente de los recursos públicos, el Minae fijará la fecha de las consultas populares, de manera que coincidan con la realización del referéndum regulado por la Ley n°8492 de 9 de marzo de 2006.

3.2. Una definición clara y detallada del asunto que será objeto de consulta. En el caso del referéndum, se adjuntará la propuesta normativa sobre cuya aprobación, modificación o derogación se solicita pronunciamiento.

3.3. La delimitación clara del ámbito territorial de la consulta.

3.4. La indicación de la previsión presupuestaria pertinente, para la realización de la consulta popular.

3.5. Para determinar la conveniencia de realizar la convocatoria oficiosa de una consulta popular, el Minae tomará en cuenta los siguientes criterios:

3.5.1.1. Que la decisión sobre la que verse la consulta, ya sea por el tamaño o la naturaleza del asunto en cuestión, pueda tener impactos considerables en el ambiente y los elementos que lo conforman.

3.5.1.2. Que existan riesgos graves de contaminación o esté implicada la utilización o producción de sustancias, materiales y desechos tóxicos o peligrosos para el ambiente o la salud humana

3.5.1.3. Que se pongan en peligro las áreas silvestres protegidas bajo cualquier categoría de manejo, las áreas de protección del recurso hídrico o el abastecimiento de agua para consumo humano.

3.5.1.4. La existencia de potenciales conflictos sociales relacionados con el acceso y aprovechamiento de los recursos naturales, en determinado territorio. El Minae en coordinación con las municipalidades competentes tendrá la obligación de brindarle a las personas habitantes de las comunidades donde se efectuarán las consultas al menos con un mes de antelación a la fecha de la realización de la consulta, información clara, pertinente, suficiente y comprensible para que puedan estar adecuadamente informadas sobre el objeto, los alcances y las consecuencias de los asuntos sometidos a su conocimiento.

En las audiencias públicas y los demás espacios de información y discusión que se establezcan, se les deberá brindar participación, en condiciones de equidad, a las distintas posiciones existentes sobre el asunto sometido a consulta.

4- Consultas convocadas por iniciativa popular: para la convocatoria a consultas populares por iniciativa de la ciudadanía, se seguirá el siguiente procedimiento:

4.1. Las personas interesadas en solicitar la convocatoria de una consulta popular formarán un comité gestor, integrado por cinco miembros y sus respectivos suplentes; todos ellos inscritos en el padrón electoral de la circunscripción territorial respectiva. El comité gestor solicitará al Minae la apertura del procedimiento de consulta; para ello deberá presentar la propuesta de convocatoria, de conformidad con la normativa vigente.

4.2. Presentada dicha solicitud, el Minae procederá en un plazo de quince días hábiles a determinar si la solicitud cumple los requisitos de admisibilidad previstos en este artículo, en cuyo caso hará entrega al comité gestor de las hojas de recolección de firmas, que el TSE elaborará para tales efectos. En caso de que la solicitud sea defectuosa, se apercibirá al comité para que proceda a subsanarla. Si no lo hace así o si los defectos son insubsanables, la solicitud de convocatoria se denegará.

4.3. El comité gestor dispondrá un plazo hasta nueve meses a partir de la entrega de las hojas mencionadas en el inciso anterior, para recolectar y presentar las firmas. Si dicho plazo vence y no se ha reunido el número de firmas exigido, archivará el expediente. Sin embargo, si habiendo sido presentadas las firmas a tiempo, algunas son rechazadas de manera que no haga posible reunir el mínimo requerido, al comité gestor se le otorgará, por una única vez, un plazo improrrogable de quince días calendario, para que se proceda a la sustitución.

4.4. Cada persona podrá firmar la solicitud solamente una vez. Si la persona electora firma varias veces la solicitud de convocatoria, solamente una de esas firmas será admitida. Una vez que una persona haya firmado la solicitud de convocatoria, solamente una de esas firmas será admitida. Una vez que una persona haya firmado la solicitud de convocatoria, ya no podrá retirar su firma del documento.

4.5. Presentadas las firmas, el Minae tendrá un plazo de dos meses para pronunciarse sobre la procedencia de la solicitud y realizar la convocatoria a la consulta popular. Para tales efectos, contará con la colaboración de los funcionarios del TSE, en cuanto a la determinación de la validez de los nombres, las firmas y los números de cédula presentados. Las personas interesadas podrán recurrir ante el Tribunal, en caso de la denegatoria injustificada de la solicitud o el retardo excesivo de la resolución.

5- Carácter vinculante de las consultas: En el caso de plebiscitos o referendos, el resultado de la consulta será de acatamiento obligatorio para el Minae. Cuando se trate de audiencias públicas, el Minae tendrá la obligación de darles un trámite expedito y prioritario a las peticiones y propuestas planteadas por la población participante, y de informar, oportunamente, sobre los resultados obtenidos.

6- Competencias del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE): El TSE deberá brindarles asesoramiento y capacitación a los funcionarios del Minae, para que preparen y realicen los plebiscitos, los referendos y las audiencias públicas; también deberá velar, en todas las etapas del proceso, por el cumplimiento de los requisitos formales establecidos en la legislación electoral y demás normativa aplicable.

En la celebración de estas consultas, deberán estar presentes los delegados que designe el TSE, quienes supervisarán el correcto desarrollo y darán fe de que se cumplieron los requisitos señalados.

La ciudadanía podrá acudir al TSE para solicitar, por la vía del recurso de amparo electoral, la tutela de sus derechos fundamentales en materia electoral, cuando estos sean lesionados en el marco de las consultas populares reguladas en este título. Los recursos se tramitarán y las resoluciones se ejecutarán, según las reglas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, N°7135, del 11 de octubre de 1989.

Artículo 6 ter- Modalidades de consulta

Para los efectos de este artículo, las consultas populares ambientales, podrán realizarse bajo las siguientes modalidades:

1- Plebiscito: consulta popular mediante la cual, la población se pronuncia sobre una determinada decisión o acto administrativo de competencia del Minae que tenga trascendencia para sus comunidades.

2- Referéndum: consulta popular por medio de la cual, la población se pronuncia sobre la aprobación, modificación o derogación de un plan regulador o manejo, un reglamento o cualquier otra disposición normativa de carácter general, de competencia del Minae, que afecte a sus comunidades.

3- Audiencia Pública: reunión pública convocada por las autoridades competentes del Minae, a la cual son invitados a participar directamente los gobiernos locales y la población en general, con el fin de discutir asuntos relacionados con la protección y el mejoramiento del ambiente, de interés para sus comunidades. Este tipo de audiencias debe realizarse en un lugar cercano y accesible para las personas afectadas por el asunto que se discuta, y en una fecha y hora que no imposibilite su asistencia, preferentemente en días no hábiles o fuera del horario laboral.

Artículo 6 quater- Participación de los habitantes en la elaboración de normas de carácter general relacionadas con el ambiente.

Para promover una participación real y efectiva de las personas habitantes de la República, en la aprobación, modificación, revisión y derogación de planes reguladores o de manejo, reglamentos y demás disposiciones normativas de carácter general, relacionadas con el ambiente, el Poder Ejecutivo, por medio del Minae, las municipalidades y demás instituciones públicas competentes, según sea el caso, al establecer o tramitar los procedimientos que resulten de aplicación, supervisarán lo siguiente:

1- Que se informe a la población, mediante avisos públicos u otros medios apropiados como los electrónicos, cuando se disponga de ellos, sobre cualesquiera propuestas de esta naturaleza o, según sea el caso, de su modificación, revisión o derogación. Eso incluye el acceso oportuno a los textos borradores de dichas propuestas y la información relativa a las oportunidades de participación en los procesos decisorios, así como a las autoridades públicas ante las cuales pueden

presentarse comentarios o formular alegaciones. Para estos efectos, el Minae llevará un registro de todas las personas u organizaciones que soliciten, por escrito, ser informadas e indiquen una dirección para recibir notificaciones.

2- Que todas las personas tengan derecho a expresar observaciones y opiniones, antes de que se adopten decisiones sobre dichas disposiciones.

3- Que, al adoptar esas decisiones, los resultados de la participación pública se tengan en cuenta en la forma debida.

4- Que, una vez examinadas las observaciones y opiniones expresadas por las personas habitantes, se realicen esfuerzos razonables para brindar información sobre las decisiones adoptadas y los motivos y las consideraciones en los que se basen dichas decisiones, incluida la información relativa al proceso de participación pública.
Será obligatoria la convocatoria a una audiencia pública por parte de las autoridades competentes, antes de la aprobación, modificación, revisión o derogación de disposiciones normativas de carácter general relacionadas con el ambiente, cuando dichas disposiciones versen sobre las siguientes materias:

4.1.1. La protección y el aprovechamiento sustentable del recurso hídrico, incluido lo que dispone el artículo 51 de esta Ley.

4.1.2. La protección, utilización y recuperación de los suelos.

4.1.3. El uso y conservación de los recursos marinos y costeros, así como de la zona marítimo-terrestre.

4.1.4. La minería y los hidrocarburos.

4.1.5. La protección contra la contaminación sónica, visual y atmosférica.

4.1.6. El ordenamiento del territorio rural y urbano.

4.1.7. La conservación y el aprovechamiento de la vida silvestre, la gestión de áreas silvestres protegidas, la protección, el acceso y el uso de la biodiversidad, así como los elementos bioquímicos y genéticos que la componen.

4.1.8. El patrimonio natural del Estado, la protección de los recursos forestales y aprovechamientos forestales.

4.1.9. La gestión y el manejo de los residuos tóxicos.

4.1.10. Los productos químicos, incluidos los biocidas y plaguicidas.

4.1.11. La biotecnología y modificaciones genéticas.

4.1.12. El trámite y la aprobación de evaluaciones de impacto ambiental.

4.1.13. La regulación del acceso a la información, la participación pública en la toma de decisiones y acceso a la justicia en materia de ambiente.

4.1.14. Las disposiciones del presente artículo no se aplicarán a la aprobación o modificación de disposiciones de carácter general que no resulten sustanciales, por su carácter puramente operativo, organizativo, procedimental o análogo, siempre que no impliquen una reducción de los niveles vigentes de protección ambiental.

Artículo 84- Funciones de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental

Las funciones de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental son las siguientes:

(…)

l) Llevar un registro actualizado de las organizaciones locales, comunales y sociales legalmente constituidas que soliciten, por escrito, ser incorporadas en dicho registro y manifiesten su interés en ser consultadas sobre las evaluaciones de impacto ambiental que se sometan al conocimiento de la Secretaría, según el artículo 22 de esta Ley. Para tales efectos, las organizaciones interesadas deberán indicar una dirección para recibir notificaciones. (…)

Rige a partir de su publicación.

José María Villalta Flórez-Estrada
Diputado

NOTA: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Especial de Ambiente.

1 vez.—(IN2018300231).

**LEY PARA MUJERES JEFAS DE HOGAR
PARA QUE TODAS SUS ENTRADAS ECONÓMICAS
SEAN CONSIDERADAS COMO PARTE DE SUS INGRESOS PARA
SER SUJETAS DE CRÉDITO EN EL SISTEMA BANCARIO NACIONAL**

Expediente N.º 21.127

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

El cambio cultural, la mayor esperanza de vida de las mujeres y la incorporación de ellas en la vida laboral hacen que los hogares con jefatura femenina sigan ganando terreno en el país.

Son varios los estudios que muestran esta tendencia y ahora lo confirman las encuestas nacionales de ingresos y gastos.

En la última Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos, que publicó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), los hogares dirigidos por mujeres alcanzaron un 36%, un avance fuerte con respecto al 26% de la encuesta del 2004 y del 17% de 1988.

El Área de Censos y Encuestas del INEC, indica que la definición que usan los encuestadores para establecer quién es el jefe del hogar tiene como primer criterio que sea la persona o personas consideradas como jefatura por los demás miembros del hogar.

Según la Encuesta de Hogares del 2013, el 22,7% de las jefas de hogar tienen pareja. Además, una mujer puede quedar con la jefatura por diferentes razones (viudez, divorcio, separación) y no solo por abandono.

De esta forma, en el incremento puede influir que las mujeres tienen una esperanza de vida mayor que los hombres, que cuando hay separación generalmente ella se queda con los hijos, y a un cambio en la cultura que ya no considera “inconveniente” declarar a una mujer como jefa.

El último informe del Estado de la Nación, añadió a la lista de causas los cambios profundos en las estructuras familiares y la mayor incorporación de las mujeres en el mercado laboral.

Es por ello que es necesario empoderar cada vez más a las mujeres jefas de hogar no sólo con programas de diversa índole tanto a nivel social, sino también en el área económica ya que muchas mujeres adquieren bienes muebles e inmuebles con sus parejas y una vez que se divorcian o las abandonan, las mismas quedan sujetas a procesos judiciales que tardan años en concluir, e incluso una vez terminados los mismos y se les otorga un monto de pensión a su favor o el de sus hijos, esos ingresos no son tomados como válidos por las instituciones bancarias para efectos de adquirir bienes muebles e inmuebles.

Estas mujeres jefas de hogar no poseen capacidad de pago para hacer frente a otras deudas, aunque posean el monto de la pensión alimentaria ya sea a su favor o para sus hijos, por ejemplo para adquirir otra vivienda la pensión por sus hijos son montos que no son aceptados por las instituciones bancarias. Asimismo, no pueden tener acceso a créditos para comprar por ejemplo un vehículo para trasladarse con sus hijos o bien como herramienta de trabajo porque no poseen capacidad de pago.

El presente proyecto de ley tiene como objetivo principal incentivar líneas crediticias del Sistema Bancario Nacional para las mujeres jefas de hogar, dónde las instituciones bancarias podrán crear créditos para la adquisición de bienes muebles e inmuebles, asimismo se solicitan en la presente ley requisitos mínimos para otorgar dichos créditos. Asimismo, se trasladará un 1% de la Ley Número 8364 de Banca para el Desarrollo para todas las instituciones bancarias del Sistema Bancario Nacional que incentiven y otorguen créditos a las mujeres jefas de hogar.

Por las razones expuestas, someto a consideración de las señoras diputadas y los señores diputados el presente proyecto de ley.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
DECRETA:

**LEY PARA MUJERES JEFAS DE HOGAR
PARA QUE TODAS SUS ENTRADAS ECONÓMICAS
SEAN CONSIDERADAS COMO PARTE DE SUS INGRESOS PARA
SER SUJETAS DE CRÉDITO EN EL SISTEMA BANCARIO NACIONAL**

ARTÍCULO 1- Para efectos de tramitar créditos bancarios para adquirir bienes muebles e inmuebles, las mujeres Jefas de Hogar podrán aportar como parte de sus ingresos los montos recibidos por concepto de pensión alimentaria ya sea para ellas o bien para sus hijos; además se le contarán como parte de sus ingresos otros ingresos que reciban por concepto de trabajos que realicen y que puedan demostrar.

ARTÍCULO 2- En estos casos las mujeres jefas de hogar deberán contar con los siguientes requisitos mínimos:

1- Declaración jurada ante Notario Público de su condición de jefa de hogar y de sus actividades laborales,

2- Copia certificada de la sentencia de divorcio dónde se le aprueba el monto por concepto de pensión alimentaria a favor de ella o de sus hijos menores,

3- Certificación de estado civil de la mujer jefa de hogar

4- Certificación de nacimiento de los hijos menores.

5- Certificación de Contador Público que demuestren sus ingresos por otro tipo de actividades laborales que realice, o bien constancia de las entidades a las cuales dicha jefa de hogar trabaja.

6- Certificación del Registro de deudores alimentarios del último año dónde se demuestre que no ha existido atraso en el depósito de dicho deudor alimentario, o bien certificación emitida por la entidad bancaria de la cuenta mínimo de un año atrás, dónde se le deposita el monto por pensión alimentaria.

ARTÍCULO 3- Dichos créditos serán otorgados por el plazo que le falte a los hijos menores para que adquieran la mayoría de edad, en aquellos casos en que las mujeres no posean pensión alimentaria a su favor, sino sólo para sus hijos.

En los demás casos la institución bancaria determinará el plazo de dicho crédito.

ARTÍCULO 4- Las instituciones bancarias del Sistema Bancario Financiero Nacional, podrán crear líneas de crédito para incentivar a las mujeres jefas de hogar para la adquisición de bienes muebles e inmuebles.

ARTÍCULO 5- Se traslada de la Ley número 8364 de Banca para el Desarrollo un 1%, para todas las instituciones bancarias del Sistema Bancario Nacional que incentiven líneas crediticias para las mujeres jefas de hogar.

Rige a partir de su publicación.

Shirley Díaz Mejía

Nielsen Pérez Pérez

Catalina Montero Gómez

Ivonne Acuña Cabrera

María Inés Solís Quirós

Aracelly Salas Eduarte

Paola Viviana Vega Rodríguez

Dragos Dolanescu Valenciano

Jonathan Prendas Rodríguez

Yorleni León Marchena

Aida María Montiel Héctor	Paola Alexandra Valladares Rosado
Silvia Vanessa Hernández Sánchez	Erwen Yanan Masís Castro
Rodolfo Rodrigo Peña Flores	David Hubert Gourzong Cerdas
Otto Roberto Vargas Víquez	Sylvia Patricia Villegas Álvarez
Wálter Muñoz Céspedes	Mileidy Alvarado Arias
José María Villalta Flórez-Estrada	Floria María Segreda Sagot
Nidia Lorena Céspedes Cisneros	Marulin Raquel Azofeifa Trejos
Ignacio Alberto Alpízar Castro	Carmen Irene Chan Mora
Óscar Mauricio Cascante Cascante	Carolina Hidalgo Herrera

Diputados y diputadas

NOTA: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Especial de la Mujer.

1 vez.—(2018300236).

IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO BASE CERO PARA UNA PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA CON BASE EN RESULTADOS

Expediente N.º 21.128

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

La asignación de presupuestos es un procedimiento que tiene gran importancia en la planificación del gasto anual del presupuesto de la República, sin embargo en el proceso de elaboración de este es posible denotar diversas fallas, que se constituyen en obstáculos claros a una planificación estratégica con miras a generar un manejo verdaderamente eficiente de los recursos que percibe el Estado de una forma u otra de todos los costarricenses.

A la hora de analizar los datos correspondientes a diferentes instituciones o programas, los cuales son financiados mediante el presupuesto de la República, se hace evidente la existencia de un problema grave que afecta las finanzas del Estado, lo cual contribuye a la existencia del actual déficit fiscal superior al 7% del PIB.

El Poder Ejecutivo ha presentado el expediente N° 20.580, Ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, como una forma de enfrentar el problema del déficit pero los resultados esperados de esa iniciativa, en el mejor escenario pensado por Casa Presidencial, no son suficientes para resolver la situación que enfrentamos.

Más allá de generar nuevos ingresos y hacer unos poco sustanciales recortes al gasto –que es en síntesis lo que lograría el proyecto supracitado– subsiste un problema estructural de la calidad del gasto. Los informes de Liquidación Presupuestaria, emitidos por la Comisión Permanente Especial para el Control del Ingreso y Gasto Públicos en los últimos años, muestran la persistencia de fallos que impactan en la forma en que se utilizan los recursos: financiamiento de gasto corriente con ingreso de capital, altos niveles de subejecución presupuestaria, reducida vinculación entre el Plan Nacional de Desarrollo y el Presupuesto de la República, ausencia de medición del costo unitario de servicios y limitada evaluación del impacto. Es decir, el país gasta millones de millones de colones, logrado apenas niveles bajos o medios de cumplimiento en las metas (57% de las metas nacionales según indicó la propia Ministra de Planificación Nacional y Política

Económica[1]), sin poder determinar la eficiencia e impacto de las erogaciones y sin mejorar sustancialmente los indicadores que miden la calidad de vida de los costarricenses.
Lo cierto es que esa situación debe cambiar. Junto con los esfuerzos para generar nuevos ingresos y reducir gastos que se realizan por las vías administrativas y legislativas, es necesario replantear la forma en que se formula el Presupuesto de la República. La propia Contralora resumió muy bien la forma en la que se hacen los presupuestos en el país, cuando compareció ante la Comisión Permanente Especial para el Control del Ingreso y Gasto Públicos en junio de 2015: "El año pasado presupuestamos diez; este año le agregamos la inflación y va para arriba. No se revisa si, efectivamente, esos recursos los vamos a necesitar o no."

En ese sentido, es claro que se requiere fortalecer la evaluación, no sólo para sancionar a los responsables de las acciones que contribuyen a profundizar el déficit fiscal, sino también para obtener la información que permita identificar dónde están las fallas e impulsar las acciones de mejora. Aunque el Ministerio de Hacienda y el de Planificación Nacional han venido desarrollando esfuerzos en la materia durante los últimos años, los resultados alcanzados no han sido suficientes, por lo que se torna necesario impulsar una reforma a varios artículos de la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos para implementar la técnica de presupuesto base cero.

Esta metodología obligaría a que todos los programas y gastos se evalúen año con año, identificando paquetes de decisión y clasificándolos según su orden de importancia mediante un análisis de costo-beneficio, para fijar metas y objetivos alcanzables y enfocar los recursos para lograrlos. Una vez ejecutado el dinero, se evalúa no sólo la cantidad del gasto sino también su calidad y su aporte para la consecución de resultados y esto se convierte en un insumo para decidir la asignación financiera del año siguiente.

De esta forma, cada entidad debería justificar por qué y para qué requiere cada partida y cada importe, en función de su nivel de cumplimiento de metas y de la eficiencia y pertinencia de su ejecución, dando la oportunidad a los decisores de eliminar todo aquel recurso que no tenga sustento. Así las cosas, las instituciones presentarían presupuestos acordes con las verdaderas necesidades del país y se aseguraría que los recursos se asignen y se gasten de una forma eficiente, incentivando de forma conjunta el bienestar tanto de las finanzas del Estado como de todos los ciudadanos.

Por las razones anteriormente expuestas, se somete a consideración de la Asamblea Legislativa el presente proyecto de ley.

---

[1] Comisión Permanente Especial para el Control del Ingreso y Gasto Públicos. Acta N° 7 del 14 de junio de 2018. P. 11

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
DECRETA:

IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO BASE CERO PARA UNA PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA CON BASE EN RESULTADOS

ARTÍCULO 1- Adiciónanse nuevos incisos h), i), j) y k) al artículo 5 y un nuevo inciso a) al artículo 110 de la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Ley N° 8131 del 16 de octubre del 2001, corriendo la numeración según corresponda, para que se lean de la siguiente manera:

Artículo 5- Principios presupuestarios

Para los efectos del artículo anterior, deberán atenderse los siguientes principios presupuestarios:

(…)

h) **Principio base cero: Para la elaboración de la solicitud presupuestaria anual, cada entidad y/o programa presupuestario señalado en el artículo 1 de la presente Ley deberá elaborar un presupuesto en el que detalle y justifique detenidamente cada importe solicitado, tomando en cuenta su capacidad histórica de ejecución de los últimos cinco años, el cumplimiento de sus metas institucionales, su aporte al cumplimiento de las metas sectoriales y nacionales, así como las expectativas del año inmediatamente siguiente.**

Mediante los informes indicados en el artículo 55 de esta Ley, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica verificarán el nivel cumplimiento de las metas y los planes operativos institucionales anuales, de mediano y largo plazo. El Ministerio de Hacienda deberá utilizar la información resultante de esa evaluación como parámetro para aceptar o rechazar la solicitud presupuestaria anual de cada institución.

Los montos aprobados en años anteriores para cada entidad no generarán una obligación para la elaboración del proyecto de Presupuesto de la República que será sometido a la Asamblea Legislativa, salvo en aquellos casos que respondan a obligaciones legal o constitucionalmente establecidas.

Al final del ejercicio económico, si existiera diferencia entre el monto aprobado y el devengado para cada Título Presupestario, partida y subpartida, al monto resultante deberá aplicársele la devolución dispuesta en el artículo 5 de la Ley de Eficiencia en la Administración de los Recursos Públicos, Ley N° 9371 del 28 de junio de 2016.

i) **Principio de rendición de cuentas: Las instituciones y/o programas cuyo financiamiento, total o parcial, provenga de la Ley de Presupuesto Nacional de la República, deberán contar con indicadores de resultado y producto intermedio y/o final para medir el desempeño, la eficacia, la eficiencia, economía y calidad de los servicios y/o bienes que ofrecen. En aquellos casos que por naturaleza de la entidad no se puedan formular indicadores de resultado final, deberán documentarlo con una justificación razonada y remitirla al Ministerio de Hacienda.**

j) **Principio responsabilidad presupuestaria: aquellos recursos que, una vez finalizado el año fiscal no se hubieran ejecutado y sobre los que no se demuestre el cumplimiento de los objetivos y las metas institucionales y que constituyan superávit libre al cierre del ejercicio económico de la correspondiente entidad, deberán ser ejecutados por la entidad correspondiente en un período máximo de dos años, a partir del dictamen declarativo del superávit libre emitido por la Autoridad Presupuestaria, basado en los informes técnicos de la Tesorería Nacional. En caso de que no se ejecuten, en el plazo antes definido, los recursos deberán ser devueltos al presupuesto de la República para ser aplicados a la amortización de la deuda interna y externa de la Administración Central, según lo dispuesto por la Ley de Eficiencia en la Administración de los Recursos Públicos, Ley N° 9371 del 23 de agosto de 2016.**

k) **Principio de programación estratégica con base en resultados: el Presupuesto será la expresión financiera del Plan Nacional de Desarrollo, de forma tal que deberá existir una total vinculación entre las autorizaciones de gasto y las metas institucionales, sectoriales y nacionales, de forma tal que la asignación de recursos programación de actividades y metas estimadas, la presupuestaria se realizará en función del cumplimiento de dichas metas y la capacidad real de ejecución de cada entidad solicitante.**

Artículo 110- Hechos generadores de responsabilidad administrativa

Además de los previstos en otras leyes y reglamentaciones propias de la relación de servicio, serán hechos generadores de responsabilidad administrativa, independientemente de la responsabilidad civil o penal a que puedan dar lugar, los mencionados a continuación:

a) **La formulación, presentación y/o autorización de proyectos de presupuestos institucionales que incumplan con lo dispuesto en el artículo 6 de esta Ley.**

(…)

ARTÍCULO 2- Modifícanse los artículos 6, 7, 31 y 33 de la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Ley N° 8131 del 16 de octubre del 2001, para que se lea de la siguiente manera:

Artículo 6- Financiamiento de gastos corrientes

Para los efectos de una adecuada gestión financiera, no podrán financiarse gastos corrientes con ingresos de capital. **La inobservancia de este principio generará responsabilidad administrativa contra el jerarca que lo autorice, de conformidad con lo indicado por el artículo 110 de esta Ley**".

Artículo 7- Técnicas de formulación presupuestaria

En la formulación de los presupuestos se utilizará la técnica de presupuesto base cero, según la cual cada entidad deberá justificar la necesidad de los requerimientos de recursos con base en su capacidad de ejecución de los últimos cinco años, el cumplimiento de sus planes anuales operativos, así como el aporte a la consecución de las metas sectoriales y nacionales contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo.

La información aportada por estas instituciones deberá ser verificada por el Ministerio de Hacienda, en conjunto con el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 55 y 56 de esta Ley. Con base en esa evaluación, el Ministerio de Hacienda sólo podrá incorporar en el proyecto de Presupuesto de la República aquellas partidas para cada institución y/u órgano en las que se demuestre el cumplimiento de las metas fijadas, tomando como base los criterios que, mediante Reglamento, se establecerán a partir de los elementos indicados en el párrafo anterior.

En la formulación de los presupuestos se utilizarán las técnicas y los principios presupuestarios aceptados, con base en criterios funcionales que permitan evaluar el cumplimiento de las políticas y los planes anuales, así como la incidencia y el impacto económico-financiero de la ejecución. Para ello, deberán atenderse elementos como la prestación de servicios, la producción de bienes y las funciones generales de dirección y apoyo de cada órgano, entidad o institución.

Artículo 31- Objetivos

Los objetivos del Subsistema de Presupuesto serán:

a) Presupuestar los recursos públicos según la programación macroeconómica **y con base en la evaluación de resultados señalada en los artículos 7, 55 y 56 de esta Ley**, de modo que el presupuesto refleje las prioridades y actividades estratégicas del Gobierno, así como los objetivos y las metas del Plan Nacional de Desarrollo.

b) Lograr que las etapas de formulación, discusión y aprobación del presupuesto se cumplan en el tiempo y la forma requeridos.

c) Velar porque la ejecución presupuestaria se programe y desarrolle coordinadamente, utilizando los recursos según las posibilidades financieras, la naturaleza de los gastos y los avances en el cumplimiento de los objetivos y las metas.

d) Dar seguimiento a los resultados financieros de la gestión institucional y aplicar los ajustes y las medidas correctivas que se estimen necesarias para garantizar el cumplimiento de los objetivos y las metas, así como el uso racional de los recursos públicos.

Artículo 33- Inicio del proceso

Formalmente, el proceso presupuestario se iniciará con la planificación operativa que cada órgano y entidad debe realizar en concordancia con **los resultados de su gestión, su capacidad real de ejecución con base en el comportamiento histórico del uso de los recursos asignados de los últimos cinco años,** los planes de mediano y largo plazo, las políticas y los objetivos institucionales definidos para el período, los asuntos coyunturales, la política presupuestaria y los lineamientos que se dicten para el efecto.

Las técnicas de programación presupuestaria se definirán mediante el reglamento de esta Ley.

Rige a partir de su publicación.

Jonathan Prendas Rodríguez
Diputado

NOTA: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios.

1 vez.—(IN2018300238).

LEY PARA LA CREACIÓN DE ALBERGUES TEMPORALES DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE ABANDONO Y SITUACIÓN DE CALLE

Expediente N.° 21.129

ASAMBLEA LEGISLATIVA

Nuestra Constitución Política en el artículo 50 dispone:

"*ARTÍCULO 50.- El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza.*

Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello, está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado.

El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho.

La ley determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes."

Por medio de esta norma el Estado social y democrático de derecho garantiza a todos los habitantes del país un ambiente sano así como un reparto adecuado de la riqueza, es decir el Estado se constituye en un garante para aquellos menos favorecidos, encontrándose en este grupo las personas en situación de abandono y situación de calle que habitan el territorio. Debiendo entonces el Estado por medio de sus instituciones, el proteger de manera efectiva a dicha población con un enfoque de derechos humanos y eliminando toda forma de discriminación.

Con respecto a los términos de personas en situación de calle y situación de abandono, ambos son definidos en la política nacional de atención integral en situación de abandono y situación de calle, del Ministerio de Desarrollo Humano e Inclusión, del año 2016, y se definen de la siguiente manera:

Personas en situación de abandono personas: De cero años en adelante, con factores de riesgo que inciden en la falta o insuficiente respuesta del grupo familiar de convivencia o de redes de apoyo comunitario, que generan riesgo o situaciones de abandono, que pueden verse exacerbadas por condición de pobreza, situación de dependencia o necesidad de asistencia, temporal o permanentemente, para

realizar actividades de la vida diaria, por la falta o la pérdida de autonomía física, psíquica o intelectual.

Personas en situación de calle: Personas hombres y mujeres o grupos familiares, sin distinción de edad, género, condición de discapacidad, condición de adicción, condición migratoria, etnia, diversidad sexual, y/o religión, con ausencia de un hogar o residencia habitual, que además se encuentran en situación de dependencia total o parcial, que se movilizan y deambulan de territorio en territorio según las posibilidades de subsistencia que le genere el medio. Comúnmente estas personas viven, sobreviven y pernoctan en las calles de las principales urbes costarricenses, en donde las condiciones comerciales y de tránsito de una significativa cantidad de población, favorecen sus opciones de sobrevivencia diaria mediante la realización de actividades entre las que predominan la mendicidad y la permanente búsqueda de desechos que de una u otra forma le sean útiles.

Como se aprecia en las características particulares de ambas poblaciones anteriormente definidas, se encuentran la situación de vulnerabilidad y exclusión social, la cual se hace presente en todas las provincias del país, lo que ha motivado a la sociedad civil a organizarse para brindar atención a las personas en situación de calle de cada provincia, mediante diversas organizaciones no gubernamentales y gobiernos locales.

No obstante es necesario resaltar que pese al esfuerzo realizado, el número de personas en situación de calle, de acuerdo con los datos del Instituto Mixto de Ayuda social se incrementó en un 30 por ciento en este año 2018, de acuerdo con lo indicado por el periódico digital crhoy.com de 16 de enero de 2018, en relación con esta población “La FISI (Ficha de Información Social de Personas sin Domicilio Fijo) determina aspectos sociodemográficos y socioeconómicos que permiten identificar el perfil de las personas en situación de calle. El IMAS tiene más de un año de trabajar con distintas organizaciones no gubernamentales que atienden a estas personas, para poder establecer un registro de esa población, ya han contabilizado a 2608 **(297 mujeres y 2311 hombres)**, **pero se estima que alrededor del país hay cerca de 6 mil.**

Las personas en situación de calle y en situación de abandono tienen rostro y la gran mayoría está representada por hombres, **un 87% que comparten otro denominador común: bajo nivel educativo, solo un 25% logró culminar la primaria y un 4%** del total recibió preparación académica en estudios universitarios y parauniversitarios.

El 86% de los habitantes de la calle son personas en edad económicamente activa, es decir, entre los 18 y 65 años. El 51% **se dedica a actividades informales como medio de sobrevivencia:** el reciclaje de desechos sólidos, cuido de carros, la venta de artículos que compran o hurtan y la mendicidad, entre otros.

El 79% carece del **beneficio del seguro social y desconocen de enfermedades que padecen, entre las cuales figuran males crónicos como hipertensión,**

diabetes y otros. Padecimientos respiratorios (posiblemente asociados al consumo de drogas por estas vías y a la exposición a las inclemencias del tiempo). **También presentan problemas gástricos propios de su situación deambulatoria y nutricional.**

Casi la totalidad tiene problemas de adicciones, **un 89% consume drogas, alcohol o ambos.** Sin embargo, existe un pequeño grupo (11% del total) que pone en evidencia que no toda la población que **vive en la calle posee algún tipo de adicción.** En este caso se trata de personas que se ubican dentro de lo que se conoce como "indigentes puros" personas en situación de miseria o pobreza extrema.[1] (el resaltado es propio del original)

Esta alarmante situación que crece desmesuradamente conforme se agrava la situación económica del país, debe constituirse en un llamado urgente de atención a los entes estatales vinculados con el abordaje de los derechos de las poblaciones vulnerables, con la finalidad de articular esfuerzos y recursos a nivel nacional con gestión local, que brinden ayuda real e inmediata para la atención de la población en situación de calle.

A pesar de que Costa Rica cuenta con una política nacional para la atención a las personas en situación de abandono y situación de calle, desde el año 2016 y siendo esta política de carácter interinstitucional e intersectorial, que involucra a las instituciones gubernamentales, gobiernos locales, organizaciones no gubernamentales, así como empresa privada, para responder a las necesidades de estas poblaciones, son muchos los esfuerzos que hacen falta para materializar dicha política nacional, siendo imprescindible la aprobación de legislación orientada a la solución real de estas poblaciones.

Es por este motivo que la presente ley reforma el Código Municipal adicionado como una más de sus obligaciones, la creación y acondicionamiento de albergues temporales, para las personas en situación de abandono y situación de calle, un claro ejemplo de la operatividad de dicho sistema lo constituye la Municipalidad de San José, que ha puesto en práctica la iniciativa del centro dormitorio que ofrece cerca de 100 espacios por noche para que estas personas se duchen y duerman en condiciones propicias, es por ello que considerando la necesidad impostergable de las personas en la condición descrita es que se realiza esta reforma para que todas municipalidades del país creen alberges temporales, autorizándolas por medio de esta ley para presupuestar en sus respectivos planes operativos las acciones necesarias para poder cumplir con la obligación creada, asimismo se dispone que podrán financiarse mediante las donaciones de bienes o recursos provenientes de instituciones públicas o privadas, nacionales o internacionales, así como de las instituciones y organizaciones no gubernamentales, personas físicas o jurídicas; y del presupuesto para obras especificas designado en los presupuestos ordinarios y extraordinarios de la República.

[1] ¡Quienes viven en las calles de Costa Rica? Crhoy.com. 16 de enero 2018.

La atención de estos grupos es una tarea ineludible e impostergable para todos nosotros, el accionar es necesario desde todos los frentes, de allí deriva la importancia de aprobar la presente iniciativa.

Para finalizar debo hacer mías las palabras de Rafael Ángel Calderón Guardia, gran defensor de los desposeídos:

"Comprendo que la obra social apenas se inicia; que para quienes la intenten como lo he hecho yo, no habrá gloria ni beneficio, sino cosecha abundante de amarguras y sinsabores Comprendo, asimismo, que lo que puede haber realizado, vale bien poco.

Pero estoy seguro de que los gobernantes que en años venideros, tengan que confrontar -como los he confrontado en una época de emergencia y transtorno universales-, los graves problemas originados en la miseria de las grandes masas de la población que pertenecen a nuestras clases trabajadoras, podrán llenar otras etapas de la ardua lucha y completar lo que hoy es una primera piedra del gran edificio que tendrá que construir la nacionalidad costarricense, para afianzar su progreso y cultura futuros y para garantizar, si cabe decirlo, no sólo a los desheredados de la fortuna el disfrute de sus legítimos derechos, sino también a las clases propietarias el goce de sus bienes y de la paz social, que tanto necesitan para el mantenimiento de su riqueza y bienestar actuales."[2]

Por lo expuesto, se somete a consideración de todos los señores diputados y señoras diputadas el siguiente proyecto de ley.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
DECRETA:

LEY PARA LA CREACIÓN DE ALBERGUES TEMPORALES DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE ABANDONO Y SITUACIÓN DE CALLE

ARTÍCULO 1- Refórmense los artículos 4 y 62 del Código Municipal, Ley N.° 7794, de 18 de mayo de 1998, para que se lea de la siguiente manera:

Artículo 4- La municipalidad posee la autonomía política, administrativa y financiera que le confiere la Constitución Política. Dentro de sus atribuciones se incluyen las siguientes:

a) Dictar los reglamentos autónomos de organización y de servicio, así como cualquier otra disposición que autorice el ordenamiento jurídico.
b) Acordar sus presupuestos y ejecutarlos.

[2] El Gobernante y el Hombre frente al Problema Social Costarricense, Rafael Ángel Calderón Guardia páginas 17 y 18.

c) Administrar y prestar los servicios públicos municipales, así como velar por su vigilancia y control.
d) Aprobar las tasas, los precios y las contribuciones municipales, así como proponer los proyectos de tarifas de impuestos municipales.
e) Percibir y administrar, en su carácter de administración tributaria, los tributos y demás ingresos municipales.
f) Concertar, con personas o entidades nacionales o extranjeras, pactos, convenios o contratos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.
g) Convocar al municipio a consultas populares, para los fines establecidos en esta ley y su reglamento.
h) Promover un desarrollo local participativo e inclusivo, que contemple la diversidad de las necesidades y los intereses de la población.
i) Impulsar políticas públicas locales para la promoción de los derechos y la ciudadanía de las mujeres, en favor de la igualdad y la equidad de género.
j) Crear los albergues temporales necesarios para la atención de personas en situación de abandono y situación de calle.

Artículo 62- La municipalidad podrá usar o disponer de su patrimonio mediante toda clase de actos o contratos permitidos por este Código y la Ley de Contratación Administrativa, que sean idóneos para el cumplimiento de sus fines.

Las donaciones de cualquier tipo de recursos o bienes inmuebles, así como la extensión de garantías a favor de otras personas, solo serán posibles cuando las autorice, expresamente, una ley especial. Sin embargo, las municipalidades, mediante el voto favorable de las dos terceras partes del total de los miembros que integran su concejo, podrán donar directamente bienes muebles e inmuebles, siempre que estas donaciones vayan dirigidas a los órganos del Estado e instituciones autónomas o semiautónomas, que a su vez quedan autorizadas para donar directamente a las municipalidades.

Cuando la donación implique una desafectación del uso o fin público al que está vinculado el bien, se requerirá la autorización legislativa previa.

Podrán darse préstamos o arrendamientos de los recursos mencionados, siempre que exista el convenio o contrato que respalde los intereses municipales.

A excepción de lo dispuesto en los párrafos anteriores, las municipalidades podrán otorgar ayudas temporales a vecinos y vecinas del cantón que enfrenten situaciones, debidamente comprobadas, de desgracia o infortunio, asimismo podrán crear albergues temporales para las personas que se encuentren en situación de abandono y situación de calle, una vez demostrada dicha condición de acuerdo con los parámetros establecidos en la presente ley. También, podrán subvencionar centros de educación pública, beneficencia o servicio social que presten servicios al cantón respectivo; además, las municipalidades podrán otorgar becas de estudio a sus munícipes de escasos recursos y con capacidad probada para estudiar. Cada municipalidad emitirá el reglamento para regular lo anterior.

ARTÍCULO 2- Definiciones. Se entenderá por personas en situación de abandono y situación de calle lo siguiente:

Personas en situación de abandono: Personas: De cero años en adelante, con factores de riesgo que inciden en la falta o insuficiente respuesta del grupo familiar de convivencia o de redes de apoyo comunitario, que generan riesgo o situaciones de abandono, que pueden verse exacerbadas por condición de pobreza, situación de dependencia o necesidad de asistencia, temporal o permanentemente, para realizar actividades de la vida diaria, por la falta o la pérdida de autonomía física, psíquica o intelectual

Personas en situación de calle: Personas hombres y mujeres o grupos familiares, sin distinción de edad, género, condición de discapacidad, condición de adicción, condición migratoria, etnia, diversidad sexual, y/o religión, con ausencia de un hogar o residencia habitual, que además se encuentran en situación de dependencia total o parcial, que se movilizan y deambulan de territorio en territorio según las posibilidades de subsistencia que le genere el medio.

ARTÍCULO 3- Autorizaciones y patrimonio. Se autoriza a todas las municipalidades del país a incluir, en sus respectivos planes anuales operativos, las acciones necesarias para dar cumplimiento a las obligaciones que les sean definidas por esta ley y demás leyes específicas en la materia. Además de las fuentes de financiamiento indicadas en esta ley, las municipalidades podrán contar con los siguientes recursos adicionales:

a) Las donaciones de bienes o recursos provenientes de las instituciones públicas o privadas, nacionales e internacionales, así como de instituciones y organizaciones no gubernamentales, personas físicas o jurídicas.

b) Las partidas que anualmente podrán asignar las instituciones indicadas en esta ley, en los presupuestos ordinarios y extraordinarios de la República.

Rige a partir de su publicación.

Dragos Dolanescu Valenciano
Diputado

NOTA: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Sociales.

1 vez.—(IN2018300239).

LEY PARA DESINCENTIVAR EL CONSUMO DE PRODUCTOS ULTRAPROCESADOS Y FORTALECER EL RÉGIMEN DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE DE LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Expediente N.° 21.132

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

Esta iniciativa de ley, tiene como antecedente el Expediente Nº 20365. Sin embargo, fue asignado a la Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia, la cual conoce de materias muy distintas a esta y no tuvo la oportunidad de estudiar a profundidad el expediente en cuestión. En razón de lo anterior, se retoma la propuesta para que continúe su trámite bajo un nuevo número de expediente.

La última encuesta nacional de nutrición realizada en el año 2009 por varias instituciones públicas,[1] concluyó que *"el sobrepeso y la obesidad ya eran un grave problema de salud pública en la población adulta, situación que ha venido en aumento y comprometiendo a grupos más jóvenes, tal como sucedió en esta encuesta donde por primera vez la población de 5 a 12 años de edad resultó afectada. Esta situación confirma que independientemente del método de clasificación utilizado, ya sea índice de masa corporal o porcentaje de grasa corporal, el sobrepeso y la obesidad guardan la misma proporción."* El estado nutricional de la población entre los 1 y 4 años se evaluó mediante los indicadores de peso para edad, peso para talla y talla para edad, de conformidad con la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) (2006). En el caso de la evaluación de la población entre de 5 a 19 años se utilizó el índice de masa corporal, de acuerdo con el patrón de referencia del National Center for Health Statistics y la clasificación en percentiles según sexo y edad adaptada de la recomendación de la OMS (1995). Para evaluar el estado nutricional de mujeres y hombres de 20 años y más se utilizó el índice de masa corporal utilizando la clasificación recomendada por la OMS (2000). Asimismo, se evaluó la circunferencia abdominal utilizando los puntos de corte recomendados por la OMS (2011).

[1] La encuesta fue elaborada por el Ministerio de Salud, Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud, Caja Costarricense de Seguro Social, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos y el Instituto Costarricense sobre Drogas.

Los resultados evidenciaron un aumento en la población con sobrepeso y obesidad en todas las edades, con la única excepción del sector de 1 a 4 años de edad. Al respecto, la encuesta arrojó los siguientes datos:

	5 a 12 años	13 a 19 años	20 a 64 años
SOBREPESO	11.8%	14.7%	35.3%
OBESIDAD	9.6%	6.1%	31.3%
TOTAL	**21.4%**	**20.8%**	**66.6%**

¿Qué son los productos ultraprocesados?

De conformidad con un estudio[2] publicado en el 2015 por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), se comprobó que en América Latina el aumento del peso corporal se encuentra directamente relacionado con el consumo de alimentos "ultraprocesados". Según el sistema NOVA de clasificación de alimentos creado por la OPS/OMS, estos productos son definidos como "*formulaciones industriales elaboradas a partir de sustancias derivadas de los alimentos o sintetizadas de otras fuentes orgánicas. En sus formas actuales, son inventos de la ciencia y la tecnología de los alimentos industriales modernas. La mayoría de estos productos contienen pocos alimentos enteros o ninguno. Vienen listos para consumirse o para calentar y, por lo tanto, requieren poca o ninguna preparación culinaria. Algunas sustancias empleadas para elaborar los productos ultraprocesados, como grasas, aceites, almidones y azúcar, derivan directamente de alimentos. Otras se obtienen mediante el procesamiento adicional de ciertos componentes alimentarios, como la hidrogenación de los aceites (que genera grasas trans tóxicas), la hidrólisis de las proteínas y la "purificación" de los almidones. Numéricamente, la gran mayoría de los ingredientes en la mayor parte de los productos ultraprocesados son aditivos (aglutinantes, cohesionantes, colorantes, edulcorantes, emulsificantes, espesantes, espumantes, estabilizadores, "mejoradores" sensoriales como aromatizantes y saborizantes, conservadores, saborizantes y solventes). A los productos ultraprocesados a menudo se les da mayor volumen con aire o agua. Se les puede agregar micronutrientes sintéticos para "fortificarlos". Algunos ejemplos de productos ultraprocesados son las papas fritas en paquete y muchos otros tipos de productos grasos, snacks empaquetados, salados o dulces; helados, chocolates y caramelos; panes, bollos, galletas (galletitas), pasteles y tortas empaquetados; cereales endulzados para el desayuno; barras "energizantes"; mermeladas y jaleas; margarinas; bebidas gaseosas y bebidas "energizantes"; bebidas azucaradas a base de leche, incluido el yogur para beber de fruta; bebidas y néctares de fruta; bebidas de chocolate; leche "maternizada" para lactantes, preparaciones lácteas complementarias y otros productos para bebés; y productos "saludables" o "para adelgazar", como sustitutos en polvo o "fortificados" de platos o de comidas. Hoy en*

[2] Alimentos y bebidas ultraprocesados en América Latina: tendencias, efecto sobre la obesidad e implicaciones para las políticas públicas. Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud.

día es muy común consumir productos ultraprocesados listos para calentar o listos para comer, tanto en casa como en los locales de comida rápida. Estos alimentos, también conocidos como "comidas listas", incluyen platos reconstituidos y preparados de carne, pescados y mariscos, vegetales o queso; pizzas; hamburguesas y perros calientes; papas fritas; nuggets (patitas o trozos) o palitos (barras) de ave o pescado; y sopas, pastas y postres, en polvo o envasados. A menudo parecen ser más o menos lo mismo que las comidas o platos preparados en casa, pero las listas de los ingredientes que contienen demuestran que no lo son."

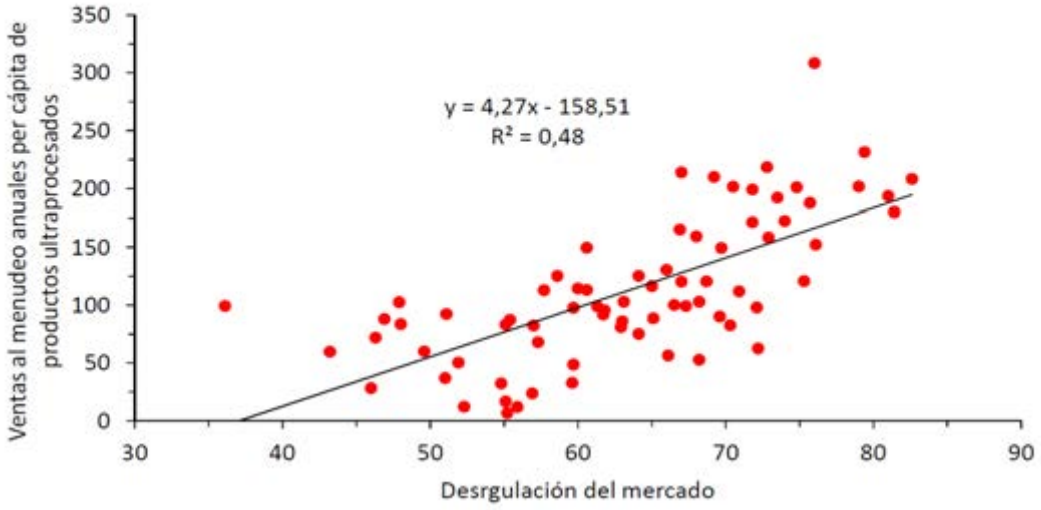
Estos alimentos generan problemas no solo en la salud de las personas, sino que tienen otras repercusiones sociales, culturales, económicas y ambientales. Por ejemplo, el suministro masivo y su consumo han desplazado las comidas propias de cada país, lo que provocó un cambio en la dieta de los habitantes. Las consecuencias negativas por su consumo se agravan debido a las características propias de los alimentos ultraprocesados: tienen una calidad nutricional muy mala porque normalmente tienen un alto contenido calórico y bajo valor nutricional, además son extremadamente sabrosos y en algunos casos adictivos, por lo que se constituyen en generadores de hábitos, debido a la incorporación de ciertas sustancias que provocan la distorsión del sistema digestivo y el cerebro al momento de enviar la señal de saciedad, la cual es fundamental para el control del apetito.

Para el caso específico de Costa Rica, las ventas al menudeo per cápita en el año 2013 de alimentos y bebidas utlraprocesados fue de 120,4 kg, lo que sitúa al país como el quinto, de los trece países de América Latina estudiados, que más consumió este tipo de alimentos.

La penetración de ultraprocesados en los mercados nacionales se ha intensificado con la globalización y la desregulación del mercado, lo que ha generado la instauración de corporaciones alimentarias extranjeras y multinacionales en los mercados nacionales. El supracitado estudio demuestra una fuerte correlación entre las ventas de los productos ultraprocesados y la desregulación del mercado, de conformidad con el índice de libertad económica. Por ejemplo, el mercado nacional de bebidas gaseosas está controlado en un 98,2% por solo cuatro empresas, es decir, este mercado constituye el oligopolio con mayor concentración, lo que nos sitúa a la cabeza de los 13 países evaluados de América Latina.

La globalización, la falta de políticas públicas en cuanto a la seguridad alimentaria, la desregulación de los mercados mediante la promoción del flujo internacional de capitales y comercio han sido los principales responsables del alto consumo de ultraprocesados y su correspondiente negativo impacto nutricional. Según la OMS y la OPS, en el año 2013 las ventas anuales per cápita al menudeo de productos ultraprocesados en función de la desregulación de mercados en 74 países tiene una correlación significativa, es decir, a mayor grado de desregulación, mayores son las ventas de estos productos:

Ventas al menudeo anuales per cápita de productos alimentarios y bebidas ultraprocesados en función de la desregulación del mercado en 74 países, 2013



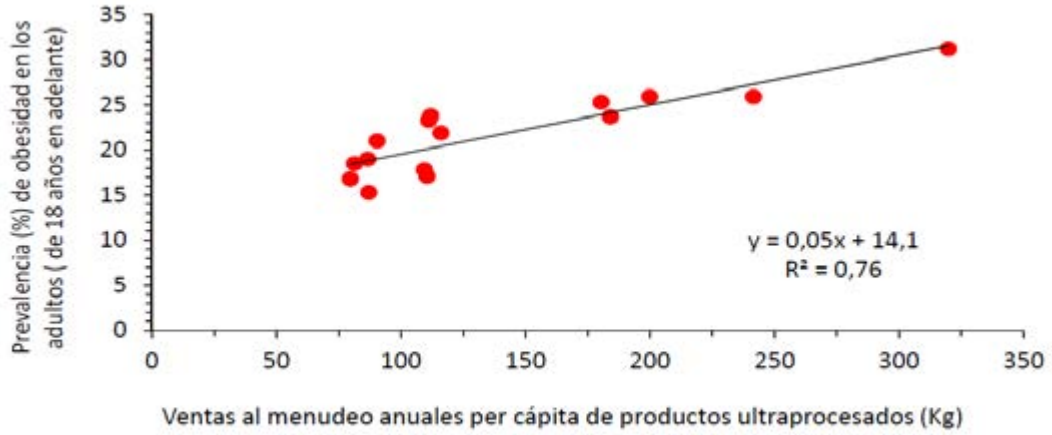
[3]

El poder económico de las compañías productoras de alimentos a gran escala, así como las medidas políticas y económicas tomadas para favorecerlas a partir de los años de 1980 en Costa Rica, les otorgan ventajas sobre el mercado que les permite reducir los costos en materiales, desarrollar nuevas tecnologías, distribuir y comercializar muy eficazmente sus productos y, por ende, presentarse como una opción barata de alimentación, imposibilitando que las micro, pequeñas y medianas empresas productoras de comidas saludables puedan competir en igualdad de condiciones. Por estas razones, los mercados de productos ultraprocesados tienden a transformarse en oligopolios.

Sin embargo, a pesar de los efectos negativos de carácter social, cultural, económico y ambiental, el más grave de todos se refleja en la salud humana. De conformidad con el resultado estadístico del estudio realizado por OMS/OPS, el consumo de los ultraprocesados se encuentra directamente relacionado con el aumento de la obesidad, de conformidad con la muestra tomada de 14 países en el continente americano, incluyendo Costa Rica. Al respecto concluyeron que "hubo una asociación positiva estrecha y significativa […] entre la prevalencia de obesidad en los adultos y las mayores ventas per cápita de productos ultraprocesados." Esta afirmación se ve reflejada en el siguiente gráfico tomado del informe:

[3] Alimentos y bebidas ultraprocesados en América Latina: tendencias, efecto sobre la obesidad e implicaciones para las políticas públicas. Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud, página 39.

Ventas al menudeo anuales per cápita de productos alimentarios y bebidas ultraprocesados, y prevalencia de obesidad (%) en los adultos en 14 países de las Américas, 2013



Los productos ultraprocesados referidos son: bebidas gaseosas, golosinas dulces y saladas, cereales para el desayuno, dulces y caramelos, helados, galletas, jugos de frutas y verduras, bebidas deportivas y energizantes, té o café listos para beber, productos para untar, salsas y comidas listas. Las cantidades en litros se convierten en kilogramos. Fuente: Ventas de la base de datos Passport de Euromonitor International (2014) *(38)*. Los datos sobre la obesidad son del Informe sobre la situación mundial de las enfermedades no transmisibles de 2014 de la OMS *(2)*.

En el caso de Costa Rica, los últimos datos aportados por la encuesta nacional de nutrición nos confirman que nuestro país no escapa a la problemática mundial de obesidad y sobrepeso, como desencadenante de enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes, mellitus, hipertensión, enfermedades cardíacas y respiratorias, algunos tipos de cáncer, etc. La proliferación de estos padecimientos implica un gasto importante en términos de atención médica, lo cual afecta directamente a los sistemas de salud, el desarrollo sanitario y socioeconómico del país.

Según datos estadísticos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS),[4] los egresos hospitalarios debidos a la obesidad se han incrementado en los últimos 5 años en un 196%, pasando de 135 egresos en 2012 a 400 en 2016.

En este orden de ideas, se solicitó al Departamento de Servicios Bibliotecarios, Documentación e Información de la Asamblea Legislativa, a través de Centro de Investigación Legislativa, realizar el estudio sobre los costos para la CCSS en el ámbito del tratamiento de las enfermedades ocasionadas por la obesidad. Mediante oficio AI-DSBD-OFI-068-2017, de 28 de febrero de 2017, el Departamento concluyó que:

- En una persona con obesidad se invierte ¢5 millones de colones por año. (2014).
- En una persona con hipertensión se invierte ¢94.174 colones por año. (2012).

[4] Caja Costarricense de Seguro Social, Dirección de Proyección de Servicios de Salud, Área de Estadísticas en Salud, Egresos hospitalarios debidos a Obesidad por año según establecimiento de salud 1997-2016,Cuadro N.° 1.

- La CCSS invierte aproximadamente ¢47.308.000 en atención médica de personas con hipertensión. (2012).
- El 31% de la población costarricense padece de hipertensión (2012). Un millón de personas están en tratamiento en la CCSS por hipertensión. (2012).
- La CCSS invirtió 5 millones de dólares en la compra de 1,7 millones de frascos de insulina para el tratamiento de personas con diabetes. (2016).

Costo de paciente con obesidad para la CCSS

Con fundamento en datos del Área de Estadística en Salud de la CCSS al año 2016 se estima que el costo total para la CCSS de pacientes hospitalarios debidos a obesidad ascendió a[5] ¢2 060 000 000. La siguiente tabla desglosa los costos por establecimiento de salud:

Costo de Pacientes hospitalarios debidos a Obesidad por año según establecimiento de salud. C.C.S.S., 2016
(en colones*)

ESTABLECIMIENTO DE SALUD	COSTO EGRESADOS	COSTO DEFUNCIONES	COSTO TOTAL POR ESTABLEC
Hospital Rafael Angel Calderón Guardia	65,000,000.00	10,000,000.00	75,000,000.00
Hospital San Juan de Dios	110,000,000.00	-	110,000,000.00
Hospital Nacional de Niños Carlos Sáenz Herrera	10,000,000.00	-	10,000,000.00
Hospital México	1,605,000,000.00	20,000,000.00	1,625,000,000.00
Hospital de Las Mujeres Adolfo Carit Eva	-	-	-
Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Raúl Blanco Cervantes	5,000,000.00	-	5,000,000.00
Centro Nacional de Rehabilitación Humberto Araya Rojas	-	-	-
Hospital de San Rafael	80,000,000.00	10,000,000.00	90,000,000.00
Hospital San Francisco de Asís	-	-	-
Hospital Carlos Luis Valverde Vega	5,000,000.00	-	5,000,000.00
Hospital San Vicente de Paúl	15,000,000.00	10,000,000.00	25,000,000.00
Hospital Maximiliano Peralta Jiménez	20,000,000.00	5,000,000.00	25,000,000.00
Hospital William Allen	5,000,000.00	-	5,000,000.00
Hospital Max Terán Valls	10,000,000.00	-	10,000,000.00
Hospital de San Carlos	30,000,000.00	-	30,000,000.00
Hospital de Los Chiles	-	-	-
Hospital Víctor Manuel Sanabria Martínez	10,000,000.00	-	10,000,000.00
Hospital Enrique Baltodano Briceño	20,000,000.00	-	20,000,000.00
Hospital de La Anexión	-	5,000,000.00	5,000,000.00
Hospital de Upala	5,000,000.00	-	5,000,000.00
Hospital Tony Facio Castro	-	-	-
Hospital de Guápiles	-	-	-
Hospital Fernando Escalante Pradilla	-	-	-
Hospital Manuel Mora Valverde	-	-	-
Hospital de Osa Tomás Casas Casajús	5,000,000.00	-	5,000,000.00
Hospital de Ciudad Neilly	-	-	-
Hospital de San Vito	-	-	-
COSTO TOTAL 2016	2,000,000,000.00	60,000,000.00	2,060,000,000.00

a/ Datos del año 2016 preliminares, sujetos a cambios por revisiones.

**** De acuerdo con el Colegio de Profesionales en Nutrición de Costa Rica, por cada persona con obesidad la CCSS invierte ¢5 millones al año (dato al 2014)***

De elaboración propia con datos de la C.C.S.S., Área de Estadística en Salud.

[5] Estimación propia con datos del Área de Estadística en Salud de la CCSS (2016), el Colegio de Profesionales en Nutrición de Costa Rica (2014) y datos proporcionados por el Departamento der Servicios Bibliotecarios, Documentales e Información de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica (Oficio AI-DSBD-OFI-068-2017). Para realizar esta estimación se asume que por cada persona con obesidad la CCSS invierte ¢5 millones al año, dato al 2014 pues no existe dato al 2016.

Derecho comparado

En América Latina el único país que ha optado por gravar los alimentos por sus efectos negativos en la salud ha sido México. La ley establece un impuesto de un peso mexicano (MXN) por litro a las bebidas con azúcares adicionados y en el caso de los alimentos se les aplica un impuesto de un 8% del valor para aquellos productos con más de 275 calorías por 100 gramos. Un estudio realizado por la OMS/OPS para México[6] medió los resultados producidos por la creación de estos tributos y concluyó: *"El INSP[7] y el Centro de Población de la Universidad de Carolina del Norte, Estados Unidos, realizan un estudio para estimar el efecto del impuesto de MXN 1,00 por litro a las bebidas con azúcares adicionados, aplicado a partir del 1 de enero de 2014. Los datos presentados por el INSP, provenientes de un panel de consumidores, contienen información sobre compras de bebidas en hogares de 53 ciudades del país con al menos 50 000 habitantes. Los resultados preliminares muestran una reducción de aproximadamente 6% en las compra de las bebidas azucaradas con impuesto a diciembre de 2014, en comparación con 2013, y la reducción en el grupo socioeconómico del percentil más pobre redujo la compra en 17% en diciembre de 2014. Los resultados revelan también un aumento de 7% en las compras de bebidas sin impuesto (como bebidas con edulcorantes artificiales, agua mineral carbonatada, agua simple, jugos sin azúcares adicionados y leche sin azúcares adicionados) y, dentro de esta categoría, un incremento de cerca de 4% en la compra de agua simple durante el mismo período. Las compras de bebidas carbonatadas sin impuestos (bebidas con edulcorantes artificiales y agua mineral carbonatada) y otras bebidas (leches y jugos sin azúcares adicionados) no cambiaron de forma estadísticamente significativa. […] Para los alimentos no básicos con alta densidad energética (más de 275 kcal por 100 g), los resultados preliminares señalan una respuesta más heterogénea en sus precios. En un grupo de alimentos, el precio aumentó casi 8% —el monto del impuesto— o más —palomas de maíz, pastelitos empaquetados, chocolates y dulces, papas fritas y otros bocadillos y cereales en barra—. Es decir, en estos productos el impuesto superó al precio para el consumidor. En un segundo grupo de alimentos, el precio tuvo aumentos menores que 8% —cacahuates, cereales de caja, galletas—, mientras que, en un tercer grupo compuesto por un menor número de alimentos, no se documentaron cambios o se observaron decrementos en sus precios —chocolate en barra o polvo, pan dulce en pieza. De acuerdo con estos datos previos, se puede deducir que mientras para las bebidas azucaradas en conjunto el impuesto se reflejó casi totalmente en sus precios, en los alimentos no básicos con alta densidad energética, el impuesto de 8% se autorizó solo para algunas subcategorías. El resultado global que se espera es la disminución en el consumo de las bebidas azucaradas. Hay evidencia de elasticidad y de disminución de alrededor de 10%, y se tomó como sustituto al agua natural. Aunque en el resultado se consideró que los efectos calóricos no son tan perceptibles, sí puede haber efectos en la salud que*

[6] Experiencia de México en el establecimiento de impuestos a las bebidas azucaradas como estrategia de salud pública, Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud, México D.F., México, 2015.
[7] Instituto Nacional de Salud Pública.

se manifiestan en el padecimiento del síndrome metabólico y sus subcategorías."
(Subrayado no es del original)

Sin mencionar los efectos recaudatorios en México, los cuales han sido sumamente exitosos, la carga tributaria establecida ha generado la disminución en el consumo de este tipo de alimentos y en algunos casos no ha significado el aumento en el costo de dichos productos.

Propuesta

Con la finalidad de desincentivar el consumo de productos ultraprocesados -que como ya se demostró constituyen uno de los principales causantes de la obesidad en Costa Rica- este proyecto de ley propone la creación de un impuesto sobre las ventas a nivel de fábrica, en la fecha de emisión de la factura o de la entrega del producto, el acto que suceda primero; en la importación o internación, en el momento de aceptación de la declaración aduanera; en todos los casos, independientemente de su presentación. En la producción nacional, será contribuyente de estos impuestos el fabricante o envasador de dichos productos; en la importación o internación, la persona física o jurídica que introduzca los productos o a cuyo nombre se importen o internen.

El impuesto resulta progresivo para los alimentos saludables y solo regresivo para el consumo de aquellos productos que tienen consecuencias negativas para la salud (ultraprocesados), por ende, debe verse de manera integral, es decir, tomando en cuenta que el resultado final es progresivo. Pensar lo contrario significaría condenar a las clases más desposeídas a sufrir de obesidad y de todas las enfermedades causadas por esta. El impacto en la salud sería en las personas de escasos recursos, por ser los más sensibles a los cambios en los precios generados por los impuestos. Es por esto que la progresividad de los tributos debe verse no solo desde un punto de vista económico, sino que se debe tomar en cuenta el impacto social. Cabe destacar que la medida propuesta en el presente proyecto para desincentivar el consumo de ultraprocesados debe complementarse con otras acciones públicas como la regulación de la publicidad y una política eficaz de compras públicas.

Tarifa del impuesto para alimentos

Se propone una tarifa de 1,5 colones por cada 5 gramos, proporcional a la cantidad total de gramos del producto. El objetivo de este monto es que constituya un desincentivo al consumo de alimentos con alto contenido perjudicial para la salud sin encarecer la canasta básica alimentaria ni comidas tradicionales, y sin elevar desproporcionadamente y de choque los precios de ningún alimento. La siguiente tabla ejemplifica algunos casos de aplicación de este impuesto (*tómese "P" como "Precio" y "T" como "impuesto"*):

Fuente de información	Producto	Peso total en gramos	P. actual	T	T como % de P. actual	P. final (con T)
MEIC (2015) [8]	Salsas preparadas con carne	De 106 g a 114 g	¢295.71	¢34.20	11.57%	¢329.91
	Sopas en polvo pollo con fideos	De 57 g a 60 g	¢293.17	¢18.00	6.14%	¢311.17
Automercado [9] (2017)	Cheetos bocadillos poff jumbo	255.1 g	¢2,475.00	¢76.53	3.09%	¢2,551.53
	Picaritas de maíz	75 g	¢620.00	¢22.50	3.63%	¢642.50
	Meneitos con queso grande	115 g	¢1,025.00	¢34.50	3.37%	¢1,059.50
	Toreaditos barbacoa grande	160 g	¢720.00	¢48.00	6.67%	¢768.00
	Tronaditas grande sal y limón	175 g	¢960.00	¢52.50	5.47%	¢1.012.50
	Quesitos cheddar grande	116 g	¢795.00	¢34.80	4.38%	¢829.80
	Mejitos grande tortilla de maíz	300 g	¢1,345.00	¢90.00	6.69%	¢1,435.00
	Chocolate Spread hersheys mermelada	368 g	¢3,320.00	¢110.40	3.33%	¢3,430.40
	Mermelada de uva welchs	510 g	¢2,065.00	¢153.00	7.41%	¢2,218.00
	Crema nutella avellanas con chocolate	350 g	¢3,310.00	¢105.00	3.17%	¢3,415.00
	Bebida en polvo limón Tang	25 g	¢190.00	¢7.50	3.95%	¢197.50
	Helado vainilla fresa limón Dos Pinos	946 g	¢2,500.00	¢283.80	11.35%	¢2,783.80
	Chocolate en barra con almendras hersheys	192 g	¢2,275.00	¢57.60	2.53%	¢2,332.60
	Caramelo barrilete	130 g	¢580.00	¢39.00	6.42%	¢619.00
	Barra de cereal surt energético 6 unidades jacks	140 g	¢1,170.00	¢42.00	3.59%	¢1,212.00

[8] MEIC (2015) contempla un análisis comparativo entre hasta 27 cadenas de supermercados, según artículo. El precio promedio aquí colocado corresponde al precio promedio entre todas esas cadenas. Consultar en: http://reventazon.meic.go.cr/informacion/estudios/2015/canastabasica/mayo/cuadro2.pdf

[9] Se elige analizar los precios del Automercado para febrero 2017 por constituir uno de los supermercados con mayores precios en artículos idénticos según se deduce del estudio MEIC (2015). Consultar en: https://www.automercado.co.cr/aam/loginZona.do?idZona=1

	Congelado papa rellena queso con tocineta fridays TGFI	215 g	¢5,530.00	¢64.50	1.17%	¢5,594.50
	Sopa instantánea carne de res Maruchan	64 g	¢325.00	¢19.20	5.91%	¢344.20
The economist (2017)[10]	Big-mac (Index big-mac)	205 g.	¢2,273.60	¢61.50	2.70%	¢2,335.10
Mc Donalds (2017)[11]	McPapas Pequeñas	73 g	¢690.00	¢21.90	3.17%	¢711.90
	McNuggets 4	66 g	¢690.00	¢19.80	2.87%	¢709.80

Tabla de elaboración propia

Nótese que el impacto del impuesto sobre el precio final de venta de los artículos descritos en la tabla no supera nunca el 12% de aumento con respecto al precio actual. Por ejemplo, las picaritas de maíz en paquete de 75 gramos tendrían que pagar ¢22.50 de impuesto lo cual equivale a un 3,63% de aumento del precio actual en el auto mercado, pasando de costar ¢620 a ¢642.50.

Finalmente, cabe destacar que los productos de la siguiente lista quedan totalmente excluidos del presente impuesto por formar parte de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) actual.[12]

Grupo	CBA Urbana	CBA Rural
Lácteos y queso	Leche fluida/ Queso	Leche fluida/ Queso
Carne de res	Bistec de res/ Carne molida de res/ Posta y hueso de res	Bistec de res/ Carne molida de res
Carne de cerdo	Chuleta de cerdo/ Posta de cerdo	
Carne de pollo	Muslo de pollo/ Pechuga de pollo/ Pollo entero	Muslo de pollo/ Pollo entero

[10] Consultar en: http://www.economist.com/content/big-mac-index

[11] Consultar en: http://mcd.inutre.com.br/public/tables/costarica/restaurante.pdf y en: http://www.mcdonalds.co.cr/compania/sobre-mcdonalds

[12] Consultar en: http://www.inec.go.cr/sites/default/files/documentos/economia/costo_canasta_basica_alimentaria/publicaciones/reeconomcba012015-01.pdf y en: http://www.inec.go.cr/sites/default/files/documentos/economia/costo_canasta_basica_alimentaria/publicaciones/reeconomcba012011-01.pdf

Embutidos	Mortadela/ Salchichón/ Chorizo	Mortadela/ Salchichón
Pescado	Atún	Atún
Leguminosas	Frijoles negros/ Frijoles rojos	Frijoles negros/ Frijoles rojos
Vegetales	Tomate/ Cebolla/ Culantro castilla/ Chile dulce o pimiento/ Chayote/ Repollo verde o morado/ Zanahoria/ Ajo	Tomate/ Cebolla/ Culantro castilla/ Chile dulce o pimiento/ Chayote/ Repollo verde o morado/ Zanahoria/ Ajo
Frutas	Banano/ Naranja Dulce/ Limón ácido/ Papaya/ Manzana/ Piña	Banano/ Naranja Dulce/ Manzana/ Piña
Tubérculos y raíces	Papa/ Plátano maduro	Papa/ Plátano maduro
Pan y galletas	Pan salado/ Pan dulce/ Galleta dulce/ Galleta salada	Pan salado/ Pan dulce/ Galleta dulce/ Galleta salada
Cereales y otros	Arroz/ Tortilla de maíz/ Espaguetti Cereales/ Harina de maíz (masa)	Arroz/ Espaguetti/ Harina de maíz (masa)/ Harina de trigo
Azúcar	Azúcar	Azúcar
Huevo y grasas	Huevo Grasas Aceite Manteca vegetal Margarina Natilla	Huevo Aceite Manteca vegetal Margarina Natilla
Otros alimentos	Condimentos/ Salsa/ Sal	Condimentos/ Salsa/ Sal
Bebidas no alcohólicas	Café / Bebidas naturales	Café / Bebidas naturales

Tabla de elaboración propia

Tampoco están sujetos a este impuesto los platos caseros tradicionales de la cultura nacional, como: el chifrijo, casados, tamales, empanadas, rice and beans, chorreadas, rosquilla guanacasteca, gallo pinto, entre otros.

Tarifa del impuesto para las bebidas no alcohólicas

El presente proyecto de ley propone que la tarifa del impuesto recaudado por concepto de “bebidas gaseosas y concentrados de gaseosas” y de “otras bebidas líquidas envasadas” aumente. La siguiente tabla desglosa el cambio:

Cambio de tarifa del impuesto			
PRODUCTO	IMPUESTO VIGENTE	40%	IMPUESTO NUEVO
Bebidas gaseosas y concentrados de gaseosas	18.210	7.284	25.494
Otras bebidas líquidas envasadas	13.510	5.404	18.914

La propuesta consiste en aumentar en un 40% la tarifa vigente aplicada a bebidas gaseosas y concentrados de gaseosas y otras bebidas líquidas envasadas, excluyendo de este aumento el agua embotellada. Es decir, las tarifas quedarían en 25.494 colones y 18.914 colones respectivamente.

Cabe destacar que no se incluye el agua en el aumento de la tarifa por constituir un producto saludable y básico para lo cual se reforma en el artículo 9 del presente proyecto de ley la tabla vigente con el fin de separar el "agua (envases de menos de 18 litros)" de la categoría "otras bebidas líquidas envasadas".

Recaudación estimada total

Para efectos del presente proyecto de ley se estima una recaudación total de ¢ 39.999.525.360,155 al año.[13]

- **Del impuesto a los productos ultraprocesados**

La estimación de este rubro contiene por limitación metodológica la insuficiencia de datos disponibles por corresponder a un nuevo impuesto; no obstante, es posible realizar una aproximación básica con fundamento en datos de la OMS[14] y el INEC[15]. Durante el año 2013 las ventas de alimentos ultraprocesados[16] ascendieron a 15.900 gramos per cápita lo cual, según la tarifa propuesta en el presente proyecto, permite recaudar ¢4.770 per cápita, esto es una recaudación agregada esperada de al menos ¢ 23.599.525.360,155[17] de colones al año.

- **Del impuesto para las bebidas no alcohólicas**

Según datos de la División de Política Fiscal del Ministerio de Hacienda, de los 44.000 millones estimados en recaudación para el año 2017 por concepto de

[13] Este monto corresponde al resultado bruto, sin aplicar supuesto de evasión o elusión fiscal.
[14] OMS (2015). Alimentos y bebidas ultraprocesados en América Latina: tendencias, efecto sobre la obesidad e implicaciones para las políticas públicas. Consultar en: http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000000718cnt-2015-11_obesidad_OMS.pdf
[15] INEC (2013). Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2013: principales resultados. Consultar en: http://www.inec.go.cr/sites/default/files/documetos-biblioteca-virtual/reenigh2013.pdf
[16] El concepto "alimentos ultraprocesados" de la OMS (2015) abarca: snacks, cereales para el desayuno, dulces, caramelos, helados, galletas, productos para untar, salsas y comidas; no diferencia entre bienes que pertenecen a la canasta básica alimentaria y bienes que no. La anterior característica implica que la recaudación estimada para el caso del impuesto sobre alimentos ultraprocesados constituye un piso por fundamentarse en una canasta de bienes relativamente limitada.
[17] Este monto corresponde al resultado bruto, sin aplicar supuesto de evasión o elusión fiscal.

impuesto específico sobre bebidas envasadas sin contenido alcohólico Ley N.° 8114, 3000 millones corresponderían a agua envasada (bien excluido en esta iniciativa) y los restantes 41.000 millones a otras bebidas no alcohólicas envasadas, por lo que al aplicar el aumento propuesto en el presente proyecto asumiendo un aumento uniforme sin tarifa diferenciada, la recaudación adicional esperada sería de hasta 16.400 millones.[18]

Destino del impuesto

Las pensiones por invalidez, vejez y muerte son uno de los principales mecanismos de protección social. Con las pensiones se protege a los ciudadanos y ciudadanas del riesgo de quedar repentinamente sin ingresos suficientes para una vida digna, ya sea por vejez, por un accidente que genere invalidez o por la muerte de los responsables de los ingresos del hogar.

El Régimen de Pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) administrado por la CCSS es el principal régimen de pensiones de nuestro país. Actualmente, más de 238 mil ciudadanos y ciudadanas perciben pensiones de este régimen y más de 1,4 millones de trabajadores y trabajadoras cotizan para recibir, en el futuro, una pensión del IVM. El IVM es uno de los pilares centrales en la generación de seguridad social para la ciudadanía costarricense.

Según revela el estudio actuarial del seguro del IVM, realizado por la Universidad de Costa Rica, la situación financiera del régimen de pensiones del IVM “es complicada”. Si no se toman medidas, en el presente, se estima que el régimen se volvería insolvente en 2027-2034. Es decir, que si no se fortalece el IVM financieramente en el presente en unos 11 o 18 años el IVM comenzará a ser incapaz de pagar las pensiones.

El estudio actuarial señala algunas medidas potenciales que técnicamente solventarían la situación financiera del régimen. Entre ellas el aumento de la edad de retiro en franjas que alcanzan hasta los 70 años, el aumento de las cotizaciones por parte de los trabajadores, o la reducción de los montos de pensión a recibir. Las opciones propuestas se enfocan a medidas valoradas por los expertos que realizaron el estudio, solo a la luz de la sostenibilidad puramente financiera, como correspondía a su labor, pero que no pueden considerarse, ya en la toma de decisiones políticas, de forma aislada a sus consecuencias sociales. En este sentido, debemos señalar que la decisión sobre la vía a elegir para fortalecer el IVM es una decisión que debe tener fundamento técnico pero que es una decisión política en última instancia.

Por ende, es lógico esperar que la respuesta política de los neoliberales consista en cargar el peso a los trabajadores y las trabajadoras (aumentar la edad de retiro, aumentar la cotización sobre pequeños salarios, privatización del régimen). En cambio, nosotros desde el campo progresista, al contrario de los neoliberales,

[18] Este monto corresponde al resultado bruto, sin aplicar supuesto de evasión o elusión fiscal.

impulsaremos soluciones en las que prime la solidaridad, para evitar que el fortalecimiento del IVM lo paguen los trabajadores de menores ingresos y, por supuesto, para evitar que se deteriore la seguridad social nacional. Nosotros queremos un IVM fuerte, financieramente sano y profundamente solidario. Y eso puede lograrse mediante un acuerdo nacional donde cada sector (patronos, trabajadores y Estado) aporte según sus verdaderas capacidades económicas, donde el esfuerzo de cada sector corresponda a sus capacidades y donde el objetivo de todos los sectores confluya hacia el fortalecimiento del Estado social de derecho y hacia la construcción de una sociedad en la que todos los ciudadanos y ciudadanas tengan iguales oportunidades para vivir con dignidad.

Buscar soluciones reales, posibles y justas es absolutamente necesario. No hacer nada solo provocará una crisis social en el futuro. Hay que tomar acciones para fortalecer el IVM. Pero esas acciones deben guiarse por dos principios fundamentales: por un lado, por la necesidad de fortalecer las finanzas del IVM; por otro, por la necesidad de que no se erosionen los ingresos ni las condiciones de los trabajadores.

En aras de contribuir al fortalecimiento del IVM proponemos que lo recaudado con la creación de este impuesto sea destinado al régimen de pensiones, tomando en cuenta que la recaudación total, según nuestras estimaciones, tendrá un piso de 30 mil millones de colones y que sabemos no es suficiente para solventar la problemática actual, pero que contribuye de manera importante. Asimismo, consideramos deben tomarse otras medidas que complementen esta, teniendo claro que tenemos la responsabilidad de asegurar que nuestra población jubilada tenga una vida digna.

Por las razones anteriormente expuestas, someto a consideración de la Asamblea Legislativa el presente proyecto de ley y solicitamos a las señoras y señores diputados su aprobación.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
DECRETA:

LEY PARA DESINCENTIVAR EL CONSUMO DE PRODUCTOS ULTRAPROCESADOS Y FORTALECER EL RÉGIMEN DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE DE LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

ARTÍCULO 1- Objeto de la ley

Esta ley tiene por objeto gravar mediante un impuesto los productos ultraprocesados, con la finalidad de desincentivar su consumo y destinar los recursos recaudados al del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social, para su fortalecimiento.

ARTÍCULO 2- Definiciones

Para los efectos de la aplicación de la presente ley se establecen las siguientes definiciones:

a) Alimentos sin procesar o mínimamente procesados: los alimentos sin procesar son alimentos de origen vegetal (hojas, tallos, raíces, tubérculos, frutos, nueces, semillas) o animal (carne u otros tejidos y órganos, huevos, leche) distribuidos poco después de la cosecha, recolección, matanza o crianza. Los alimentos mínimamente procesados son alimentos sin procesar que se alteran de maneras tales que no agregan o introducen ninguna sustancia, pero que pueden implicar quitar partes del alimento. Los procesos mínimos incluyen el limpiado, lavado, cepillado; aventamiento, descascaramiento, pelado, molienda, ralladura, expresión, corte en hojuelas, desmenuzamiento; desollamiento, deshuese, rebanado, división en porciones, escamado, corte en filetes; compresión, secado, descremado, pasteurización, esterilización; enfriamiento, refrigeración, congelamiento, sellado, embotellamiento, cobertura con envoltura simple, empaquetado al vacío y con gas. El malteado, que agrega agua, es un proceso mínimo, lo mismo que la fermentación, la cual implica agregar organismos vivos, cuando esto no genera alcohol.

b) Ingredientes culinarios procesados: son sustancias extraídas y purificadas por la industria a partir de ciertos componentes de los alimentos u obtenidos de la naturaleza (como las grasas, aceites, sal y azúcares). Por lo general, estas sustancias no se consumen solas. Su papel principal en la alimentación se da en la preparación de los alimentos y hacen que los platos y las comidas, que típicamente se comparten con otras personas, sean sabrosos, variados, nutritivos y agradables.

c) Alimentos procesados: se elaboran al agregar sal o azúcar (u otro ingrediente culinario como aceite o vinagre) a los alimentos para hacerlos más duraderos o modificar su palatabilidad. Se derivan directamente de alimentos y son reconocibles como versiones de los alimentos originales. En general se producen para consumirse como parte de comidas o platos. Los procesos incluyen enlatado y embotellado, fermentación y métodos de conservación como el salado, la conserva en salmuera o escabeche y el curado.

d) Productos ultraprocesados: formulados en su mayor parte o totalmente a partir de sustancias derivadas de alimentos u otras fuentes orgánicas. Por lo común, contienen pocos alimentos enteros o ninguno. Vienen empaquetados o envasados; son duraderos, prácticos, de marca, accesible, y a menudo causan hábito. En general, no son reconocibles como versiones de alimentos, aunque pueden imitar la apariencia, forma y cualidades sensoriales de estos. Muchos de sus ingredientes no están disponibles en las tiendas al menudeo. Algunos

ingredientes se derivan directamente de alimentos como aceites, grasas, almidones y azúcares, y otros se obtienen mediante el procesamiento ulterior de componentes alimentarios, o se sintetizan a partir de otras fuentes orgánicas. Numéricamente, la mayoría de los ingredientes son preservantes y otros aditivos, como estabilizadores, emulsificantes, solventes, aglutinantes, cohesionantes, aumentadores de volumen, endulzantes, resaltadores sensoriales, colorantes y saborizantes, y auxiliares para el procesamiento. Puede obtenerse volumen agregando aire o agua. Los productos pueden "fortificarse" con micronutrientes. En su mayoría están diseñados para consumirse solos o combinados como snacks, o para sustituir los platos y comidas recién preparados a base de alimentos sin procesar o mínimamente procesados. Los procesos incluyen la hidrogenación, hidrolización, extrusión, moldeado, modificación de la forma, preprocesamiento mediante fritura, horneado.

ARTÍCULO 3- Objeto del impuesto

Se establece un impuesto específico sobre los productos ultraprocesados: papas fritas en paquete, helados, chocolates y caramelos, panes, bollos, galletas, pasteles y tortas empaquetadas, cereales endulzados para el desayuno, barras energizantes, margarinas, bebidas azucaradas a base de leche, incluido el yogurt para beber de fruta, bebidas y néctares de fruta, bebidas de chocolate y aquellos similares determinados así por el Poder Ejecutivo mediante el decreto correspondiente.

ARTÍCULO 4- Hecho generador del impuesto

El hecho generador del impuesto ocurre al momento de las ventas a nivel de fábrica, en la fecha de emisión de la factura o de la entrega del producto, el acto que suceda primero; en la importación o internación, en el momento de aceptación de la declaración aduanera; en todos los casos, independientemente de su presentación.

En la producción nacional, será contribuyente del impuesto el fabricante, embalador o envasador o de dichos productos; en la importación o internación, la persona física o jurídica que introduzca los productos o a cuyo nombre se importen o internen.

Para los efectos de esta ley se entenderá por venta cualquier acto que involucre o tenga por fin último la transferencia del dominio del producto, independientemente de su naturaleza jurídica, la designación y las condiciones pactadas por las partes. Asimismo, se entenderá por importación o internación el ingreso al territorio nacional, una vez cumplidos los trámites legales, de los productos sujetos a estos impuestos.

ARTÍCULO 4- Productos no sujetos

No se encuentran sujetos al pago de este impuesto los alimentos sin procesar o mínimamente procesados, los ingredientes culinarios procesados, los alimentos procesados, los productos definidos en la canasta básica alimentaria, la leche maternizada para lactantes y las bebidas envasadas sin contenido alcohólico

establecidas en el impuesto específico de la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias, Ley N.° 8114, de 4 de julio de 2001, y sus reformas.

ARTÍCULO 5- Administración tributaria

Corresponde al Ministerio de Hacienda a través de la Dirección General de Tributación, la administración del impuesto creado en la presente ley.

ARTÍCULO 6- Agente de retención

Cumplirá funciones de agente de retención de este tributo, todo importador, fabricante, embalador o envasador de productos ultraprocesados, de conformidad con lo establecido en los artículos 23 y 24 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, Ley N.° 4755, de 3 de mayo de 1971, y sus reformas.

ARTÍCULO 7- Tarifa

La tarifa a aplicar sobre los productos ultraprocesados será de 1,5 colones por cada 5 gramos, de acuerdo con la cantidad total de gramos del producto y cuyo monto a pagar será proporcional a la cantidad total de gramos de este.

ARTÍCULO 8- DESTINO DE LOS RECURSOS

Los recursos que se obtengan mediante el impuesto creado en la presente ley ingresarán a caja única del Estado y deberán ser destinados al fortalecimiento del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social.

DISPOSICIONES FINALES

ARTÍCULO 9- Reforma de la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias, Ley N.° 8114, de 4 de julio de 2001, y sus reformas

Se reforma el artículo 9 de la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias, Ley N.° 8114, de 4 de julio del 2001, y sus reformas, para que en adelante se lea:

Artículo 9- Impuesto específico. Fíjase un impuesto específico por unidad de consumo para todas las bebidas envasadas sin contenido alcohólico, excepto la leche y todos los productos contemplados en el registro que, al efecto, llevan el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense de Seguro Social, cuando se trata de bebidas terapéuticas y de uso médico, utilizadas en los establecimientos sanitarios y hospitalarios del país, como se detalla a continuación:

Tipo de producto	Impuesto en colones Por unidad de consumo
Bebidas gaseosas y concentrados de gaseosas	25.494
Otras bebidas líquidas envasadas	18.914
Agua (envases de menos de 18 litros)	13.51
Agua (envases de 18 litros o más)	6.28
Impuesto por gramo de jabón de tocador	0.23

Defínanse como unidades de consumo los siguientes volúmenes: para todas las bebidas líquidas sujetas al impuesto, doscientos cincuenta mililitros (250 ml) y para los concentrados de gaseosas treinta y nueve coma doscientos dieciséis mililitros (39,216 ml). Para envases de diferentes contenidos el impuesto se aplicará proporcionalmente. También se fija un impuesto específico de ocho céntimos de colón (¢0,08) por gramo de jabón de tocador. Para los jabones de tocador con distinto peso, el impuesto se aplicará proporcionalmente. Los impuestos específicos recaen sobre la producción nacional y las importaciones o internaciones.

El hecho generador de los impuestos establecidos en este artículo ocurre en las ventas a nivel de fábrica, en la fecha de emisión de la factura o de la entrega del producto, el acto que suceda primero; en la importación o internación, en el momento de aceptación de la declaración aduanera; en todos los casos, independientemente de su presentación.
En la producción nacional será contribuyente de estos impuestos el fabricante o envasador de dichos productos; en la importación o internación, la persona natural o jurídica que introduzca los productos o a cuyo nombre se importen o internen.

Para aplicar estos impuestos, se entenderá por venta cualquier acto que involucre o tenga por fin último la transferencia del dominio del producto, independientemente de su naturaleza jurídica, la designación y las condiciones pactadas por las partes. Asimismo, se entenderá por importación o internación el ingreso al territorio nacional, una vez cumplidos los trámites legales, de los productos sujetos a estos impuestos, provenientes tanto de Centroamérica como del resto del mundo.

Exceptúase del pago de estos impuestos el producto destinado a la exportación.

El 40% de los recursos que se obtengan del impuesto recaudado por concepto de “bebidas gaseosas y concentrados de gaseosas” y de “otras bebidas líquidas envasadas” ingresará a caja única del Estado y deberá ser destinado al fortalecimiento del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social.

TRANSITORIO ÚNICO- Para efectos del artículo 7, la tarifa a cobrar sobre los productos ultraprocesados se aplicará de la siguiente manera a partir de la vigencia de esta ley:

a) Durante el primer año la tarifa será de 0,5 colones por cada 5 gramos.
b) Segundo año la tarifa será de1 colón por cada 5 gramos.
c) A partir del tercer año la tarifa se cobrará en su totalidad.

Rige tres meses a partir de su publicación

José María Villalta Flórez-Estrada
Diputado

NOTA: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos.

1 vez.—(2018300253).

REFORMA DEL INCISO D) DEL ARTÍCULO 4 DE LA LEY N.º 7801, DEL ARTÍCULO 23 DE LA LEY N.º 7586, DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 16 Y ADICIÓN DE UN TRANSITORIO A LA LEY N.º 8589, PARA EL CAMBIO CULTURAL Y EL TRABAJO CON HOMBRES EN BENEFICIO DE LAS MUJERES EN SITUACIONES DE VIOLENCIA

Expediente N.º 21.134

ASAMBLEA LEGISLATIVA[1]:

La violencia en todas sus manifestaciones forma parte de un fenómeno construido socialmente, que se expresa por medio de múltiples significados; varía conforme a su carácter en la historia o la coyuntura social del momento y el contexto en que se produce. La violencia también implica acciones u omisiones que afectan a las personas, de manera individual o social, en el ejercicio de la supremacía o la subordinación de estas. Este ejercicio de dominio, por lo general no consentido directamente, también puede ser ejecutado por un grupo social, institución y a nivel público o privado.

El Tratado de Derechos Humanos sobre la Igualdad entre Mujeres y Hombres nació en 1979, cuando la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas adoptó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw).

Este marco normativo ofreció a los Estados parte un desarrollo conceptual de la igualdad de todos los seres humanos y la prohibición de discriminar a cualquiera de ellos. En 1993, en el marco de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, realizada en Viena en 1993, se reconoció el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y dio lugar a la creación de leyes y políticas, para erradicar la violencia contra las mujeres en muchos países de la región latinoamericana.

La discriminación se consideró un tema universal y se caracterizó como un problema del que sufren las mujeres solo por el hecho de serlo. El tema de género se colocó en el tapete de la discusión mundial, no solamente respecto a los

[1] El presente proyecto de ley rescata la iniciativa tramitada bajo el expediente 19.414, presentada por la Exdiputada Maureen Clark Clark en el periodo 2014-2018; con los ajustes que consideramos pertinentes las diputadas Acuña Cabrera y Nicolás Solano.

derechos de participación política en el ejercicio del derecho al voto, sino otros de índole mayor, relacionados con la afectación de la vida y el carácter patriarcal que obliga a minimizar la libertad y la individualidad personal de las mujeres.
Los derechos humanos y la lucha contra la discriminación han revestido en los parlamentos, especialmente, los latinoamericanos, la adopción de plataformas de acción. En las conferencias mundiales de Nairobi en 1985 y Beijing en 1995, al igual que la Cedaw, se definieron pautas dirigidas a la eliminación de la discriminación de la desigualdad de género, lo que implicó la generación de medidas que promovieron un cambio social. De esta forma, la violencia en contra de las mujeres se situó en el tapete de la discusión mundial y se trasladó el tema de lo privado a lo público.

Los avances en la discusión y las acciones para eliminar toda forma de violencia en contra de las mujeres, con el cambio de siglo en el año 2000, trajo consigo la declaración del milenio y la definición de los objetivos de desarrollo de este, con el objetivo de avanzar en la igualdad de género por medio de la promoción del empoderamiento de las mujeres.

En el marco de la Organización de las Naciones Unidas y sus conferencias sobre la mujer, se establecieron los mecanismos gubernamentales apropiados para mejorar la situación de las mujeres, así como el cumplimiento efectivo de sus derechos.

Paralelamente, en abril de 1998, en nuestro país se aprueba la transformación del Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y la Familia en el Instituto Nacional de las Mujeres, INAMU, mediante la Ley N.° 7801, lo cual generó un cambio de estatus jurídico y de competencias para esta institución del Gobierno, mediante la creación de una entidad autónoma y descentralizada con amplitud de funciones y atribuciones.

En el marco de estas competencias, el INAMU ostenta autoridad en la materia. Correlativamente, tiene el deber de promover y proteger los derechos humanos de las mujeres, mediante sus servicios de capacitación, asesoría y atención psicosocial y legal, así como la coordinación y el seguimiento de la política nacional para la igualdad y la equidad de género, con el fin de contribuir a la construcción de una sociedad justa e igualitaria que garantice la equidad entre hombres y mujeres.

El INAMU forma parte del accionar y el cumplimiento de los convenios, las plataformas y las declaraciones en materia de los derechos humanos de las mujeres en Costa Rica y se ha consolidado como una institución garante de dichos acuerdos. El Instituto es reconocido a nivel nacional e internacional por su compromiso y excelencia técnica en materia de derechos humanos de las mujeres, activo defensor de la igualdad, la equidad y la diversidad, promotor del empoderamiento de las mujeres, su autonomía y el pleno ejercicio de los derechos humanos y ciudadanos, que goza de credibilidad, confianza y legitimidad y con una cultura organizacional coherente con los valores institucionales.

El Instituto Nacional de las Mujeres, como mecanismo nacional y órgano rector de política pública en materia de adelanto y transversalización de género, tiene una serie de competencias de acuerdo con su ley de creación, entre las que destacan:

> *"(…)*
>
> ***a)*** *Formular e impulsar la política nacional para la igualdad y equidad de género, en coordinación con las instituciones públicas, las instancias estatales que desarrollan programas para las mujeres y las organizaciones sociales.*
>
> ***b)*** *Proteger los derechos de la mujer consagrados tanto en las declaraciones, las convenciones y los tratados internacionales como en el ordenamiento jurídico costarricense; promover la igualdad entre los géneros y propiciar acciones tendientes a mejorar la situación de la mujer."*

Para el cumplimiento de sus fines, el Instituto tiene amplias atribuciones, de conformidad con el artículo 4 de su ley de creación. Para lo que nos interesa podemos citar:

> *"(…)*
>
> ***1-*** *Elaborar, promover y coordinar la ejecución y el seguimiento de las políticas públicas dirigidas a la promoción de las mujeres y la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres.*
>
> *(…)*
>
> ***4-*** *Coordinar las acciones e instancias existentes en el seno de la Administración Pública, para promover la condición de las mujeres y la equidad de género.*
>
> *(…)*
>
> ***6-*** *Elaborar, coordinar y ejecutar acciones que impulsen el desarrollo de la familia, como espacio de socialización de los derechos humanos en igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.*
>
> ***(…)"***

Con la creación del Instituto Nacional de las Mujeres se dio un paso fundamental en la tarea de reforzar la eficacia de las acciones afirmativas a favor de los derechos de las mujeres, fortaleciendo la capacidad jurídica del mecanismo nacional.

A raíz del trabajo interdisciplinario del INAMU y su enfoque hacia la promoción y la prevención de los derechos de las mujeres, en las dos últimas décadas el grado de denuncia en materia de derechos humanos y, especialmente, de la violencia

intrafamiliar, implementada desde diversos escenarios, ha repercutido en un alto índice de casos de denuncia de violencia que evidencia un aumento considerable.

Asimismo el INAMU se define como ente rector de la política pública en materia de violencia contra las mujeres.

Problemática actual de la violencia y necesidades de cambio

En la actualidad, la violencia se puede ver como un problema de salud pública, una de las principales causas de muerte que afecta a las mujeres y produce daños físicos, sociales y altos costos económicos a la sociedad.

El análisis de los factores que intervienen en la problemática de la violencia, así como el impacto que tienen en la salud y en la economía, son necesarios para la definición de las políticas, los programas y las acciones tendientes a introducir medidas correctivas, y para desarrollar las estrategias que disminuyan su efecto en la salud de la población.

En Costa Rica el desarrollo de política pública hizo cada día más evidente la problemática de la violencia, sacándola del anonimato y de la invisibilización que experimentó décadas atrás.

Los avances jurídicos en materia de violencia y explotación sexual en Costa Rica, impulsados especialmente desde 1997, permitieron definir el Sistema Nacional de Atención y Prevención de la Violencia Intrafamiliar; se crearon redes de atención y prevención de la violencia intrafamiliar y se instalaron centros especializados de atención y albergues transitorios para las mujeres agredidas y sus hijos e hijas, a lo largo del país; así como un centro operativo telefónico de emergencia que ahora se adscribe al 911.

La Organización Mundial de la Salud define la violencia como:

> *"…el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona, grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de producir lesiones, muerte, daños sicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones".*

La violencia intrafamiliar implica, más allá del acto físico, las amenazas y las intimidaciones; daños emocionales, el acoso, la afectación patrimonial y otros aspectos que comprometen el bienestar de las personas, especialmente, de las mujeres.

En el análisis y el debate sobre los métodos más adecuados para mejorar las leyes vigentes y el abordaje de la situación, el país encauzó esfuerzos para adoptar las nuevas leyes en cuya formulación se tomaron en consideración las lecciones aprendidas en la etapa anterior.

En relación con la normativa de segunda generación, el sistema jurídico costarricense ha presentado importantes avances, sobre todo, en materia penal y en la adopción de tratados internacionales. En el 2007 se aprobó la Ley N.º 8589: Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres, publicada el 30 de junio de 2007. El artículo 21 de esta ley define el femicidio así: *"La muerte de una mujer que mantenga una relación de matrimonio, unión de hecho declarada o no con su perpetrador".*

En las estadísticas sobre el femicidio, en el marco de la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres, mediante el concepto que aporta la Convención Belem do Pará, registrado oficialmente por el Poder Judicial costarricense, se creó un registro segregado que permite hacer una distinción de los casos de femicidios por tipología. Además, incluyó una definición de femicidio que incluye los conceptos que se derivan de la Cedaw porque según el marco jurídico nacional, este es restrictivo a los casos de matrimonio, en su aplicación.

Los homicidios dolosos de mujeres están clasificados en tres categorías, que permiten ejercer un mejor control y seguimiento, además de visibilizar las formas de violencia, estas son:

a) El femicidio, según el artículo 21 de la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres (relaciones de matrimonio o unión de hecho).

b) Homicidios por violencia doméstica, debe entenderse aquellos asesinatos producidos contra las mujeres por los familiares.

c) Los homicidios producidos por otras razones, es decir, aquellos que están fuera del contexto de los dos conceptos anteriores, en cuyo caso se agrupan los producidos por riñas, problemas personales, venganzas, problemas por droga, presunción de sicariato no asociada con femicidio ampliado, robo o asalto entre los más relevantes.

La definición teórica de femicidio es amplia, abarca toda muerte de mujer por acción u omisión, que derive de la condición de subordinación de las mujeres, incluidos los suicidios por violencia contra las mujeres, las muertes por enfermedades no atendidas por la familia o el sistema y las muertes maternas evitables.

Bajo esa definición y más allá de lo que dispone nuestra legislación nacional, no todo homicidio de una mujer es un femicidio, sino aquellos en los que es identificable una lógica vinculada con las relaciones desiguales de poder entre géneros. Existe sin duda un número importante de mujeres que mueren en asaltos y otros hechos delictivos que afectan tanto la población femenina como la masculina; sin embargo, es igualmente cierto que hay muchos femicidios que se tratan de presentar como homicidios casuales.

De acuerdo con lo que se ha explicado, se reconocen importantes esfuerzos en la lucha contra la violencia en perjuicio de las mujeres; no obstante, la problemática

persiste y se exacerba en ciertos momentos sociales, ya que aunque se han desarrollado todos estos mecanismos de asistencia y atención se mantienen enormes fisuras en la prevención y la erradicación.

Felizmente se había logrado que los femicidios (muertes de mujeres en manos de sus parejas) pasaran de 49 en el 2011 a **10** en el año 2013. Estas cifras resultaron coherentes con la estrategia de Gobierno para restituir la paz, la seguridad y la tranquilidad de sus habitantes que, evidentemente, dio buenos resultados.

Hoy, tristemente, debemos señalar que ha regresado la sensación de inseguridad a la ciudadanía. Con un aumento significativo en los femicidios.

Costa Rica: Femicidios según referente legal, periodo 2010-2017

Referente Legal	Año											
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Total
Total	**21**	**33**	**39**	**31**	**42**	**26**	**18**	**22**	**27**	**27**	**26**	**312**
Femicidio Artículo N° 21 LPVCM(1)	6	18	15	10	12	5	7	6	9	11	14	**113**
Femicidio Convención Belém do Pará(2)	15	15	24	21	30	21	11	16	18	16	12	**199**

1-/ Se refiere a la Ley de Penalización de la Violencia Contra las Mujeres.
2-/ Se refiere a femicidios en el marco de aplicación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer "Convención de Belém do Pará".
Fuente: Sección de Estadística de la Dirección de Planificación del Poder Judicial. 2018.

Como puede observarse en la tabla anterior, en el periodo 2007-2017, en el país se han cometido 113 femicidios según la definición de la Ley de Penalización de la Violencia Contra las Mujeres y 199 en el marco de la aplicación de la Convención de Belém do Pará, para un total de 312 asesinatos de mujeres, por su condición de mujer.

Esta situación plantea un reto sobre la necesidad de revisar las acciones que se ejecutan para mitigar este flagelo y disminuir las alarmantes cifras. Pese a que la violencia es una de las áreas que demanda mayor trabajo intersectorial en materia de los derechos de las mujeres, el enfoque no incluye, hoy, el trabajo directo con los ofensores, perpetradores o agresores potenciales.
Las acciones para generar espacios de discusión sobre este tema y, con ello, disminuir las conductas negativas o dolosas por parte de los varones son

sumamente escasas y no han proporcionado ninguna ventaja que disminuya la problemática a nivel global.

Es muy difícil erradicar la opresión y la violencia de género si no se considera la otra mitad del problema, sin parcializaciones. Existen enfoques que indican que la responsabilidad es de los varones, pero el cambio que es cultural prevalece en el carácter hegemónico patriarcal y debe ser modificado mediante un cambio de conductas y reconociendo, a nivel de cada realidad, las diferencias intergenéricas y la historia.

El proceso de socialización y la visión de identidad sexual como construcción sexual deben repensarse, según sea cada rol que se ejerza. Para lograr la verdadera equidad se deben modificar las relaciones de poder. No se podrá prevenir y erradicar sin concienciar y, para ello, más allá de las campañas públicas es también necesario abordar el problema desde otra perspectiva y analizar los aspectos que intervienen en las relaciones intergenéricas, para trabajar con los varones agresores y victimarios. Sin este esfuerzo no se puede ni se podrán reducir los índices de agresiones de los varones a sus parejas.

Es necesario reconstruir los roles masculinos que legitiman el ejercicio del poder y la subordinación que expresa la cultura patriarcal, tras siglos y siglos de tradición y herencia cultural.

Dada la complejidad de esta problemática, surge la necesidad de incluir en el trabajo a nivel público el enfoque de prevención de las diversas manifestaciones de la violencia y el enfoque de trabajo con los victimarios.

La posibilidad de generar nuevos procesos reeducativos y de convivencia podrá facilitar la reconstrucción de nuevas formas de ser hombre y de sostener, equitativamente, sus vínculos. La violencia y sus derivaciones son parte de una conducta aprendida, no forma parte de la capacidad innata del género.

Según la experta en el tema, Marcela Lagarde, la democracia genérica introduce una serie de variables de cambio en los paradigmas de análisis del trabajo en género. Es necesario, indica la experta, considerar todas las aristas de las relaciones entre los géneros y los procesos vitales de intercambio que resultan, con la búsqueda de una verdadera democracia. Son ambos quienes propician los cambios en la economía, la política, la cultura y la vida social.[2]

El trabajo democrático debe ser inclusivo y dentro de los espacios públicos y privados de la sociedad; por ello, es urgente crear espacios integrales para trabajar con el hombre en un medio preventivo. Las medidas legales de exclusión del hogar no son eficientes, son solo mecanismos para aumentar los conflictos y carecen de efectividad.

[2] Lagarde Marcela, *Género y feminismo. Desarrollo humano y democracia*, cuadernos inacabados, editorial Horas y Horas, Madrid , España, 1997, páginas 190-192

Al no contar con un plan o medidas de trabajo para tratar al agresor, estos serán quienes agredan de manera permanente a otras mujeres. Las medidas legales, generalmente, crean elementos que separan, distorsionan y no solucionan integralmente la problemática.

Según se desprende del análisis de la causalidad, se reconocen, principalmente, tres tipos de agresores; el primero, agrupa los femicidios producidos por los compañeros, los esposos, los excompañeros, los exesposos, los novios o los exnovios, los amantes y los pretendientes, en cuyo caso la víctima conocía al homicida y en algún momento mantuvieron una relación o, al menos, así se pretendió.

Este grupo concentra el mayor número de fatalidades, el cincuenta y seis coma ocho por ciento de los femicidios son perpetrados en un ambiente muy cercano, íntimo o de confianza de la víctima, donde aspectos como el maltrato, la agresión, sistemática o metódica, el abuso dentro de las relaciones interpersonales, así como el abuso sexual, han sido la tónica de dichos eventos[3], según las estimaciones del Poder Judicial esta se consolida como la forma de violencia contra la mujer más preponderante.

Finalmente, aquellas mujeres que fueron asesinadas por parientes varones con alguna relación consanguínea o afinidad constituyen el tercer grupo de importancia: delincuencia (robos y hurtos) y los temas asociados a las relaciones entre humanos (riñas, venganzas y problemas personales), estos representan un treinta y siete coma dos por ciento (Poder Judicial 2013).

De no cambiar la percepción del mundo y la vinculación con la forma en que se desenvuelven entre los géneros no es posible que se modifiquen los patrones culturales intrínsecos en las personas. Si se imponen medidas restrictivas, como medidas de exclusión de hogar, muchos vuelven y (aun teniendo medidas cautelares) regresan a agredir a sus parejas con mayor fuerza o para acabar con su vida, en casos extremos. Los verdaderos mecanismos para cambiar las desigualdades entre hombres y mujeres se deben apoyar en la educación y el cambio de cultura.

Es tiempo de generar acciones que permitan prevenir y erradicar este flagelo, debe darse una verdadera funcionalidad a las leyes vigentes y eliminar las que sostienen su complicidad con ese sistema generador de desigualdades sociales.

De acuerdo con la obligación que le impone el artículo 16 y el transitorio único de la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres N.º 8589 vigente desde el 30 de mayo de 2007, es responsabilidad de INAMU gestionar la acreditación de

[3] Si bien es cierto la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres rige a partir del 2008, los datos anteriores a ese año se generan a partir de las variables consideradas en la base de datos de homicidio doloso.

instituciones públicas y organizaciones privadas interesadas en desarrollar programas de atención especializada a ofensores.

Los programas de atención especializada a ofensores son previstos en la ley de cita como pena alternativa y se agrupan dentro de la medida llamada *"cumplimiento de instrucciones".* El artículo 16 de esta ley señala que por la vía del cumplimiento de instrucciones el juez puede, entre otras cosas ordenar:

> *"a) Someter a la persona a un programa de tratamiento de adicciones para el control del consumo de alcohol, sustancias estupefacientes, psicotrópicas o drogas enervantes, cuando dicha adicción esté relacionada con la conducta sancionada o sus circunstancias.*
>
> *b) Someter a la persona a un programa especializado para ofensores, orientado al control de conductas violentas y a tratamientos completos, psicológico y psiquiátrico".*

Ese mismo artículo en su párrafo final dispone:

> *"Para los efectos de los incisos a) y b) del presente artículo, el Instituto Nacional de las Mujeres y el Ministerio de Justicia enviarán cada año, a la Corte Suprema de Justicia, la lista de instituciones acreditadas, públicas y privadas, a las cuales la autoridad judicial competente podrá remitir para el cumplimiento de esta pena. Los gastos en que se incurra por este tratamiento correrán a cargo del Estado, salvo si la persona condenada cuenta con recursos suficientes para sufragarlos".*

La redacción de este artículo ha suscitado diversas dudas en la aplicación práctica:

> 1- Al existir el Sistema Nacional de Acreditación, creado mediante la Ley del Sistema Nacional para la Calidad, N.º 8279, de 2 de mayo de 2002, según el cual el Ente Costarricense de Acreditación (ECA) es el único autorizado para acreditar organismos certificadores, han surgido dudas sobre los alcances del término "acreditación" en la Ley de Penalización.

Es decir, si la Ley de Penalización designa al INAMU como un ente acreditador- al mismo nivel del ECA- para esa materia o si el INAMU es un ente de certificación que tendría que acreditarse ante el ECA, antes de poder certificar a las instituciones públicas y organismos privados interesados en desarrollar programas de atención a ofensores.

Sobre el particular, también podría entenderse que el uso del término en el proyecto de ley se hizo al margen de lo que significa -técnicamente- en la jerga del sistema nacional para la calidad la palabra "acreditación" y que más bien se refiere a una especie de habilitación o autorización previa al funcionamiento de estos programas.

En todo caso, queda claro que existe un vacío legal importante respecto al tema que exige ser solventado mediante reforma legal urgente.

2- La Ley de Penalización establece varias instituciones responsables pero no delimita el campo de acción de cada una en el cumplimiento de estas disposiciones.

Tal y como puede observarse en el texto del artículo 16 vigente se establece que tanto en Instituto Nacional de las Mujeres como el Ministerio de Justicia deben enviar a la Corte Suprema de Justicia los listados de entidades "acreditadas". No obstante en el transitorio pareciera que esa tarea se encarga solo al INAMU; de modo que también este punto debe ser reformado en beneficio de una mejor aplicación práctica de la norma.

3- Indica la Ley de Penalización que los gastos en que se incurra por "este tratamiento" correrán a cargo del Estado pero no define exactamente cuál institución de las mencionadas debe presupuestar esos gastos.

Aclarar este aspecto es de vital importancia para que las instituciones eventualmente acreditadas puedan ser realmente financiadas para ejecutar los programas.

Es importante hacer notar, como antecedente, que en el año 2010 la Procuraduría General de la República se pronunció en dictamen vinculante (C-216-2010) sobre la imposibilidad de que el INAMU cobrara por los servicios de acreditación de programas para ofensores y, al analizar el tema, señaló también que los costos de estos programas deben ser asumidos por el Estado. Sin embargo, no habiéndose consultado este punto en específico y sin entrar a profundizar en otros aspectos, la Procuraduría no definió a qué institución estatal corresponde el financiamiento de los programas.

La Procuraduría afirmó: "*El otorgamiento de esa acreditación no ha sido ligado al pago de alguna contribución por parte de la entidad acreditada. En ese sentido, el legislador ni ha establecido el pago de una suma de dinero por tal objeto ni tampoco ha remitido a una norma reglamentaria para que regule dicho pago.*
En materia de costos, el legislador dispone que ***el Estado*** *cubrirá todos los gastos que origina el tratamiento, salvo cuando el ofensor que recibirá el tratamiento cuente con suficientes recursos para cubrirlo. Esos costos –que deben estar directamente relacionados con el programa o tratamiento- se pagan a la entidad que lo ejecuta, de manera que se le cubran los gastos en que ha incurrido por ese tratamiento".*
Así las cosas, es necesario también reformar la normativa para aclarar a qué institución corresponde el financiamiento de estos importantes programas.

También es importante acotar que, en virtud de estas dudas existentes y las diversas interpretaciones que se han dado sobre ellas, al INAMU se le ha dificultado la labor de "acreditación". No obstante, se llevaron a cabo por parte de esa institución desde la promulgación de la ley una serie de consultorías que

desarrollaron un “sistema” de acreditación utilizando como parámetro los sistemas de calidad ISO; al que se le dio el nombre de Sapao (Sistema de acreditación de los programas de atención para ofensores).

Los resultados de estas consultorías, si bien son un importante insumo técnico, es lo cierto que de alguna manera han dificultado la operatividad práctica del sistema si se considera que el fin no era, precisamente, ajustarse a las normas ISO para alcanzar la finalidad de la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres N.º 8589 y por ende los requisitos podrían ser más excesivos de lo necesario o bien desarrollarse a través de estructuras complejas que el INAMU difícilmente pueda asumir.

En todo caso, los instrumentos derivados de las consultorías no deben desperdiciarse y por ende, es necesario que el Sistema entre en operación, con los ajustes o simplificaciones que requiera, a la brevedad, pero sobre la base de una normativa más clara.

El estado actual de la puesta en práctica de Sapao no es acorde con la necesidad real y urgente de generar acciones urgentes que provoquen espacios de discusión sobre este tema y, con ello, disminuir las conductas negativas o dolosas por parte de los varones son sumamente escasas y no ha proporcionado ninguna ventaja que disminuya la problemática a nivel global.

En este orden de ideas, con el fin de cumplir con las responsabilidades señaladas en la presente ley, es importante dotar de más recursos propios al INAMU, por lo que se incluye la creación del "Timbre de No Violencia Contra las Mujeres", como mecanismo de financiamiento que venga a robustecer el trabajo en favor de la igualdad y equidad entre hombres y mujeres y, específicamente, para el cambio cultural y el trabajo con hombres en beneficio de las mujeres en situaciones de violencia.

Además, es importante señalar que por lo dispuesto en la presente ley en cuanto ejecución de acciones para la prevención de la violencia y la concienciación de los hombres, para la modificación de los patrones culturales y la construcción de nuevas masculinidades en beneficio de la condición de la mujer; es pertinente la derogación de la Ley de Atención psicológica a personas agresoras insertas en procesos de todo tipo de violencia, N.° 9063 de 8 de agosto de 2012.

Por las razones expuestas, sometemos consideración de las señoras diputadas y los señores diputados el presente proyecto de ley.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
DECRETA:

REFORMA DEL INCISO D) DEL ARTÍCULO 4 DE LA LEY N.º 7801, DEL ARTÍCULO 23 DE LA LEY N.º 7586, DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 16 Y ADICIÓN DE UN TRANSITORIO A LA LEY N.º 8589, PARA EL CAMBIO CULTURAL Y EL TRABAJO

**CON HOMBRES EN BENEFICIO DE LAS MUJERES
EN SITUACIONES DE VIOLENCIA**

ARTÍCULO 1- Se reforma el inciso d) del artículo 4 de la Ley N.º 7801, Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, de 18 de mayo de 1998, y sus reformas. El texto dirá:

Artículo 4- Atribuciones

[…]

d) Coordinar las acciones e instancias existentes en el seno de la Administración Pública, para promover la condición de las mujeres, la equidad de género y la democracia genérica como nuevo paradigma, así como prevenir la violencia en contra de las mujeres. Estas coordinaciones se realizarán sin perjuicio de los servicios directos que la institución brinde a las mujeres bajo esos mismos principios.

En materia de violencia, el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) incluirá la ejecución de acciones para la prevención de la violencia y la concienciación de los hombres, para la modificación de los patrones culturales y la construcción de nuevas masculinidades en beneficio de la condición de la mujer.

[…].

ARTÍCULO 2- Se reforma el artículo 23 de la Ley N.º 7586, Ley contra la Violencia Doméstica en contra de las Mujeres, de 10 de abril de 1996, y sus reformas. El texto dirá:

Artículo 23- Responsabilidad de las instituciones para la atención integral de la violencia

La Administración Pública, de acuerdo con sus competencias, deberá colaborar en la detección, atención, prevención e inserción laboral de las personas agredidas, en cumplimiento de los fines de esta ley.

Además de los deberes establecidos en los artículos 16 y 17 de esta ley, el Instituto Nacional de las Mujeres facilitará, por sí mismo o a través de terceros, procesos de formación adecuados para los victimarios u ofensores, requeridos para cumplir la modificación integral de patrones y conductas lesivas a las mujeres, asignando para ello los respectivos recursos económicos de su presupuesto.

ARTÍCULO 3- Se reforma el último párrafo del artículo 16 de la Ley N.º 8589, Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres, de 25 de abril de 2007, y sus reformas. El texto dirá:

Artículo 16- Pena de cumplimiento de instrucciones

[…]

Para los efectos de los incisos a) y b) del presente artículo, será necesaria la coordinación entre el Ministerio de Justicia, el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia" (IAFA) y el Instituto Nacional de las Mujeres, de acuerdo con sus propias competencias y capacidad presupuestaria, para lo cual quedan autorizadas a suscribir convenios interinstitucionales.

El Instituto Nacional de las Mujeres diseñará y financiará el programa especial de atención para los ofensores señalado en el inciso b), el cual será ejecutado por el Instituto o por las instituciones u organizaciones públicas o privadas que este autorice, previa verificación del perfil y requisitos, trámite que será reglamentado por la Junta Directiva de esa institución.

En el caso de que los programas sean ejecutados por terceros, el Instituto Nacional de las Mujeres queda facultado a transferir los recursos correspondientes a quienes brinden los servicios, siempre que cuente con los mecanismos de verificación y control necesarios que garanticen el correcto uso de los recursos públicos.

Cada año, el Ministerio de Justicia enviará a la Corte Suprema de Justicia la lista de las instituciones, públicas y privadas, autorizadas para ejecutar estos programas.

ARTÍCULO 4- Se deroga el transitorio único de la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres, N.º 8589, de 25 de abril de 2007, publicada en La Gaceta N.º 103 de 30 de mayo de 2007.

ARTÍCULO 5- Se adiciona un transitorio a la Ley N.º 8589, Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres, de 25 de abril de 2007, publicada en La Gaceta N.º 103, de 30 de mayo de 2007. El texto dirá:

Transitorio único- En un plazo de tres meses, contados a partir de la entrada en vigencia de esta ley, las instituciones públicas y las organizaciones privadas que también estén interesadas en desarrollar programas de atención especializada a ofensores, según el artículo 18 de esta ley, deberán gestionar su autorización ante el Instituto Nacional de las Mujeres.

ARTÍCULO 6- Los jueces, como parte de una medida cautelar, en los casos de violencia, podrán ordenar el sometimiento de los presuntos ofensores a un

programa especial que tomará como base el previsto en el artículo 16 inciso b) de la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres, N.º 8589, de 25 de abril del 2007 publicada en La Gaceta N.º 103, de 30 de mayo de 2007 con las adaptaciones técnicas necesarias y que será financiado por el INAMU y ejecutado en la misma forma que prevé el artículo de cita.

ARTÍCULO 7- Se deroga la Ley de Atención psicológica a personas agresoras insertas en procesos de todo tipo de violencia, N.º 9063, de 08 de agosto de 2012 publicada en La Gaceta N.º 170, de 04 de setiembre de 2012.

ARTÍCULO 8- Créase un timbre a favor del Instituto Nacional de las Mujeres, denominado “Timbre de No Violencia Contra las Mujeres”. Las rentas que se perciban por concepto de este timbre, formarán parte de los recursos propios del INAMU, para la atención exclusiva de las responsabilidades señaladas en la presente ley.

ARTÍCULO 9- El "Timbre de No Violencia Contra las Mujeres" tendrá un valor de doscientos colones (¢ 200,00) y deberá adherirse a los siguientes documentos:

a) Documento sobre la revisión técnica anual de vehículos automotores propiedad de particulares, extendido por la Dirección General de Tránsito u oficina correspondiente.

b) Documento de inscripción y traspaso de toda clase de vehículos automotores.

c) Solicitud de inscripción de arma de fuego para persona física y jurídica

d) Solicitud de inscripción de polígono

e) Solicitud de permiso de portación de arma de fuego para persona física y jurídica

f) Documento de traspaso de arma de fuego

ARTÍCULO 10- El "Timbre de No Violencia Contra las Mujeres" será emitido y vendido por el Banco Central de Costa Rica, el que girará, trimestralmente, lo recaudado al INAMU.

Rige a partir de su publicación.

Ivonne Acuña Cabrera Franggi Nicolás Solano

Diputadas

NOTA: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Especial de la Mujer.

1 vez.—(IN2018300256).

DOCUMENTOS VARIOS

HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE HACIENDA

RESOLUCIÓN SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA AMNISTÍA TRIBUTARIA ESTABLECIDA EN LOS TRANSITORIOS VI Y XXIV DE LA LEY DE FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS

N° DGT-DGH-R-064-2018.— Dirección General de Tributación. Dirección General de Hacienda.— San José, a las ocho horas con cinco minutos del trece de diciembre de dos mil dieciocho.

Considerando:

I. Que el artículo 99 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, Ley N° 4755 del 3 de mayo de 1971, en adelante Código Tributario, faculta a la Administración Tributaria para dictar normas generales para la correcta aplicación de las leyes tributarias, dentro de los límites que fijen las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes.

II. Que en virtud de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, N°9635 del 03 de diciembre de 2018, publicada en el Alcance Digital N° 202 de la Gaceta N° 225 del 4 de diciembre de 2018; en su Título V, denominado Disposiciones Transitorias, tanto en su Capítulo I, llamado "Disposiciones Transitorias al Título I de La Presente Ley, Ley Del Impuesto al Valor Agregado", como en el Capítulo II, denominado "Disposiciones Transitorias al Título II de La Presente Ley, reformas de la Ley N° 7092, Ley del Impuesto sobre La Renta", establecen en varios transitorios, por una única vez y de forma excepcional, el beneficio tributario denominado "Amnistía tributaria", que en el presente caso constituye el perdón generalizado de los intereses sobre las obligaciones tributarias no canceladas, cuya consecuencia más inmediata es la obtención de recursos para el Ministerio de Hacienda con el fin de que este pueda hacerle frente a los gastos del Gobierno, en esta difícil coyuntura fiscal que atraviesa el país. En este sentido, con la amnistía tributaria se pretende regularizar la situación de muchos contribuyentes que hoy en día no están cumpliendo de manera oportuna y satisfactoria, sus obligaciones.

III. Que, en virtud de lo mencionado, el Transitorio VI de la referida Ley, entre otros aspectos, apunta que los sujetos pasivos de impuestos administrados por la Dirección General de Tributación, podrán cancelar, por un plazo de tres meses con exoneración total de intereses a partir de la publicación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, las deudas correspondientes a las obligaciones tributarias devengadas en los períodos fiscales anteriores al 1 de octubre de 2017. Asimismo, concede la reducción de sanciones asociadas a las obligaciones tributarias, si realizan el pago del monto total adeudado respecto de dichas obligaciones tributarias. Conforme al procedimiento establecido por la ley de cita, el plazo de vigencia de la amnistía debe computarse a partir del 4 de diciembre de 2018 y hasta el 4 de marzo de 2019, inclusive.

IV. Que, de manera similar, el Transitorio XXIV de la referida Ley dispone que las Instituciones pertenecientes al Sistema Bancario Nacional, en forma específica, podrán gozar del beneficio tributario citado, al dispensarles del pago de intereses, durante el plazo de vigencia establecida en dicha norma, sea a partir del 4 de diciembre de 2018 y hasta el 4 de marzo de 2019, inclusive. En dicho transitorio también se concede exoneración parcial de las sanciones asociadas a dichas obligaciones, reduciéndolas porcentualmente.

V. Que los transitorios VI y XXIV evidencian múltiples aristas que pueden dificultar su aplicación por parte de los sujetos pasivos a quienes van dirigidos, lo cual podría vulnerar el principio de seguridad jurídica contenido en el artículo 167 del Código Tributario; de ahí que la Dirección General de Tributación debe establecer, mediante resolución de alcance general, los requisitos y condiciones que deben cumplir los sujetos pasivos que pretendan hacer uso de este beneficio tributario, de previo a su entrada en rigor.

VI. Que en virtud de la comprometida situación fiscal que embarga las finanzas públicas, así como la perentoriedad de aplicar medidas exitosas que la alivien, se omite el procedimiento establecido en el artículo 174 del Código Tributario, al existir razones de interés público y de urgencia para la implementación de la amnistía tributaria, que afectan las actuaciones y actos administrativos que actualmente están tramitando las Administraciones Tributarias Territoriales y Dirección de Grandes Contribuyentes Nacionales, referidas a las determinaciones de oficio de la obligación tributaria, así como en los procedimientos sancionadores en los que se impone la sanción por incumplimientos materiales de la obligación tributaria.

VII. Que el artículo 4 de la Ley N° 8220 de 4 de marzo de 2002, denominada “Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos”, establece que todo trámite o requisito, con independencia de su fuente normativa, deberá publicarse en el Diario Oficial La Gaceta.

Por tanto,

RESUELVE

Artículo 1°.- Supuestos a los que es aplicable la amnistía fiscal de impuestos administrados por la Dirección General de Tributación, establecidos en el Transitorio VI de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

De conformidad con lo dispuesto en el Transitorio VI de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, los sujetos pasivos de los impuestos administrados por la Dirección General de Tributación, podrán cancelar, a partir del 4 de diciembre de 2018 y hasta el 4 de marzo de 2019, inclusive; aquellas deudas correspondientes a las obligaciones tributarias devengadas, con la exoneración total de los intereses generados por el incumplimiento en el pago dentro del plazo de ley establecido para ello, pago que deberá realizarse en efectivo y en forma completa.

Para efectos de lo dispuesto en la citada disposición transitoria, la expresión “obligaciones tributarias devengadas” establecida en el primer párrafo del Transitorio VI, se refiere a hechos imponibles del impuesto referidos a períodos fiscales anteriores al 1° de octubre de 2017.

La amnistía tributaria cubre los siguientes casos:

a) Obligaciones tributarias que a la fecha de entrada en vigencia de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, no han sido autoliquidadas por el sujeto pasivo.
b) Obligaciones tributarias que a la fecha de entrada en vigencia de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, han sido autoliquidadas por el sujeto pasivo pero no canceladas.
c) Obligaciones tributarias que durante la vigencia de la amnistía tributaria, están siendo objeto de un procedimiento de determinación de oficio de la obligación tributaria, cuya actuación se ha iniciado conforme a los artículos 120 o 139 del Reglamento de Procedimiento Tributario, incluyendo la fase de alegatos contra la propuesta provisional de regularización.
d) Obligaciones tributarias liquidadas de oficio por la Administración Tributaria, que se encuentran en la fase de regularización de la obligación tributaria establecida en los artículos 144 del Código Tributario, 127 y 155 del Reglamento de Procedimiento Tributario. Asimismo, aquellas que se encuentran en la fase de impugnación de la determinación de oficio realizada, por haber sido notificado un traslado de cargos u observaciones determinativo, o incluso en la fase recursiva establecida en los artículos 145, 146 y 156 del Código Tributario.
e) Sanciones pecuniarias autoliquidadas por el obligado tributario anteriormente a la entrada en vigencia de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, pero no canceladas, por concepto de infracciones por incumplimiento de deberes materiales referidos a períodos fiscales anteriores al 1° de Octubre de 2017.
f) Sanciones pecuniarias que se autoliquiden y cancelen a partir de la entrada en vigencia de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, por incumplimiento de obligaciones tributarias materiales, referidas a períodos fiscales anteriores al 1° de Octubre de 2017.
g) Sanciones pecuniarias originadas en procedimientos administrativos sancionadores establecidos en los artículos 149 y 150 del Código Tributario, por incumplimiento de obligaciones tributarias materiales referidas a períodos fiscales anteriores al 1° de Octubre de 2017, que no estén canceladas.
h) Deudas tributarias o por las sanciones por incumplimientos materiales que se encuentren en la fase de cobro administrativo.
i) Deudas tributarias o por las sanciones por incumplimientos materiales que se hayan trasladado para su cobro a la Oficina de Cobro Judicial de la Dirección General de Hacienda, siempre que no tengan demanda presentada.
j) Procesos contenciosos administrativos contra determinaciones de oficio de la obligación tributaria, realizadas por la Administración Tributaria conforme a los artículos 124 y 144 del Código Tributario; así como contra resoluciones sancionadoras por incumplimiento material de la obligación.

Artículo 2°.- Supuestos no incluidos dentro de la amnistía tributaria del Transitorio VI de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

No son objeto de amnistía tributaria, los siguientes casos:

a.- Los pagos que se realicen producto de una compensación de créditos fundamentada en el artículo 45 del Código Tributario, ya que la amnistía de obligaciones tributarias procede únicamente por la cancelación de la deuda en efectivo.

b.- Los incrementos injustificados de patrimonio provenientes de actividades ilícitas.

c.- Las reducciones establecidas en el Transitorio VI, para los fraccionamientos de pago de obligaciones tributarias por concepto de tributos, ya que las reducciones objeto de la amnistía, proceden sólo en el caso de deudas por sanciones sobre las cuales se formalice un fraccionamiento de pago dentro del plazo de la amnistía.

d.- Los casos denunciados por el delito establecido en el artículo 92 del Código Tributario, denominado "Fraude a la Hacienda Pública".

e.- Las deudas tributarias que se encuentren en la Oficina de Cobro Judicial, que tengan demanda presentada, así como las deudas no tributarias que sean ejecutadas por dicha oficina.

f.- Las sanciones pecuniarias establecidas en los artículos del Código Tributario 78, 79, 82, 83, 84, 84 bis, 85, 87, 106 ter y 106 quater del Código Tributario.

g.- Cualquier sanción administrativa que sea competencia de la Administración Tributaria, que no tenga naturaleza pecuniaria.

Artículo 3°.- Trámite para cancelar las obligaciones tributarias consideradas en el Transitorio VI de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

Los sujetos pasivos que a la fecha de entrada en vigencia del Transitorio VI de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, no hayan cancelado sus obligaciones tributarias establecidas en el artículo 1 de esta resolución, deberán cumplir, según corresponda, con los siguientes requisitos y condiciones, a efecto de ser beneficiados con la amnistía tributaria:

En los supuestos establecidos en los incisos a) al h) del Transitorio VI citado, el sujeto pasivo debe hacer el pago de la deuda en forma completa, por los medios tecnológicos usuales para ello, ya sea por conectividad o por la plataforma denominada "Tributación Digital", según corresponda y tomando en cuenta lo siguiente:

a) En el supuesto contemplado en el inciso b) del Transitorio citado, previamente al pago deberá autoliquidar los importes respectivos, utilizando al efecto los formularios de declaración tributaria y los medios de presentación usuales para ello.

b) En el supuesto contemplado en el inciso c) del Transitorio citado, aplica la amnistía tributaria para las declaraciones rectificativas, en los siguientes términos:

3.b.1.- Haber presentado una declaración rectificativa antes –siempre y cuando no se haya pagado el impuesto-, o dentro del plazo de vigencia de la amnistía tributaria establecida en el Transitorio VI citado-, que genere un aumento en el monto de la obligación tributaria declarada originalmente, utilizando al efecto los formularios de declaración y medios de presentación usuales para ello.

3.b.2.- Las declaraciones rectificativas que se presenten durante el plazo de vigencia de la amnistía tributaria y después de notificado el inicio de actuaciones de comprobación del cumplimiento material de las obligaciones por parte de la Administración Tributaria, como parte de un procedimiento de liquidación previa o liquidación definitiva, no tendrán el carácter de petición que establece el inciso e) del artículo 130 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, sino que tendrán el carácter de última declaración tributaria presentada que modifica a la anterior declaración, por lo que no requieren de la autorización de la Administración Tributaria Territorial o de la Dirección de Grandes Contribuyentes Nacionales, aunque exista un proceso iniciado, o incluso si la determinación de oficio de la obligación tributaria se encuentra en la fase recursiva en sede administrativa que establecen los artículos 145, 146 y 156 del Código Tributario.

Lo anterior, sin perjuicio de las potestades de fiscalización de la Administración Tributaria de verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias materiales.

De haberse notificado el inicio de una actuación que determina de oficio la obligación tributaria, el sujeto pasivo deberá informar sobre la presentación y pago de la declaración rectificativa al funcionario a cargo de la misma, debiendo la Administración Tributaria proceder conforme a lo establecido en el punto 7.c.3 del artículo 7 de esta resolución, continuando con la actuación fiscalizadora hasta su conclusión y proponiendo la regularización que corresponda, en el caso que la declaración rectificativa no se ajuste en su totalidad a la obligación tributaria determinada de oficio por la Administración Tributaria.

c) En el supuesto contemplado en el inciso d) del Transitorio citado, el sujeto pasivo debe disponer de un acto administrativo que liquide de oficio la obligación tributaria, mediante resolución determinativa dictada al efecto por parte de la Administración Tributaria competente, o Dirección de Grandes Contribuyentes Nacionales. La amnistía cubre a aquellas resoluciones cuyo procedimiento se encuentre en las siguientes etapas y cuya obligación no haya sido cancelada:

3.c.1.- Que durante la vigencia de la amnistía tributaria, la resolución se encuentre dentro del plazo concedido para recurrir la resolución en los términos establecidos en los artículos 145, 146 y 156 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios.

3.c.2.- Que la resolución se encuentre en la fase recursiva y bajo la atención de los órganos competentes para resolver los recursos amparados en los artículos 145, 146 y 156 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios.

3.c.3.- Que la resolución determinativa se encuentre firme en la vía administrativa.

d) En el supuesto contemplado en el inciso e) del Transitorio citado, que exista una regularización de la obligación tributaria suscrita por el sujeto pasivo, como producto de la determinación de oficio realizada por parte de la Administración Tributaria competente o Dirección de Grandes Contribuyentes Nacionales, en concepto de actuaciones por liquidaciones previas o definitivas.

e) En el supuesto contemplado en el inciso f) de dicho Transitorio, que las cuotas tributarias se encuentren en discusión en la sede contencioso administrativa. En estos casos, el pago realizado dentro del plazo de la amnistía constituye la aceptación expresa del sujeto pasivo, respecto de los cargos determinados por la Administración Tributaria, y conforme a los efectos señalados en el Apartado f) del artículo 7 de esta resolución.

f) En el supuesto del inciso g) del Transitorio citado, los sujetos pasivos que realicen actividades económicas sin haberse inscrito como contribuyentes del Impuesto sobre las Utilidades (sujetos ocultos) y que declaren y registren incrementos no justificados de patrimonio, deberán inscribirse y presentar la declaración tributaria autoliquidando los importes respectivos, utilizando al efecto los formularios de declaración y medios de presentación usuales. Para tales efectos y sólo durante la vigencia de la amnistía, el contribuyente podrá aplicar una tarifa única del quince por ciento (15%). Para tales efectos, la base imponible a declarar será el valor de mercado del patrimonio, pudiendo la Administración Tributaria verificar la exactitud de la obligación tributaria posteriormente, determinando de oficio el valor de los bienes que se están declarando.

   A los sujetos pasivos que estén inscritos como contribuyentes del Impuesto sobre las Utilidades antes de la entrada en vigencia de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que declaren y registren incrementos no justificados de patrimonio, no les es aplicable la tarifa única del quince por ciento (15%) establecida en el inciso g) del Transitorio VI, sino que deberán computarlo como parte de la renta bruta, conforme lo establece el artículo 5 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

   Una vez transcurrido el plazo de vigencia de la amnistía, todo aquel incremento injustificado de patrimonio deberá incorporarse a la renta bruta, en los términos del artículo 5 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

g) En el supuesto del inciso h) del Transitorio citado, si la deuda tributaria o por sanción se encuentra en el Departamento de Cobros Judiciales, le es aplicable la amnistía tributaria en el tanto el sujeto pasivo cancele el importe de los honorarios profesionales respectivos, y no se haya presentado aún, el proceso monitorio para proceder con el cobro judicial en contra del deudor.

Artículo 4°.- Amnistía tributaria para las entidades pertenecientes al Sistema Bancario Nacional y trámite para cancelar las obligaciones tributarias consideradas en el Transitorio XXIV de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

Los sujetos pasivos considerados entidades pertenecientes al Sistema Bancario Nacional conforme a la definición establecida en el artículo 1° de la Ley N° 1644 de 26 de setiembre de 1953 y sus reformas, denominada "Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional", que a la fecha de entrada en vigencia del Transitorio XXIV de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, no hayan cancelado sus obligaciones tributarias referidas a determinaciones de oficio realizadas por la Administración Tributaria en el Impuesto sobre las Utilidades, correspondiente a actuaciones fiscalizadoras iniciadas anteriormente al 3 de diciembre de 2018 y referidas a los períodos fiscales 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017, inclusive, podrán realizar el pago de las mismas, sin el pago de intereses y en los siguientes términos:

1.- Deberán realizar el pago de la deuda en efectivo y en forma total, a través de transferencia interbancaria, a las cuentas de la Tesorería Nacional del Estado ya establecidas para el pago de impuestos.

2.- El plazo con el que cuentan las instituciones bancarias para aplicar la amnistía tributaria establecida en el Transitorio XXIV de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, comprende desde el 4 de diciembre de 2018 hasta el 4 de marzo de 2019, ambas fechas inclusive.

3.- La sola presentación de las declaraciones tributarias sin efectuar el pago del impuesto o tributos correspondientes, no da lugar al goce de los beneficios contenidos en el Transitorio XXIV de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

4.- En los casos en que las cuotas tributarias se encuentren en discusión en la sede administrativa, el pago realizado dentro del plazo de la amnistía constituye la aceptación expresa del sujeto pasivo, respecto de los cargos determinados por la Administración Tributaria y en carácter de desistimiento en la vía administrativa, incluso respecto de la fase recursiva. Una vez realizado el pago, el sujeto pasivo deberá informar a la Administración Tributaria del pago realizado, y esta procederá a verificar si el monto cancelado responde a los montos determinados de oficio.

5.- En los casos en que las cuotas tributarias se encuentren en discusión en la vía contencioso administrativa, el pago realizado dentro del plazo de la amnistía constituye la aceptación expresa del sujeto pasivo, respecto de los cargos determinados por la Administración Tributaria. Una vez realizado el pago y verificándose que el mismo coincide con la obligación tributaria determinada, la Administración Tributaria competente o Dirección de Grandes Contribuyentes Nacionales, procederá a informarlo a la autoridad judicial competente y solicitará a la Procuraduría General de la República, que gestione ante dicha autoridad, el archivo de la causa judicial.

De aceptar la determinación de oficio realizada por la Administración Tributaria, la entidad bancaria podrá acogerse a una reducción de la sanción correspondiente, en los siguientes términos:

1) En el primer mes de entrada en vigencia de la referida ley, el cual abarca del 4 de diciembre de 2018 al 4 de enero de 2019, inclusive, la sanción será rebajada en un ochenta por ciento (80%).
2) En el segundo mes de entrada en vigencia, el cual abarca del 5 de enero al 4 de febrero de 2019, inclusive, la sanción será rebajada en un setenta por ciento (70%).
3) En el tercer mes, el cual abarca del 5 de febrero al 4 de marzo, inclusive, la sanción será rebajada en un sesenta por ciento (60%).

Transcurrido los plazos citados, no procederá el reconocimiento de la reducción establecida en la amnistía.

Para lo no comprendido en el Transitorio XXIV de la referida Ley, que cumplan con los supuestos del Transitorio VI de la misma, aplicará este último.

Artículo 5°.- Amnistía fiscal en materia de infracciones administrativas.

Las infracciones administrativas consideradas dentro del Transitorio VI, cubren a las sanciones de tipo pecuniario, cuyo monto se encuentre pendiente de pago a la fecha de vigencia de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, y sólo durante el plazo de la amnistía tributaria.

Podrán acogerse a la amnistía tributaria las sanciones correspondientes a las infracciones establecidas en los artículos 80, 80 bis y 81 del Código Tributario, se haya autoliquidado o no la sanción en fecha anterior a la entrada en vigencia de la amnistía.

La reducción a aplicar sobre la sanción administrativa deberá atender la siguiente escala:

a) Reducción de un ochenta por ciento (80%) del monto de la sanción, si el pago se realiza durante el primer mes de vigencia de la amnistía, el cual abarca del 04 de diciembre de 2018 hasta el 4 de enero de 2019, inclusive.

b) Reducción de un setenta por ciento (70%), si el pago se realiza durante el segundo mes de vigencia de la amnistía, el cual abarca del 5 de enero de 2019 al 4 de febrero de 2019, inclusive.

c) Reducción de un sesenta por ciento (60%), si el pago se realiza durante el tercer mes de vigencia de la amnistía, el cual abarca del 5 de febrero de 2019 al 4 de marzo de 2019, inclusive.

d) Reducción de un cuarenta por ciento (40%), en el caso que durante los tres meses de vigencia de la amnistía se formalice un fraccionamiento de pago, del 4 de diciembre de 2018 al 4 de marzo de 2019, inclusive. Para estos efectos, el sujeto pasivo debe cumplir con los siguientes requisitos:

   d.1.-Formalizar un fraccionamiento de pago dentro del plazo de la amnistía y conforme a lo establecido en los artículos 186 siguientes y concordantes del Reglamento de Procedimiento, Decreto Ejecutivo N° 38277-H del 7 de marzo de 2014 y sus reformas, en

tanto las normas reglamentarias no se opongan al Transitorio VI de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

d.2.-Que el plazo y el pago establecido en el fraccionamiento para la cancelación total de la(s) deuda(s) tributaria(s), no supere los seis meses.

d.3.-Que respalde el fraccionamiento suscrito con aval o garantía bancaria, en los términos expuestos en el artículo 182 bis del Reglamento de Procedimiento Tributario.

d.4.-No es aplicable la reducción del 40% establecida en el Transitorio VI de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, en los fraccionamientos de pago referidos a obligaciones por concepto de tributos, sino sólo por sanciones.

d.5.-Si transcurrido el plazo del fraccionamiento otorgado por un máximo de seis meses, el sujeto pasivo no ha cancelado por completo la sanción, se tienen por no realizados los efectos de la amnistía tributaria, por lo que el pago realizado se imputará, primero a los intereses y luego al principal, conforme lo establece el artículo 9 del Reglamento de Procedimiento Tributario. Asimismo, opera el procedimiento administrativo previsto para el incumplimiento de fraccionamientos de pago, en los términos del artículo 186 siguientes y concordantes del Reglamento de Procedimiento Tributario.

Artículo 6°.- Aplicación de la Amnistía Fiscal sobre pagos parciales y facilidades de pago a favor del sujeto pasivo.

En caso de que, por la falta de pago oportuno de pagos parciales en el impuesto sobre la renta o en otro tributo que prevea este tipo de obligación, se hayan generado intereses en adición a la obligación tributaria principal, cualquier saldo al descubierto resultante podrá pagarse en las condiciones de la amnistía, sin intereses, siempre y cuando la deuda se cancele en efectivo y en forma total.

Asimismo, la amnistía comprenderá la exoneración de los intereses generados por deudas cuyo pago haya sido postergado por aplazamiento, o sujeto a abonos por fraccionamiento de pago, formalizados antes de la vigencia de la amnistía.

Si durante la vigencia de los Transitorios VI y XXIV el sujeto pasivo no cancela por completo la deuda tributaria, se tienen por no realizados los efectos de esta, por lo que el pago realizado se imputará, primero a los intereses y luego al principal, conforme lo establece el artículo 9 del Reglamento de Procedimiento Tributario.

Artículo 7°.- Efectos del pago realizado durante la vigencia de la amnistía tributaria. Transitorios VI y XXIV.

En todos los supuestos comprendidos en el Transitorio VI y XXIV de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, una vez que el obligado tributario haya cumplido con los requisitos expuestos en la presente resolución y haya cancelado **en efectivo y en forma total** el monto adeudado por el tributo en cuestión, se dará por extinta cualquier obligación en cuanto a ese tributo, así como sus intereses y demás recargos, en los siguientes términos:

7.a.- Si durante la vigencia de los Transitorios VI y XXIV el sujeto pasivo no cancela por completo la obligación tributaria, se tienen por no realizados los efectos de la amnistía tributaria, por lo que el pago realizado se imputará, primero a los intereses y luego al principal, conforme lo establece el artículo 9 del Reglamento de Procedimiento Tributario.

7.b.- En el caso de las autoliquidaciones de obligaciones tributarias cuya declaración tributaria sea presentada y cancelada durante la vigencia de la amnistía, la extinción de la obligación tributaria, así como sus intereses, opera respecto de los montos cancelados en efectivo y sin perjuicio de las potestades de la Administración Tributaria de verificar posteriormente el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias materiales, y determinar las diferencias que correspondan durante el plazo de prescripción para ello.

7.c.- En el caso de las determinaciones de oficio de obligaciones tributarias fundamentadas en los artículos 124 y 144 del Código Tributario, si durante la vigencia de la amnistía y habiéndose notificado el inicio de actuaciones por liquidación previa o por liquidación definitiva, el sujeto pasivo presenta la declaración "omisa", o si rectifica una declaración tributaria cuyo impuesto y período fiscal es anterior al 1° de octubre de 2017, la Administración Tributaria deberá continuar el procedimiento determinativo iniciado hasta la conclusión de la actuación, de tal forma que verifique si la obligación pagada por el sujeto pasivo durante la amnistía, se ajusta o no a lo liquidado de oficio por la Administración Tributaria.

7.c.1.- En el caso de las liquidaciones previas, la actuación de la Administración Tributaria concluirá en la etapa de verificación de la obligación tributaria, si los montos cancelados por el sujeto pasivo durante la amnistía, coinciden completamente con los determinados de oficio.

Si el sujeto pasivo no regulariza o regulariza parcialmente, la Administración Tributaria procederá a notificar el traslado de cargos u observaciones determinativo, así como el sancionador correspondiente a la infracción del artículo 81 establecido en el Código Tributario, respecto de las diferencias no canceladas durante la amnistía y no aceptadas en la regularización. Asimismo, se debe indicar que se tienen por no realizados los efectos de la amnistía tributaria, por lo que el pago realizado se imputará, primero a los intereses y luego al principal, conforme lo establece el artículo 9 del Reglamento de Procedimiento Tributario.

7.c.2.- En el caso de las liquidaciones definitivas, la actuación de la Administración Tributaria concluirá con la celebración de la audiencia final, informándole en ese acto si los montos

cancelados por el sujeto pasivo durante la amnistía, coinciden completamente con los determinados en la actuación fiscalizadora.

Si el sujeto pasivo no regulariza o regulariza parcialmente, la Administración Tributaria procederá a notificar el traslado de cargos u observaciones determinativo, así como la propuesta de resolución sancionadora por la infracción del artículo 81 del Código Tributario, respecto de las diferencias no canceladas durante la amnistía y no aceptadas en la regularización. Asimismo, se debe indicar que se tienen por no realizados los efectos de la amnistía tributaria, por lo que el pago realizado se imputará, primero a los intereses y luego al principal, conforme lo establece el artículo 9 del Reglamento de Procedimiento Tributario.

7.c.3.- La presentación de una declaración rectificativa durante la vigencia de la amnistía que implique un aumento en la obligación tributaria declarada originalmente, no tendrá el carácter de petición que establece el inciso e) del artículo 130 del Código Tributario, sino que tendrá el carácter de última declaración tributaria presentada que modifica a la anterior declaración, debiendo la Administración Tributaria continuar la actuación fiscalizadora hasta su conclusión y proponiendo la regularización que corresponda, en el caso que la declaración rectificativa no se ajuste en su totalidad a la obligación tributaria determinada de oficio por la Administración Tributaria.

Durante la vigencia de la amnistía, no es aplicable la restricción que establecen los artículos 130 del Código Tributario, así como los artículos 125 y 143 del Reglamento de Procedimiento Tributario, que impiden presentar declaraciones rectificativas después de ser haber sido notificada la convocatoria a la audiencia final. Durante la vigencia del Transitorio VI, opera la facultad de interponer una declaración rectificativa, incluso durante la fase recursiva que establecen en los artículos 145, 146 y 156 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Lo anterior, únicamente en el tanto la declaración rectificativa implique un aumento en la obligación tributaria.

7.d.- Infracciones administrativas.

7.d.1.- Tratándose de sanciones por incumplimiento de deberes materiales que el obligado tributario haya autoliquidado antes o durante la vigencia de la amnistía y no se hayan pagado, están cubiertas por los beneficios que ofrece el párrafo segundo del Transitorio VI de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, en el tanto se cancele la totalidad de la sanción durante la amnistía.

7.d.2.- Las sanciones generadas como producto de un procedimiento sancionador administrativo seguido de oficio por la Administración Tributaria conforme a lo establecido en el artículo 150 del Código Tributario y por incumplimiento de deberes materiales en las que el obligado tributario no haya pagado la sanción, están cubiertas por los beneficios que ofrece el párrafo segundo del Transitorio VI de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, en el tanto se cancele la sanción durante la amnistía, en forma total.

7.d.3.- Si el sujeto infractor no cancela en su totalidad la sanción reducida conforme a los términos del Transitorio VI, no operan los efectos de la reducción reconocida por el Transitorio citado.

7.d.4.- Reducción de sanciones.

1.- A las sanciones establecidas en los artículos 78, 79 y 83 del Código Tributario, no les es aplicable la reducción de sanciones contemplada en el Transitorio VI de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, sino la reducción de sanciones establecida en el artículo 88 del Código Tributario, según corresponda.

2.- En cuanto a la sanción establecida en el artículo 81 del Código Tributario, deberá procederse conforme a lo siguiente:

a.- Cuando el infractor haya reparado su incumplimiento en los términos del inciso b) del artículo 88 del Código Tributario y a la fecha de entrada en vigencia del Transitorio VI no haya cancelado la sanción, está podrá ser pagada durante la vigencia de la amnistía, aplicando la reducción de sanciones establecida en el Transitorio VI, sobre el monto reducido de la sanción que se estableció conforme al artículo 88 citado.

b.- Cuando el infractor, notificado de la resolución determinativa de la obligación tributaria y dentro del plazo para recurrirla, acepte los hechos planteados en la resolución citada y haya subsanado el incumplimiento en los términos del inciso c) del artículo 88 del Código Tributario, si a la fecha de entrada en vigencia del Transitorio VI no ha cancelado la sanción, esta podrá ser pagada durante la vigencia de la amnistía, aplicando la reducción de sanciones establecida en el Transitorio VI, sobre el monto reducido de la sanción que se estableció conforme al artículo 88 citado.

Una vez transcurrida la amnistía y de mantenerse la falta de pago, los montos a cancelar deberán ser únicamente los establecidos en el artículo 88 del Código Tributario, según corresponda.

7.e.- Cuotas tributarias que se encuentren en la fase impugnativa y resolutiva de la vía administrativa.

En el supuesto contemplado en el inciso d) del Transitorio VI, en que las cuotas tributarias se encuentren en discusión en la sede administrativa, el pago realizado en efectivo y en forma total dentro del plazo de la amnistía, constituye la aceptación expresa del sujeto pasivo, respecto de los cargos determinados por la Administración Tributaria y en carácter de desistimiento en la vía administrativa, incluso respecto de la fase recursiva. Una vez realizado el pago, el sujeto pasivo deberá informar a la Administración Tributaria del pago realizado, y esta procederá a verificar si el monto cancelado responde a los montos determinados de oficio.

De no cancelar la totalidad del impuesto, no se tendrá el caso por desistido y la Administración Tributaria continuará con el procedimiento administrativo en la etapa procesal en que se encuentre, haciendo la advertencia expresa del pago realizado e indicando que se tienen por no realizados los

efectos de la amnistía tributaria, por lo que el pago realizado se imputará, primero a los intereses y luego al principal, conforme lo establece el artículo 9 del Reglamento de Procedimiento Tributario.

7.f.- Cuotas tributarias que se encuentren en la vía contenciosa administrativa.

En los supuestos contemplados en el inciso f) del Transitorio VI y en el Transitorio XXIV, el pago realizado dentro del plazo de la amnistía, de las cuotas tributarias que se encuentren en discusión en la sede contencioso administrativa, constituye la aceptación expresa del sujeto pasivo, respecto de los cargos determinados por la Administración Tributaria. Una vez realizado el pago en efectivo y forma total, y verificándose que el mismo coincide con la obligación tributaria determinada, la Administración Tributaria competente y Dirección de Grandes Contribuyentes Nacionales, procederá a informarlo a la autoridad judicial competente y solicitará a la Procuraduría General de la República, que gestione ante dicha autoridad el archivo de la causa judicial.

De no coincidir los montos pagados por el sujeto pasivo, con la totalidad de los montos determinados en la vía administrativa, la Administración Tributaria también lo informará conforme a lo señalado en el párrafo anterior, y señalando expresamente que se tienen por no realizados los efectos de la amnistía tributaria, por lo que el pago realizado se imputará, primero a los intereses y luego al principal, conforme lo establece el artículo 9 del Reglamento de Procedimiento Tributario.

Artículo 8°.- Promoción de la amnistía.

Las Administraciones Tributarias deberán promover en forma exhaustiva, el pago de las obligaciones tributarias y multas por sanciones, objeto de la amnistía.

Artículo 9°.- Vigencia.

Esta resolución rige a partir de su publicación.

Publíquese.

Carlos Vargas Durán, Director General.— Priscilla Piedra Campos, Directora General de Hacienda, a.i.—1 vez.—O.C. N° 3400035463.—(IN2018306946).

INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

Convocatoria a Audiencia Pública

La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos invita a los interesados a presentar por escrito sus posiciones sobre la propuesta de la **Refinadora Costarricense de Petróleo S.A. (RECOPE S.A.)** para la **variación extraordinaria de los precios de los combustibles derivados de los hidrocarburos, diciembre 2018,** según el siguiente detalle:

DETALLE DE PRECIOS PROPUESTOS (colones por litro)

PRODUCTOS**	Precio plantel Recope (con impuesto)		Precio distribuidor sin punto fijo al consumidor final (3) (6)		Precio consumidor final en estaciones de servicio	
	RE-101-IE-2018*	Propuesto	RE-101-IE-2018	Propuesto	RIE-101-IE-2018	Propuesto
Gasolina súper (1) (4)	578,76	538,73	582,51	542,47	637	597
Gasolina plus 91 (1) (4)	567,62	524,13	571,36	527,88	626	582
Diésel 50 ppm de azufre (1) (4)	528,72	474,74	532,45	478,49	587	533
Diésel marino	578,35	521,26				
Keroseno (1) (4)	475,27	408,14	479,02	411,89	533	466
Búnker (2)	329,12	267,66	332,87	271,40		
Búnker Térmico ICE (2)	368,74	297,71				
IFO 380	353,72	333,02				
Asfalto *(2)	351,32	298,41	355,07	302,16		
Diésel pesado (2)	401,47	335,18	405,21	338,93		
Emulsión asfáltica RR*(2)	234,41	199,31	238,15	203,05		
Emulsión asfáltica RL*(2)	233,67	199,23	237,40	202,97		
LPG (mezcla 70-30)	211,55	184,71				
LPG (rico en propano)	200,04	174,98				
Av-Gas (5)	933,57	875,22			950	891
Jet fuel A-1 (5)	582,68	518,81			599	535
Nafta pesada (1)	401,57	335,49	405,32	339,24		

*(1) Para efecto del pago correspondiente del flete por el cliente, considere la fórmula establecida mediante resolución RIE-065-2018 del 24 de julio de 2018 publicada en el Alcance digital N.° 139 de La Gaceta N.° 139 el 1 de agosto de 2018. (2) Para efecto del pago correspondiente del flete por el cliente, se considera la fórmula establecida en resolución RIE-079-2014 del 24 de octubre de 2014 publicada en el Alcance digital N.° 61 de La Gaceta N.° 208 del 29 de octubre de 2014. *Precios preliminares sujetos a revisión definitiva, ya que su referencia tiene ajustes posteriores. (3) Incluye un margen total de ¢3,746 colones por litro, establecido mediante resolución RJD-075-96 del 4 de setiembre de 1996. (4) El precio final contempla un margen de comercialización de ¢48,3128/litro y flete promedio de ¢9,6405/litro, para estaciones de servicio terrestres y marinas, establecidos mediante resoluciones RIE-062-2013 del 25 de junio de 2013 y RIE-065-2018 del 24 de julio de 2018, respectivamente. (5) El precio final para las estaciones aéreas contempla margen de comercialización total promedio (con transporte incluido) de ¢16,2697 /litro, establecidos mediante resolución RIE-065-2018 del 24 de julio de 2018. (6) Se aclara que Recope no presentó los precios al consumidor final para distribuidores sin punto fijo, sin embargo, de aprobarse su solicitud estos podrían modificarse según se indica. * Se advierte que los precios indicados en esta columna son los presentados por Recope, sin embargo, por decimales algunos no corresponden a los precios vigentes en Plantel de Distribución, fijados el 23 de noviembre de 2018 mediante la resolución RE-101-IE-2018, publicados en La Gaceta 221, Alcance 200 del 28 de noviembre de 2018. ** La descripción de los productos presentados por Recope no corresponden a los establecidos en la RIE-030-2018.*

Nota: todos los precios son preliminares y podrían modificarse.

Tipos de Envase	Precio máximo a facturar del gas licuado de petróleo (incluye impuesto único) (en colones por litro y cilindros) (7) (12)					
	Mezcla propano-butano			Rico en propano		
	Envasador (8)	Distribuidor y Agencias (9)	Detallistas (10)	Envasador (8)	Distribuidor y Agencias (9)	Detallistas (10)
Tanques Fijos (por litro)	239,90	(*)	(*)	230,18	(*)	(*)
Cilindro de 4,54 kg (10 lb)	2 084,00	2 548,00	3 081,00	2 067,00	2 547,00	3 099,00
Cilindro de 9,07 kg (20 lb)	4 167,00	5 095,00	6 163,00	4 135,00	5 095,00	6 199,00
Cilindro de 11,34 kg (25 lb)	5 209,00	6 369,00	7 703,00	5 169,00	6 369,00	7 748,00
Cilindro de 15,88 kg (35 lb)	7 292,00	8 917,00	10 785,00	7 236,00	8 916,00	10 848,00
Cilindro de 18,14 kg (40 lb)	8 334,00	10 191,00	12 325,00	8 270,00	10 190,00	12 397,00
Cilindro de 20,41 kg (45 lb)	9 376,00	11 464,00	13 866,00	9 303,00	11 463,00	13 947,00
Cilindro de 27,22 kg (60 lb)	12 501,00	15 286,00	18 488,00	12 405,00	15 284,00	18 596,00
Cilindro de 45,36 kg (100 lb)	20 836,00	25 476,00	30 813,00	20 674,00	25 474,00	30 993,00
Estación de servicio mixta (por litro) (11)	(*)	(*)	288,00	(*)	(*)	278,00

** No se comercializa en esos puntos de venta. (7) Precios máximos de venta según resolución RRG-1907-2001 publicada en La Gaceta N.° 65 del 2 de abril de 2001. (8) Incluye el margen de envasador de ¢55,192/litro, establecido mediante resolución RE-0074-IE-2018 de 14 de agosto de 2018. (9) Incluye el margen de distribuidor y agencia de ¢53,436/litro establecido mediante resolución RIE-014-2018 del 23 de febrero de 2018 publicada en el Alcance Digital N.° 46 a La Gaceta N.° 39 del 1 de marzo de 2018. (10) Incluye el margen de detallista de ¢61,446/litro establecido mediante resolución RIE-014-2018 del 23 de febrero de 2018 publicada en el Alcance Digital N.° 46 a La Gaceta N.° 39 del 1 de marzo de 2018. (11) Incluye los márgenes de envasador de ¢55,192/litro, establecido mediante resolución RE-0074-IE-2018 de 14 de agosto de 2018 y ¢48,3128/litro para estación de servicio, establecido*

mediante resolución RIE-062-2013 del 25 de junio de 2013. ***(12)*** *Se aclara que Recope no presentó los precios máximos a facturar del gas licuado de petróleo, sin embargo, de aprobarse su solicitud estos podrían modificarse según se indica.*

Precios a la flota pesquera nacional No Deportiva [13] (¢/lit.)		**Rangos de variación de los precios de venta para Ifo-380, Av-Gas y Jet Fuel (¢/lit.)**			**Productos**	**Diferencial de precios (¢/lit.) [14]**
					Gasolina Súper	-13,96
					Gasolina Plus 91	-8,78
					Diésel 50 ppm de azufre	-7,02
					Asfalto	-7,71
Productos	Precio plantel sin impuesto	Producto	Precio al consumidor		LPG (mezcla 70-30)	3,98
			Límite inferior	Límite superior	Jet fuel A-1	0,19
Gasolina plus 91	244,35	Ifo-380	305,13	360,91	Búnker	-13,84
Diésel 50 ppm de azufre	277,73	Av-gas	601,66	661,29	Búnker Térmico ICE	0,00
		Jet fuel	343,96	401,17	Av-gas	-17,18

(13) *Según lo dispuesto en la Ley 9134 de interpretación auténtica del artículo 45 de la Ley 7384 y la Ley 8114.* ***(14)*** *Los montos negativos corresponden a rebajas en las tarifas.*

A pesar de que Recope no incorpora en su propuesta la actualización del canon de regulación, corresponde realizar la incorporación en esta fijación extraordinaria. De conformidad con la metodología vigente (Resolución RJD-230-2015), el canon de regulación de la actividad de suministro del combustible $Ca_{i,a}$ que se debe incorporar a los precios de los combustibles *[…] se refiere al canon de regulación vigente de las actividades de suministro de combustibles en el territorio nacional expresado en colones por litro, el cual es aprobado por la Contraloría General de la República. Este canon será ajustado de manera extraordinaria, según se indica en el apartado 6 […].*

Cualquier interesado puede presentar una posición a favor o en contra, indicando las razones que considere. Esta posición se debe presentar **mediante escrito firmado** (*con fotocopia de la cédula*), en las oficinas de la Autoridad Reguladora en horario regular, por medio del fax 2215-6002 o del correo electrónico [***]: consejero@aresep.go.cr **hasta las dieciséis horas del día viernes 4 de enero del 2019**. Debe señalar un medio para recibir notificaciones (*correo electrónico, número de fax o dirección exacta*).

Las personas jurídicas que presenten posiciones deben hacerlo por medio del representante legal, en este caso debe aportarse certificación de personería jurídica vigente.

Se hace saber a los interesados que esta consulta pública se realiza conforme las resoluciones **RRG-7205-2007, RJD-230-2015** y **RJD-070-2016** de la Aresep.

Más información en las instalaciones de la ARESEP y en www.aresep.go.cr consulta de expediente **ET-070-2018**

(***) La posición enviada por correo electrónico, debe estar suscrita mediante firma digital o el documento con la firma debe ser escaneado y cumplir los requisitos arriba señalados, además el tamaño no puede exceder a 10,5 megabytes.

Dirección General de Atención al Usuario.—Marta Monge Marín.—1 vez.—O.C. N° 9006-2018.—Solicitud N° 277-2018.—(IN2018307433).

INTENDENCIA DE ENERGÍA
RE-0113-IE-2018 del 17 de diciembre de 2018

SIMPLIFICACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE INFORMACIÓN REGULATORIA PARA EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO DESTINADOS AL CONSUMIDOR FINAL, BAJO LA FIGURA DE CONCESIONARIOS DE PLANTAS ENVASADORAS Y RECOPE EN SU ACTIVIDAD DE DISTRIBUCIÓN AL MAYOREO

EXPEDIENTE OT-836-2018

RESULTANDO:

I. Que mediante el Decreto Ejecutivo Nº 24715-MOPT-MEIC-S, publicado el 1 de noviembre de 1995 en La Gaceta Nº 207, se estableció el Reglamento para el Transporte Terrestre de Productos Peligrosos.

II. Que mediante el Decreto Ejecutivo Nº MINAE-S-28622, publicado el 18 de mayo de 2000 en La Gaceta Nº 95, se estableció el Reglamento para el Diseño, Construcción y Operación de Plantas de Almacenamiento y Envasado para GLP.

III. Que mediante la resolución RRG-1907-2001 del 22 de marzo de 2001, se estableció la Metodología de precio máximo de la industria de envasado de gas licuado de petróleo (GLP).

IV. Que mediante el Decreto Ejecutivo Nº 30131-MINAE-S, publicado el 1 de marzo de 2002 en La Gaceta Nº 43, se estableció el Reglamento para la Regulación del Sistema de Almacenamiento y Comercialización de Hidrocarburos.

V. Que mediante la Ley Nº 8279 Sistema Nacional para la Calidad, publicada en el 21 de mayo de 2002, se estableció el marco en materia de evaluación y conformidad, en los componentes de normalización, reglamentación técnica, metrología y acreditación, para nuestro país.

VI. Que mediante el Decreto Ejecutivo Nº 31257-MINAE-S, publicado el 14 de julio de 2003 en La Gaceta Nº 134, se estableció la regulación de Venta al Mayoreo de Productos que Expende la Refinadora Costarricense de Petróleo.

VII. Que mediante el Decreto Ejecutivo Nº 32921-COMEX-MINAE-MEIC, publicado el 14 de marzo de 2006 en La Gaceta Nº 52, se aprobaron los Reglamentos Técnicos Centroamericanos, en lo que nos interesa:

1. RTCA 13.01.26:05 Transporte Terrestre de Gas Licuado de Petróleo (GLP) a Granel, Especificaciones.
2. RTCA 23.01.27:05 Recipientes a presión. Cilindros Portátiles para contener GLP. Válvulas de acoplamiento roscado (Tipo POL), Especificaciones.
3. RTCA 23.01.28:05 Recipientes a presión. Cilindros Portátiles para contener GLP. Válvulas de Acople rápido, Especificaciones.
4. RTCA 23.01.29:05 Recipientes a presión. Cilindros Portátiles para contener GLP. Especificaciones de fabricación.
5. RTCA 75.01.21:05 Productos de Petróleo. Gases Licuados de Petróleo: Propano Comercial, Butano Comercial y sus Mezclas. Especificaciones.

VIII. Que mediante el Decreto Ejecutivo Nº 33371-COMEX-MEIC, publicado el 10 de octubre de 2006 en La Gaceta Nº 195, se aprobó el Reglamento Técnico Centroamericano RTCA 01.01.11:06 Cantidad de Producto en Preempacados.

IX. Que mediante la Resolución 169-2006 (COMEICO-XLIX), publicado el 23 de noviembre de 2006 en La Gaceta Nº 225, se aprobaron los Reglamentos Técnicos Centroamericanos, en lo que nos interesa:

1. RTCA 23.01.23:06 Recipientes a Presión. Cilindros Portátiles para contener GLP. Sello de Inviolabilidad (Marchamo). Especificaciones;
2. RTCA 23.01.24:06 Recipientes a Presión. Cilindros Portátiles para contener Gas Licuado de Petróleo. Vehículo Terrestre de Reparto. Especificaciones de Seguridad.

X. Que mediante la resolución RRG-8794-2008 del 2 de setiembre de 2008, se estableció el Modelo de cálculo del margen de distribución de los distribuidores, agencias y detallistas que expenden gas licuado de petróleo en cilindros.

XI. Que mediante el Decreto Ejecutivo Nº 36627-MINAET, publicado el 14 de junio de 2011 en el Alcance Nº 31 a La Gaceta Nº 114, se estableció el Reglamento para la regulación del transporte de combustible.

XII. Que mediante la norma técnica INTE 21-02-03:2014 Cilindros de gas. Cilindros recargables para gas licuado de petróleo (GLP). Recalificación, del 7 de agosto de 2014, se establecieron los intervalos y procedimientos de inspección y pruebas para cilindros recargables GLP.

XIII. Que mediante la resolución RIE-025-2017 del 5 de marzo de 2017, la Intendencia de Energía estableció los Lineamientos para la verificación, recalificación y destrucción de cilindros portátiles para almacenamiento de GLP, en plantas envasadoras, distribuidoras y puntos de venta al detalle.

XIV. Que mediante el Decreto Ejecutivo Nº 41150-MINAE-S, publicado el 17 de mayo de 2018 en el Alcance Nº 103 a La Gaceta Nº86, se estableció el Reglamento General para la Regulación del Suministro de Gas Licuado de Petróleo, cuyo objetivo es *Regular la cadena de suministro del gas licuado de petróleo como mecanismo para garantizar el abastecimiento al usuario final, la protección ambiental y la seguridad de las personas*.

XV. Que mediante el Decreto Ejecutivo No 41151-MINAE-S, publicado el 17 de mayo de 2018 en el Alcance No 103 a La Gaceta No86, se estableció el Reglamento Técnico RTCR 490:2017 Equipos para la industria de petróleo, cilindros portátiles, tanques estacionarios, equipos y artefactos para suministro y uso del Gas Licuado de Petróleo (GLP). Especificaciones de Seguridad.

XVI. Que además de lo indicado, las normas NFPA 58 Liquefied Petroleum Gas Code, ISO 17025 Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración e ISO 17020 Criterios generales para el funcionamiento de diferentes tipos de organismos que realizan la inspección, también forman parte del marco normativo que en materia de suministro de GLP rigen el servicio público regulado.

CONSIDERANDO

I. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Constitución Política y en el artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública, los actos de esta Autoridad Reguladora, como ente público, se rigen por el principio de legalidad.

II. Que el artículo 5 inciso d) de la Ley Nº 7593, de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos *(Aresep),* declara el suministro de combustibles derivados de hidrocarburos, dentro de los que se encuentra *[…] los derivados del petróleo, asfaltos, gas y naftas destinados al consumidor final*, como servicios públicos regulados por esta entidad.

III. Que el artículo 6 inciso a) y d) de la Ley Nº 7593 establece, que le corresponde a la Aresep la obligación de *[…] a) regular y fiscalizar contable, financiera y técnicamente, a los prestadores de los servicios públicos para comprobar el correcto manejo de los factores que afectan el costo del servicio, ya sean inversiones realizadas, el endeudamiento en que han incurrido, los niveles de ingresos percibidos, los costos y gastos efectuados o los ingresos percibidos y la rentabilidad o utilidad obtenida, b) realizar inspecciones técnicas de las propiedades, plantas y equipos destinados a prestar el servicio público, cuando lo estime conveniente para verificar la calidad, confiabilidad, continuidad, costos, precios y tarifas del servicio público, […] d) fijar las tarifas y los precios de conformidad con los estudios técnicos.*

IV. Que el artículo 14 incisos a) y c), de la Ley Nº 7593 establece, entre las obligaciones de los prestadores de servicios públicos, la de *[…] a) Cumplir con las disposiciones que dicte la Autoridad Reguladora en materia de prestación del servicio, de acuerdo con lo establecido en las leyes y los reglamentos respectivos […] c) suministrar oportunamente, a la Autoridad Reguladora, la información que les solicite, relativa a la prestación del servicio.*

V. Que la Ley Nº 7593 en su artículo 24 establece, *[…] A solicitud de la Autoridad Reguladora, las entidades reguladas suministrarán informes, reportes, datos, copias de archivo y cualquier otro medio electrónico o escrito donde se almacene información financiera, contable, económica, estadística y técnica relacionada con la prestación del servicio público que brindan. Para el cumplimiento exclusivo de sus funciones, la Autoridad Reguladora tendrá la potestad de inspeccionar y registrar los libros legales y contables, comprobantes, informes, equipos y las instalaciones de los prestadores […].*

VI. Que la Ley Nº 7593 en sus artículos 38 y 41, faculta a la Aresep a tramitar procedimientos ordinarios sancionatorios contra los prestadores de servicios públicos que incurran en las circunstancias ahí descritas, aplicando el procedimiento ordinario establecido en los artículos 214 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública.

VII. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 17 y 19 del Reglamento Interno de Organización y Funciones de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y su órgano desconcentrado (RIOF)”,

le corresponde a la Intendencia de Energía, *[…] fijar los precios, tarifas y tasas de los servicios públicos bajo su competencia aplicando los modelos vigentes aprobados por la Junta Directiva, […] realizar, cuando sea conveniente, inspecciones técnicas de las propiedades, plantas y equipos destinados a prestar el servicio público, para verificar el cumplimiento de las obligaciones de los prestadores, […] fiscalizar contable, financiera y técnicamente a los prestadores de servicios públicos, para comprobar el correcto manejo de los factores que afectan el costo del servicio, tales como: inversiones realizadas, endeudamiento incurrido, niveles de ingreso percibido, costos y gastos efectuados, rentabilidad o utilidad neta, entre otros […] y establecer y mantener un sistema de seguimiento y registro del comportamiento del mercado de los sectores regulados y de los prestadores de tales servicios, así como mantener una base de datos completa, confiable y técnicamente* organizada *de todas las variables relevantes de la actividad regulada […].* Siendo uno de los servicios públicos bajo su competencia el suministro de combustibles derivados de hidrocarburos.

VIII. Que para fijar las tarifas del servicio de suministro de combustibles derivados de hidrocarburos, la Intendencia de Energía debe hacerlo en aplicación del principio de servicio al costo desarrollado en los artículos 3, 20 y del 30 al 33 de la Ley 7593.

IX. Que para cumplir la función de fijar tarifas, fiscalizar contable, financiera y técnicamente, realizar inspecciones técnicas y mantener una base de datos completa, confiable, consistente y técnicamente organizada de todas las variables relevantes de las actividades reguladas, es necesario que la Intendencia de Energía cuente con información suficiente relacionada con la prestación del servicio público, incluida la relacionada con el comportamiento del mercado regulado, el desarrollo y capitalización de la infraestructura y la información financiera-contable, que permita el análisis oportuno de las condiciones de la prestación de los servicios públicos, así como la aplicación de las metodologías correspondientes a partir del manejo estandarizado de la información requerida para los análisis técnicos.

X. Que desde la entrada en operación de la IE, con el fin de cumplir las funciones asignadas por la Junta Directiva, adoptó una organización por procesos sustentada en la orientación al usuario, la planificación estratégica, el monitoreo y el seguimiento, la gestión por resultados, la transparencia y la rendición de cuentas, como principios para la transformación de la cultura institucional y como pilar para la modernización del marco regulatorio que le compete.

XI. Que la socialización y desarrollo participativo de los formularios estándar de información de interés regulatorio, necesarios para estandarizar su presentación a la Intendencia de Energía, así como, la renovación de los mecanismos de comunicación y coordinación con las empresas reguladas, constituyen condiciones necesarias para avanzar en la consolidación de un modelo de regulación económica y de calidad, que garantice la armonización de los intereses entre los usuarios y los prestadores de los servicios públicos.

XII. Que como se indicó en el considerando anterior, ha sido una prioridad de la Intendencia de Energía promover procesos participativos para el desarrollo del marco regulatorio, con el objetivo de no establecer requisitos de forma discrecional e impositiva de conformidad con el Plan Estratégico Institucional 2017-2022, en el que se establece como valor institucional el Diálogo y la participación y como Objetivo estratégico 5 fortalecer los mecanismos institucionales de comunicación, información, retroalimentación con los agentes interesados. De tal manera, que los mismos se fortalezcan con la participación de los sectores involucrados con anterioridad a que se conviertan en un requisito de orden legal para las empresas reguladas; dando así certeza jurídica a las empresas, ya que, conocen de antemano la dirección, fines y beneficios derivados de estas iniciativas que establecerá la Intendencia, facilitando la remisión de información una vez formalizado el requerimiento.

XIII. Que para avanzar en un modelo de regulación moderno, estratégico, transparente y confiable, la Intendencia de Energía ha desarrollado las herramientas e instrumentos necesarios para avanzar en la simplificación, estandarización y automatización de los requerimientos de información que las empresas reguladas deben presentar a este Ente Regulador, como condición necesaria para velar por el cumplimiento del principio de servicio al costo y prestación óptima de los servicios públicos.

XIV. Que como ejemplo de este proceso de simplificación, estandarización y automatización de requerimientos regulatorios en el sector energía, la Intendencia de Energía ha dictado las resoluciones RIE-013-2014 del 19 de marzo de 2014, RIE-044-2014 del 30 de julio de 2014, RIE-100-2014 del 18 de diciembre de 2014, RIE-055-2015 del 20 de mayo de 2015, RIE-130-2015 y RIE-131-2015, ambas del 18 de diciembre de 2015, RIE-068-2016 del 28 de junio de 2016, RIE-089-2016 del 11 de octubre de 2016 y RIE-132-2017 del 22 de diciembre de 2017, con el propósito de integrar una

serie de disposiciones que se encontraban dispersas en distintas resoluciones tarifarias y otros oficios relacionados.

XV. De los ejemplos citados en el considerando anterior, esta Intendencia haciendo uso de sus competencias, implementó procesos de simplificación, estandarización y automatización que han permitido construir bases de datos, monitorear los mercados, comparar y preparar informes para los diferentes sectores regulados y de consumo, construir escenarios para la toma de decisiones, reducir los periodos de análisis y respuestas a terceros, dar seguimiento a las fijaciones tarifarias y disponer de información actualizada y de fácil comprensión, logrando con ello la democratización de información, la participación efectiva de los usuarios en los procesos de consulta pública y la mejora continua en los instrumentos regulatorios.

XVI. Que no obstante lo anterior, el mercado del gas licuado de petróleo ha presentado variaciones no solo legales sino operativas que evidencian su dinamismo, complejidad y desarrollo, que generan la necesidad de que la Autoridad Reguladora diseñe sistemas de información que sean flexibles, eficientes y adaptables a dichas variaciones, para facilitar la captura, manipulación, análisis y disposición al público de la información regulatoria de manera oportuna.

XVII. Que el Decreto N° 41150-MINAE-S, estableció las nuevas condiciones en las que se presta el servicio público de suministro del gas licuado de petróleo. Dentro de las cuales delimitó como concesionarios a los operadores de las plantas envasadoras, pudiendo los mismos también hacer varias de las actividades económicas de la cadena de suministro del gas licuado de petróleo y detalló la actividad de distribución al mayoreo de GLP que realiza la Refinadora Costarricense de Petróleo S.A. (Recope).

XVIII. Que las empresas que prestan el servicio público de suministro del combustible gas licuado de petróleo (GLP), específicamente los concesionarios operadores de las plantas envasadoras y Recope en su actividad de distribución al mayoreo, deben cumplir con el marco jurídico indicado en los Resultandos y los Considerandos anteriores, que les exige una serie de requisitos, inversiones, costos y gastos que influyen la prestación del servicio regulado.

XIX. Que para la utilización de herramientas tecnológicas y desarrollo de plataformas más eficientes en el proceso de captura, manipulación y análisis de información se requiere la modificación de los formatos de remisión de la información de mercado.

XX. Que los beneficios de este proceso se ven reflejados tanto para los prestadores de servicio, como para los usuarios y el regulador, toda vez que mediante éste se incrementa la transparencia de la información, aumenta la credibilidad, disminuye la incertidumbre, se limita la discrecionalidad de la regulación, permitiendo el acceso oportuno a la información para alcanzar una gestión más eficiente y por ende el cumplimiento de los principios regulatorios.

XXI. Que el proyecto de estandarización de información estadística que lleva a cabo la Intendencia de Energía abarca a todas las empresas reguladas.

XXII. Que el proceso de elaboración de los formatos establecidos en la presente resolución, se desarrolló tomando en consideración la experiencia obtenida en la implementación de formatos estándar en distintos sectores regulados, así como las observaciones y participación activa de las empresas reguladas, por medio de una sesión de trabajo realizada el 7 de noviembre de 2018 según minuta MI-0013-IE-2018, se expusieron y discutieron cada uno de los ingresadores de información.

XXIII. Que los formularios presentados en la reunión indicada en el Considerando anterior se remitieron a las empresas mediante oficios OF-1518-IE-2018, OF-1519-IE-2018, OF-1520-IE-2018 y OF-1521-IE-2018, todos del 8 de noviembre de 2018, dando un plazo de hasta el 23 de noviembre de 2018 para presentar observaciones a esta Intendencia, fecha en la cual envió comentarios y observaciones la empresa 3-101-622925 S.A., mismas que se tomaron en cuenta en esta resolución.

XXIV. Que de conformidad con lo señalado en los resultandos y considerandos citados, lo procedente es establecer de manera unificada la estructura, periodicidad y orden de la información regulatoria que deberán presentar los prestadores del servicio público de suministro de gas licuado de petróleo bajo la figura de concesionarios de plantas envasadoras de GLP y Recope en su actividad de distribución al mayoreo de GLP, tal y como se dispone en esta resolución.

POR TANTO
EL INTENDENTE DE ENERGÍA
RESUELVE:

I. Solicitar a los prestadores del servicio público de suministro de gas licuado de petróleo (GLP) bajo la figura de concesionarios de plantas envasadoras, que para cada una de las actividades de la cadena de suministro de GLP incluidas en su título habilitante y Recope en su actividad de distribución al mayoreo de GLP:

1. Remitir a más tardar los días 20 de julio y 20 de enero de cada año a la Intendencia de Energía la información estadística del mercado del GLP del semestre anterior:

    i. Anexo 1. Mercado Venta por Actividad GLP
    ii. Anexo 2. Ventas Envasadoras Tipo Envase GLP
    iii. Anexo 3. Mercado Compras GLP
    iv. Anexo 4. Mercado Venta Estaciones GLP

    En el caso de que la Intendencia de Energía identifique errores o inconsistencias en la información estadística remitida, las empresas deberán realizar las correcciones o aclaraciones pertinentes, así como actualizar sus bases de datos y reenviar dicha información en un plazo no mayor a 5 días hábiles contados a partir de la notificación de la solicitud de corrección. Lo anterior deberá realizarse de conformidad con los formularios de revisión establecidos por la Intendencia para tales efectos.

2. Remitir a más tardar en los primeros 5 día hábiles de mayo de cada año a la Intendencia de Energía la información de inversiones de GLP previstas:

    i. Anexo 5. Resumen total de inversiones GLP
    ii. Anexo 6. Inversiones por componentes GLP
    iii. Anexo 7. Justificación Macroinversiones GLP
    iv. Anexo 8. Justificación Microinversiones GLP

    Además, las empresas deberán presentar la información remitida con estos formularios de manera actualizada, cada vez que presenten una solicitud de fijación tarifaria. Hasta tanto no se definan los planes de cuentas de contabilidad regulatoria para este sector, las empresas

presentarán los siguientes formularios con sus planes de cuenta, pero una vez se implementen los planes regulatorios deberán ajustarse estos formularios con dichos planes de cuentas.

3. Remitir en sus solicitudes tarifarias ordinarias, los requerimientos específicos de información regulatoria en materia financiero-contable, hasta tanto no se definan los planes de cuentas de contabilidad regulatoria para este sector, las empresas presentarán los siguientes formularios con sus planes de cuenta:

    i. Anexo 9. Activos GLP
    ii. Anexo 10. Retiros de Activos GLP
    iii. Anexo 11. Cálculo del rédito GLP
    iv. Anexo 12. Costos y Gastos GLP
    v. Las justificaciones para las diferentes partidas deberán contener:

        a. Para los activos, explicación detallada de cada uno de los elementos involucrados en el cálculo: valor al costo y revaluado, con su respectiva depreciación al costo y revaluada, con las metodologías utilizadas para su cálculo, detallando el cálculo de la depreciación con el desglose de tasas y vidas útiles, además de detallar los elementos del capital de trabajo que se incluye en el cálculo de la base tarifaria.
        b. Para los costos y gastos y la partida remuneraciones, cuya variación anual supera el indicador económico que corresponda (inflación, decretos salariales, etc.): se debe adjuntar una explicación detallada de las razones por las cuales tuvieron dicho comportamiento y aportar la información y documentación complementaria que lo respalde.
        c. Para las demás variables necesarias para el cálculo tarifario que no se incluyen en los formularios adjuntos a esta resolución, las empresas deben aportar su cálculo, justificaciones y fuentes de información de conformidad con la metodología tarifaria vigente.

II. Indicar a las empresas prestadoras del servicio público de suministro de gas licuado de petróleo (GLP) detallas en el Por Tanto I, que la información que se entregará por medio de los formularios establecidos en la presente resolución debe remitirse en formato Excel editable y sin protección, para el caso de los formularios del punto 3 del Por Tanto I, debe remitirse también con los cálculos enlazados y con todas las fórmulas empleadas para el cálculo, se deben aportar todos los archivos vinculados, en el caso de las justificaciones para cualquiera de los requerimientos anteriores las mismas deben presentarse en formato Word.

III. Indicar a las empresas prestadoras del servicio público de suministro de gas licuado de petróleo (GLP) detallas en el Por Tanto I, que una vez Aresep establezca otra plataforma bajo la cual se deberá remitir la información de los anexos y formularios propios de la presente resolución, se notificará por medio de un oficio el detalle de la logística del proceso de envío de la información.

IV. Establecer el 1 de mayo de 2019, como inicio de remisión, por primera vez, de los requerimientos de información bajo los formatos y plazos establecidos en el Por Tanto I puntos 1 y 2 de esta resolución.

V. Indicar a las empresas prestadoras del servicio público de suministro de gas licuado de petróleo (GLP) detallas en el Por Tanto I, que de conformidad con lo establecido en la Ley Nº 7593, el cumplimiento de la presente resolución es requisito para la admisibilidad y análisis de cualquier solitud tarifaria ya sea de carácter ordinario o extraordinario, por lo que las empresas tienen la obligación de remitir esta información.

VI. Indicar a las empresas prestadoras del servicio público de suministro de gas licuado de petróleo (GLP) detallas en el Por Tanto I, que todos los anexos de esta resolución están disponibles en la página web de la Autoridad Reguladora *(www.aresep.go.cr)*, para su visualización y descarga.

VII. Indicar a las empresas prestadoras del servicio público de suministro de gas licuado de petróleo (GLP) detallas en el Por Tanto I, que no podrán modificar, de manera unilateral, los formatos establecidos por medio de la presente resolución. Cualquier modificación o mejora que consideren conveniente realizar, deberá ser gestionada formalmente a través de la Intendencia de Energía con el propósito de realizar la correspondiente

valoración técnica. De proceder el ajuste solicitado el mismo será comunicado de manera formal a todas las partes.

VIII. Cuando se requiera para el ejercicio de la regulación del servicio público de suministro de gas licuado de petróleo (GLP) detallas en el Por Tanto I, la Intendencia de Energía solicitará información adicional o complementaria a la señalada en la presente resolución, la cual no deberá entenderse como información regulatoria a remitir de manera periódica salvo que así sea indicado.

IX. Dejar sin efecto a partir del 1 de abril de 2019, cuando entra a regir esta resolución, todos los requerimientos de información regulatoria que hayan sido incluidos en resoluciones previas a la presente, y tomar como base única y exclusiva de remisión de información la presente estructura. Se exceptúa de esta derogatoria la resolución RIE-025-2017 del 5 marzo de 2017 la cual continuará vigente.

En cumplimiento de lo que ordenan los artículos 245 y 345 de la Ley General de la Administración Pública (LGAP) se informa que contra esta resolución pueden interponerse los recursos ordinarios de revocatoria y de apelación y el extraordinario de revisión. El de revocatoria podrá interponerse ante el Intendente de Energía, a quien corresponde resolverlo y los de apelación y de revisión podrán interponerse ante la Junta Directiva, a la que corresponde resolverlos.

De conformidad con el artículo 346 de la LGAP, los recursos de revocatoria y de apelación deberán interponerse en el plazo de tres días hábiles contado a partir del día hábil siguiente al de la notificación y, el extraordinario de revisión, dentro de los plazos señalados en el artículo 354 de dicha ley.

PUBLÍQUESE Y NOTIFÍQUESE.

Mario Mora Quirós, Intendente de Energía.—1 vez.—O.C. N° 9006-2018.—Solicitud N° 276-2018.—(IN2018307435).

RE-0170-IT-2018
San José, a las 15:30 horas del 19 de diciembre de 2018

CONOCE EL INTENDENTE DE TRANSPORTE LA ACTUALIZACIÓN DEL VALOR PARA EL SISTEMA AUTOMATIZADO DE CONTEO DE PASAJEROS (VNSCP) POR AUTOBÚS PARA SER INCORPORADO EN EL MODELO DE FIJACIÓN ORDINARIA DE TARIFAS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE REMUNERADO DE PERSONAS, MODALIDAD AUTOBÚS.

EXPEDIENTE OT-588-2018

RESULTANDOS:

I. Mediante la resolución RJD-035-2016 del 25 de febrero de 2016, publicada en el Alcance Digital N°35 en La Gaceta N°46 del 7 de marzo de 2016, la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos aprobó la "Metodología para la Fijación Ordinaria de Tarifas para el Servicio Remunerado de Personas, Modalidad Autobús", estableciendo a la Intendencia de Transporte la obligación de determinar el precio del Sistema Automatizado de Conteo de Pasajeros según lo establecido en la sección 4.11.2.

II. Mediante la resolución RIT-104-2017 dictada a las 16:00 horas del 19 de diciembre de 2017, publicada en el Alcance N°309 en la Gaceta N°242 del 21 de diciembre de 2018, la Intendencia de Transporte fijó la actualización del valor para el Sistema Automatizado de Conteo de Pasajeros (VNSCP) por autobús que fue incorporado en el modelo de fijación ordinaria de tarifas del servicio de transporte remunerado de personas, modalidad autobús, para regir en el año 2018 (expediente administrativo OT-197-2017, folios 521 al 573).

III. Mediante la resolución RJD-060-2018 del 13 de abril de 2018, publicada en el Alcance Digital N°88 en La Gaceta N°77 del 3 de mayo de 2018, la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos aprobó la "Modificación parcial a la "Metodología para la Fijación Ordinaria de Tarifas para el Servicio Remunerado de Personas, Modalidad Autobús" dictada en la Resolución RJD-035-2016.

IV. Mediante oficio IN-0085-IT-2018 del 31 de octubre de 2018 la Intendencia de Transporte emite el Informe preliminar de actualización del precio del Sistema Automatizado de Conteo de Pasajeros (SCP) para el transporte remunerado de personas, modalidad autobús (folios 37 al 201).

V. La Intendencia de Transporte por oficio OF-2011-IT-2018 del 6 de noviembre de 2018, solicitó a la Dirección General de Atención al Usuario la publicación de la convocatoria de la audiencia pública sobre la actualización del precio del Sistema Automatizado de Conteo de Pasajeros (SCP) para el servicio de transporte remunerado de personas, modalidad autobús (folios 222 al 223).

VI. La convocatoria a la audiencia pública se publica en los diarios: La Extra y La Teja del 20 de noviembre de 2018 y en el diario La Gaceta N°212 del 15 de noviembre de 2018 (folio 229).

VII. La audiencia pública se realiza a las 17:15 horas del 17 de diciembre de 2018 en las instalaciones de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), ubicado en Guachipelín de Escazú, Oficentro Multipark, edificio Turrubares y por medio del sistema de videoconferencia en los Tribunales de Justicia de los centros de: Limón, Heredia, Ciudad Quesada, Liberia, Puntarenas, Pérez Zeledón y Cartago.

VIII. El informe de oposiciones y coadyuvancias es remitido en el oficio IN-0101-DGAU-2018 de fecha 19 de diciembre de 2018 por la Dirección General de Atención al Usuario que corre agregado en el expediente.

IX. El acta de la audiencia pública número 64-2018 es emitida bajo el oficio AC-0263-DGAU-2018 de fecha 19 de diciembre de 2018 que corre agregado al expediente.

X. La presente actualización del precio del sistema automatizado de conteo de pasajeros para el servicio de transporte remunerado de personas, modalidad autobús, fue realizado por la Intendencia de Transporte, produciéndose el informe con oficio IN-0119-IT-2018 del 19 de diciembre de 2018, que corre agregado al expediente.

XI. Se han cumplido los plazos y procedimientos las prescripciones de ley.

CONSIDERANDOS:

I. Conviene extraer lo siguiente del informe IN-0119-IT-2018 del 19 de diciembre del 2018, que sirve de base para la presente resolución:

"(…)

1. Actualización del Valor del Sistema Automatizado de Conteo de Pasajeros (VNSCP)

Mediante la resolución RIT-176-2016 del 19 de diciembre de 2016 el Intendente de Transporte resolvió por primera vez la determinación del Valor para el Sistema Automatizado de Conteo de Personas (VNSCP) por autobús, el cual fue incorporado en el Modelo de Fijación Ordinaria de Tarifas del Servicio de Transporte Remunerado de Personas, modalidad autobús. Por otra parte, en la resolución RIT-104-2017 del 19 de diciembre de 2017 se resolvió la actualización del valor para el año 2018, el cual fue incorporado al Modelo de Fijación Ordinaria de Tarifas.

Ahora bien, mediante el presente informe se propone la nueva actualización del cálculo del VNSCP.

1.1. Procedimiento para la actualización del valor del Sistema Automatizado de Conteo de Pasajeros (VNSCP)

Se estableció el siguiente procedimiento, siguiendo las fases para una investigación estadística propuestas en la literatura especializada en el tema (Gómez, 1999):

i. Definición y delimitación del problema de interés
ii. Establecimiento de los propósitos específicos del estudio
iii. Preparación de un plan de trabajo
iv. Construcción y prueba del cuestionario
v. Diseño y selección de la muestra
vi. Preparación y ejecución del trabajo de campo
vii. Procesamiento de la información
viii. Análisis e interpretación de los resultados

El desarrollo de cada una de las fases establecidas se explicará con detalle en los siguientes puntos.

i. Definición y delimitación del problema de interés

En el apartado 4.11.2 de la metodología tarifaria vigente, se establece que:

> "*La determinación del precio del sistema automatizado de conteo de pasajeros para cada unidad de transporte se realizará una vez al año, entre los meses de agosto a octubre y estará a cargo de la IT, bajo la responsabilidad y dirección de un profesional en estadística. Este profesional tendrá a su cargo el planeamiento, coordinación, ejecución y validación de los resultados, de conformidad con las reglas unívocas de la ciencia y la técnica aplicables. El plazo entre agosto y octubre se considera suficiente para poder realizar el estudio que comprendería los valores de estos equipos, en sus etapas de*

diseño, búsqueda y recolección de información, procesamiento de datos y obtención de los resultados finales, de conformidad con la práctica estadística de obtención de información en este tipo de segmento de mercado.

La resolución que dispone la determinación del precio deberá estar publicada en el diario oficial La Gaceta al último día hábil de diciembre de cada año. Este plazo se considera adecuado dado que se habrían obtenido previamente los valores de los precios y costos, quedando entonces un tiempo prudencial para la labor de participación ciudadana y publicación de resultados finales. La IT será la responsable de que se cumpla con estos plazos. El sistema automatizado de conteo de pasajeros para cada unidad de transporte deberá cumplir al menos con las características mínimas de software y hardware que permitan obtener los datos de pasajeros movilizados. Estas características mínimas son las siguientes:

a) *Las descripciones generales de la ruta para la cual se registran los datos de movilización de pasajeros en cada uno de los servicios como lo son: el número de la ruta y descripción del ramal, si aplica; el número de la placa del autobús; el sentido (1-2) o (2-1), si corresponde; la hora de inicio del servicio y la fecha del servicio.*

b) *La cantidad de ascensos y descensos de pasajeros regulares en cada una de las paradas del autobús. En caso que la Aresep lo determine para rutas específicas, la información podrá ser requerida a nivel de ramal y viaje. Se debe indicar la tarifa regular para este tipo de pasajeros.*

c) *La cantidad de ascensos de pasajeros adultos mayores en cada una de las paradas del autobús. En caso de que la Aresep lo determine para rutas específicas, la información podrá ser requerida a nivel de ramal y viaje. Se debe indicar la tarifa y el porcentaje de descuento correspondiente para este tipo de pasajeros.*

d) *Los datos deben ser remitidos diariamente al finalizar el servicio brindado y de manera remota (vía correo electrónico, plataforma en línea, entre otros) a un servidor. Estos datos son los registrados directamente del sistema (sin procesar).*

e) *Los datos procesados (depurados) deben ser remitidos a un servidor el día natural siguiente a la prestación del servicio(...)"*

De manera que todas las acciones que se realizaron para obtener el VNSCP se efectuaron respecto a las delimitaciones presentes en la metodología señalada.

ii. Establecimiento de los propósitos específicos del estudio

El propósito general de este estudio es determinar el Valor del Sistema Automatizado de Conteo de Pasajeros (VNSCP) con las características indicadas en el apartado "4.11.2 Precio del sistema automatizado de conteo de pasajeros" de la "Metodología para la Fijación Ordinaria de Tarifas para el Servicio Remunerado de Personas, Modalidad Autobús".

Para lograr este objetivo se plantearon tres objetivos específicos:

Objetivo específico 1: Determinar las marcas comerciales de SCP presentes en la flota actual de autobuses autorizada por el CTP, así como la cuota o penetración de mercado de cada una de ellas en la flota mencionada.

Objetivo específico 2: Determinar el precio de los SCP con las características indicadas por la metodología de cada uno de los proveedores de SCP establecidos en el objetivo anterior.

Objetivo específico 3: Calcular un único precio del SCP utilizando los resultados obtenidos en los dos objetivos específicos anteriores.

iii. Preparación de un plan de trabajo

Si bien la ejecución de los objetivos específicos 1 y 2 responden a dos procesos de recolección de información diferentes, el segundo se basa en los resultados del primero, por lo que ambos métodos se realizaron de manera consecutiva. Los resultados de los dos primeros objetivos específicos son los insumos necesarios para lograr el cálculo del valor único del SCP planteado en el tercer objetivo 3. A continuación se presentan los planes de trabajo para cumplir cada uno de los tres objetivos planteados.

<u>Plan de trabajo para objetivo específico 1:</u> Determinar las marcas comerciales de SCP presentes en la flota actual de autobuses autorizada por el CTP, así como la cuota o penetración de mercado de cada una de ellas en la flota mencionada.

Para el objetivo específico 1, se planteó realizar un proceso de recolección de información mediante una encuesta por muestreo, en la cual la población corresponde a las 4 804 unidades de autobús autorizadas por el

CTP al 20 de julio del 2018. Mediante el uso de la técnica de muestreo estadístico, se estableció una muestra de autobuses representativo de la población. Se procedió a realizar la búsqueda de esas unidades y a realizar su respectiva observación y registro de la información relacionada con los SCP que posee el autobús. El trabajo consistió en lo siguiente:

- *Una vez establecidas las placas que componen la muestra, se procedió a agruparlas por zonas geográficas cercanas y a asignar grupos de entrevistadores para abarcarlas.*
- *El equipo visitó las oficinas centrales de la empresa a la que pertenece el autobús que posee cada placa seleccionada y coordinó la observación de los SCP presentes en la unidad en cuestión en el momento más cercano posible.*
- *El equipo observó la unidad, registró la información en el formulario establecido y tomó fotografías y videos del autobús y de los SCP presentes en él.*

El equipo de recolección de información estuvo conformado por 11 funcionarios de la Intendencia de Transportes debidamente capacitados por los encargados del proceso (ver Informe 1997-IT-2018: Informe de Capacitación y Prueba Piloto del Operativo de Campo para la Determinación de la Penetración de Mercado de las marcas comerciales del Sistema Automatizado de Conteo de Pasajeros).

Para estos fines, se utilizó el Formulario de Recopilación de Información validado y empleado en la determinación del precio del SCP del año anterior. De igual manera, se volvió a validar mediante la Prueba Piloto previa (ver Informe 1997-IT-2018: Informe de Capacitación y Prueba Piloto del Operativo de Campo para la Determinación de la Penetración de Mercado de las marcas comerciales del Sistema Automatizado de Conteo de Pasajeros).

El trabajo de campo se realizó entre el 20 de agosto del 2018 y el 4 de octubre del 2018. De este proceso, se obtuvieron dos resultados principales:

- *El listado de empresas proveedoras de SCP presentes dentro de la flota autorizada. Esta lista formó el marco para cumplir el objetivo siguiente, pues a estas empresas se les consultó por los precios del SCP.*
- *El nivel de penetración de mercado de cada una de las empresas proveedoras de SCP identificadas. Esta información se utilizó para realizar el cálculo final del precio único del SCP.*

Plan de trabajo para objetivo 2: Determinar el precio de los SCP con las características indicadas por la metodología de cada uno de los proveedores de SCP establecidos en el objetivo anterior.

Una vez que se tuvo el primer resultado del objetivo 1, se contó con el listado de empresas proveedoras de SCP presentes en la flota autorizada de autobuses. Este listado fue la base para la realización del segundo trabajo de campo, el cual cubrió el objetivo 2. Este trabajo de campo consistió en una consulta sobre los precios vía correo electrónico con seguimiento telefónico a las empresas proveedoras de SCP identificadas en el primer trabajo de campo.

Para estos fines, se utilizó el Formulario de Recopilación de Información validado y empleado en la determinación del precio del SCP de los dos años anteriores. El formulario se envió por correo electrónico institucional y se estableció un tiempo prudencial para la remisión de los resultados, para cumplir con los plazos establecidos en la metodología (RJD-035-2016 y RJD-060-2018).

Como mecanismo de aseguramiento de recepción de la mayor cantidad de respuestas, los esfuerzos de la Intendencia se encausaron a dar seguimiento a las solicitudes mediante llamadas telefónicas: se aseguró la recepción de la consulta, se contactó a las empresas proveedoras en diferentes momentos para recordar los plazos y en un momento cercano a la fecha límite de recepción se reenviaron los correos electrónicos con las solicitudes.

El producto final de este objetivo consiste en obtener el precio de los sistemas de SCP con las características expresadas en la metodología para cada una de las empresas proveedoras de SCP que se lograron identificar en el objetivo 1.

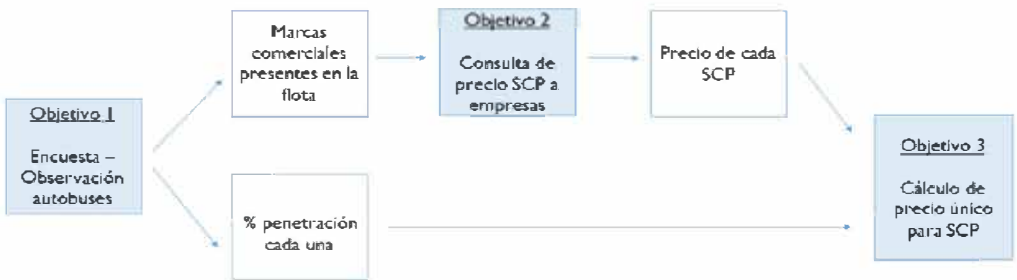
Plan de trabajo objetivo 3: Calcular un único precio de los SCP utilizando los resultados obtenidos en los dos objetivos específicos anteriores.

El objetivo 3 consiste en calcular un único precio de los SCP utilizando los resultados obtenidos en los dos objetivos específicos anteriores. El procedimiento implica calcular un promedio ponderado de los precios del SCP reportados por las empresas proveedoras consultadas (objetivo 2) respecto al porcentaje de cuota o penetración de mercado de cada una de ellas en la flota autorizada de autobuses (objetivo 1).

Como las empresas ofrecen un precio para tarifa única y otra para tarifa fraccionada, se realizó una ponderación basada en el porcentaje de la flota que posee tarifa única y fraccionada. De esta manera se cumple el objetivo final que es establecer un precio único para los SCP.

El flujo de la información del plan de trabajo se presenta en el siguiente gráfico:

Diagrama 1. Flujo de información de los objetivos planteados



Cronograma de trabajo:

Para alcanzar los objetivos establecidos, se planteó el siguiente cronograma de trabajo:

Cuadro 1. Cronograma de trabajo

Objetivo 1.3.1. Determinar las marcas comerciales de SCP presentes actualmente en la flota de autobuses autorizada por el CTP, así como la penetración de mercado de cada una de ellas en la flota mencionada.				
1	*Establecimiento del marco muestral*	*2 días*	*09/08/2018*	*10/08/2018*
2	*Diseño muestral y selección*	*3 días*	*13/08/2018*	*15/08/2018*
3	*Elaboración de formulario para registro de marcas comerciales*	*2 días*	*15/08/2018*	*16/08/2018*
4	*Prueba Piloto*	*1 días*	*17/08/2018*	*17/08/2018*
5	*Capacitación de personal*	*3 día*	*20/08/2018*	*22/08/2018*
6	*Recolección de la información*	*29 días*	*24/08/2018*	*04/10/2018*
7	*Revisión y digitación de la información recolectada*	*29 días*	*03/08/2018*	*11/10/2018*
8	*Elaboración de oficios para remisión de consulta a operadores con placas de autobús con marca no visible*	*4 días*	*05/10/2018*	*10/10/2018*
9	*Seguimiento y recepción de respuestas de consulta*	*9 días*	*05/10/2018*	*17/10/2018*
10	*Procesamiento de la información recibida*	*2 días*	*17/10/2018*	*19/10/2018*

Objetivo 1.3.2. Actualización el precio de los SCP con las características indicadas por la metodología de cada una de los proveedores de SCP establecidas en el objetivo anterior.				
1	*Corroborar la información de los contactos de proveedores*	*2 días*	*11/10/2018*	*12/10/2018*
2	*Actualización y adición de variables al formulario*	*2 días*	*15/10/2018*	*16/10/2018*
3	*Elaboración de oficios para remisión de consulta del precio a proveedores de SCP*	*2 días*	*17/10/2018*	*19/10/2018*
4	*Seguimiento y recepción de respuestas de consulta*	*5 días*	*22/10/2018*	*26/10/2018*
5	*Procesamiento de la información*	*5 días*	*22/10/2018*	*26/10/2018*

Objetivo 1.3.3. Obtener un único precio de los SCP utilizando los resultados obtenidos en los dos objetivos específicos anteriores.				
1	*Calcular el precio del SCP con la información solicitada.*	*5 días*	*25/10/2018*	*30/10/2018*

iv. Construcción y prueba del formulario

El Área de Información Estadística de la Intendencia de Transporte se dio a la tarea de construir el formulario para el operativo de observación y registro. Este formulario fue validado mediante la prueba piloto realizada el 17 de agosto del 2018, los detalles de esta prueba se pueden apreciar en el Informe 1997-IT-2018: Informe de Capacitación y Prueba Piloto del Operativo de Campo para la Determinación de la Penetración de Mercado de las marcas comerciales del Sistema Automatizado de Conteo de Pasajeros.

v. Diseño y selección de la muestra

Se estableció un muestreo probabilístico sistemático con inicio aleatorio, el cual consiste en tomar cada unidad k-ésima de muestreo después de un arranque aleatorio. El intervalo k divide a la población en n zonas de k unidades cada una. Dentro de cada zona se selecciona una unidad, que ocupa la misma localización en todas las zonas. Puesto que el primer número se selecciona al azar de 1 a k, cada unidad recibe la misma probabilidad 1/k de selección. Tal y como propone Kish, "la razón principal por la que se utiliza el muestreo sistemático es que su aplicación es fácil, a prueba de errores y flexible" (Kish, 1972).

La población de interés se define como: la flota de autobuses autorizados que establece el Consejo de Transporte Público al momento del cálculo de la muestra. Esta población se compone de 4804 autobuses. Al archivo con

el listado de autobuses, identificados mediante la placa, se le conoce como "marco muestral".

Se utilizan las fórmulas del tamaño de la muestra para el caso de las proporciones y para población finita, tal y como se muestra a continuación:

$$n_0 = \frac{(Z_{\alpha/2})^2 \, p \, (1-p)}{d^2}$$

$$n = \frac{n_0}{\left(1 + \frac{n_0}{N}\right)}$$

Donde:

N: tamaño de la población
Z_a: valor de Z para el riesgo asumido, asociado a un nivel de confianza del 95%
p: valor de la proporción, asociado al estudio del año pasado (0,85)
d: error máximo permisible (0,10)

El valor p representa la proporción de la variable que se está investigando. Para asignar este dato, la estadística recomienda en primera instancia utilizar un valor p extraído de estudios anteriores. En vista que la IT desarrolló este mismo estudio el año pasado, se utilizó el valor de p de 0,85 obtenido en esa oportunidad.

Se asume un 95% de confianza, un error máximo permisible del 10% y siendo la población de 4 804, el tamaño de muestra ajustado para poblaciones finitas se estableció en 49 autobuses.

El tamaño de muestra final se establece en 51 unidades de autobús, pues se realiza una provisión del 15% para cubrir posibles casos de no respuesta.

Para la selección de la muestra, se ordenó el marco muestral, se estableció el valor k de selección y mediante la selección sistemática se establecieron los 51 autobuses.

En el archivo adjunto correspondiente al Anexo 1, se presenta el Marco Muestral, los cálculos del tamaño de la muestra, la selección k y se consignan las placas de los autobuses que conforman la muestra.

vi. Preparación y ejecución del trabajo de campo

La preparación y ejecución del trabajo de campo consistió en cuatro procesos principales: capacitación del personal entrevistador, organización del personal en grupos y zonas de cobertura, recolección de la información, recepción y digitación de la información.

Todos los entrevistadores fueron personal funcionario de planta de la Intendencia de Transporte de la Aresep. La capacitación consistió en una presentación con el contenido establecido como necesario para que el personal realice adecuadamente el trabajo. Los detalles del personal capacitado, fechas, lugares y temas desarrollados se pueden observar en el informe 1997-IT-2018 "Informe de Capacitación y Prueba Piloto del Operativo de Campo para la Determinación de la Penetración de Mercado de las marcas comerciales del Sistema Automatizado de Conteo de Pasajeros".

Para poder abordar las dimensiones geográficas de la muestra, se establecieron grupos de trabajo; cada grupo de trabajo consistió en un entrevistador y un chofer funcionario institucional y se transportaron en un vehículo institucional de la Aresep. Tanto los funcionarios como los vehículos se encontraban debidamente identificados. Se asignaron hojas de ruta de trabajo y se procedió a visitar una a una las empresas a las que pertenecían los autobuses con las placas seleccionadas.

El trabajo consistió en visitar el plantel principal o las oficinas centrales, de la empresa titular de cada placa seleccionada y coordinar con los encargados la observación. Una vez localizada la unidad de autobús correspondiente, los entrevistadores realizaron la observación y registro en el formulario correspondiente. La instrucción consistió en registrar la presencia o ausencia de sistemas automatizados de conteo de pasajeros en la unidad. De haber SCP presentes, el entrevistador registró la marca comercial visible de ella. En el mismo momento se realizó la toma de fotos del autobús y su placa, de los sistemas de barras (presentes o ausentes) y, en la medida de lo posible según las condiciones en el momento, el video con todos los componentes. Parte del trabajo de control de calidad en el flujo de la información consistió en comprobar que lo registrado por el funcionario en el Formulario coincida con el registro visual presentado.

Cada grupo de trabajo estuvo encargado de entregar los formularios completos y las fotos a una persona del equipo de trabajo, quien se encargó de la revisión, digitación y archivo de los resultados. Los formularios físicos completos se encuentran en el Anexo 2. Los archivos que contienen las fotos y videos de cada unidad observada se encuentran en el Anexo 3.

vii. Procesamiento de la información:

Resultados de la recopilación de la información del Objetivo 1

El procesamiento de la información consistió, en una primera etapa, en asignar una sola marca comercial a cada autobús, bajo los siguientes criterios:

- *En los casos en los que todos los componentes de los SCP de una unidad pertenezcan a la misma marca comercial, se asigna tal marca.*
- *A los casos en los que coexisten diferentes marcas comerciales en los componentes de una misma unidad se les asignó la etiqueta "Combinación".*
- *Cuando se determinó que sí hay SCP, pero no fue posible observar la marca comercial, se asignó la etiqueta "No visible".*
- *Cuando una unidad de autobús no tiene ningún SCP instalado, se asignó la etiqueta "Sin SCP".*

La base de datos que contiene los datos recolectados se presenta en el Anexo 4. Base de Datos de Resultados Sistema de Conteo de Pasajeros. El resumen de los resultados de esta primera etapa del procesamiento, se presentan a continuación:

Cuadro 2. Resultados de la observación de marcas comerciales de SCP en la flota

Marca	Cantidad de autobuses
Optocontrol	23
No visible	10
Combinación	6
BEA	4
Busmatick	2
Accutrac	1
Sin SCP	5
Total	51

Las cinco unidades de autobuses en las cuales se determinó que no poseen ningún Sistema Automatizado de Conteo de Pasajeros se excluyen de los análisis pues no proporcionan información que contribuya al alcance de los objetivos planteados. Los resultados sin estas unidades se aprecian en el Cuadro 3.

Cuadro 3. Resultados de la observación de marcas comerciales de SCP en la flota, excluyendo las unidades sin SCP

Marca	Cantidad de autobuses
Optocontrol	*23*
No visible	*10*
Combinación	*6*
BEA	*4*
Busmatick	*2*
Accutrac	*1*
Total	*46*

✓ *Consulta a operadoras por marcas comerciales no visibles:*

Como se puede observar el Cuadro 3 anterior, los resultados de campo evidenciaron que existen diez unidades de autobuses en las cuales se pudo observar la presencia de SCP, pero no se pudo identificar la marca comercial de las mismas. Esta situación se pudo dar por diversas razones, como que los aparatos no tuvieran ningún identificador de la marca, o que el identificador no fuera visible por desgaste. Las diez unidades con esta situación y sus respectivas operadoras titulares se presentan en el Cuadro 4, las fotos y videos que respaldan estos resultados se encuentran en el Anexo 3.

La Intendencia de Transporte envió la consulta a cada una de las operadoras sobre la marca de los SCP que no se pudieron observar. Para todos estos casos, se recibió la información en tiempo y forma y se incluyeron los datos tal y como lo indicó la operadora en su respuesta. Las consultas y respuestas se pueden apreciar en el Anexo 5.

Cuadro 4. Autobuses en los cuales se pudo evidenciar la existencia de SCP, pero no se pudo observar su marca comercial

Placa	Operadora	Recepción de respuesta en tiempo y forma
SJB11580	*Empresa Guadalupe Limitada*	*Sí*
AB07269	*Transportes Unidos Alajuelenses*	*Sí*
AB06301	*Transportes Unidos Alajuelenses*	*Sí*
AB07499	*Transportes Unidos de Alajuela, Grecia y Naranjo*	*Sí*
SJB16205	*Metrocoop R.L.*	*Sí*
SJB13650	*Autortansportes Desamparados S.A.*	*Sí*

Placa	Operadora	Recepción de respuesta en tiempo y forma
SJB12924	Transportes San Gabriel de Aserrí	Sí
SJB10030	La Tapachula	Sí
SJB13759	La Tapachula	Sí
SJB12183	Rutas 51 y 53 S.A.	Sí

Una vez recibida la información de las operadoras, se incluyó en la base de datos (ver Anexo 4), se volvió a procesar y se obtuvieron los resultados observados en el Cuadro 5 relacionados con la penetración de mercado de las marcas comerciales de SCP.

Cuadro 5. Resultados de la observación de marcas comerciales de SCP en la flota, incluyendo las aclaraciones de las operadoras con SCP no visibles

Marca	Cantidad de autobuses
Optocontrol	26
Combinación	9
BEA	4
Accutrac	2
Busmatick	2
Eficiencias Tecnológicas	2
Hella	1
Total	**46**

✓ *Unidades clasificadas como "combinación" de varias marcas comerciales:*

Según los procesamientos anteriores, se contabilizaron nueve unidades que combinan dos marcas comerciales de SCP en la misma unidad. Se procedió a analizar la información referente a esta situación y se obtuvieron los resultados observados en el cuadro 6 para estos nueve casos.

Cuadro 6. Resultados de la observación de SCP en la flota para los casos en las que se combinan dos marcas comerciales en el mismo autobús.

Marcas	Cantidad de autobuses
BEA-Optocontrol	5
Accutrac-Optocontrol	2
BEA - Tectransa	1

Marcas	Cantidad de autobuses
Eurotech-Optocontrol	1
Total	**9**

✓ Marcas comerciales de SCP presentes en la flota de autobuses y penetración de mercado de cada una de ellas:

Cuando se excluyen las unidades sin SCP, se toman en cuenta las aclaraciones ofrecidas por las operadoras con SCP con marcas no visibles y se considera la combinación de marcas comerciales en una misma unidad de autobús, se tiene la siguiente estructura que resume las marcas comerciales presentes y su respectiva penetración en el mercado de operadoras:

Cuadro 7. Resultados de la observación de SCP en la flota

Marcas	Cantidad de autobuses
Optocontrol	26
BEA	4
BEA-Optocontrol	5
Accutrac	2
Accutrac-Optocontrol	2
Busmatick	2
Eficiencias Tecnológicas	2
BEA - Tectransa	1
Eurotech-Optocontrol	1
Hella	1
Total	**46**

Resultados de la recopilación de la información del Objetivo 2:

Considerando los resultados del objetivo 1, se procedió a realizar la consulta sobre el precio de los SCP a las proveedoras que se pudieron identificar.

✓ *Actualización del formulario para determinar el precio de los SCP con las características indicadas por la metodología de los proveedores de SCP:*

Se actualizó el formulario aplicado el año pasado para estos fines. En ese momento se invitó a empresas proveedoras de SCP a una sesión informativa en la cual se probó y validó el "Formulario de recopilación de información". Su buen funcionamiento en el operativo del año 2016 hace que se decida mantener el formulario sin mayores cambios, aprovechando,

además, que la mayoría de las empresas proveedoras de SCP ya lo conocen.

Con respecto al año pasado, en el formulario se agregaron las siguientes variables a los requerimientos de formato de información: código de ramal, código de fraccionamiento y código de parada. Se incluyeron por consistencia con las características del módulo de recepción de información del SCP que se encontraba en las etapas finales de su proceso de implementación en la Autoridad Reguladora. Además, se actualizó el apartado de Definiciones con respecto a tales variables incluidas.

El listado de proveedoras consultadas es el siguiente:

Cuadro 8. Empresas proveedoras presentes en la flota

Empresas proveedoras de SCP
Optocontrol JBIF S.A.
Idear Electronica de Costa Rica S.A. - Sistema Bea
Contadores electrónicos AT S.A. - Sistema Accutrac
Busmatick Hispanica, SLU
Eficiencias Tecnológicas S.A.
Tectransa
Eurotech North America
Hella-GoPass

Recolección de la información sobre el precio de los SCP:

Se procedió a enviar la solicitud de llenado del Formulario, mediante oficio, a las empresas identificadas en el objetivo 1 como proveedoras de SCP (ver Anexo 6).

De la lista de empresas mencionada anteriormente, seis de ellos remitieron la información solicitada y dos empresas no enviaron dicho formulario (Ver Anexos 7 y 8).
La Intendencia de Transportes realizó varios esfuerzos para obtener la respuesta de estas cuatro empresas que no aportaron la información.

Las empresas proveedoras que remitieron la información solicitada son las siguientes:

Cuadro 9. Empresas proveedoras presentes en la flota que aportaron información sobre el costo de los SCP.

Empresas proveedoras de SCP
Optocontrol JBIF S.A.
Idear Electronica de Costa Rica S.A. - Sistema BEA
Contadores electrónicos AT S.A. - Sistema Accutrac
Busmatick Hispanica, SLU
Eficiencias Tecnológicas S.A.
Hella-GoPass

De acuerdo con lo solicitado en el "Formulario de recopilación de la información", a continuación, se detalla la cantidad de proveedores que indicaron que el SCP que distribuyen tiene la capacidad de capturar los requerimientos de información para cada pasajero (que asciende o desciende) en cada parada, indicados en la metodología vigente (4.11.2 de la RJD-035-2016 y su modificación establecida en la resolución RJD-060-2018):

Cuadro 10. Cantidad de Proveedores con sistema SCP que tienen la capacidad de capturar los requerimientos de información establecidos en la metodología vigente para cada pasajero (que asciende o desciende) en cada parada

Datos del Sistema	*Cantidad de Proveedores*
Código de Ruta	*6*
Descripción de la Ruta	*6*
Código Ramal	*6*
Descripción del Ramal	*6*
Placa	*6*
Código del Sentido	*6*
Descripción del Sentido	*6*
Código de la Parada	*6*
Descripción de la Parada	*6*
Fecha	*6*
Hora de Inicio del Servicio	*6*
Hora de Registro	*6*
Ascenso del Pasajero Regular	*6*
Descenso del Pasajero Regular	*6*
Ascenso del Adulto Mayor	*6*
Generación de reporte igual al mostrado en la pestaña "EJEMPLO DE REPORTE"	*6*

Las seis empresas indicaron que sus sistemas de conteo de pasajeros, tienen la capacidad de sincronización de datos sin procesar a un servidor diariamente, al finalizar el servicio brindado (vía correo electrónico, plataforma en línea, entre otros). Una empresa declaró no tener la capacidad de sincronización de datos procesados a un servidor al día natural siguiente a la prestación del servicio (vía correo electrónico, plataforma en línea, entre otros), los otros cinco sí.

De la aplicación del "Formulario de recopilación de la información" se obtuvieron los precios mensuales por autobús indicados por los diferentes proveedores de sistemas automatizados de conteo de pasajeros, haciendo una distinción entre el precio de los sistemas para rutas con tarifa única y el precio de sistemas para rutas con tarifa fraccionada. Estos precios consideran tanto la capacidad de brindar la información establecida en los requerimientos mínimos de la metodología como una vida útil de cinco años del sistema y sin valor de rescate, los cuales se muestran a continuación:

viii. Análisis e interpretación de los resultados: Objetivo 3.

El procedimiento para obtener un precio único de SCP implica calcular un promedio ponderado de los precios del SCP reportados por las empresas proveedoras consultadas (objetivo 1.3.2) respecto al porcentaje de penetración de mercado de cada una de ellas en la flota autorizada de autobuses (objetivo 1.3.1).

✓ *Cálculo del precio único para los SCP*

Para la asignación de los precios de SCP se utilizaron los siguientes criterios:

- *A las unidades de autobús que fueran clasificadas en una marca específica que indicó el precio de sus SCP se les asigna el precio indicado por la marca específica.*
- *A las unidades de autobús que fueran clasificadas en una marca específica, pero la empresa proveedora no haya indicado el precio de sus SCP, se excluyeron del cálculo.*
- *A las unidades de autobús que fueran clasificadas como "combinación" de dos marcas, y ambas marcas indicaran el precio de sus SCP, se le asignó el promedio simple de ambos precios.*
- *A las unidades de autobús que fueran clasificadas como "combinación" de dos marcas, y solo una de ellas indicó el precio de su SCP, se le asignó el precio indicado por la empresa proveedora de SCP que representa a la marca comercial que sí indicó el precio.*

En el cuadro 11 se explica el detalle de la asignación de precios de SCP según la clasificación de marcas.

Cuadro 11. Asignación de precios de SCP para los casos observados

Proveedor	Detalle de precio asignado	Tarifa única	Tarifa fraccionada
Optocontrol	Precio indicado por Optocontrol	53.250,0	65.130,0
BEA	Precio indicado por BEA	277.619,2	284.216,7
BEA-Optocontrol	Promedio simple de los precios indicados por BEA y Optocontrol	165.434,6	174.673,4
Accutrac	Precio indicado por Accutrac	130.200,0	130.200,0
Accutrac-Optocontrol	Promedio simple de los precios indicados por Accutrac y Optocontrol	91.725,0	97.665,0
Busmatick	Precio indicado por Busmatick	97.793,0	97.793,0
Eficiencias Tecnológicas	Precio indicado por Eficiencias Tecnológicas	282.500,0	-
BEA - Tectransa	Se asigna precio de BEA, Tectransa no presentó información	277.619,2	284.216,7
Eurotech-Optocontrol	Se asigna precio de Optocontrol, Eurotech no presentó información	53.250,0	65.130,0
Hella (GoPass)	Precio indicado por Hella (GoPass)	78.000,0	78.000,0

De esta manera, en el siguiente cuadro se detalla el porcentaje de penetración de acuerdo a la clasificación de la marca comercial de SCP.

Cuadro 12. Porcentaje de penetración de SCP para los casos observados con marca de SCP asociada

Proveedor	Cantidad de buses tarifa única	Cantidad de buses tarifa fraccionada	% Única	% Fraccionada
Optocontrol	27	27	58,7	61,4
BEA	5	5	10,9	11,4
BEA-Optocontrol	5	5	10,9	11,4
Accutrac	2	2	4,3	4,5
Accutrac-Optocontrol	2	2	4,3	4,5
Busmatick	2	2	4,3	4,5
Eficiencias Tecnológicas	2	-	4,3	-
Hella (GoPass)	1	1	2,2	2,3
Total	**46**	**44**	**100,0**	**100,0**

Contando con la información anterior respecto a la participación de los proveedores en el mercado de la población de estudio, se logra obtener la proporción del precio del SCP por autobús según el tipo de tarifa de la ruta, como se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro 13. Precios ponderados por cantidad de flota reportada con el SCP

Proveedor	Proporción del precio mensual por autobús para rutas con tarifa única	Proporción del precio mensual por autobús para rutas con tarifa fraccionada
Optocontrol	31 255	39 966
BEA	30 176	32 297
BEA-Optocontrol	17 982	19 849
Accutrac	5 661	5 918
Accutrac-Optocontrol	3 988	4 439
Busmatick	4 252	4 445
Eficiencias Tecnológicas	12 283	-
Hella (GoPass)	1 696	1 773
Total	**107 293**	**108 688**

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, el precio ponderado para el caso de las rutas con tarifa única es de 107 293 colones y para el caso de las rutas con tarifa fraccionada es de 108 688 colones.

Para el cálculo del promedio ponderado del costo del Sistema Automatizado de Conteo de Pasajeros (SCP) que considere ambos tipos de tarifa (única y fraccionada), se debe buscar un factor de ponderación entre ambos tipos de tarifa. Debido a que la unidad base sobre el cual se calcula el costo requerido de este sistema es el autobús, se consideró que para efectos de que el cálculo sea representativo, la ponderación debe ser sobre la cantidad de unidades asignadas a rutas con tarifa única y fraccionada en la muestra.

Se consideró el pliego tarifario en su versión del 13 de octubre del 2018, publicado en la página web de la institución, archivo a partir del cual se determinó para cada ruta si corresponde a tarifa única o tarifa fraccionada, de acuerdo precisamente a la composición y monto de las tarifas para los ramales y/o fraccionamientos de la ruta. En este caso si no varía el monto se considera tarifa única y si hay variación se considera como tarifa fraccionada. Con esta información se procedió a realizar el cruce de

información entre ambas bases de datos, con lo que resulta la siguiente distribución:

Cuadro 14. Distribución de la muestra por Tipo de Tarifa

Tipo de tarifa por ruta	Cantidad de autobuses	Porcentaje
Fraccionada	26	51,0
Única	25	49,0
Total	51	

La metodología vigente permite únicamente el ingreso de un solo valor dentro de las fórmulas establecidas para el reconocimiento de este costo, por lo que se debe establecer un único precio. De esta manera, se procede a ponderar el precio de acuerdo con la flota autorizada diferenciada entre la flota utilizada en rutas de tarifa única y rutas de tarifa fraccionada.

Tomando la información del cuadro 13 y 14 se puede calcular el promedio ponderado del precio mensual por autobús como sigue:

$$(1\ 07\ 293\ x\ 49{,}0\%) + (\ 108\ 688\ x\ 51{,}0\%) =\ \ 108\ 004$$

Como se indicó anteriormente, este precio ponderado mensual por autobús corresponde al sistema de conteo de pasajeros que cumplen con los requerimientos mínimos de información establecidos en la metodología y considerando una vida útil de 5 años (60 meses) y sin valor de rescate; de manera que el valor del sistema automatizado de conteo de pasajeros (VNSCP), corresponde al precio mensual por autobús durante su vida útil, de la siguiente manera:

$$VNSCP = (108\ 004) \times (60) =\ 6\ 480\ 255$$

Por lo que el valor del sistema automatizado de conteo de pasajeros (VNSCP) por autobús se define como:

Valor del sistema automatizado de conteo de pasajeros por (VNSCP)	*¢6 480 255 / autobús*

✓ ***Errores de muestreo***

Para calcular los errores de muestreo se utilizó la fórmula para el caso de una proporción, la cual se describe como:

Variancia de una proporción $s_p^2 = var(p) = (1 - f)\frac{p(1 - p)}{n - 1}$

Donde:

s_p^2 *: variancia de una proporción*
n : tamaño de la muestra (51 autobuses)
N : es el tamaño de la población (4 804 autobuses)
f: : fracción de muestreo, corresponde a $\frac{n}{N}$
p : es la proporción a estimar

Al sustituir los valores obtenidos mediante el muestreo en la fórmula anteriormente mencionada, se obtiene que la varianza corresponde a 0,0038. Al calcular la raíz cuadrada de la varianza se obtiene la desviación estándar, la cual corresponde a 0,062 para el caso en cuestión. Este resultado indica que el error en la proporción calculada asociada al hecho de obtener una muestra para llegar la inferencia de los resultados poblacionales es del 0,062.

✓ ***Variación del precio del SCP***

A continuación se presenta la variación del precio del SCP vigente y la presente propuesta de precio:

Precio Vigente (RIT-104-2017)	*Precio Propuesto*	*Variación Absoluta*	*Variación Porcentual*
3 979 202	*6 480 255*	*2 501 053*	*62,9%*

El resultado obtenido para este estudio implica un aumento de 62,9% en el precio del SCP.

2. Recomendación

Actualizar el valor del precio del Sistema Automatizado de Conteo de Pasajeros (VNSCP) a 6.480.255 colones por autobús.

(…)"

II. AUDIENCIA PÚBLICA

Del informe de oposiciones y coadyuvancias, establecidas en el oficio IN-0101-DGAU-2018 del 19 de diciembre de 2018 de la Dirección General de Atención al Usuario (DGAU) y del acta de audiencia pública 64-2018 (oficio AC-0263-DGAU-2018), se recibieron las siguientes oposiciones:

I. Posiciones admitidas

Primera Oposición:
Asociación Cámara Nacional de Transportes (3-002-061193); Asociación Cámara de Autobuses del Atlántico (3-002-162412); y Asociación Cámara de Autobuseros de Heredia (3-002-104900):

Primer argumento: El valor reconocido no corresponde a un "sistema".

Se argumenta que el reconocimiento del valor del SCP se aplica a los componentes del autobús, siendo este la unidad de muestreo, sin considerar lo que sucede fuera del mismo, que es necesario para que los componentes funcionen y se obtengan los datos. Señalan además que en la consideración se omiten elementos esenciales, como la recolección de datos y recaudación de dinero, servidores, computadores, papelería, o el personal técnico–operativo.

El reconocimiento del costo de un sistema de control no debe limitarse únicamente al costo de los dispositivos o barras, ya que involucra otros aspectos operativos, tarifarios, administrativos, logísticos, tecnológicos y de seguridad. En tal sentido, todo sistema de control debe garantizar condiciones de diseño y funcionamiento que permitan la integración de otros sistemas complementarios como lectores o validadores de cédulas, cámaras de seguridad, impresoras de boletos, dispositivos de descarga de información, sistema de control de pago electrónico.

Sobre los costos asociados al realizar la implementación de un sistema automatizado de conto, debe tomar en cuenta esta Autoridad Reguladora que dicha información no se compone solamente de los equipos que se están cotizando, sino que depende de una serie de procedimientos que conllevan personal capacitado para la operación y mantenimiento de los equipos.

El tema de la seguridad debe estar soportado por una infraestructura tecnológica fiable que asegure su funcionamiento estable, y por ende debe tomarse en cuenta el sistema de conteo de pasajeros de manera integral.

El sistema Automatizado de Conteo de Pasajeros, estaría compuesto únicamente por los dispositivos que se encuentran dentro de cada autobús según lo definido por cada proveedor, toda vez que nunca se han salido del autobús como unidad de muestra. Los equipos que se instalan en cada autobús no son capaces de cumplir con las características mínimas de software y hardware del ítem 4.11.2 de la metodología, por lo que no es un "sistema".

El SCP, es un complejo sistema de componentes de hardware y software, pero no limitados al autobús (en el cual únicamente se tienen los sistemas receptores de datos y las previstas para su descarga o transmisión), también incluye todo lo relacionado con lo necesario para que esa información se transmita al exterior como las oficinas de la empresa con equipos (hardware) y software adicional para la recepción y procesamiento de la información, además de lo necesario para que la información sea trasmitida a terceros.

Se indica un compendio general de aspectos no contemplados en la determinación del valor y costos del SCP, agrupados por recurso humano y *hardware* y *software* no reconocidos.

El valor del SCP que determinará la Intendencia de Transporte como "Órgano Técnico Aplicador" no refleja el valor real del verdadero sistema SCP, ya que no contempla más que lo componentes que portan los autobuses, los cuales no son todos y son por sí mismos insuficientes para funcionar en conjunto, de forma coordinada y ordenada para cumplir con los objetivos de la metodología.

Segundo Argumento: **No se reconoce el recurso humano asociado al SCP**

Se argumenta que los SCP requieren el reconocimiento del recurso humano para el mantenimiento, tanto del *hardware* como del *software*, así como de las personas intervienen en una cadena de tareas relacionadas con las etapas que se dan desde la captación del "dato" hasta su transmisión definitiva, incluyendo el procesamiento de que habla el punto 4.11.2 de la metodología en su punto e).

Sobre el recurso humano, se hace referencia a la RIT-048-2018, sobre los hallazgos realizados durante el proceso de implementación del MCSCP de la realidad de la operación de los SCP.

Además se indica que la Aresep, alega el reconocimiento del personal operativo del SCP en el ítem de "personal administrativo" de la metodología, a pesar de que cuando se diseñó el modelo econométrico existían mecanismos de tipo analógicos para controlar pasajeros, por lo que este rubro no está reconociendo

la inversión y costos de un SCP como el actual, por lo que se requiere una actualización de la metodología (coeficiente del "costo del personal administrativo") además del recurso humano.

Tercer Argumento: **No se cumple con el Principio del servicio al costo**

La determinación del valor de SCP no cumple con el principio de servicio al costo, como consecuencia de la insuficiencia del valor tampoco se otorga una adecuada rentabilidad sobre ellos, por lo que no se puede brindar equilibrio financiero

Dado que no se cumplen los fines legales de este acto, ni del acto tarifario en el cual se usa este dato, si además está prohibido realizar fijaciones que no brinden equilibrio económico (artículo 31 de la Ley 7593) y si la Intendencia deberá (como Órgano Técnico Aplicador) fijar tarifas particulares bajo esta condición, solicitan que la Intendencia se pronuncie sobre los puntos cuestionados avalando que la metodología que ha de aplicar esta correcta en todo lo relacionado con el reconocimiento de costos del SCP conforme a la normativa o enviar sus objeciones a la Junta Directiva o la entidad encargada del diseño de la metodología relacionados con los problemas de la metodología en lo concerniente con los SCP que le impiden alcanzar los fines legales de los actos de esa Intendencia.

Segunda Oposición
Jorge Sanarrucia Aragón (Consejero del Usuario):

1) Sobre la muestra utilizada: el tamaño de la muestra calculada debe tomar en cuenta el objetivo específico número 2, se insta a la IT para que se incorpore dentro del procedimiento metodológico la utilización de la fórmula para establecer el tamaño muestra para el objetivo específico 1 y otra para el 2; y que se aplique la muestra de mayor tamaño entre ellas.
2) La ponderación por tipo de tarifa (única y fraccionada) debe utilizar como factores de ponderación los que se obtengan de la flota (población de interés)
3) El error máximo permisible de 0,10 se considera muy elevado y se recomienda usar un valor menor para el cálculo de la muestra.
4) El valor *p* utilizado para el cálculo de la muestra incluyen el conteo de los autobuses identificados con marcas de SCP que no presentaron cotización (Eficiencias Tecnológicas y Registel), lo cual pudo alterar el valor *p* utilizado.
5) Preocupa a la Consejería del Usuario las importantes diferencias entre los precios reportados en 2017 y 2018 por las empresas proveedoras de SCP.

Tercera Oposición
Jorge Masis Arce:

El opositor menciona que aunque no está en desacuerdo con la implementación de SCP en las unidades de autobús, considera que para las operadoras rurales y pequeñas, puede ser complejo instalar estos sistemas. De manera que considera conveniente que sea la misma Aresep la que instale los SCP en este tipo de operadoras. Él propone que haya una clasificación de los operadores que facilite este proceso.

II. Posiciones no admitidas

a) Asociación Cámara de Transportistas de San José (3-002-099688), no admitida mediante resolución RE-0482-DGAU-2018.

b) Asociación Cámara Nacional de Autobuseros (3-002-103917), no admitida mediante resolución RE-0483-DGAU-2018.

Se procede a dar respuesta a las manifestaciones esbozadas por los opositores en los siguientes términos:

Asociación Cámara Nacional de Transportes (3-002-061193); Asociación Cámara de Autobuses del Atlántico (3-002-162412); y Asociación Cámara de Autobuseros de Heredia (3-002-104900):

Primer argumento: El valor reconocido no corresponde a un "sistema".

Es importante señalar que la Intendencia de Transporte procedió a calcular la estimación del precio promedio del Sistema Automatizado de Conteo de Pasajeros (SCP), según las características mínimas establecidas y en estricto apego a lo estipulado en la metodología tarifaria vigente (RJD-035-2016 apartado 4.11.2) y su modificación mediante la resolución RJD-060-2018, con base en la información recolectada por un profesional en estadística, haciendo uso de las reglas unívocas de la ciencia y la técnica.

En la citada sección 4.11.2 se establece lo siguiente:

> *"(…)*
>
> ***4.11.2 Precio del sistema automatizado de conteo de pasajeros***
>
> *La determinación del precio del sistema automatizado de conteo de pasajeros para cada unidad de transporte se realizará una vez al año, entre los meses de agosto a octubre y estará a cargo de la IT, bajo la responsabilidad y dirección de un profesional en estadística. Este*

profesional tendrá a su cargo el planeamiento, coordinación, ejecución y validación de los resultados, de conformidad con las reglas unívocas de la ciencia y la técnica aplicables. El plazo entre agosto y octubre se considera suficiente para poder realizar el estudio que comprendería los valores de estos equipos, en sus etapas de diseño, búsqueda y recolección de información, procesamiento de datos y obtención de los resultados finales, de conformidad con la práctica estadística de obtención de información en este tipo de segmento de mercado.

La resolución que dispone la determinación del precio deberá estar publicada en el diario oficial La Gaceta al último día hábil de diciembre de cada año. Este plazo se considera adecuado dado que se habrían obtenido previamente los valores de los precios y costos, quedando entonces un tiempo prudencial para la labor de participación ciudadana y publicación de resultados finales. La IT será la responsable de que se cumpla con estos plazos. El sistema automatizado de conteo de pasajeros para cada unidad de transporte deberá cumplir al menos con las características mínimas de software y hardware que permitan obtener los datos de pasajeros movilizados. Estas características mínimas son las siguientes:

a. *Las descripciones generales de la ruta para la cual se registran los datos de movilización de pasajeros en cada uno de los servicios como lo son: el número de la ruta y descripción del ramal, si aplica; el número de la placa del autobús; el sentido (1-2) o (2-1), si corresponde; la hora de inicio del servicio y la fecha del servicio.*
b. *La cantidad de ascensos y descensos de pasajeros regulares en cada una de las paradas del autobús. En caso que la Aresep lo determine para rutas específicas, la información podrá ser requerida a nivel de ramal y viaje. Se debe indicar la tarifa regular para este tipo de pasajeros.*
c. *La cantidad de ascensos de pasajeros adultos mayores en cada una de las paradas del autobús. En caso que la Aresep lo determine para rutas específicas, la información podrá ser requerida a nivel de ramal y viaje. Se debe indicar la tarifa y el porcentaje de descuento correspondiente para este tipo de pasajeros.*
d. *Los datos deben ser remitidos diariamente al finalizar el servicio brindado y de manera remota (vía correo electrónico, plataforma en línea, entre otros) a un servidor. Estos datos son los registrados directamente del sistema (sin procesar).*
e. *Los datos procesados (depurados) deben ser remitidos a un servidor el día natural siguiente a la prestación del servicio.*

(…)"

La Intendencia de Transporte determinó que la unidad de estudio es un autobús basado en la Metodología aplicable en este caso. Tal metodología es clara y contundente desde la primera oración del apartado 4.11.2 Precio del sistema automatizado de pasajeros, sección en la que se norman los requisitos básicos que deben tener los sistemas. Esa oración dice: *"… la determinación del precio del sistema automatizado de pasajeros para cada unidad de autobús será realizada una vez al año (…) bajo la responsabilidad y dirección de un profesional en estadística…"* (el resaltado no es del original), de manera que la Intendencia de Transporte apunta a la indagación del precio de los SCP por unidad de autobús, tal y como lo indica la metodología. Más adelante, la misma señala: *"…El sistema automatizado de conteo de pasajeros para cada unidad de transporte deberá cumplir al menos con las características mínima de software y hardware que permitan obtener los datos de pasajeros movilizados..."* (el resaltado no es del original). La IT establece que la unidad de análisis es el autobús, de acuerdo a lo establecido en la metodología.

Resulta importante en cuanto al reclamo de la falta de reconocimiento de los costos en aspectos de seguridad, valga señalar que existe dentro de la "Metodología para la Fijación Ordinaria de Tarifas para el Servicio Remunerado de Personas, Modalidad Autobús", el rubro 4.4.7 Costos del sistema automatizado de pago electrónico y seguridad, el cual establece un *"… costo mensual del sistema automatizado de pago electrónico y seguridad, se determinará una vez que se haya definidos sus componentes, características y cantidad por ruta, los procedimientos de reconocimiento de la depreciación (método, factores, vida útil y valor de rescate) y la rentabilidad, los costos asociados a la administración del sistema, sistema de información del usuario, así como la determinación del valor de dichos componentes. Todos los elementos indicados serán establecidos en la resolución que la Aresep emita al respecto…"*. De manera que si bien la metodología en general sí toma en cuenta el pago electrónico y las cámaras, no es materia de la Actualización del valor para el Sistema Automatizado de Conteo de Pasajeros, sino que corresponde a otro rubro.

De esta manera, se demuestra que los argumentos presentados en la audiencia pública por parte de los opositores, no resultan válidos, debido a que la determinación del valor del SCP, se aplicó conforme a lo ordenado en la resolución RJD-035-2016 del 25 de febrero de 2016, publicada en el Alcance Digital N°35 de La Gaceta N°46 del 7 de marzo de 2016, y su modificación mediante la resolución RJD-060-2018 del 13 de abril de 2018 publicada en el Alcance Digital Nº88 a La Gaceta Nº77 del 3 de mayo del 2018.

***Segundo argumento*: No se reconoce el recurso humano asociado al SCP.**

La Intendencia de Transporte como aplicadora de la metodología RJD-035-2016 y su modificación mediante la resolución RJD-060-2018, no debe ni se encuentra facultada para apartase de lo ordenado en la misma, ergo no puede emitir criterios propios que no tengan su asidero técnico y/o legal en la precitada resolución metodológica. Hacerlo de otra forma violentaría la esencia misma de la metodología aprobada por la Junta Directiva de la Aresep, como jerarca máximo institucional.

La metodología se encuentra vigente y por ende debe aplicarse en este caso puntual conforme lo estable el apartado 4.11.2 que determina el precio del sistema automatizado de conteo de pasajeros, así como en el apartado 4.4.3 que determina los costos en personal administrativo.

Ahora bien, la resolución RIT-048-2018 fue revocada parcialmente mediante la resolución RIT-099-2018 del 24 de julio de 2018, publicada en el Alcance Digital 139 del Diario La Gaceta 139 del 1 de agosto de 2018, por lo que carece de interés actual lo indicado en la oposición presentada.

Tercer argumento: No se cumple con el Principio del servicio al costo.

La metodología tarifaria para el servicio remunerado de personas modalidad autobús (RJD-035-2016) que se encuentra vigente se desarrolla según la estructura de los costos de la actividad, considerando los costos necesarios para prestar el servicio. Este mecanismo integra la actualización de los costos operativos y las variaciones en la inversión, además de las variables operativas particulares de cada ruta, como un instrumento para garantizar el equilibro financiero en apego con el principio de servicio al costo, definido en el artículo 3 de la Ley 7593.

En virtud de lo anterior, la Autoridad Reguladora estará obligada a aplicar, de cara al ejercicio de su competencia de fijar tarifas para los servicios regulados, aquellos criterios que garanticen que el servicio se presta con aquellos costos necesarios que le otorguen una retribución equitativa que garantice el desarrollo de la actividad sin pérdidas para el concesionario y sin grandes márgenes de utilidad. De esta forma, este Órgano Técnico, en materia de transporte remunerado de personas modalidad autobús, aplica la metodología vigente que está basada en el análisis de la estructura de costos de las empresas que prestan este servicio.

Por lo que la metodología como mecanismo que integra la actualización de los costos operativos y las variaciones en la inversión, además de las variables operativas particulares de cada ruta, es un instrumento para garantizar el equilibro financiero en apego con el principio de servicio al costo, definido en el

artículo 3 de la Ley 7593, por lo que su aplicación puede arrojar aumentos o disminuciones en la tarifa.

Es importante recalcar que las metodologías tarifarias ordinarias y extraordinarias están sujetas a un proceso de mejora continua y de revisión permanente para ir adaptándola a las condiciones cambiantes de un sector tan dinámico como lo es el sector transporte.

El artículo 6 de la Ley 7593 establece como obligaciones de la Autoridad Reguladora *"…Regular y fiscalizar contable, financiera y técnicamente, a los prestadores de servicios públicos, para comprobar el correcto manejo de los factores que afectan el costo del servicio, ya sean las inversiones realizadas, el endeudamiento en que han incurrido, los niveles de ingresos percibidos, los costos y gastos efectuados o los ingresos percibidos y la rentabilidad o utilidad obtenida*".

A manera de mayor abundamiento, específicamente en las inversiones relacionadas con el sistema automatizado de conteo de pasajeros, la Metodología de Fijación Tarifaria para el Servicio Remunerado de Personas Modalidad Autobús, en el apartado 4.6.2.c: Rentabilidad del Capital Invertido en el Sistema Automatizado de Conteo de Pasajeros, establece que *"… el reconocimiento del costo mensual del capital invertido en el Sistema Automatizado de Conteo de Pasajeros definido dentro de esta metodología se realizará seis meses naturales a partir de la entrada en vigencia de dicha metodología, una vez finalizado el período de la instalación de dichos sistemas…*"

El informe que dio pie a la resolución RIT-099-2018 supra citada, sirvió de base también para que la Intendencia de Transporte, como órgano aplicador de las metodologías aprobadas por la Junta Directiva, trasladara a la Dirección General Centro de Desarrollo de la Regulación los hallazgos del proceso de implementación del Módulo de Carga del Sistema Automatizado de Conteo de Pasajeros (MCSCP) relacionados con la Metodología para Fijación Ordinaria de Tarifas para el Servicio Remunerado de Personas, Modalidad Autobús (Oficio 643-IT-2018 del 9 de abril de 2018, folios 303 al 341 del expediente OT-386-2017).

Las observaciones planteadas fueron consideradas como insumo para ser valoradas en el proceso de mejora de los instrumentos regulatorios que la Aresep en concordancia con sus objetivos estratégicos ha venido realizando, específicamente en cuanto a las modificaciones parciales a la Metodología para la Fijación Ordinaria de Tarifas para el Servicio de Transporte Remunerado de Personas, modalidad autobús, que actualmente se encuentra en proceso de publicación de la nueva modificación de la metodología vigente.

Jorge Sanarrucia Aragón (Consejero del Usuario):

1) Sobre la muestra utilizada:

Si bien existe una relación secuencial entre los objetivos específicos 1 y 2, se debe tener en cuenta que ambos objetivos específicos responden a dos procesos de estimación distintos, de manera que la Intendencia de Transportes realizó un diseño muestral distinto para abordar cada uno de ellos.

En el primer objetivo específico se pretende identificar las marcas de Sistemas de Conteo de Pasajeros (SCP) presentes en la flota vehicular autorizada, así como la cuota o proporción de mercado de cada una de ellas. En este caso se diseñó un muestreo probabilístico, en el cual la población de interés corresponde a los autobuses con placas autorizadas por el CTP. Se estableció la cantidad de placas seleccionadas mediante la fórmula del tamaño de muestra para proporciones. Posteriormente, se procedió a planificar y ejecutar la observación sobre cada uno de los autobuses seleccionados.

Para el caso del objetivo específico 2, aunque el abordaje utilizó uno de los resultados obtenidos en el objetivo específico 1, se planteó un segundo diseño de recolección de la información distinto e independiente del anterior, donde la población de interés corresponde al conjunto de empresas proveedoras de SCP observadas. La Intendencia de Transporte contó, luego del cumplimiento del objetivo específico 1, del listado de ocho marcas comerciales de sistemas de conteo de pasajeros presentes en la flota autorizada y realizó la consulta a todas ellas. Es decir, en este caso no estamos frente a un procedimiento de muestreo, sino, a uno censal, en el que se consulta a todas las unidades que componen la población de estudio. La IT decidió realizar la consulta de esta manera pues se considera inadecuado realizar un proceso de muestreo cuando se debe analizar un número tan bajo de elementos, en el tanto es posible y razonable realizar la consulta a las ocho unidades de observación.

Basados en los argumentos expuestos, la IT considera que el cumplimiento de ambos objetivos específicos requiere distintos abordajes mediante diseños muestrales distintos, considerando que se requiere analizar poblaciones de interés distintas y obtener resultados para variables distintas. De esta manera, se rechaza la propuesta consignada en la oposición. No obstante, la Intendencia procurará ser más clara en estos detalles metodológicos de manera que se facilite su interpretación para los usuarios y no se preste para confusiones.

2) Sobre la ponderación:

El cálculo del precio del sistema de conteo de pasajeros consideró la diferencia de precios de los sistemas de conteo de pasajeros que los proveedores ofrecen para rutas de tarifa única y rutas de tarifa fraccionada mediante una ponderación.

Para cada placa seleccionada se identificó el número de ruta al que está asignado. Luego se tomó el pliego tarifario oficial y se clasificó cada ruta en única y fraccionada. De esta manera, fue posible asignar la clasificación de rutas a cada una de las 51 placas aleatoriamente seleccionadas, provenientes del archivo con las 4.804 placas que componen la población. Es importante recordar que la técnica de muestreo estadístico garantiza que bajo una correcta aplicación del diseño muestral, el valor observado en la muestra resulta representativo del valor real en la población, a lo que usualmente se le conoce como inferencia estadística, por lo que los ponderadores propuestos reflejan la distribución de la flota autorizada por el CTP por tarifa.

Así mismo, no lleva razón esta oposición al mencionar que no se observa en la propuesta que se haya utilizado algún procedimiento de estatificación por tarifa, pues contrario a esto, en el informe se detalla la manera que se realizó la clasificación según tarifa de los 51 autobuses seleccionados; tal y como consta en los folios 56 y 57 del expediente correspondiente:

> "*Para el cálculo del promedio ponderado del costo del Sistema Automatizado de Conteo de Pasajeros (SCP) que considere ambos tipos de tarifa (única y fraccionada), se debe buscar un factor de ponderación entre ambos tipos de tarifa. Debido a que la unidad base sobre el cual se calcula el costo requerido de este sistema es el autobús, se consideró que para efectos de que el cálculo sea representativo, la ponderación debe ser sobre la cantidad de unidades asignadas a rutas con tarifa única y fraccionada en la muestra.*
>
> *Se consideró el pliego tarifario en su versión del 13 de octubre del 2018, publicado en la página web de la institución, archivo a partir del cual se determinó para cada ruta si corresponde a tarifa única o tarifa fraccionada, de acuerdo precisamente a la composición y monto de las tarifas para los ramales y/o fraccionamientos de la ruta. En este caso si no varía el monto se considera tarifa única y si hay variación se considera como tarifa fraccionada. Con esta información se procedió a realizar el cruce de información entre ambas bases de datos, con lo que resulta la siguiente distribución:*
>
> ***Cuadro 14. Distribución de la muestra por Tipo de Tarifa***
>
Tipo de tarifa por ruta	*Cantidad de autobuses*	*Porcentaje*
Fraccionada	*26*	*51,0*
Única	*25*	*49,0*
Total	*51*	
>
> *(…)*"

Como se puede observar, la ponderación se obtuvo de la muestra de autobuses, la cual fue basada en la población de autobuses autorizados por el CTP. Adicionalmente, se fue exhaustivo en la explicación de la manera en la que se realizó la clasificación por tipo de tarifa. De igual manera, se encuentran disponibles los archivos necesarios para realizar esta clasificación, pues como se observa en el extracto consignado anteriormente del expediente, se utilizó para tal clasificación el pliego tarifario en su versión del 13 de octubre del 2018, publicado en la página web de la institución, de manera cualquier interesado puede realizar el mismo ejercicio si tuviera la intención de verificar los resultados mostrados en el Cuadro 14. De esta manera, se demuestra que los factores de ponderación se obtuvieron a partir de la flota de autobuses autorizada por el CTP.

3) Error máximo permisible

Errores máximos permisibles del 10% representan un nivel aceptable dentro de los valores recomendados dentro de la teoría estadística. De igual manera, existe evidencia de varios autores que han aplicado muestras específicamente para el sector transporte, que han utilizado ese nivel de error. Por ejemplo, Ortúzar y Willumsen en su obra *Modelos de Transporte* (2011), en el apartado *Tamaño de la muestra para estimar los parámetros de la población,* utiliza un error del 10% en su exposición teórica (página 107).

Vale la pena considerar que el error máximo permitido corresponde a un valor de referencia hipotético, el cual indica el límite máximo de error admitido en la etapa del diseño de la muestra. Sin embargo, el error de muestreo definitivo se calcula con los datos obtenidos después de que se haya recolectado la información. Para el caso de este estudio, el error de muestreo definitivo se establece en el punto *Errores de muestreo* presente en los folios 56 y 58 del expediente OT-588-2018. El error de muestreo obtenido es de 0,062, es decir, 6,2%. Como se puede apreciar, el error arrojado por el diseño muestral aplicado es menor al 10% establecido inicialmente y cercano al 5% que sugiere la oposición.

Con la muestra seleccionada se obtuvo un error de muestreo del 6,2%, lo cual se considera un nivel de error aceptable para obtener estimaciones precisas y se encuentra dentro de los niveles de error comúnmente aceptados dentro de los estudios inferenciales.

Adicionalmente, es importante señalar que el mismo porcentaje de error máximo permisible se utilizó en el cálculo del tamaño de la muestra del estudio análogo del año 2017 anterior realizado por la IT para estimar el valor neto de los SCP. En esa ocasión se obtuvo un error del 4,5%. Por lo que se puede interpretar que la evidencia empírica ofrece buenos resultados cuando se establece un error máximo permisible del 10% en este tipo de estudios.

No obstante, la Intendencia de Transporte procurará mantener los niveles de error de los estudios en niveles bajos, de manera que se favorezca la precisión en miras de lograr tarifas justas para todos los sectores involucrados.

4) Valor de la proporción

La fórmula del tamaño de muestra requiere el valor de la desviación estándar de la variable que se va a estimar. En el caso de las proporciones, la desviación estándar se puede calcular con tan solo disponer del valor *p* de la proporción. Según los objetivos planteados en este estudio, la proporción que se plantea descubrir es la proporción de mercado de cada una de las marcas comerciales de SCP observadas en la flota vehicular autorizada por el CTP.

Tal y como se demuestra en la teoría y en la práctica de muestreo, establecer esta desviación estándar para el cálculo del tamaño de la muestra tiene un inconveniente importante pues tal desviación solamente puede calcularse una vez que ese haya tomado la muestra, por lo que ha de estimarse de otras fuentes (Ortúzar y Willumsen, Modelos de Transporte, 2011, página 107). Ante esta misma situación, Abad y Seruín recomiendan en su libro *Introducción al muestreo* determinar esta desviación estándar utilizando valores estimados provenientes de "…*estudios auxiliares en la población objetivo o del uso de información arrojada por encuestas anteriores*… " (1978, página 70).

Siendo que existe un precedente de un estudio anterior realizado con los mismos objetivos por la Intendencia de Transporte del año 2017, se decidió utilizar los resultados plasmados en este estudio. Efectivamente, la proporción corresponde a la relación entre los autobuses que se observó que contaran con SCP y el registro de los buses que no contaban con ellos.

El planteamiento de la oposición indica que a esta proporción se debe restar los autobuses que contienen las marcas que no presentaron la información, y menciona a las marcas Eficiencias Tecnológicas y a Registel como empresas de las que no se obtuvo información. Sin embargo, se debe considera que para el informe final, sí se toman en cuenta las cuatro unidades de autobús de Eficiencias Tecnológicas; pues tal y como se demuestra en los folios 489 al 490 y 517 al 520 del expediente OT-197-2017 en esa oportunidad sí se incluyó la respuesta de esta empresa. De esta manera, bajo la lógica planteada en la oposición, solamente se debería excluir los dos autobuses representados por Registel. Estos dos buses representan menos de un 2% del total de autobuses, por lo que se considera que no representaría una diferencia importante en el cálculo del tamaño de la muestra. Así, se considera que el cálculo realizado por la Intendencia para el tamaño de la muestra es suficiente para obtener resultados precisos que desemboquen en resultados justos para todos los interesados.

5) Sobre los precios

Si bien es cierto que existen diferencias importantes entre los precios reportados en 2017 y 2018, la Intendencia de Transporte realizó los procedimientos tal y como la ciencia y la técnica establecen y calculó sus resultados con base en las respuestas ofrecidas por los proveedores que hayan cumplido con la forma y el tiempo de la consulta realizada.

Existe apego a la teoría estadística en el procedimiento empleado por la Intendencia de Transporte, pues la veracidad y exactitud de la información recolectada se deposita sobre otros elementos de los procesos de encuestas en los que se fue riguroso. Un buen plan de trabajo, una buena organización de las etapas del estudio, la correcta construcción del cuestionario, un buen diseño muestral y selección de la muestra, buenos mecanismos de selección de personal entrevistador, una capacitación adecuada, entre otros, son los elementos esenciales en un buen proceso de investigación. Todos estos elementos se realizaron con absoluta meticulosidad y riguroso apego a la técnica y así está expresamente plasmados en el informe de la investigación.

La teoría estadística expresa la importancia de un buen formulario o cuestionario como mecanismo para obtener respuestas confiables y válidas. Esto se logra mediante dos premisas: la primera se relaciona con la función de "…*traducir las necesidades de la investigación a preguntas adecuadamente formuladas, que permitan obtener respuestas válidas y confiables, las cuales suministren los datos requeridos para cumplir los objetivos de la encuesta*..." (Gómez, 2012), y la segunda se relaciona con "…*guiar la entrevista y motivar al sujeto que participe con interés y seriedad, y comunique la información requerida con seriedad y exactitud*…" (Gómez, 2012). Para cumplir con estas premisas, la Intendencia de Transportes realizó las siguientes acciones para asegurarse que las empresas proveedoras de SCP tuvieran claridad sobre los sistemas que debían costear:

a. **La Intendencia de transportes organizó una actividad informativa para las empresas proveedoras de SCP**: el objetivo de tal actividad fue explicar a los proveedores de SCP los elementos solicitados por la metodología y así tuvieran claridad a la hora de costear los SCP que producen. Tal y como consta en el expediente OT-195-2016, el día 30 de setiembre de 2016 se realizó la *"Sesión informativa para proveedores de sistemas automatizados de conteo de pasajeros para el servicio de transporte público, modalidad autobús*" en las instalaciones de la Aresep. La invitación a la sesión informativa dirigida a los proveedores (SCP) se dio en tres periódicos nacionales (La Nación, La Teja y La Extra) por tres días consecutivos 24, 25 y 26 de setiembre de 2016 (folios 39 y 40 del expediente). Se contó con la presencia de 29 participantes, 14 empresas proveedoras y la Defensoría de los Habitantes.

b. **La Intendencia de Transporte construyó un formulario en el que los elementos requeridos por la metodología fueron explícitos y claros**: la teoría estadística en lo referente a creación de cuestionarios establece que una de las funciones específicas que cumplen los formularios es "…*traducir las necesidades de la investigación a preguntas adecuadamente formuladas, que permitan obtener respuestas válidas y confiables, las cuales suministren los datos requeridos para cumplir los objetivos de la encuesta*..." (Gómez, 2012). De esta manera, en el formulario diseñado por la Intendencia de Transporte, se indaga si el sistema que se ofrece tiene la capacidad de cumplir lo que establece la Metodología mencionada anteriormente (16 preguntas que abarcan del 2.1.1 al 2.1.16 del formulario). Adicionalmente, el formulario consulta por la capacidad de sincronización de datos procesos (depurados) a un servidor al día natural siguiente a la prestación del servicio (preguntas 2.2.1 y 2.2.2 del formulario).

c. **La Intendencia de Transporte incluyó en el formulario de consulta de precios de SCP un apartado con las definiciones como ayuda a las empresas a realizar un buen costeo de su producto**: la IT entiende que otra función del cuestionario debe ser "…*guiar la entrevista y motivar al sujeto que participe con interés y seriedad, y comunique la información requerida con seriedad y exactitud*…" (Gómez, 2012). Es por esto que la IT incluyó en el Formulario las definiciones de los requisitos solicitados con el fin de guiar la entrevista y ayudar a los proveedores a la comprensión de los objetivos del proceso de recolección de información. Se ofreció, como parte del Formulario, un conjunto de definiciones en las que los proveedores se deberían basar para dar sus respuestas.

d. **La Intendencia de Transporte incluyó en el formulario de consulta de precios de SCP una pestaña adicional con el ejemplo de reporte**: como se puede apreciar en el formulario, la IT incluyó, como ayuda para los proveedores de SCP una pestaña de ejemplo de reporte. Esta pestaña muestra la manera en que los SCP deben presentar los reportes y aclara que funciona tanto para los datos sin procesar como para los datos procesados.

Basado en los argumentos anteriores, se comprueba que el procedimiento realizado por la IT se apega estrictamente a los postulados de la disciplina de la estadística. La Intendencia tiene elementos para considera que las empresas tenían absoluta claridad de lo que se les estaba solicitando y, por lo tanto, se deben incluir todos los resultados recolectados en el cálculo del valor neto del Sistema de Conteo de Pasajeros.

Jorge Masis Arce:

Todas las acciones realizadas por la Intendencia de Transporte para el cálculo del valor neto del Sistema Automatizado de Pasajeros se apegan a lo ordenado

en la resolución RJD-035-2016 del 25 de febrero de 2016, publicada en el Alcance Digital N°35 de La Gaceta N°46 del 7 de marzo de 2016, y su modificación mediante la resolución RJD-060-2018 del 13 de abril de 2018 publicada en el Alcance Digital Nº 88 a La Gaceta Nº 77 del 3 de mayo del 2018.

No es posible para la IT, en su calidad de aplicador de la normativa vigente, modificar lo establecido en tal resolución, mediante acciones que se alejen de lo allí estipulado.

Esta metodología ordena realizar el cálculo del valor de los SCP de manera única, es decir, sin ningún tipo de diferenciación ya sea por zona geográfica (urbano/rural), o bien, por tamaño de la operadora del servicio remunerado de personas, modalidad autobús. De manera que la IT procedió a establecer el valor si hacer este tipo de estratificaciones.

Tampoco ha planteado la Aresep la instalación de SCP en ningún tipo de autobuses, pues la tónica hasta el momento ha sido otorgar el mismo tratamiento a todos los prestadores en lo relacionado con SCP.

Por otra parte, en las fijaciones tarifarias sí se contemplan las características propias de cada empresa que solicita la tarifa, en lo relacionado a su ubicación, cantidad de viajes autorizados, horarios autoridades, realidades operativas y financieras, entre otros. Actualmente se encuentra vigente un modelo tarifario funcionando, de manera que se invita al opositor en su calidad de representante de la empresa Marovi de Tilarán a realizar una solicitud tarifaria ante la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos, pues de esta manera, podrá tener acceso al reconocimiento tarifario de elementos como el costo por los Sistemas de Conteo de Pasajeros.

III. Conforme con los resultandos y considerandos que preceden y de acuerdo con el mérito de los autos, lo procedente es actualizar valor del sistema automatizado de conteo de pasajeros (VNSCP) para ser incorporado dentro del modelo para el cálculo de las tarifas ordinarias del servicio de transporte remunerado de personas, modalidad autobús, tal y como se dispone.

POR TANTO:

Fundamentado en las facultades conferidas en la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Ley Nº 7593 y sus reformas), en el Decreto Ejecutivo 29732-MP, Reglamento a la Ley 7593, en la Ley General de la Administración Pública, (Ley Nº 6227), y el Reglamento Interno de Organización y Funciones de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y sus Órganos Desconcentrados (RIOF).

EL INTENDENTE DE TRANSPORTE

RESUELVE:

I. Acoger el informe con oficio IN-0119-IT-2018 del 19 de diciembre de 2018 y actualizar el valor para el sistema automatizado de conteo de pasajeros (VNSCP) para el reconocimiento del valor mensual por autobús por una vida útil de 5 años sin valor de rescate en las fijaciones ordinarias de tarifas para el servicio de transporte remunerado de personas, modalidad autobús, según el siguiente detalle:

Valor del sistema automatizado de conteo de pasajeros por (VNSCP)	*¢6 480 255 / autobús*

II. El valor para el sistema automatizado de conteo de pasajeros (VNSCP) para el reconocimiento en las fijaciones ordinarias de tarifas para el servicio de transporte remunerado de personas, modalidad autobús, rige a partir del día natural siguiente a la publicación en el Diario La Gaceta.

De conformidad con lo que ordena el artículo 245, en relación con el 345 de la Ley General de la Administración Pública, se indica que contra esta resolución pueden interponerse los recursos ordinarios de revocatoria y de apelación. El de revocatoria y apelación deberán interponerse ante la Intendencia de Transporte, resolviendo el primero de ellos y el segundo se eleva al superior jerárquico.

Los recursos de revocatoria y de apelación deberán interponerse en el plazo de tres días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a la notificación de esta resolución.

PUBLIQUESE Y NOTIFÍQUESE.

Enrique Muñoz Aguilar, Intendente de Transporte.—1 vez.—O.C. N° 9006-2018.—Solicitud N° 278-2018.—(IN2018307866).